

CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA, SEPTIEMBRE 2024

Edita: GOBIERNO DE ARAGÓN

Departamento de Presidencia, Economía y Justicia

Dirección General de Desarrollo Estatutario

ISBN: 978-84-8380-278-6

Depósito Legal: Z-1651-2024

Imprime: INO Reproducciones

Pol. Malpica, calle E, 32-39 (INBISA II, nave 35) - 50016 ZARAGOZA

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

La presente edición incorpora la versión consolidada del Código del Derecho Foral de Aragón, tras la promulgación de la Ley 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas.

La redacción del Anteproyecto de ley de dicha reforma se encargó por el Gobierno de Aragón a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

Con la promulgación de esta ley, Aragón se adapta a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, DE 22 DE MARZO, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas	13
--	----

CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN

PREÁMBULO	27
TÍTULO PRELIMINAR. Las normas en el Derecho civil de Aragón	103

LIBRO PRIMERO

Derecho de la persona

TÍTULO I. Capacidad jurídica y estado de las personas	105
— CAPÍTULO PRELIMINAR. Capacidad jurídica	105
— CAPÍTULO I. Capacidad jurídica de las personas por razón de la edad.	106
Sección 1.^a Mayoría y minoría de edad	106
Sección 2.^a La persona menor de catorce años.	108
Sección 3.^a El menor mayor de catorce años	113
Sección 4.^a El menor emancipado.	115
— CAPÍTULO II. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad	117
Sección 1.^a Capacidad jurídica y medidas de apoyo	117
Sección 2.^a Ejercicio de la capacidad jurídica.	120
Sección 3.^a Invalidez e ineficacia de actos y contratos	122
Sección 4.^a Otras normas generales	124

— CAPÍTULO III. La ausencia	125
TÍTULO II. De las relaciones entre ascendientes y descendientes	129
— CAPÍTULO I. Efectos de la filiación	129
— CAPÍTULO II. Deber de crianza y autoridad familiar . .	132
Sección 1.^a Principios generales	132
Sección 2.^a Ejercicio de la autoridad familiar por los padres	134
Sección 3.^a Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo	135
Subsección 1.^a Disposiciones generales	135
Subsección 2.^a El pacto de relaciones familiares	137
Subsección 3.^a Mediación familiar	139
Subsección 4.^a Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares	140
Subsección 5.^a Medidas provisionales.	144
Sección 4.^a Autoridad familiar de otras personas	145
Sección 5.^a Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar	147
— CAPÍTULO III. Gestión de los bienes de los hijos	148
TÍTULO III. Normas comunes a las relaciones tutelares y medidas de apoyo	150
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	150
— CAPÍTULO II. Disposiciones voluntarias sobre tutela o curatela	156
— CAPÍTULO III. Delación dativa de la tutela o curatela.	160
— CAPÍTULO IV. Capacidad, excusa y remoción	161
— CAPÍTULO V. El defensor judicial	164
TÍTULO IV. Relaciones tutelares de menores.	165
— CAPÍTULO I. La tutela	165
Sección 1.^a Disposiciones generales	165
Sección 2.^a Contenido y ejercicio de la tutela.	167

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Sección 3.^a Extinción de la tutela y rendición final de cuentas	168
— CAPÍTULO II. La curatela del menor emancipado	170
— CAPÍTULO III. La guarda de hecho del menor	170
— CAPÍTULO IV. Protección de menores por la Administración	171
Sección 1.^a Desamparo y tutela administrativa.	171
Sección 2.^a La guarda administrativa	174
Sección 3.^a El acogimiento familiar	178
TÍTULO V. Medidas de apoyo a personas con discapacidad	181
— CAPÍTULO I. Mandatos de apoyo y poderes sin mandato	181
— CAPÍTULO II. La guarda de hecho de las personas con discapacidad	184
— CAPÍTULO III. La curatela	187
Sección 1.^a Disposiciones generales	187
Sección 2.^a Modalidades de curatela.	188
Sección 3.^a Ejercicio de la curatela	190
TÍTULO VI. De la Junta de Parientes.	192

LIBRO SEGUNDO

Derecho de la familia

TÍTULO I. Efectos generales del matrimonio	197
TÍTULO II. De los capítulos matrimoniales.	200
TÍTULO III. Del régimen económico matrimonial de separación de bienes	202
TÍTULO IV. Del consorcio conyugal.	204
— CAPÍTULO I. Bienes comunes y privativos.	204
— CAPÍTULO II. Deudas comunes y privativas	208
— CAPÍTULO III. Gestión del consorcio	212
Sección 1.^a De la economía familiar	212

Sección 2.^a Gestión de los bienes comunes	213
Sección 3.^a Gestión de los bienes privativos	216
— CAPÍTULO IV. Disolución, liquidación y división del consorcio	217
Sección 1.^a Disolución del consorcio	217
Sección 2.^a La comunidad que continúa tras la disolución	219
Sección 3.^a Liquidación y división	221
TÍTULO V. De la viudedad	226
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	226
— CAPÍTULO II. El derecho de viudedad durante el matrimonio	228
— CAPÍTULO III. Usufructo viudal	230
TÍTULO VI. De las parejas estables no casadas	236

LIBRO TERCERO

Derecho de sucesiones por causa de muerte

TÍTULO I. De las sucesiones en general	241
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	241
— CAPÍTULO II. Capacidad e indignidad para suceder .	243
— CAPÍTULO III. Sustitución legal	247
— CAPÍTULO IV. Aceptación y repudiación de la herencia	249
— CAPÍTULO V. Responsabilidad del heredero	253
— CAPÍTULO VI. Colación y partición	254
Sección 1.^a Colación	254
Sección 2.^a Partición	255
Sección 3.^a Pago de las deudas hereditarias por los coherederos	257
— CAPÍTULO VII. Consorcio foral	258
TÍTULO II. De la sucesión paccionada	259
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	259

ÍNDICE SISTEMÁTICO

— CAPÍTULO II. Institución a favor de contratante	261
Sección 1.^a Disposiciones generales	261
Sección 2.^a Institución de presente	262
Sección 3.^a Institución para después de los días	263
— CAPÍTULO III. Institución recíproca	263
— CAPÍTULO IV. Pacto en favor de tercero	264
— CAPÍTULO V. Pactos de renuncia	264
— CAPÍTULO VI. Revocación, modificación e ineficacia.	265
TÍTULO III. De la sucesión testamentaria	266
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	266
— CAPÍTULO II. Testamento mancomunado	271
— CAPÍTULO III. Invalidez e ineficacia de los testamentos	273
Sección 1.^a Nulidad y anulabilidad	273
Sección 2.^a Revocación e ineficacia.	275
TÍTULO IV. De la fiducia sucesoria	278
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	278
— CAPÍTULO II. La herencia pendiente de asignación	280
— CAPÍTULO III. Ejecución de la fiducia	283
— CAPÍTULO IV. Extinción	285
TÍTULO V. Normas comunes a las sucesiones voluntarias	286
— CAPÍTULO I. Designación de sucesor	286
— CAPÍTULO II. Legados	292
— CAPÍTULO III. Derecho de acrecer	293
— CAPÍTULO IV. Albacea.	293
TÍTULO VI. De la legítima	294
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	294
— CAPÍTULO II. Intangibilidad cuantitativa	296
— CAPÍTULO III. Intangibilidad cualitativa	297
— CAPÍTULO IV. Preterición.	300
— CAPÍTULO V. Desheredación y exclusión.	301
— CAPÍTULO VI. Alimentos	303

TÍTULO VII. De la sucesión legal	304
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	304
— CAPÍTULO II. Sucesión de los descendientes	305
— CAPÍTULO III. Recobros y sucesión troncal	306
— CAPÍTULO IV. Sucesión de los ascendientes	307
— CAPÍTULO V. Sucesión del cónyuge y los colaterales	308
— CAPÍTULO VI. Sucesión en defecto de parientes y cónyuge	310

LIBRO CUARTO

Derecho patrimonial

TÍTULO I. De las relaciones de vecindad	312
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	312
— CAPÍTULO II. Árboles y plantaciones	312
— CAPÍTULO III. Construcciones	314
— CAPÍTULO IV. Aguas pluviales	314
— CAPÍTULO V. Luces y vistas	314
TÍTULO II. De las servidumbres	316
— CAPÍTULO I. Disposiciones generales	316
Sección 1.^a Concepto, clases y caracteres	316
Sección 2.^a Contenido de las servidumbres	317
Sección 3.^a Constitución de las servidumbres	319
Sección 4.^a Usucapión de las servidumbres	321
Sección 5.^a Extinción y modificación de las servidumbres	321
— CAPÍTULO II. Servidumbres de luces y vistas	322
— CAPÍTULO III. Servidumbre forzosa de paso	323
— CAPÍTULO IV. Servidumbre forzosa de acceso a red general	324
— CAPÍTULO V. Derechos de pastos y ademprios	324
Sección 1.^a Servidumbres	324
Sección 2.^a Comunidades	325

ÍNDICE SISTEMÁTICO

TÍTULO III. Del derecho de abolorio o de la saca	326
TÍTULO III BIS. Adquisición de bienes por ministerio de la ley	330
TÍTULO IV. De los contratos sobre ganadería	330
DISPOSICIONES ADICIONALES.	331
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	332
Disposiciones referidas al Libro Primero	332
Disposiciones referidas al Libro Segundo.	334
Disposiciones referidas al Libro Tercero	335
Disposiciones referidas al Libro Cuarto	337

ANEXO

— Modificaciones al Código del Derecho foral de Aragón	341
— Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la Casación Foral Aragonesa	407
— Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación Familiar de Aragón	411
ÍNDICE ANALÍTICO.	437

**DECRETO LEGISLATIVO 1/2011,
DE 22 DE MARZO, DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
APRUEBA, CON EL TÍTULO
DE «CÓDIGO DEL DERECHO
FORAL DE ARAGÓN», EL TEXTO
REFUNDIDO DE LAS LEYES
CIVILES ARAGONESAS**

(BOA núm. 63, de 29 de marzo de 2011)

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: 25 de junio de 2024

I

La disposición adicional primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de un año desde el 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de esta Ley, apruebe, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», un Decreto Legislativo que refunda:

- a) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
- b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
- c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
- d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
- e) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
- f) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
- g) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

La autorización a que se refiere esta disposición incluye, según dice su apartado 2, la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Por último, el apartado 3 de la citada disposición adicional final dice que la elaboración del texto normativo previsto en los apartados precedentes podrá realizarse utilizando la técnica de codificación y la sistemática más adecuadas para favorecer el mantenimiento actualizado del Código de Derecho Foral de Aragón en caso de incorporación de nuevos contenidos.

Con la Ley de Derecho civil patrimonial de 2010, última de las leyes objeto de refundición, se cierra el ciclo de algo más de

diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.

Su crecimiento ha sido más en intensidad que en extensión: en esta fase ha parecido oportuno al legislador mantener la regulación legal, básicamente, en el ámbito de las instituciones que ya tenían asiento en la Compilación, sin pretender agotar la competencia legislativa asumida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 conforme al artículo 149.1.8.^a de la Constitución. Ahora bien, el número de preceptos se ha multiplicado con la finalidad de aclarar y completar las normas anteriores, proporcionar pautas de interpretación, aumentar de este modo la seguridad jurídica y robustecer la eficacia social de las normas en cuanto conformadoras de las relaciones privadas.

II

La instauración del Estado autonómico supuso la apertura de una nueva etapa para el Derecho foral aragonés, símbolo de nuestra identidad originaria. Aragón recuperaba su capacidad para legislar en materia de Derecho civil propio, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La tarea legislativa de conservar, modificar y desarrollar el Derecho aragonés, así como la de aprobar el Derecho procesal derivado de las particularidades del Derecho sustantivo aragonés, corresponde a las Cortes de Aragón, de acuerdo con el artículo 149.1.8.^a y 6.^a de la Constitución, en la amplia interpretación avalada por el Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia 88/1993, de 12 de marzo.

Tras asumir estas competencias en el art. 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de 1982, la primera actuación de las Cortes de Aragón fue la promulgación de la Ley 3/1985, de 21 de mayo, para integrar en el ordenamiento jurídico aragonés la Compilación de 1967, así como para actualizarla con arreglo a los

nuevos principios constitucionales de igualdad entre los cónyuges y no discriminación entre los hijos por razón de la filiación. Con posterioridad a esta, hubo dos reformas de detalle, la Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de hijos adoptivos, y la Ley 4/1995, de 29 de marzo, sobre modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma en materia de sucesión intestada.

La renovación sistemática del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación es desde la aprobación de la Ponencia General de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil de 1996 un objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad. Esta tarea de largo aliento la inicia en 1999 la Ley de Sucesiones por causa de muerte (Ley 1/1999, de 24 de febrero), que deroga el Libro Segundo de la Compilación. La Compilación entonces vigente, originada hacía ya más de treinta años en circunstancias muy distintas de las de aquel momento, a pesar de su notable altura técnica y de su acierto en la conservación de las instituciones del Derecho civil aragonés para las generaciones futuras, resultaba insuficiente y parcialmente inadecuada para las necesidades y expectativas de los aragoneses.

En el ámbito del Derecho civil, que ha configurado en moldes de tradición secular realidades tan íntimas y, a la vez, tan decisivas en la vida social como las relaciones familiares o el destino de los bienes de las personas cuando llega su muerte, las intervenciones del legislador no tienden, como dice el Preámbulo de la Ley de Sucesiones, a una ruptura con el pasado, sino más bien a dar satisfacción a nuevas necesidades sentidas por el cuerpo social enlazando armónicamente valores e instituciones que han determinado históricamente el modo de ser aragonés con las valoraciones y aspiraciones del presente. Se entiende así que el nuevo Cuerpo legal de Derecho civil tienda a incorporar cuanto de bueno y útil hay en la Compilación, que es casi todo, para actualizarlo, desarrollarlo y completarlo con las normas que parecieron más conformes con los ideales cívicos y las circunstancias vitales de los aragoneses y aragonesas de hoy y de mañana.

La superior extensión de la regulación de las sucesiones en la citada Ley es consecuencia de la finalidad propuesta de

aclarar, desarrollar y profundizar nuestro Derecho de sucesiones, de modo que sea más constante y segura su aplicación en la práctica. La Ley de Sucesiones por causa de muerte ha convivido primero con las restantes partes de la Compilación del Derecho civil de Aragón (exceptuados sus artículos 89 a 142, derogados en 1999) y luego con las Leyes de 2003, 2006 y 2010 que las han ido derogando. Ningún problema especial ha derivado de ello, pues una y otras Leyes han formado, sustantivamente, el mismo Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Como es obvio, la Ley de Sucesiones se apoya en las normas compiladas a la vez que contribuye a su interpretación.

La Disposición adicional primera de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003 dio nueva redacción a tres artículos de la Ley de sucesiones: al artículo 139, por haber desaparecido el precepto de la Compilación a que se remitía y no ser posible hacer ahora la remisión a otro equivalente; al 202.2 y al 221, sobre el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, para tener en cuenta su actual dependencia de la Diputación General. Por su parte la disposición adicional primera de la Ley de Derecho de la persona de 2006 modifica tres artículos de la Ley de sucesiones (31, 51 y 52), con incidencia muy pequeña en su contenido, bien para suprimir remisiones ya indebidas a disposiciones de la Compilación, bien para remitir a los preceptos de la nueva Ley.

III

Al margen de la política legislativa diseñada en 1996 se aprobó la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, en las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal, ya sean del mismo o distinto sexo, dando el legislador aragonés respuesta a las principales cuestiones que estos tipos de convivencias provocan, especialmente en los casos de extinción en vida o en caso de fallecimiento de uno de los convivientes.

La Ley equipara a estas parejas con los matrimonios en materias como la adopción (desde la Ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley relativa a parejas estables no casadas, la equiparación se extiende a las parejas homosexuales),

la ausencia, la delación dativa de la tutela, el derecho de alimentos, el testamento mancomunado, los pactos sucesorios, la fiducia y la normativa aragonesa de Derecho público.

La Ley de parejas estables no casadas ha sido modificada también por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que ha derogado el apartado 2 del art. 7 y el art. 8 y ha dado nueva redacción a la letra b) del art. 7.1 y al apartado 3 del art. 7 que pasa a ser ahora el 2.

IV

La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, constituyó un segundo paso, de gran importancia por su extensión y contenido, para la renovación del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Se avanzó así en este «objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad» que señalaba el Preámbulo de la Ley de Sucesiones por causa de muerte. La Ley de 2003 sigue el camino trazado por aquella.

Desde la entrada en vigor de la Ley de 2003 quedaron derogados los artículos 7 y 22 y los Títulos IV, V y VI, artículos 23 a 88, del Libro Primero de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y sustituidos por las normas de esta Ley. No se produjo con ello una ruptura sustancial con el pasado, que sería impensable tratándose de las normas que con figuran el consorcio conyugal, la libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio o el derecho de viudedad. La Ley de 2003 no fue una reforma de la Compilación, sino una nueva formulación legal de las normas que han de regir las relaciones patrimoniales familiares. Su contenido coincide en gran medida con el de las normas entonces derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero fue pensado de nuevo en su totalidad, contrastándolo con los principios constitucionales, las aspiraciones reconocibles de los aragoneses y aragonesas, las enseñanzas de su aplicación por los jueces, la experiencia de los profesionales del Derecho y las sugerencias de la doctrina especializada. En consecuencia, las adiciones, modificaciones y aun supresiones fueron numerosas.

La disposición adicional segunda de la Ley de Derecho de la persona de 2006 modificó tres artículos de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad: armonizó la regulación de la asistencia al mayor de catorce años (art. 17), suprimió las referencias a la prodigalidad (arts. 17, 60 y 63) y a la quiebra (art. 63), y adaptó el precepto aragonés a lo dispuesto en la Ley concursal.

V

La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, que tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces hasta entonces contenidas en la Compilación, es la tercera Ley que de forma sistemática desarrolló el Derecho civil aragonés.

La disposición derogatoria única de la Ley de 2006 privó de vigencia al Libro Primero («Derecho de la persona y de la familia») de la Compilación del Derecho civil de Aragón en su totalidad. En consecuencia, al entrar en vigor esta Ley, la Compilación quedó reducida a su fundamental Título Preliminar, sobre «Las normas en el Derecho civil de Aragón», y dos breves Libros, el Tercero y el Cuarto, con algunos preceptos sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente.

Como en las otras dos leyes autonómicas antes mencionadas, y a diferencia de la Compilación, las normas de la Ley de Derecho de la persona no se presentan como peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus principios generales, a la vez que atienden a concreciones y pormenores hasta entonces no reflejados en las leyes y que resultan muy convenientes para precisar el alcance práctico de los preceptos.

VI

La labor de actualización de nuestro Derecho Civil continúa, aunque igualmente al margen de la política legislativa diseñada en 1996, con la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, aprobada en ejercicio de la competencia exclusiva de

Aragón en las materias de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil foral aragonés y de Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés, reconocidas en los artículos 149.1.8.^a y 6.^a de la Constitución y 71.2 y 3 del Estatuto de Autonomía de 2007. Esta Ley tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, promoviendo el ejercicio de la custodia de forma compartida por ambos, en desarrollo de los principios rectores contenidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón de protección de la familia y de igualdad entre el hombre y la mujer.

Esta Ley, respondiendo a una importante demanda social, ha supuesto un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se ha pretendido favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.

La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos básicos: por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar.

Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantienen lazos de afectividad y una relación continuada con ambos padres, permite una mejor aceptación de la nueva situación familiar por parte de los hijos, ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos, debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos.

VII

Finalmente el articulado de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, desarrolla el contenido del Libro tercero, «Derecho de bienes», y del Libro cuarto, «Derecho de

obligaciones», de la Compilación del Derecho civil de Aragón. Como es sabido, estos Libros, muy lejos de regular toda la materia de los derechos reales o de las obligaciones y contratos, se circunscribían a muy concretas instituciones: relaciones de vecindad, servidumbres, derecho de abolorio y contratos sobre ganadería. Estas instituciones fueron el objeto de la nueva Ley.

Con la disposición derogatoria referida a los preceptos de la Compilación sobre las materias de esta Ley ya solo los tres artículos del Título preliminar de la misma (las normas en el Derecho civil de Aragón) quedaron en vigor. Razón por la que la Disposición Final Primera ordena también su refundición con las Leyes civiles autonómicas ya descritas.

VIII

El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de la autorización para refundir las mencionadas Leyes civiles aragonesas, contenida en la disposición adicional primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, y previa encomienda de su preparación a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, ha aprobado, con el Título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido que se inserta a continuación como Anexo.

El contenido y la sistemática del nuevo Cuerpo Legal del Derecho civil de Aragón se hallan descritos en su completo Preámbulo, y de una manera general en su apartado 1. En resumen, el Código del Derecho Foral de Aragón consta de 599 artículos, divididos en cuatro Libros y un Título Preliminar; los Libros están divididos en Títulos, Capítulos, Secciones y, ocasionalmente, Subsecciones. El orden de exposición de las materias es básicamente el mismo de la Compilación.

En la parte final del Código se recogen las disposiciones adicionales y transitorias de las Leyes refundidas, debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo.

El articulado va precedido de un completo preámbulo, que es también refundición de los preámbulos que acompañan a las Leyes objeto de refundición, excepción hecha de los párrafos relativos al proceso de actualización y desarrollo del texto

de la Compilación aragonesa acometido por el legislador autonómico, que han sido usados para la Exposición de Motivos de este Decreto Legislativo.

Al principio del Código ha parecido conveniente incluir un índice que facilite su consulta.

En la refundición efectuada se ha hecho uso, en los pocos casos en que se ha considerado necesario, de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundidos. No ha parecido oportuno, por el momento, introducir un sistema de numeración decimal del articulado.

Se prevé la entrada en vigor del Código del Derecho Foral de Aragón, lo mismo que la del presente Decreto Legislativo, el día 23 de abril de 2011, no en vano un 23 de abril entraron en vigor también tres de las Leyes objeto de refundición. Con ello se da seguridad en cuanto al día exacto de su entrada en vigor y se hace coincidir con la fecha señalada en que la Comunidad Autónoma celebra el día de Aragón, dado que el Derecho Foral es una de sus señas de identidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, oído el Consejo Consultivo, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de marzo de 2011.

DISPONGO:

Artículo único.— *Aprobación, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», del Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.*

Se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, que se inserta a continuación.

Disposición adicional única.— *Remisiones normativas.*

Las referencias realizadas en otras disposiciones a las Leyes objeto de refundición se deben entender hechas a los artículos correspondientes del Código del Derecho Foral de Aragón.

Disposición derogatoria única.— *Derogación normativa.*

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto Legislativo y al Texto Refundido que, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», se aprueba y, en particular, las siguientes:

- a) El Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
- b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
- c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
- d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
- e) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
- f) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
- g) La Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial.

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que se aprueba con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», entrarán en vigor el día 23 de abril de 2011.

Zaragoza, 22 de marzo de 2011.— El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.— La Consejera de Presidencia, Eva Almunia Badía.

CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN

(BOA núm. 63, de 29 de marzo de 2011)

PREÁMBULO

1

Contenido y sistemática del Código

El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de la autorización para refundir las Leyes civiles aragonesas contenida en la disposición final primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, y previa encomienda de su preparación a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, ha aprobado, con el Título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el presente Texto Refundido.

El Código del Derecho Foral de Aragón consta de 599 artículos, divididos en cuatro Libros y un Título Preliminar; los Libros están divididos en Títulos, Capítulos, Secciones y, ocasionalmente, Subsecciones.

El orden de exposición de las materias es el mismo de la Compilación, si bien el Libro Primero de esta («Derecho de la persona y de la familia») se ha desdoblado en dos (Libro Primero: «Derecho de la persona» y Libro Segundo: «Derecho de la familia»), en atención al considerable grado de extensión que tanto el Derecho de la persona como el de la familia han alcanzado con las últimas reformas legales; el Libro Tercero se ocupa del Derecho de sucesiones por causa de muerte y el Cuarto del Derecho patrimonial; en este último Libro se agrupan los contenidos de los Libros Tercero («Derecho de bienes») y Cuarto («Derecho de obligaciones») de la Compilación, como ya hiciera la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial.

De esta forma el orden que resulta es el siguiente: Título Preliminar: «Las normas en el Derecho Civil de Aragón»; Libro Primero: «Derecho de la Persona»; Libro Segundo: «Derecho de la Familia»; Libro Tercero: «Derecho de sucesiones por causa de muerte» y Libro Cuarto: «Derecho patrimonial».

En la parte final del Código se recogen las disposiciones adicionales y transitorias de las Leyes refundidas, debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo.

El articulado va precedido de este preámbulo, que es también refundición de los preámbulos que acompañan a las Leyes objeto de refundición, excepción hecha de los párrafos relativos al proceso de actualización y desarrollo del texto de la Compilación aragonesa acometido por el legislador autonómico. Por consiguiente, cuando en él se hace referencia a «nueva regulación» se entiende la introducida por las Leyes refundidas, mientras que la referencia a la legislación anterior lo es a la vigente hasta la entrada en vigor de dichas Leyes.

Al principio del Código ha parecido conveniente incluir un índice que facilite su consulta.

El Título Preliminar, «Las normas en el Derecho Civil de Aragón», reproduce los hasta ahora vigentes artículos 1 a 3 de la Compilación aragonesa, en la redacción dada en 1999 por la Ley de sucesiones por causa de muerte.

El Libro Primero, «Derecho de la persona», recoge el articulado de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, sin otra modificación en su sistemática que la derivada de la intercalación de los artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que se han colocado en el Título II, «De las relaciones entre ascendientes y descendientes», como una Sección nueva del Capítulo II («Deber de crianza y autoridad familiar»), posterior a la Sección 2.^a que se ocupa del «ejercicio de la autoridad familiar por los padres» y antes de la Sección dedicada a la «autoridad familiar de otras personas», que pasa a ser ahora la núm. 4. La nueva Sección 3.^a lleva por título «efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo».

El Libro Segundo, «Derecho de la familia», incluye, en primer lugar y en el mismo orden que tienen en la Ley de procedencia, los cinco Títulos de que consta la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, referidos todos ellos a la familia matrimonial, y se añade como Título VI, rubricado «De las parejas estables no casadas», el articulado procedente de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

PREÁMBULO

El Libro Tercero, «Derecho de sucesiones por causa de muerte», incorpora con su misma sistemática el articulado de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, en la redacción vigente en el momento de la refundición.

El Libro Cuarto, «Derecho patrimonial», incorpora con su misma sistemática el articulado de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial. En la rúbrica de este Libro se ha suprimido el adjetivo «civil» porque el Libro es parte de un Código de Derecho civil.

II

TÍTULO PRELIMINAR

2

Las normas en el Derecho civil de Aragón

El Preámbulo de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, de la que procede la redacción actual de los tres artículos que integran el Título Preliminar del presente Código, dice que la finalidad de la reforma es expresar con mayor rigor y justeza el sistema de fuentes del Derecho civil de Aragón, para lo que tiene competencia plena la Comunidad Autónoma en virtud del inciso final del artículo 149-1-8.^a de la Constitución. La nueva redacción respeta al máximo el texto anterior de estos artículos, que es de notable altura técnica y está bien consolidado en nuestra cultura jurídica, modificándolo en lo necesario para expresar mejor el sistema ya existente como consecuencia de los cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Las fuentes se enumeran en el apartado uno del artículo primero de manera directa y sintética, dejando a los artículos siguientes la determinación de su jerarquía y relaciones. En el apartado dos del mismo artículo se señala la forma en que el Derecho estatal actúa como supletorio en el ámbito del Derecho civil aragonés, respetando, por lo demás, plenamente los ámbitos competenciales establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

En los artículos segundo y tercero se aclara que no hay más normas imperativas o prohibitivas aplicables en el Derecho civil de Aragón —límites, en consecuencia, tanto de la costumbre como del principio *standum est chartae*— que las del Ordenamiento jurídico aragonés y las superiores al mismo, es decir, la Constitución; evitando así alguna duda interpretativa a la que acaso se prestaba el texto de la Compilación, que fue redactado en el marco jurídico preconstitucional. Naturalmente, en el ámbito de la competencia del Estado, las normas imperativas del Código civil y de las demás leyes estatales producirán sus efectos propios, conforme al sistema de fuentes estatal; pero es igualmente claro que las normas del Código civil o de otras leyes del Estado, en cuanto actúan como supletorias de las aragonesas en el ámbito de la exclusiva competencia autonómica, operan únicamente en defecto, no solo de ley, sino también de costumbre y después de que despliegue todos sus efectos el principio *standum est chartae*, es decir, en la forma indicada en el apartado 2 del artículo 1.

Para propiciar, aun en limitada medida, una mayor aplicación de las normas consuetudinarias, en el artículo 2 se sustituyó, en 1999, la expresión «el propio conocimiento» por la de «las propias averiguaciones», que es la que proponían todos los proyectos de Compilación elaborados en Aragón en los años sesenta. Aunque bien podía entenderse que el propio conocimiento incluía la realización de averiguaciones para formarlo, la invitación más explícita a los jueces y tribunales a averiguar con los medios que las leyes de procedimiento les brindan la vigencia de una costumbre es acorde, a la vez, con la creciente iniciativa que van asumiendo legalmente en los procesos civiles y con la conveniencia de que no dejen de aplicarse, cuando proceda, costumbres realmente existentes.

III

LIBRO PRIMERO
DERECHO DE LA PERSONA

3

Contenido y sistemática

En el Derecho aragonés histórico tuvo especial importancia la regulación de la capacidad de las personas en razón de la edad, como consecuencia de que en Aragón no tuvo entrada la patria potestad romana. De *consuetudine Regni non habemus patriam potestatem* es aforismo recogido en las Observancias que no solo expresa unas relaciones entre padres e hijos menores dirigidas al bienestar de los hijos, sino que, caso raro en Europa hasta la edad contemporánea, no conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las necesarias para su protección por su minoría de edad o las graves dificultades para gobernarse por sí mismos.

Al no haber patria potestad, todos los aragoneses y aragonesas alcanzaban la plena capacidad de obrar al cumplir determinada edad, fijada en los Fueros más antiguos en los catorce años, y que se mantuvo así con el complemento de una protección a su inexperiencia hasta cumplir los veinte: edad que seguía contrastando con la de los veinticinco, que, procedente del Derecho romano, era la más habitual en la Península Ibérica y en Europa.

También, por no reconocerse la patria potestad, pudo admitirse que la madre mantuviera unas relaciones jurídicas con sus hijos idénticas a las del padre; así como que la madre, en los mismos casos que el padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda.

El sistema histórico, en definitiva, se adelantó en siglos a lo que hoy puede leerse en los Códigos de nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con aquella realidad histórica y su plasmación en la Compilación de 1967, a la vez que declaraciones internacionales y españolas establecen parámetros muy exigentes en el tratamiento de los derechos de las personas

menores de edad o incapaces de obrar. No hay contradicción entre nuestro Derecho histórico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desarrollo del Derecho aragonés enlaza con toda naturalidad con las más altas exigencias e ideales de la regulación del Derecho de la persona.

La nueva regulación del Derecho de la persona tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces anteriormente contenidas en la Compilación, y, como criterio, los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad, sin olvidar el Derecho histórico en lo mucho que tiene de actual y enriquecedor. También se ocupa el Libro Primero de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo.

El Libro Primero se estructura en cuatro Títulos: el Primero se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes. Como puede verse, las rúbricas siguen casi exactamente las de los correspondientes Títulos del Libro Primero de la Compilación, lo que es buena muestra de la continuidad con el Derecho anteriormente vigente. La técnica legislativa, sin embargo, es distinta de la de la Compilación, pues son visibles la intención sistemática, la enunciación de principios y la regulación más detallada.

En el Título II, la Sección 3.^a del Capítulo II («Deber de crianza y autoridad familiar»), titulada «efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo», contiene los artículos procedentes de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

4

Mayoría y minoría de edad

El Título Primero («De la capacidad y estado de las personas») consta de tres Capítulos: Primero, «Capacidad de las personas por razón de la edad»; II, «Incapacidad e incapacitación», y III, «Ausencia».

PREÁMBULO

El más extenso es el primero, dividido a su vez en cuatro Secciones.

En la Sección primera («Mayoría y minoría de edad») prevalecen los planteamientos sistemáticos y de principio. La mayoría de edad se adquiere al cumplir dieciocho años, tal como es en Aragón desde 1978 (cuando se redujo la mayoría de edad para toda España), y armoniza muy bien con nuestra tradición histórica, en la que las limitaciones a la capacidad de obrar de los mayores de catorce años no llegaban sino hasta cumplir los veinte. También, de acuerdo con una regla del Derecho histórico respetada hasta el presente, son mayores de edad los que han contraído matrimonio. De este modo, quien se ha casado deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es capaz para todos los actos de la vida civil.

La minoría de edad no es una situación de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requieren una formación adecuada a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas dirigidas a los menores, están presididas siempre por el criterio del interés del menor. Criterio este hoy central y decisivo en estas materias en todos los países de nuestro entorno, pero que en Aragón pudo ser enunciado sencillamente hace muchos siglos (en particular, por Jerónimo Portolés en el siglo XVI), como consecuencia de que en Aragón no se ha conocido la patria potestad.

Por la misma razón, los padres no eran considerados, en cuanto tales, representantes de sus hijos, y ahora la representación por el padre o la madre se extingue en edad temprana, a los trece años, que fue durante siglos en Aragón el límite de la minoría de edad. De manera general expresa el artículo 5 que al cumplir los trece años termina la representación legal, de manera que la capacidad de los menores se completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. Es decir, a partir de los trece años, el menor aragonés actúa siempre por sí (sin representante), con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Esta regla,

como en general todas las relativas a la mayoría y minoría de edad, se aplica en todas las ramas del ordenamiento, pues es el Derecho civil el que determina de manera central la capacidad de obrar de las personas y los medios de suplir o completar la falta de capacidad para determinados actos. De ahí también la trascendencia del principio enunciado en el artículo 7, según el cual las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva: la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepción.

En algunos ámbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como mínimo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce años) ha de ser oído antes de la adopción por otros (particulares o autoridades públicas) de medidas que le afecten en su persona o bienes (artículo 6). El criterio del juicio suficiente no es de aplicación tan simple y automática como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al mismo, por sí solo o con adición de otros, cuando, fuera del ámbito de los derechos y el tráfico patrimoniales, se trata de tomar decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la vida, la integridad física, el honor, la intimidad o la propia imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar no solamente el desarrollo psíquico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino también la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisión que ha de tomarse, de modo que cuando la decisión se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce años, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (artículo 34).

En particular, el menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo ejercer los derechos de la personalidad (artículo 7), ejercicio en el que, en ningún caso, es posible la representación. Esta regla general estará matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado aplicables en Aragón por encima de este Código del Derecho Foral de Aragón, en particular leyes orgánicas, desdichadamente poco coherentes entre sí en este punto y en las que las limitaciones habrán de interpretarse en

sentido restrictivo, como se ha dicho. También hay que tener en cuenta que en este Código se regulan diversos supuestos de intromisión de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisión (artículos 20 y 24, según el menor haya cumplido o no los catorce años).

En esta Sección, las disposiciones sobre materia estrictamente patrimonial atienden únicamente a cuestiones de principio. Al menor titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute, según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés en razón de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno (artículo 8, que recoge en lo esencial el texto del artículo 11 de la Compilación). La administración de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria asistencia en cada caso. El artículo 9 hace referencia también a los supuestos en los que la administración y disposición de ciertos bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión).

En cualquier caso, el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con los usos sociales (artículo 7).

La Sección se cierra con una concisa norma sobre cómputo de la edad (artículo 11) y una disposición que legitima en términos muy amplios la intervención judicial, incluso a instancia del propio menor, dirigida a apartar al menor de un peligro o a evitarle perjuicios, en los casos tipificados en el propio precepto o en cualesquiera otros (artículo 10).

5

La persona menor de catorce años

La edad de los catorce años, que en los Fueros señalaba la mayoría de edad (*F. De contractibus minorum*, 1247), determina

en el Derecho hasta ahora vigente un cambio sustancial dentro de la minoría de edad de los sujetos. En esta línea sigue el presente Código, que, por ello, regula por separado la situación de la persona menor de edad según haya cumplido o no los catorce años.

La Sección 2.^a del Capítulo I del Título I se ocupa de «la persona menor de catorce años». Esta opera de ordinario en la vida jurídica mediante los actos de sus representantes legales, excepto en los actos relativos a los derechos de la personalidad y los demás enunciados en el artículo 7, que realiza por sí sola si tiene para ello suficiente juicio. Corresponde su representación legal a las personas que ejercen la autoridad familiar o, en su defecto, al tutor, pero también y preferentemente, para la administración y disposición de determinados bienes, a los administradores de los mismos, de conformidad con el artículo 9.

Se regulan con detalle las situaciones en las que entre representante o representantes del menor y este mismo existe oposición de intereses, siguiendo en lo esencial los criterios hoy aplicables y buscando también armonizar la regulación con la necesidad de autorizaciones en muchos casos. En particular, se admite que el padre o madre único titular de la autoridad familiar, así como el tutor único, puedan actuar en representación del menor de catorce no obstante estar en conflicto de intereses con él, considerando suficiente cautela la autorización por la Junta de Parientes o por el Juez, de manera que, prestada esta autorización, no se precisa otra (la que procedería en razón de lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16). Con esto se evita la necesidad de intervención judicial cuando la autorización, en este caso, la preste la Junta de Parientes. No se admite la misma solución simplificadora cuando la oposición de intereses exista con ambos padres, entre otras razones porque, en tal caso, los miembros de la Junta son necesariamente parientes de ambos representantes, lo que hace prudente la autorización judicial para los actos en los que esta se exige.

Cuáles sean los actos de los representantes legales que requieren autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez viene especificado en los artículos 14 (atribuciones gratuitas), 15 (actos de disposición) y 16 (adicionalmente, para actos del tutor).

PREÁMBULO

Los criterios no se apartan mucho del Derecho hasta ahora aplicable, si bien se aclaran y precisan muchos de los supuestos.

La división de un patrimonio o cosa común no requiere autorización previa, pero sí aprobación posterior por la Junta de Parientes o por el Juez en ciertos casos. Es de señalar el supuesto en el que interviene en representación del menor su único padre o madre titular de la autoridad familiar en situación de oposición de intereses, caso en el que es necesaria aprobación posterior o autorización previa, que pueden ser prestadas por la Junta de Parientes. El supuesto es frecuente en la práctica a la hora de dividir la herencia resultante del fallecimiento de uno de los padres viviendo el otro.

Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los menores de catorce años (artículo 22), o de los otorgados en su nombre por sus representantes sin la necesaria autorización o aprobación (artículo 19). En todos los casos se evita la nulidad absoluta cuando la invalidez persigue proteger el interés particular de persona determinada, siguiendo la tónica de la legislación civil aragonesa. Solo será nulo de pleno derecho el acto realizado por un menor que vulnere leyes que exijan una capacidad específica o le señalen prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto distinto. En los demás, será la anulabilidad el régimen de invalidez, de manera que el propio menor estará siempre legitimado para anular el acto desde que cumpla catorce años, con la debida asistencia en principio, y sin ella cuando por la mayoría de edad o la emancipación hubiera podido realizar el acto sin asistencia; la acción prescribirá a los cuatro años contados desde este momento. Además, estará legitimado el representante legal (solo el que no haya intervenido en el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorización o aprobación) hasta que el menor cumpla los catorce años. Quienes pueden anular pueden también, alternativamente, confirmar. Por otra parte, cabe que los actos del menor sean válidos originariamente si, no siendo de los que necesitarían intervención de la Junta de Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, este ha autorizado el acto del menor.

A todo lo largo del Libro Primero del presente Código, se atiende a la libertad y los intereses morales y existenciales

de los sujetos tanto o más que a sus intereses patrimoniales. Buena expresión de esta actitud del legislador es el artículo 7, ya aludido, así como los artículos 20, 24 y 35, que versan sobre «intromisión en los derechos de la personalidad» de los menores de catorce años, de los menores que han cumplido esta edad y de los mayores no incapacitados que no están en condiciones de decidir por sí mismos. En todos estos casos se da por supuesta la aplicación de las leyes generales del Estado (leyes orgánicas la mayor parte de ellas), desgraciadamente no exentas de oscuridades y contradicciones, para atender exclusivamente a la cuestión puramente de Derecho civil de la validez del consentimiento prestado por las personas menores de edad o que carecen, de modo duradero o circunstancial, de juicio suficiente. Por ello, los tres artículos (20, 24 y 35) comienzan circunscribiendo su ámbito de aplicación a los supuestos en los que, «con arreglo a las leyes [que son, en primer lugar, las aludidas leyes estatales], la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en los derechos de la personalidad». Supuestos caracterizados son, por ejemplo, la intromisión en los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, o bien en la integridad física, que presenta a su vez variedades muy distintas, como la cirugía, el trasplante de órganos, las transfusiones de sangre, la cirugía estética o la práctica de tatuajes o de perforaciones corporales.

Tratándose de menores de catorce años (artículo 20), si la persona tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier intromisión de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo que contra su voluntad la injerencia solo será posible con autorización judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino que, para su protección, requiere autorización conjunta de quienes ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorización que podrá suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la intromisión solo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

Para los menores que han cumplido catorce años (artículo 24), la regla es que la intromisión de terceros en sus derechos de la personalidad depende exclusivamente de su voluntad,

si bien, cuando su decisión suponga un grave riesgo para su vida o su integridad física o psíquica, necesitará adicionalmente la autorización de uno cualquiera de sus padres que estén en el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. Contra la voluntad del mayor de catorce años solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor. Si no está en condiciones de decidir sobre la intromisión (contra la presunción del artículo 34) esta solo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

6

El menor mayor de catorce años y el emancipado

La regulación de la capacidad del menor mayor de catorce años, característica secular del Derecho aragonés, sigue las pautas de la Compilación. De hecho, el artículo 23 recoge literalmente la mayor parte del artículo 5-1 de la Compilación, cuya referencia final a la anulabilidad se desarrolla en el artículo 29, al tiempo que el apartado 2 da lugar al artículo 28.

La idea central es que el menor que ha cumplido catorce años realiza por sí toda clase de actos y contratos. No tiene representante legal (aunque cabe que los administradores de sus bienes realicen en este ámbito actos en representación suya: artículo 26). Ahora bien, en la generalidad de los casos, la plena validez de sus actos requiere la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del tutor.

La doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jurídica de esta asistencia, que, cuando la introdujo con este nombre el Apéndice de 1925, no tenía parangón en otras leyes civiles españolas. El artículo 27 proporciona unas pautas prácticas que permitirán actuar con la deseable seguridad. No se ha configurado exactamente como una declaración de voluntad de quien autoriza, sino como expresión de su criterio a afirmativo sobre la conformidad del acto con los intereses del menor, para lo cual es necesario que conozca suficientemente el contenido y circunstancias de tal acto. Por ello no puede prestarse una asistencia meramente genérica. No puede prestarse la asistencia con posterioridad a la realización del acto, pues con ello se

frustraría el componente de consejo y asesoramiento que la asistencia conlleva, si bien la conformación del acto anulable evitará la anulación. En la asistencia simultánea al acto se llega a admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposición signifique prestación de la asistencia.

El menor mayor de catorce años puede actuar por sí solo, sin necesidad de asistencia, en todos los casos en los que también podría actuar de este modo el menor de catorce años con suficiente juicio y además, respecto de la administración de bienes, en los casos señalados en el artículo 26. Su voluntad es decisiva para consentir intromisiones en los derechos de la personalidad, con las matizaciones que establece el artículo 24, ya mencionado en el apartado anterior.

El supuesto de oposición de intereses entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia se regula en el artículo 28 partiendo de los criterios del artículo 5-2 de la Compilación, con pequeñas aclaraciones y la adición del caso en que la contraposición de intereses se dé entre varios menores o incapacitados que habrían de ser asistidos por la misma persona.

El artículo 29 cierra esta Sección con reglas sobre la anulabilidad de los actos realizados sin la debida asistencia. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Compilación, y para sustituir a la confusa regulación estatal aplicable hasta la entrada en vigor de la Ley de Derecho de persona, se concreta la legitimación para anular o confirmar y se precisa el momento inicial del plazo de prescripción de cuatro años.

La emancipación es instituto procedente del Derecho romano y vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la misma, por lo que algunas críticas pusieron de manifiesto su inadecuación teórica en el Derecho aragonés. Sin embargo, nunca ha dejado de utilizarse en la práctica, en la que puede seguir prestando buenos servicios. En consecuencia, se han recogido sus rasgos esenciales adaptándolos al sistema aragonés. En particular, se aclara que es posible conceder la emancipación al menor desde que cumple catorce años. Por otra parte, los efectos de la emancipación, determinados en este Código directamente o por remisión al artículo 15, se producen también para el emancipado por vida independiente,

ampliándose de este modo las previsiones del artículo 5-3 de la Compilación.

Obviamente, no cabe en Aragón ni ha existido nunca la emancipación por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la situación de mayor de edad.

7

Incapacidad e incapacitación

En las leyes civiles aragonesas anteriores a la nueva regulación había numerosas referencias a las personas incapaces y a las incapacitadas, así como, en el Derecho histórico, una regulación de la tutela y la curatela que las incluía. La nueva regulación, en el Capítulo II del Título Primero, dedicado a la incapacidad e incapacitación, se propone superar las dificultades conocidas de armonización de las leyes estatales sobre la materia con las normas y principios del Derecho aragonés sobre capacidad de las personas, autoridad familiar y tutela. En lo demás seguirá aplicándose como supletorio el Derecho general del Estado.

Es de notar la presunción de capacidad sentada en el artículo 34, referida a toda persona mayor de catorce años no incapacitada judicialmente, de manera coherente con la ausencia de representación legal a partir de esta edad y la posibilidad de realizar por sí (con la necesaria asistencia según los casos) toda clase de actos y contratos.

Para las personas mayores no incapacitadas que no estén en condiciones de decidir por sí mismas se prevé un cauce relativamente flexible para permitir intromisiones en los derechos de la personalidad; para permitir el internamiento o la permanencia en el mismo contra su voluntad se requiere siempre autorización judicial (artículos 35 y 36).

El artículo 37 viene a llenar un vacío legal al precisar el tipo de invalidez de los actos realizados por personas no incapacitadas en situación (duradera o transitoria), en la que carecían de aptitud para entenderlo y quererlo. Puesto que se trata de proteger intereses particulares, se opta por la anulabilidad, precisando los aspectos de legitimación y prescripción, salvo que el acto, además, vulnere otras leyes.

Las causas de incapacitación previstas en el artículo 38 no se apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se refiere a la prodigalidad. El Derecho histórico la excluía como causa autónoma («por costumbre del Reino no se da curador al que dilapida o disipa sus bienes, a no ser que además sea mentecato y privado de razón»: Observancia. 7.^a *De tutoribus*) y esto mismo expresa el apartado 3 del artículo 38. Es decir, cabe incapacitar (para protegerlo, como en los demás supuestos de incapacitación) al que dilapida sus bienes cuando por enfermedad o deficiencia psíquica no pueda gobernarse por sí mismo, pero no, sin este presupuesto, limitar su capacidad de obrar en el ámbito patrimonial como medida protectora de intereses ajenos, tal como, en su ámbito de aplicación, establece el Código civil.

La Ley estatal 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, se aplica en Aragón en lo necesario —pues buena parte de su contenido de Derecho civil era ya posible en Aragón en virtud del principio *standum est chartae*— y así prevé el artículo 40 que siga siendo en adelante, con pequeñas adaptaciones.

La prórroga y la rehabilitación de la autoridad familiar estaban admitidas en Aragón, adaptando en lo necesario las prescripciones del Código sobre la patria potestad, como muestra la referencia textual en los artículos 31 y 51 de la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999. Los artículos 38 a 42 de la Ley de Derecho de persona, y ahora los artículos 41 a 45 de este Código, completan y aclaran tanto los supuestos en los que procede como el régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, así como las causas de su extinción.

8

La ausencia

La ausencia es el objeto del Capítulo III del Título Primero. En el Derecho histórico, dos fueros y una observancia atendieron a algunas consecuencias esenciales de la situación de ausencia, en particular para determinar la administración de los bienes del ausente, en la que se da entrada a su mujer. Tanto el Apéndice de 1925 como la Compilación de 1967 se ocuparon de estos

temas, que relacionaron también con el derecho de viudedad y la administración de los bienes comunes del matrimonio.

La nueva regulación tiene en cuenta las situaciones de desaparición y de ausencia declarada, para señalar, en el primer caso, sobre quién habrá de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y coordinar las consecuencias de la desaparición de una persona casada con las disposiciones sobre gestión de bienes consorciales.

El artículo 48 determina quiénes están legitimados para promover la declaración de ausencia legal y el 49, por remisión al 46, las personas a las que el Juez nombrará representantes del ausente. Las obligaciones del representante se enumeran en el artículo 50, y sus facultades y derechos en el 51. El artículo 53.1 resuelve, por remisión a la regulación del consorcio conyugal y el derecho de viudedad durante el matrimonio, sobre la gestión del patrimonio consorcial.

Particular importancia práctica tiene la proyección de la declaración de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y otro cónyuge. El artículo 54 se ocupa de esta cuestión, siguiendo la pauta establecida en la regulación de la viudedad.

Por último, el artículo 55 aborda el complejo problema planteado por el llamamiento hereditario a favor de persona declarada ausente para, sin apartarse en lo sustancial del derecho hasta ahora vigente, armonizarlo con los criterios del Derecho de sucesiones, en particular en atención al juego de la sustitución legal.

9

Relaciones entre padres e hijos

Las relaciones entre ascendientes y descendientes tienen en el Título II un desarrollo acorde con la tradición propia del Derecho aragonés, esencialmente en la forma en la que se plasmó en la Compilación, pero desembarazada ahora de los condicionamientos externos procedentes de un sistema, el del Código civil, tributario de una tradición radicalmente distinta. El núcleo central de esta regulación, que da sentido a toda ella, es

el deber de crianza y educación de los hijos, obviamente presidido por el principio de primacía del interés de estos. La autoridad familiar —que no es, conceptualmente, el equivalente de la institución de la patria potestad— es una función atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educación. Habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función aneja a la autoridad familiar (artículo 9) que no es esencial a la misma, puesto que también puede corresponder a otras personas, incluido un tutor real, al tiempo que los padres ejercen la autoridad familiar. Esta distinción y relativa disociación entre autoridad familiar y gestión de los bienes facilita también la atribución del ejercicio de la autoridad familiar a personas distintas de los padres (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos mayores), sin darles acceso por ello a la gestión de los bienes.

Estas ideas básicas explican la estructura externa del Título II. Tras un primer Capítulo sobre efectos de la filiación (puesto que se dan incluso cuando los padres están excluidos de la autoridad familiar), el Capítulo II se ocupa del deber de crianza y educación de los hijos, del ejercicio de la autoridad familiar por los padres, de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo y de la autoridad familiar de otras personas, y el III, de la gestión de los bienes de los hijos.

El Capítulo primero es acorde con las concepciones sociales sobre las relaciones entre padres e hijos y recoge preceptos ya vigentes, con algunas concreciones y adiciones. Puede señalarse la aclaración de que es suficiente la edad de catorce años para solicitar la alteración en el orden de los apellidos paterno y materno (artículo 57) o la expresión de un deber de asistencia recíproca que comprende el de contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la satisfacción de las necesidades familiares (artículo 58); deber que se concreta luego en la colaboración personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares mientras conviva con la familia (artículo 66), la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación (artículo 67) y las reglas de convivencia entre padres e hijos mayores de edad (artículo

70, que atiende a una realidad social hoy muy relevante), todo ello con normas flexibles que invocan criterios equitativos.

Es también de señalar el enunciado de derechos y deberes de los padres que no tienen la autoridad familiar ni conviven con los hijos (artículo 59), el énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, cuyo único límite es el del propio interés del menor (artículo 60) y, por último, la obligación del padre de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo común, en los términos del artículo 62.

El artículo 63, que encabeza el Capítulo II, reproduce casi literalmente la atinada fórmula del artículo 9 de la Compilación: «El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres». Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad familiar, desarrolla los criterios del citado artículo de la Compilación en dos Secciones, una (artículos 71 a 74) con disposiciones más pormenorizadas y otra (artículos 75 a 84) específica para los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. En otra Sección (artículos 90 a 93) se sistematizan los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar.

En relación con la titularidad, caracteres y contenido de la autoridad familiar (artículos 63 a 65), apenas puede hablarse de novedades. Por ejemplo, que corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años (artículo 65.1.c) deriva de normas constitucionales bien conocidas así como de la regla de ejercicio de los derechos de la personalidad por el menor con suficiente juicio.

Ya se ha aludido a los deberes de los hijos de contribuir, según las circunstancias, a la satisfacción de las necesidades familiares. En cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y educación de los hijos, se aclara que se mantiene cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, aunque valorado de distinto modo que en situación de minoría de edad y con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá, naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad (artículo 69).

10

Efectos de la ruptura de convivencia de los padres con hijos a cargo

La preocupación por la protección del menor y de la familia ha sido una constante en las democracias más desarrolladas. Este principio se reconoce en el artículo 39 de la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuyo artículo 24 impone a los poderes públicos aragoneses adoptar políticas que garanticen la protección de las relaciones familiares y la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.

La Sección 3.^a (arts. 75 a 84), que incorpora los preceptos de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, recoge y refuerza el principio del interés superior de los menores en relación con las consecuencias de la ruptura de convivencia de sus progenitores. La mejor realización de su beneficio e interés exige que ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa, a pesar de la separación o el divorcio, y que la nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de sus deberes con los hijos.

La presente regulación, respondiendo a una importante demanda social, supone un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la individual como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se pretende favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.

La Sección se compone de un total de diez artículos distribuidos en cinco Subsecciones. La subsección primera, denominada «Disposiciones generales», delimita el objeto y finalidad

PREÁMBULO

de la Sección, así como los derechos y principios que han de observarse ante la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. El derecho de los hijos a un contacto directo y continuado con sus padres y el derecho de los padres a la igualdad en sus relaciones con los hijos son los dos derechos esenciales sobre los que se fundamenta toda la Sección.

La Subsección 2.^a, intitulada «El pacto de relaciones familiares», inspirada en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, otorga prioridad en la regulación de las relaciones familiares a lo acordado por los padres en el denominado pacto de relaciones familiares, que regulará las cuestiones principales que se deriven de la ruptura de su convivencia, tanto en su relación personal con los hijos como en el orden económico.

En el pacto de relaciones familiares se hace referencia a un aspecto importante, como es la relación de los hijos con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, siguiendo la tradición del Derecho histórico aragonés de protección a la familia.

En la Subsección 3.^a, rubricada «Mediación familiar», se regula la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del Juez, acudan en cualquier momento a la mediación familiar para resolver sus discrepancias derivadas de la ruptura. La mediación familiar resulta un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura.

En defecto de acuerdo entre los padres y fracasado, en su caso, el proceso de mediación familiar, las relaciones familiares que se deriven de la ruptura de la convivencia deberán regirse por lo que decida el Juez en aplicación de los artículos contenidos en la Subsección 4.^a, que contienen las medidas judiciales de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares.

La principal medida que se adopta en la Sección es considerar la custodia compartida como el régimen de custodia que el Juez adoptará de forma preferente en interés de los hijos menores a falta de pacto, salvo en los supuestos en que la custodia individual fuere lo más conveniente. El Juez deberá

motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y los factores a los que se refiere el artículo 80, como la edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de los hijos, la aptitud y la voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos o las posibilidades de los padres de conciliar su vida familiar y laboral. El artículo 80 también establece que en todo acuerdo de custodia, salvo circunstancias excepcionales, no se separará a los hermanos.

La finalidad de la custodia compartida es un reparto efectivo de los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando las relaciones afectivas y continuadas de convivencia con los hijos y la participación directa en su desarrollo y educación.

La custodia compartida, tal y como se configura en esta Sección, no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida. El artículo 80 establece un marco flexible para que el Juez pueda valorar todas las circunstancias que concurren en el caso concreto y decida el régimen de convivencia de cada progenitor en interés de unas adecuadas relaciones familiares.

Por otra parte, una de las causas que expresamente prevé el artículo 80 para no otorgar la custodia, ni individual ni compartida, es la violencia doméstica o de género, en línea con el compromiso asumido por los poderes públicos para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica en todos los ámbitos de la sociedad.

El artículo 81 regula las reglas que deben regir la atribución del uso de la vivienda familiar, distinguiendo entre los supuestos de custodia compartida de los hijos y los de custodia individual. En la custodia compartida, el criterio de atribución del uso de la vivienda es a favor del progenitor más necesitado, dado el criterio de igualdad que debe prevalecer en este régimen de custodia. En los casos de custodia individual se atribuye el uso con carácter general a favor del progenitor que ostente la custodia, a menos que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor. En todo caso, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores

tendrá una limitación temporal. Una posibilidad que admite el artículo 81 es que el Juez acuerde la venta de la vivienda familiar cuando ello fuera necesario para unas adecuadas relaciones familiares. Junto con la atribución del uso de la vivienda, el artículo 7 regula la distribución del ajuar familiar.

El artículo 82 se refiere a los gastos de asistencia de los hijos y establece el deber de los padres de contribuir proporcionalmente a sus recursos, y el 83 a la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación económica destinada a compensar la desigualdad económica que le produzca la ruptura de la convivencia. Esta asignación compensatoria, temporal o indefinida, deberá determinarse por el Juez atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 83, pudiendo asimismo revisarse o extinguirse en los supuestos previstos en sus apartados 4 y 5.

En la Subsección 5.^a, titulada «Medidas provisionales», se regulan las medidas que pueden adoptarse judicialmente antes de dictarse la resolución definitiva que apruebe el pacto de relaciones familiares o las medidas judiciales aplicables. Para la solicitud de estas medidas provisionales se legitima no solamente a los padres, sino también a los hijos a cargo mayores de catorce años y al Ministerio Fiscal en su función de protección de los menores. En cuanto a los criterios que debe tener en cuenta el Juez se opta por una fórmula genérica de remisión a los criterios establecidos en la Sección, con el fin de que desde un primer momento se apliquen unas medidas que se ajusten lo máximo posible a las que serán definitivas.

11

Autoridad familiar de otras personas

El desconocimiento de la patria potestad en Aragón permitió reconocer relaciones jurídicas familiares flexibles entre nietos y abuelos, así como entre los hijos de una persona y el cónyuge de esta. La Ley 3/1985 amplió los supuestos de «autoridad familiar de otras personas» a los hermanos mayores del menor. El presente Código recoge en sus artículos 85 a 89 la experiencia de la Compilación y su modificación en 1985 para aclarar algunos extremos y facilitar la asunción automática de

la autoridad familiar por el hecho de hacerse cargo voluntariamente las personas señaladas de la crianza y educación de los menores. Además, precisa que el ámbito de esta autoridad familiar de otras personas distintas de los padres es idéntico al que a estos corresponde en el terreno personal, pero que no se extiende a la gestión de los bienes del menor (artículo 88.3). Para la gestión de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar, pero sujeto a las garantías y cautelas propias de las instituciones tutelares (artículo 130.1.a).

De este modo queda claro que la gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando esta se ejerce por los padres (artículo 9), y entonces se rige por las normas contenidas en los artículos 94 a 99.

12

Relaciones tutelares: cuestiones generales

El Derecho histórico aragonés contenía un sistema propio de instituciones tutelares, completado, como en otros países, con los principios del Derecho común europeo.

Es de señalar que la tutela de los menores podía coexistir con la autoridad de los padres, aun viviendo ambos, pues, como ya se ha dicho, la autoridad de estos operaba en el terreno de las relaciones personales.

La tutela era únicamente dativa y testamentaria, pues la Observancia 9.^a *De tutoribus* establecía que nadie fuera admitido como tutor si no estaba designado por el Juez o el testador. Tenía carácter troncal, de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de donde procedían los bienes que habían de ser administrados (F. 4.º, *De tutoribus*, Monzón, 1533); consiguientemente, cabía una pluralidad de tutores, y así se hace patente en la Observancia 1.^a *De tutoribus*: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos menores, por razón de los bienes que tienen por parte del padre o madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se darán dos tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por parte de madre en los maternos.

PREÁMBULO

Contenía, además, el Derecho aragonés precisiones de varia índole sobre obligación de inventario y de jurar comportarse bien y legalmente el tutor, posibilidad de remoción, etc. También había referencia expresa a la tutela de los dementes y furiosos, y la observación de que no procede incapacitación por prodigalidad, según se ha dicho.

El sistema tutelar propio del Derecho aragonés fue erosionado por las Leyes de enjuiciamiento civil (1855 y 1881) y, luego, por el Código civil, situación en la que llegó al Apéndice de 1925. Sin embargo, tanto los proyectos de Apéndice (1899 y 1904) como el Anteproyecto del Seminario de la Comisión compiladora que preparó la Compilación de 1967 replantearon toda la materia inspirándose de una parte en el Derecho histórico y atentos, de otra, a las necesidades sentidas en cada momento por la sociedad. Esta línea sigue la nueva regulación que viene a sustituir a una regulación fragmentaria que ofrecía muchas dudas de interpretación y, sobre todo, de integración con las normas supletorias del Código civil, que responden a principios parcialmente distintos y, por ello, inadecuados.

El Título III se ocupa de las relaciones tutelares en toda su amplitud, referidas tanto a menores como a incapacitados. Regula la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones tutelares, así como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela como instituciones complementarias de las anteriores. También posibilita el nombramiento de administrador de bienes (coexistente con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a título gratuito a favor del menor o incapacitado.

En general, el sistema no se aparta en los rasgos esenciales del conocido con anterioridad, de modo que puede considerarse de «tutela de autoridad», puesto que todas las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pero se potencia la autonomía de los particulares tanto en la delación como en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acentúan los rasgos familiares.

En los tres primeros Capítulos de este Título se abordan cuestiones que atañen a todas las instituciones tutelares.

Prevalece la delación voluntaria, puesto que la dativa o judicial es subsidiaria y complementaria de aquella (artículo 102.2) y únicamente procede en su defecto, total o parcial (artículo 115), mientras que la legal está prevista tan solo en caso de desamparo de menores o incapacitados (artículos 102.1.c, y 118 a 122).

Se admite la llamada «autotutela», es decir, que cualquier persona mayor de edad y capaz, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá en escritura pública designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona y bienes para cuando esté incapacitado (artículo 108). También podrá otorgar un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitación (artículo 109). Conviene recordar que, de acuerdo con el artículo 757 de la Ley de enjuiciamiento civil, también podrá promover, en su momento, su propia incapacitación.

Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados que están bajo su autoridad, mediante testamento o escritura pública (artículo 110). Se prevén reglas para cuando haya pluralidad de designados o disposiciones incompatibles, así como la vinculación del Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias. Solo en ausencia de estas procede la designación judicial de las personas del elenco ordenado del artículo 116.

El Capítulo III de este Título señala con cuidado la capacidad de las personas tanto físicas como jurídicas para ser titulares de cargos tutelares, las causas de inhabilidad, las causas y efectos de la excusa y de la remoción, así como el procedimiento para esta última.

13

Tutela, curatela, defensor judicial, guarda de hecho, guarda administrativa y acogimiento

El Capítulo IV, dedicado específicamente a la tutela, comienza señalando las personas sujetas a tutela ordinaria o a la tutela

PREÁMBULO

automática de la entidad pública, así como las personas obligadas a promover la constitución de la tutela.

En el sistema aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela (artículo 134). Además de la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los bienes, cabe que en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores —nunca más de dos— para actuar simultáneamente. También serán dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos, así como, por decisión del Juez, cuando tutor sea una persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela su cónyuge. El artículo 142 da reglas para el ejercicio de la tutela plural.

La administración de los bienes corresponde al tutor, en la medida en la que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no haya designado administrador para determinados bienes la persona de quien proceden estos por título lucrativo (artículo 135). Se prevén las clásicas obligaciones de fianza e inventario, así como la de rendir cuenta general justificada de su gestión, ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

En el contenido personal de la tutela se acentúan los rasgos familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de tener al pupilo en su compañía. La edad del menor es decisiva para determinar la extensión y modo de ejercicio de los deberes del tutor (por ejemplo, a efectos de la representación o la prestación de asistencia según sea o no mayor de catorce años) (artículo 136.1).

Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la sentencia de incapacitación, pero, en lo que ella no prevea, se considerará que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años: esta última precisión es necesaria, entre otras cosas, a efectos de la representación legal del pupilo por el tutor (artículo 136.2).

El reforzamiento de los aspectos familiares de la tutela se manifiesta también en la eventual obligación de alimentos que,

en última instancia, recae sobre el tutor, una vez agotadas todas las demás vías para proporcionárselos al pupilo (artículo 137).

A la curatela, objeto del Capítulo V, pueden estar sujetos los emancipados, así como los incapacitados en el caso de que así lo determine la sentencia de incapacitación. No hay una curatela para los pródigos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados (huérfanos, en el supuesto más frecuente), solo se constituirá la curatela a instancia de estos, pues su cometido es únicamente la intervención o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden realizar por sí solos (artículo 149). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la sentencia de incapacitación, de manera que tanto puede limitarse al ámbito personal como incluir poderes de representación, si bien el parámetro supletorio es la situación de un menor mayor de catorce años, criterio aplicable también a la prestación de la asistencia.

En cuanto al defensor judicial (Capítulo. VI), su regulación apenas se aparta de la vigente, sin más que las adaptaciones necesarias al sistema aragonés de Derecho de la persona.

La guarda de hecho (Capítulo. VII) es definida por las notas de iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse de la guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la posibilidad de que el guardador sea persona física o jurídica y el guardado necesariamente menor o incapacitado que se encuentren en situación de desamparo, o persona que podría ser incapacitada. El guardador está obligado a poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal, y la autoridad judicial cuenta con las necesarias facultades para requerir información y establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

La institución de la Junta de Parientes, de actuación tan frecuente y útil en el Derecho aragonés, ha permitido, en relación con la guarda de hecho, reconocer la validez de ciertos actos del guardador cuando, en el ámbito de la administración de los bienes, son necesarios. Si la Junta de Parientes declara que es necesario el acto de administración realizado en representación del guardado, este será válido. Los actos no necesarios serán

anulables, salvo que hayan redundado en utilidad de la persona protegida.

El Capítulo VIII (artículos 160 a 169) está dedicado a la guarda administrativa y al acogimiento, especialmente al familiar. Los preceptos son coherentes con los principios y las disposiciones concretas de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, y procuran el adecuado engarce entre las normas civiles y las administrativas. Por razones sistemáticas, hay algunas reiteraciones de preceptos de la citada Ley y, en particular, se desarrollan y concretan algunos aspectos civiles a los que aquella hace referencia en sus remisiones a la Compilación del Derecho civil de Aragón o a la «legislación civil» que resulte aplicable de acuerdo con la vecindad civil de los sujetos.

14

La Junta de Parientes

La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma sistemática en la Compilación de 1967, ha tenido desde entonces una excelente aceptación social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de los supuestos en los que los particulares pueden suscitar su intervención, evitando otras alternativas, en particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas desde entonces, el legislador ha ido añadiendo nuevos casos susceptibles de encauzarse a través de la Junta de Parientes. Así ocurrió en la Ley de sucesiones de 1999 y en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003. Pero es en el ámbito del Derecho de la persona en el que con más frecuencia el legislador ha de referirse a esta institución. En la nueva regulación del Derecho de la persona son más de una veintena los artículos que la mencionan, sin contar el Título IV, dedicado a las reglas generales de composición y funcionamiento de este órgano familiar, cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros legisladores españoles a incorporarlo a sus leyes.

Posiblemente, al menos desde el punto de vista de su frecuencia en la práctica, las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la

prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes prevén. Pero no hay que olvidar que puede también dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar (artículo 74), así como divergencias sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres (artículo 89), si prefieren acudir a ella en lugar de al Juez (del mismo modo que las divergencias entre cónyuges sobre la determinación del domicilio familiar, de acuerdo con el artículo 184, que utiliza una fórmula similar). Además, tiene una participación interesante en la organización y funcionamiento de la tutela (artículos 105, 107, 113, 114, 140, 141 y 142) y en la guarda de hecho (artículo 159).

Por otra parte, la Ley de sucesiones dejó sin contenido el artículo 22 de la Compilación (derogado por la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad), que se refería a la «Junta de Parientes en funciones de fiducia sucesoria». Hoy la fiducia colectiva no es considerada propiamente como un supuesto de Junta de Parientes, pero sí ha parecido oportuno señalar que las normas del Título IV, se aplican supletoriamente, en defecto o para completar la normativa específica contenida en sede de Derecho de sucesiones, a su vez subsidiaria de las instrucciones del comitente.

El Título IV regula la composición y funcionamiento de la Junta de Parientes partiendo de los artículos 20 y 21 de la Compilación, cuyo texto incorpora en buena parte, pero sin olvidar que, en la experiencia de los últimos decenios, es muchísimo más frecuente la constitución y funcionamiento de la Junta bajo fe notarial (cuando, hallándose juntos sus miembros, deciden por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados) que la constitución judicial. Esta constatación lleva a establecer (artículos 172 y 173) unas reglas de composición que puedan aplicarse automáticamente cuando los parientes llamados quieran actuar bajo fe notarial, sin privar por otra parte al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constitución judicial (o en los presumiblemente escasos supuestos en los que en documento público alguien haya configurado la Junta de Parientes como órgano permanente; por ejemplo, como órgano de control de una tutela) (artículo 175).

PREÁMBULO

El procedimiento para la toma de decisiones por parte de la Junta sigue siendo libre en todo caso (artículos 175.3 y 177). Es fundamental la regla de unanimidad (artículos 174 y 175.3), completada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a la reunión, deliberación conjunta y decisión conforme al leal saber y entender de los vocales (artículos 176 y 177).

Se aclara que la decisión de la Junta, ya sea positiva o negativa, impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión (en particular, al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria) (artículo 178.2) y se precisan los casos en los que el transcurso de un mes sin haber obtenido acuerdo permite acudir a otra vía (artículo 181). Además, se incluyen algunas normas, que la doctrina echaba en falta, sobre validez y eficacia de las decisiones de la Junta (que se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez) (artículo 178), así como sobre causas de invalidez y cauce procesal para instar la correspondiente declaración (artículo 180).

IV

LIBRO SEGUNDO **DERECHO DE LA FAMILIA**

15

Contenido y estructura

Los cinco primeros Títulos del Libro Segundo están referidos a la familia matrimonial y proceden de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, que desarrolla y pone al día la regulación de las relaciones patrimoniales en la familia matrimonial, incluida la institución de la viudedad. La mayor parte de las normas de Derecho de familia de la Compilación, basadas en la experiencia histórica de siglos, quedan incorporadas a la nueva regulación que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir al Código civil para darles respuesta. El

Código civil, como Derecho general del Estado, sigue siendo supletorio del Derecho civil de Aragón, pero la nueva regulación tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en que el hipotético recurso al Código civil era más claramente perturbador, así como de construir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a los enunciados de aquel, de acuerdo con el artículo 1 del presente Código del Derecho Foral.

En el Título VI y último, rubricado «De las parejas estables no casadas», se refunde el articulado procedente de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

16

Efectos generales del matrimonio

El Libro Segundo se abre con un Título Primero dedicado a los efectos generales del matrimonio, que arranca de la comunidad de vida que el matrimonio constituye, enlazando así con las determinaciones legales sobre el matrimonio contenidas en el Código civil, dentro del ámbito de la competencia exclusiva que al Estado reserva el artículo 149.1.8.º de la Constitución en materia de «relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio».

Una parte de estas disposiciones generales se encontraban, sustancialmente, en la Compilación, en las normas sobre el régimen legal, y, por tanto, con vocación de aplicarse en todos los casos, o en diversos lugares de la misma, mientras que algunas otras proceden del Derecho supletorio. Al situarlas en el frontispicio del Libro Segundo, se subraya el valor informador de principios tales como la libertad de regulación y la atribución del gobierno de la familia a ambos cónyuges, que toman juntos las decisiones sobre la economía del hogar y se proporcionan uno a otro la información adecuada. Además, se precisan los criterios con que debe atenderse a la satisfacción de las necesidades familiares, incluyendo el deber que los hijos tienen de contribuir equitativamente a ellas en el hogar en que conviven, se establece la responsabilidad frente a terceros por las obligaciones contraídas para la satisfacción de las mismas y se enfatiza el respeto a los derechos de terceros. Reunir en un

mismo título todas estas normas contribuye a dibujar los rasgos que el legislador considera fundamentales en toda comunidad de vida matrimonial y permite señalar expresamente el carácter imperativo de algunos preceptos básicos.

Respecto de la vivienda familiar, la norma atiende a aspectos no regulados en la Compilación, como la extinción del derecho de viudedad, proporcionando una regulación completa tan sencilla como permite la complejidad del importante supuesto que regula, sin olvidar la situación de los terceros adquirentes de buena fe.

El artículo 192 señala que la celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con independencia del régimen económico de su matrimonio y como efecto de la celebración de este en todo caso. Este criterio, acorde con el Derecho tradicional y vivido así en nuestros días, armoniza con la declaración contenida en el artículo 271, según el cual el derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen matrimonial, y con la referencia que hace el artículo 205 a la conservación del derecho de viudedad también cuando resulta aplicable el régimen de separación, único caso en el que podría suscitarse alguna duda y en el que, naturalmente, cabe la renuncia a la viudedad si los cónyuges así lo desean.

Es una novedad de la nueva regulación la colaboración requerida en el artículo 193 a quienes, por su cargo o profesión, intervienen en un expediente matrimonial. Como es sabido, el grave problema que para los derechos de los cónyuges y la seguridad jurídica de quienes con ellos se relacionan supone la indeterminación o ignorancia del régimen matrimonial aplicable a aquellos en razón de su distinta vecindad civil o de otras vicisitudes, ha sido señalado reiteradamente desde hace decenios, sin que se vislumbre una solución legislativa próxima. El artículo 193 supone una aportación modesta que, si encuentra eco en la práctica, podrá servir para mitigar unos inconvenientes a los que solo el legislador estatal puede hacer frente de manera directa y en su integridad.

17

Los capítulos matrimoniales

Los capítulos matrimoniales son el instrumento en que, tradicionalmente, los particulares vierten sus pactos y determinaciones en orden a regular el régimen económico del matrimonio, hacer aportaciones en atención al mismo e incluso atender con efectos jurídicos a las más variadas incumbencias relativas a los derechos de los cónyuges y sus parientes, en vida o para después de la muerte de alguno de ellos que pacta sobre su sucesión.

La nueva regulación acoge esta libertad de contenido sin otros límites que los genéricos del principio *standum est chartae*, que la historia ha emparejado señaladamente con las capitulaciones matrimoniales. Los capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de sus estipulaciones a condición o término, incluso con efecto retroactivo, en la forma más amplia.

Dado que, en ejercicio de esta libertad de capitular, instituciones como la dote o la firma de dote hace tiempo que han caído en desuso, la nueva regulación no contiene para ellas previsiones específicas, sino que las menciona junto a las demás instituciones familiares consuetudinarias, regidas por el pacto e interpretadas conforme a la costumbre y los usos locales.

Las reglas sobre capacidad sientan criterios propios, fundados en la edad aragonesa de los catorce años, que aclaran dudas y resuelven contradicciones. Junto con las que atienden a la modificación de las estipulaciones capitulares, inspiradas en la doctrina mejor fundada, forman con el resto de los artículos de este título una regulación autosuficiente.

18

El régimen económico matrimonial de separación de bienes

Del mismo modo, las previsiones legales sobre el régimen de separación de bienes, contenido del Título III, se bastan a sí mismas, cerrando el paso a la aplicación supletoria del Código civil. Si el régimen de separación de determinados cónyuges, acordado por ellos o consecuente a todo caso de disolución o

exclusión del consorcio conyugal legal, no prevé determinadas consecuencias mediante pactos ni pueden deducirse de los mismos, no habrán de producirse otras que las señaladas en este Título y, en último término, las que puedan derivar mediante la aplicación analógica, en lo que proceda, de las normas del consorcio conyugal.

19

El consorcio conyugal

La regulación que del régimen matrimonial legal hizo la Compilación de 1967 era, en aquella fecha, tanto por su sustancia como por su factura técnica, la más acabada de las vigentes en España. Siguió siéndolo tras la reforma del Código civil en 1981, que en algún punto se inspiró en las normas aragonesas.

La nueva normativa pretende, en esta materia, completar y perfeccionar aquella regulación, atender a algunos problemas surgidos al aplicarla, prever supuestos nuevos que ha traído el paso del tiempo y, en general, desarrollar conforme a sus propios principios consecuencias más explícitas, lo que lleva, especialmente en materia de disolución, liquidación y división, a una exposición más pormenorizada.

El régimen matrimonial aragonés de comunidad carecía de nombre propio con que designarlo y diferenciarlo. La nueva regulación opta por el de «consorcio conyugal», siguiendo una práctica bastante extendida, que denomina asimismo «consorciales» a los bienes comunes. De esta manera, se pone de relieve la especificidad de este régimen matrimonial, que tiene sus propias raíces en los fueros más antiguos y una configuración doctrinal, judicial y legislativa que le dota de un perfil propio entre los regímenes de comunidad limitada, como los de gananciales, que surgieron y se mantienen, puestos al día, en tantos países europeos.

Rasgo definitorio y clave para entender y aplicar este régimen es el papel predominante que en el mismo tiene la voluntad de los particulares, de manera que más puede considerarse subsidiario de ella que propiamente legal. El Derecho aragonés nunca consideró fundados los temores de otros legisladores

desconfiados, que prohibieron las donaciones y contratos entre cónyuges y que solamente les permitieron capitular antes de celebrar su matrimonio. Los aragoneses han configurado en cada caso el contenido del patrimonio común y los privativos con total libertad, obligándose también entre sí y reconociéndose derechos actuales o futuros según su propio criterio.

Una manera de configurar libremente el régimen de comunidad encontró cauce tradicional en las fórmulas de «llevar muebles por sitios», o la inversa, que la Compilación recibió en su artículo 29. La nueva regulación recoge, en su artículo 215, el contenido principal de aquel, pero se ocupa además de indicar con claridad muchas de las consecuencias del principio general que el precepto encierra en otros lugares, como en la letra b) del apartado 2 del artículo 210 y en las letras a) y d) del artículo 211.

Ahora bien, la vieja y entrañable fórmula de «muebles por sitios o viceversa» deja de ser útil en su tenor literal en razón de una de las decisiones de política legislativa más aparentes, aunque probablemente de escasas consecuencias prácticas, que ha adoptado el legislador en 2003. Los muebles ya no son llamados, por el mero hecho de ser muebles, a ingresar en el patrimonio común. Ya la exposición de motivos que acompañó en 1967 a la Compilación advertía que el sistema de comunidad de muebles y ganancias, asentado en los fueros y observancias y que llegó íntegramente al Apéndice de 1925, «justificado en una época en que la importancia económica de los primeros era exigua y en que la identificación de los bienes casi solo era posible tratándose de inmuebles, tiene difícil defensa en nuestros días». La Compilación no dio el paso definitivo —que acababa de acometer el Derecho francés, muy cercano en esto al aragonés histórico— de suprimir la regla que hacía comunes los bienes muebles, pues cabía temer que, reducida la comunidad básicamente a las ganancias, se encontrara fuera de Aragón motivo para considerar el régimen aragonés como una variante de escasa importancia respecto del de gananciales del Código, con el peligro de supresión de las normas aragonesas. Siguió entonces un camino indirecto, apoyado hábilmente en la fórmula de «muebles por sitios», para considerar aportados o adquiridos como sitios los bienes muebles enumerados en

el artículo 39, que son prácticamente todos los que pueden identificarse y tienen algún valor, incluido el dinero. «Con esta ficción (explicaba aquella exposición de motivos) se empalmará la nueva norma con la tradicional, sin menoscabo del propósito legislativo».

Asumida por la Comunidad Autónoma la competencia legislativa exclusiva sobre nuestro Derecho civil, es claro que han desaparecido los motivos que llevaron a aquella ficción. Hoy, el propósito de excluir la inadecuada regla sobre los muebles puede y debe realizarse de manera directa. Con ello, el sistema adquiere mayor claridad, sin que, por otra parte, las consecuencias sean muy distintas de las que la Compilación previó con su rodeo.

20

Bienes comunes y privativos

En el capítulo dedicado a determinar qué bienes sean comunes y cuáles privativos, se mantienen, salvo lo dicho sobre los muebles, los criterios ya bien asentados en la Compilación, subrayando la libertad de los cónyuges de atribuir en todo momento carácter consorcial o privativo a los bienes que deseen y añadiendo reglas para casos muy variados que hasta la aprobación de la nueva regulación tenían solución poco segura. Se atiende así a las adquisiciones a título oneroso con precio aplazado, a las indemnizaciones por despido, a las cantidades devengadas por pensiones, a las participaciones en fondos de inversión y productos financieros similares, a los derechos del arrendatario o a la adquisición de acciones o participaciones de sociedades, determinando su carácter consorcial en las condiciones en cada caso consideradas, en atención a la fuerte caracterización comunitaria que tiene el consorcio aragonés. La seguridad que proporciona el pronunciamiento directo por parte del legislador parece ventajosa, incluso en algún supuesto en que la opinión doctrinal contraria sería también defendible en ausencia de ley.

Correlativamente, puede decirse que los bienes adquiridos durante el matrimonio, distintos de los que tengan carácter personal, solo son privativos —salvo voluntad distinta de los

cónyuges— cuando se adquieren a título lucrativo y en determinados supuestos en que la adquisición está relacionada de algún modo con el patrimonio privativo. Entre estos supuestos, merece destacarse el de la compra celebrada antes del matrimonio por precio aplazado, caso en que el bien, cualquiera que sea su clase y destino, es siempre privativo, salvo que la totalidad del precio se pague durante el matrimonio con fondos comunes.

Se mantiene, naturalmente, la categoría de los bienes patrimoniales de carácter personal, introducida por la Compilación y luego adoptada por otros legisladores. En la nueva regulación se precisan con mayor detalle los bienes y derechos que entran en esta categoría, distinguiendo, cuando procede, entre la titularidad de los bienes y sus posibles rendimientos y señalando algunas consecuencias de los seguros sobre la vida.

Al objeto de hacer posible en la práctica una verdadera subrogación de bienes en el patrimonio privativo mediante utilización de dinero de aquella procedencia, se ha introducido una «presunción de privatividad» que, en los términos bastante estrictos en que está formulada, permite la subrogación sin necesidad de que intervenga el cónyuge del adquirente. Ahora bien, no se desconoce que esta intervención, bajo forma de reconocimiento de privatividad, seguirá utilizándose en muchos casos en que no pueda operar aquella presunción o se prefiera no acudir a ella, por lo que se regula asimismo este reconocimiento de privatividad tanto en la manera de producirse como en sus consecuencias.

Tanto la presunción como el reconocimiento de privatividad se presentan, de acuerdo con su naturaleza, como fenómenos diferentes de los verdaderos pactos por los que los cónyuges atribuyen a bienes privativos el carácter de comunes o, a estos, la condición de privativos o asignan, en el momento de su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido.

El capítulo se cierra con una precisión sobre bienes de origen familiar y con la formulación de la presunción de comunidad en términos sustancialmente idénticos a los que acuñó la Compilación, referida tanto a los bienes como a la procedencia de la contraprestación que, por su adquisición, se pagó.

21*Deudas comunes y privativas*

En materia de deudas comunes y privativas, ha sido preocupación principal del legislador autonómico hacer más explícito y desarrollar el excelente esquema conceptual que sustenta esta materia en la Compilación.

El artículo 218, que enumera las deudas que constituyen el pasivo definitivo del consorcio, carece de significación para los terceros salvo a través de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 219. Es en este artículo 219 donde se relacionan las deudas que, aun contraídas por uno solo de los cónyuges, comprometen frente a terceros el patrimonio común. Como puede verse, respecto de terceros de buena fe, se amplía considerablemente la responsabilidad patrimonial del deudor cuando está casado en régimen de consorcio, pues pueden cobrarse, en definitiva, sobre bienes que solo en parte corresponden a su deudor la mayor parte de las deudas contraídas ordinariamente por las personas casadas, aun aquellas que en la relación interna son privativas de acuerdo con los artículos 218 y 223. Bien es verdad que, sin esta ampliación de responsabilidad, los acreedores no les concederían crédito de buen grado, pues no podrían embargar simplemente la cuota del deudor en el consorcio.

También a favor de los terceros acreedores, se hace responder solidariamente a ambos cónyuges, una vez agotados los bienes comunes, por las deudas contraídas por uno solo de ellos para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 218. Para evitar esta responsabilidad solidaria del otro cónyuge con bienes privativos, así como su deber de contribución en la relación interna indicado en el artículo 221, se han situado en la letra d) del apartado 1 del artículo 218 los gastos de crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges que no convivan con el matrimonio. Estos gastos son también a cargo definitivamente del patrimonio común, sin la excepción que la Compilación estableció respecto de los hijos adulterinos, de cuya constitucionalidad cabe dudar.

Deudas privativas, en la relación interna, son todas las que no pueden encuadrarse en la enumeración de deudas comunes

del artículo 218 y, en particular, las anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones. Pero, para los terceros, solo tienen el tratamiento de privativas las distintas de las enunciadas en el artículo 219. Es un ámbito notablemente reducido, en que no se aprecia razón alguna para favorecer los intereses de los acreedores en perjuicio de los del cónyuge no deudor. La Compilación, en las huellas de una tradición histórica que dejaba a salvo la parte correspondiente a la mujer cuando las deudas de su marido habían sido contraídas «en su propio provecho, con ocasión de vicios, afianzando a favor de otros o con propósito conocido de perjudicar a aquella», previó en su artículo 46 un mecanismo por el que había de quedar siempre a salvo el valor que en el patrimonio común corresponde al cónyuge no deudor. Son conocidas las dificultades procesales que obstaculizaron la adecuada aplicación de este precepto, tanto antes como después de la reforma del Código civil de 1981. Es de creer que el cauce que la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 ha previsto para la ejecución en bienes gananciales resulte suficiente y expedito. Por ello, la nueva regulación se remite al mismo en su artículo 225, con las necesarias adaptaciones sustantivas, entre las que destaca la posibilidad de dejar a salvo el valor que en el patrimonio común corresponda al cónyuge no deudor sin necesidad de disolución del consorcio, salvo que opte por ella, pero siempre mediante liquidación del mismo a los efectos de constatar el valor que ha de quedar a salvo.

22

Gestión del consorcio

La gestión del consorcio es abordada en el Capítulo III del Título IV en su sentido más amplio, como ya hiciera la Compilación, abarcando las decisiones sobre administración y disposición de todos los bienes de los cónyuges, así como las que llevan a su endeudamiento. Por ello, la sección primera se ocupa «de la economía familiar» en general, estableciendo el principio según el cual las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges y desarrollando algunas de sus consecuencias sobre atención al interés de la familia, diligencia debida y deber de información.

PREÁMBULO

En un solo artículo se regula la gestión de los bienes privativos, que corresponde a cada cónyuge. La gestión de los bienes comunes recibe, por el contrario, un desarrollo mucho más amplio, acorde con la frecuencia y dificultad de los problemas que plantea una gestión que compete exclusivamente a dos personas, consideradas absolutamente en pie de igualdad, de modo que tampoco puede decirse que una de ellas gestiona mientras la otra se limita a vigilar en salvaguarda de sus intereses, sino que ambas tienen los mismos poderes y los mismos límites. Al no estar ninguna de ellas en posición de superioridad, tampoco lo están en situación de ser especialmente protegidas.

Junto al principio de igualdad, el de libertad. Los cónyuges pueden pactar sobre la gestión del patrimonio común sin otros límites que los genéricos del *standum est chartae*: la Constitución y las normas imperativas del Derecho aragonés. El principio de igualdad se realiza tanto a través de la gestión conjunta como de la gestión indistinta de cualquiera de los cónyuges. Prolongando líneas ya nítidamente trazadas en la Compilación, se enumeran actos que cualquiera de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo, incluidos, como novedad, los de disposición sobre los bienes comunes cuando sean necesarios para satisfacer las necesidades familiares, con ciertas cautelas.

Se mantiene la legitimación para realizar los actos de administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de la profesión o negocio de cada cónyuge, acompañada en la nueva regulación de un cauce que facilita la prueba en el tráfico. Asimismo, se mantiene y amplía a cualesquiera bienes muebles, la legitimación de cada cónyuge, frente a terceros de buena fe, respecto de los que figuran a su nombre, exclusiva o indistintamente, o se encuentran en su poder.

Con estas previsiones legales, se propicia la deseable libertad con que cada cónyuge ha de poder presentarse ante los terceros, haciendo innecesarias y, por tanto, inoportunas las averiguaciones de estos sobre el estado civil y régimen matrimonial de la persona con la que contratan. El límite es el fraude a los derechos del otro cónyuge, sancionado en el artículo 236.

En todos los casos en que la ley, no atribuye una legitimación para actuar por sí solo, la regla respecto de los actos de

administración extraordinaria o de disposición de bienes comunes es la actuación conjunta de ambos cónyuges, a la que se asimila la de uno de ellos con el consentimiento del otro. Solo en el caso de que un cónyuge se halle impedido por cualquier causa para prestar su consentimiento, podrá el otro acudir al juez solicitando su actuación, de manera que, sin el consentimiento de un cónyuge que se encuentra en situación de prestarlo, no cabe enajenar el bien. Los desacuerdos graves o reiterados en esta materia son considerados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, con las posibles consecuencias señaladas en el artículo 228.

Son conocidas las dudas sobre la aplicación al consorcio conyugal aragonés de las reglas que en el Código civil señalan la anulabilidad como forma de invalidez de los actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales realizados por un cónyuge sin el necesario consentimiento del otro. Son también numerosas y fundadas las críticas a los preceptos del Código por parte de sus propios comentaristas, preceptos, por otra parte, que responden a una tradición jurisprudencial y doctrinal que no hay razones para adoptar en Aragón. En consecuencia, la nueva regulación aborda el problema de la venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos con criterios nuevos, inspirados en un análisis jurídico más depurado y que atienden mejor al complejo conflicto de intereses entre tres partes que estos casos suponen. En particular, trata de evitarse la fácil y frecuente presunción judicial de que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió ha consentido, por el mero hecho de que no se ha opuesto a la venta antes de interponer su demanda. Partiendo de la validez del contrato — título— y de que la propiedad no se transmite al entregar la cosa uno solo de sus dueños, se señala la inoponibilidad del contrato al cónyuge que no consintió, así como las acciones que este puede ejercitar, al tiempo que se muestra también el cauce para la defensa de los intereses del comprador a través de las acciones nacidas de la compraventa contra su vendedor incumplidor.

Se prevén asimismo algunas situaciones especiales, en que la gestión conjunta por ambos cónyuges no resulta posible. De manera automática, todas las facultades se concentran en un cónyuge —con necesidad de autorización judicial para ciertos

actos— cuando el otro haya sido incapacitado o declarado ausente. También podrá el Juez, con las cautelas que en cada caso parezcan convenientes, atribuir la gestión a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encuentre imposibilitado de hecho para la gestión del patrimonio común. Por último, cabe que el Juez, a petición de un cónyuge, prive al otro total o parcialmente de sus facultades de gestión, cuando por sus actos haya puesto repetidamente en peligro la economía familiar.

Las previsiones del artículo 238 sobre disposiciones por causa de muerte relativas a la participación en el patrimonio común, a bienes determinados del patrimonio común o a los derechos que sobre un bien determinado corresponden al disponente, suponen una novedad, al menos formal, introducida en el Derecho aragonés en la nueva regulación. Inspiradas en opiniones doctrinales solventes y en sugerencias de los profesionales del Derecho, tienden a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes que, en un régimen como el aragonés, no parecería razonable impedir solamente por razones derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del consorcio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente poderosas. Es de notar que las mismas reglas, de acuerdo con el artículo 255, se aplican a las disposiciones por causa de muerte ya disuelto el consorcio pero todavía no dividida la masa común.

23

Disolución, liquidación y división del consorcio

Las normas sobre disolución, liquidación y división del consorcio ocupan veintisiete artículos, multiplicando por más de cuatro su número en la Compilación. Las razones son varias: se ha pretendido enumerar exhaustivamente las causas de disolución, evitando remisiones inciertas; asimismo, se detallan en lo necesario todas las fases e incidencias que pueden ocurrir, desde la disolución a la atribución de bienes a cada partícipe mediante la división, buscando un texto autosuficiente para cuya aplicación no sea necesario recurrir más que, en su caso, a la Ley de enjuiciamiento civil.

Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho de la Compilación en buen número de artículos, como la

posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos de la disolución hasta el inicio de los procedimientos de nulidad, separación o divorcio (247), o las consecuencias de la disolución por nulidad del matrimonio (249). En la liquidación ordinaria (265) se aclaran algunas operaciones de compensación, reembolsos y reintegros. Las ventajas que consisten en bienes de uso personal o profesional no quedan reducidas al caso de disolución por muerte (266), lo mismo que el derecho a que un cónyuge haga incluir en su lote determinados bienes comunes que guardan especial relación con su persona, que puede ejercitarse también en los demás supuestos de disolución, hoy más frecuentes que en 1967. La posibilidad de incluir en su lote la vivienda habitual, por evidentes razones, se reconoce solo para el caso de muerte del otro cónyuge.

En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y a la situación de los acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo universal del viudo, que pocas veces dejará de darse, y la figura del fiduciario, sea o no el viudo, de tan frecuente presencia, dando solución de forma que ha parecido a la vez sencilla y prudente a dudas surgidas en la práctica.

En los artículos 250 a 257 se regula «la comunidad que continúa tras la disolución». Allí se incluyen, con pequeñas modificaciones, las normas contenidas en el artículo 53 de la Compilación, que recogen en lo esencial la llamada comunidad conyugal continuada tal como se conoció en el Derecho de los Fueros y Observancias. No ha parecido conveniente, por el contrario, trasladar a la nueva regulación los preceptos que en 1967 construyó la Compilación (artículos 60 a 67) con la intención de proporcionar a las pequeñas empresas familiares un cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento del empresario sin más cambio estructural que la sustitución del difunto por sus herederos y la atribución de la dirección, en todo caso, al cónyuge viudo. Las grandes transformaciones operadas desde entonces en el entorno económico y legal de las actividades económicas, así como las exigencias administrativas que condicionan la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado fuera de uso, o acaso solo para supuestos marginales que no es prudente propiciar, unas normas sin duda bienintencionadas y, entonces, innovadoras, pero

que no han dado los frutos que cabía desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.

24

La viudedad

El Título V, dedicado a la viudedad, comienza exactamente como lo hacía el título correspondiente de la Compilación: «La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca». En esta frase se expresa la esencia del derecho de viudedad aragonés y sus rasgos definatorios tal como lo conocemos desde su origen histórico en la época de los Fueros. El derecho de viudedad se adquiere con la celebración del matrimonio, de manera que durante el mismo se mantiene «expectante», según el tecnicismo consagrado hace más de un siglo para denotar una situación jurídica aludida y configurada por la doctrina de los foristas desde al menos el siglo XIV.

El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho expectante, es coherente con una concepción igualitaria y participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos cónyuges comparten todas las decisiones económicas que tienen incidencia sobre la familia, en particular las más importantes y, por tanto, las relativas a la enajenación de bienes inmuebles de uno de ellos sobre los que el otro está llamado a tener usufructo. Esta forma de entender la comunidad de vida matrimonial corresponde verosimilmente a las ideas, creencias y vivencias de la mayor parte de los aragoneses y aragonesas de hoy, que entienden asimismo el usufructo viudal más como posición personal del viudo en cuanto continuador de la familia que como un beneficio puramente económico en su exclusivo interés. Mientras se mantengan arraigadas en la sociedad estas concepciones sobre el matrimonio y la familia, el legislador cumplirá óptimamente su función manteniendo la configuración secular del derecho de viudedad, de acuerdo con la cual ambos cónyuges concurren normalmente a la enajenación de los inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho.

La Compilación extendió el usufructo de viudedad hasta hacerlo universal, interpretando correctamente los deseos de

los aragoneses. Pero el cambio respecto de la situación anterior, en que la viudedad legal estaba limitada a los inmuebles, introducido cuando ya aquella Ley se encontraba en estado avanzado de elaboración, dejó algunas costuras mal asentadas en las relaciones entre la fase de derecho expectante y la de usufructo. En consecuencia, en la nueva regulación se han reformulado con cuidado todos los preceptos con la finalidad de presentar con la mayor claridad y coherencia el armazón conceptual, a la vez que se atiende a aspectos concretos que habían presentado dudas o dificultades en la práctica. De estos problemas, los profesionales del Derecho se habían hecho eco especialmente de los relativos a las vicisitudes del derecho de viudedad en su fase expectante, por su presencia continuamente reiterada en el tráfico jurídico sobre inmuebles. Contribuir a la seguridad jurídica y limitar eventuales abusos es asimismo el objetivo de varios preceptos de este Título.

25

Disposiciones generales

El Capítulo primero plasma los criterios fundamentales a que se acaba de aludir, aclarando y desarrollando preceptos de la Compilación, pero también contiene algunas novedades.

El derecho de viudedad, inalienable e inembargable, puede renunciarse. La práctica ha introducido renunciaciones al derecho de viudedad limitadas al derecho expectante, con la finalidad de que el cónyuge propietario de los inmuebles pueda disponer de ellos sin trabas, pero conservando el renunciante el usufructo sobre todos aquellos que aquel no haya enajenado. Es una finalidad razonable que se expresa de maneras diversas en los documentos notariales, lo que puede dar lugar en algunos casos a dudas en la interpretación, para cuya solución hay que partir de que la Compilación entendía que la renuncia al derecho expectante, como las demás causas de extinción del mismo, comprendía, naturalmente, la extinción del derecho de viudedad en su conjunto. Por el contrario, la nueva regulación adopta otro punto de vista, abordando por separado la extinción del derecho de viudedad en su conjunto (artículo 276) y la extinción del derecho expectante sobre determinados bienes

inmuebles (artículos 280 y 281) o muebles (artículo 282) y, del mismo modo, distinguiendo la renuncia al derecho de viudedad sobre todos los bienes o parte de ellos (artículo 274, apartado 1) de la renuncia solamente al derecho expectante, igualmente sobre todos o parte de los bienes del otro (artículo 274, apartado 2), sin merma en este último caso del usufructo sobre todos los bienes que, al fallecer el otro cónyuge, le pertenezcan.

Es nueva la posibilidad que el artículo 275 admite de que un cónyuge prive de la viudedad al otro cuando incurra en alguna de las causas que, cuando se trata de legitimarios, pueden fundar la desheredación. La Compilación ya dio entrada, como causas de extinción de la viudedad, a las de indignidad para suceder. En ambos supuestos, ante conductas tan censurables por parte de un cónyuge, su goce del derecho de viudedad sin que hubiera medios hábiles para evitarlo podría considerarse contrario al fundamento mismo de la institución.

La separación judicial, el divorcio o la declaración de nulidad son causa de extinción en todo caso, con la posibilidad de pacto en contrario mientras el matrimonio subsista. Además, el artículo 276 considera que la extinción se produce ya por la mera admisión a trámite de la correspondiente demanda, interpuesta por uno o ambos cónyuges, fórmula que se ha adoptado para armonizar lo dispuesto en los artículos 253, 404, 438, 440 y 531 para supuestos que pueden considerarse semejantes.

La nueva regulación ha suprimido la limitación que en la extensión del derecho de viudedad mantenía la Compilación en su artículo 73 para el caso de matrimonio de persona que tuviera descendencia conocida con anterioridad, procedente, con otra redacción y alcance, de la Ley de 1967. Ha llevado a esta conclusión la dificultad de identificar el fundamento y finalidad de la norma, junto con lo arduo de encontrar una regulación coherente con la misma que evitara los graves problemas que su aplicación ofrecía. Se prevé, con todo, la posibilidad de que un cónyuge, por su sola voluntad, excluya del usufructo viudal del otro bienes de la herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que su valor no exceda de la mitad del caudal hereditario (artículo 283.3).

Se mantiene, por el contrario, la regla que veta a los ascendientes prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a este por donación o sucesión. Es una regla a favor de la viudedad, dirigida a impedir que la posición del viudo sea alterada en su perjuicio por la mera voluntad de los ascendientes de su cónyuge. En la nueva regulación la regla se pone directamente en contacto con la que recibe el contenido del artículo 77 de la Compilación, de manera que resulte más claro su alcance y los casos que comprende.

Por último, se reitera en su sede más propia la norma que considera sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del artículo 354, y se aclara que, en situación de consorcio foral, están sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido los bienes que los demás consortes adquieren por el acrecimiento regulado en el art. 374-3.

26

El derecho de viudedad durante el matrimonio

El derecho de viudedad se manifiesta durante el matrimonio como derecho expectante que tiene como objeto tanto los bienes muebles como los inmuebles, si bien no de la misma manera. Cuando un bien mueble sale del patrimonio común o del privativo se extingue el derecho expectante sobre el mismo, salvo que se haya enajenado en fraude del derecho de viudedad (artículo 282), mientras que el mismo derecho sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue o menoscaba por su enajenación.

La nueva regulación enumera, sin embargo, diversos supuestos en los que el derecho expectante de viudedad se extingue con la enajenación del inmueble, tratando con ello de introducir mayor claridad y también mayor seguridad en el tráfico, en atención a los intereses de los adquirentes que, conviene recordar, en su mayor parte conocen perfectamente la existencia y consecuencias de una institución central en la vida jurídica privada aragonesa.

PREÁMBULO

La renuncia ha de ser expresa y, en principio, solo vale si es expresada en escritura pública. Pero se admite ahora su validez sin tal forma siempre que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.

La renuncia no se presume nunca. Los demás supuestos de extinción se configuran como consecuencia directa del acto de enajenación por mandato legal. Algunos podían acaso inferirse por interpretación de las normas de la Compilación, pero otros son claramente una novedad introducida por la nueva regulación. Se extingue el derecho expectante siempre que se enajena válidamente un bien consorcial (también, por tanto, en los casos en que la enajenación es válida aunque solo haya dispuesto uno de los cónyuges) o su titular enajena bienes privativos incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Si concurren ambos cónyuges a una enajenación, cualquiera que sea el concepto en que uno y otro concurren, se extingue para ambos el derecho expectante, salvo reserva expresa. En la partición o división de bienes se extingue el derecho expectante respecto de los que no se adjudiquen al cónyuge, de manera que no será necesaria la concurrencia de los cónyuges de los comuneros o coherederos en la partición. También la expropiación y procedimientos equivalentes extinguen el derecho expectante. Igualmente se extingue en la enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.

Se mantiene la regla, procedente de la reforma de 1985, según la cual el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante, aclarando el art. 280.3 algunos extremos y prescindiendo de la referencia al abuso del derecho: el Juez, atendidas todas las circunstancias, declarará la extinción cuando crea que así procede en razón de las necesidades o intereses familiares.

Novedad introducida en la nueva regulación es la regla del apartado 4 del artículo 280, pensada para supuestos extraordinarios en que resulta muy difícil la comunicación y trato entre los cónyuges, especialmente si uno de ellos rehúye cualquier respuesta. Podría ser, por ejemplo, el caso entre cónyuges que viven separados por sentencia judicial anterior a la entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Compilación operada

en 1985 y que, por tanto, conservan el derecho de viudedad. Mediante la notificación de la enajenación en los términos que el precepto precisa se impone, ciertamente, al cónyuge la carga de pronunciarse expresamente y hacer llegar al Registro de la Propiedad su voluntad de conservar el derecho expectante, que de otro modo se extinguirá. Es de esperar que este mecanismo pueda aliviar, al menos, casos extremos que la práctica conoce, sin enturbiar el funcionamiento normal del derecho de viudedad durante el matrimonio en los casos más regulares y frecuentes.

La Compilación, en uno de sus escasos desaciertos, dejó en la incertidumbre la suerte del derecho expectante de viudedad cuando los bienes inmuebles se enajenan judicialmente para pago de deudas privativas de un cónyuge. El artículo 281 sigue un criterio tradicional al respecto, adaptándolo al contexto legislativo actual y de manera que entorpezca lo menos posible las ejecuciones judiciales.

27

El usufructo viudal

El usufructo viudal no es simplemente un derecho de goce en cosa ajena, como puede ser el usufructo regulado en el Código civil. Su carácter de derecho de familia, a la vez que su extensión como universal, que afecta a una masa patrimonial en su conjunto, requiere normas distintas. La nueva regulación incorpora las ya contenidas en la Compilación, con algunas variantes y concreciones (por ejemplo, sobre inventario y fianza), e incluye asimismo otras nuevas, sin por ello pretender hacer innecesaria la aplicación del Derecho supletorio.

La preocupación por la adecuada gestión de los bienes se muestra en las nuevas normas sobre gastos, mejoras, reparaciones, tributos y seguros, pero también en la previsión específica respecto de las empresas y explotaciones económicas, que posibilita, por voluntad del premuerto titular de las mismas, que su gestión incumba a sus hijos o descendientes, con sustitución del usufructo por una renta a favor del viudo. Se mantiene la norma que permite a los nudo propietarios acudir al Juez cuando entienden que el viudo no administra adecuadamente,

pero se simplifican y amplían las posibilidades de resolución por el Juez, que puede optar por la transformación del usufructo. Se favorece, sin embargo, una solución pactada para los casos en que el ejercicio ordinario del derecho de usufructo resulte poco deseable para las partes, pues se permite, en todos los casos, a los nudo propietarios y al viudo usufructuario pactar la transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno, siguiendo el camino tímidamente iniciado por la Compilación en el apartado 1 de su artículo 83. Ciertamente, en estos casos se pondrá de manifiesto que el viudo no cumple su función tradicional de continuador de la familia, pero, aun así, parece prudente no cerrar el camino a una solución paccionada de conflictos que en la práctica se presentan con cierta frecuencia.

Se corrobora que el usufructo de viudedad sobre los bienes afectos al mismo es inalienable y, por tanto, inembargable. En ningún caso un tercero puede adquirir derivativamente el usufructo de viudedad sobre un bien. Cabrá —como ya permitía la Compilación— la enajenación del bien concurriendo todos los que tienen derechos sobre el mismo (nudo propietarios y usufructuario), con la consiguiente extinción del usufructo como derecho real sobre el bien enajenado y la subrogación del precio recibido. El mismo principio se aplica a los embargos y enajenaciones judiciales. Naturalmente, nada obsta al embargo y enajenación de los frutos y rentas que corresponden al usufructuario —conservando el mismo el derecho de usufructo—, y esta será la vía ordinaria de embargo en razón de sus propias deudas.

Los artículos 299 y 300, sobre usufructo de dinero y usufructo de fondos de inversión, atienden a problemas que se plantean con gran frecuencia. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo, por lo que el viudo podrá, si quiere, disponer del capital, con obligación de restituir su valor actualizado. En cuanto a las participaciones en fondos de inversión acumulativos y otros productos financieros similares, parece que, de acuerdo con la intención corriente de quienes practican estas formas de ahorro e inversión, la plusvalía ha de ser tratada como si constituyera beneficio o renta y, por tanto, quedar a favor del viudo usufructuario. Para ello, se dan reglas de suficiente

amplitud con la intención de que puedan ser aplicables flexiblemente a unos productos que evolucionan con gran rapidez.

En la extinción del usufructo viudal la nueva regulación no introduce otra novedad de nota que la aclaración de la admisibilidad de la disposición en contrario respecto de la causa consistente en llevar el viudo vida marital estable.

28

Las parejas estables no casadas

El Título VI, dedicado a las parejas estables no casadas, está integrado por normas procedentes de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, para extender la facultad de adoptar a las parejas estables del mismo sexo, y modificada asimismo por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

Desde que en 1982, y auspiciado por el Consejo de Europa, se celebró el primer Congreso sobre parejas no casadas, son muchos los países de la Unión Europea que, de una forma u otra, han ido adaptando sus respectivas legislaciones a este fenómeno convivencial, tendiendo a equiparar, total o parcialmente, a estas parejas con los matrimonios.

Junto a la pareja estable heterosexual, otro fenómeno similar, aunque de naturaleza y consecuencias bien diferentes, el de la pareja homosexual en convivencia marital estable, ha dejado de ser también algo extraño y marginal. El principio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que tradicionalmente ha constituido la esencia y base del Derecho civil aragonés, obliga al legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a establecer la relación de convivencia afectiva más acorde con su propia sexualidad.

La consideración de pareja estable no casada requiere que los convivientes sean mayores de edad, tengan una relación de afectividad análoga a la conyugal (artículo 303), no medie entre ellos ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 306, y hayan convivido *more uxorio* durante un período ininterrumpido de dos años, como mínimo, o, alternativamente,

PREÁMBULO

hayan manifestado su voluntad de constituirla mediante escritura pública (artículo 305.1).

La concurrencia de estos requisitos puede ser acreditada mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho (artículo 305.2). La inscripción en el Registro administrativo solo es necesaria para que a la pareja estable no casada le sean aplicables las medidas administrativas que le correspondan.

El régimen de convivencia, en sus aspectos personales y patrimoniales, será el pactado en escritura pública que respete los límites del principio *standum est chartae* (artículo 307.1), sin que se pueda pactar la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición (artículo 307.2). En defecto de pacto, los miembros de la pareja contribuirán proporcionalmente al mantenimiento de la vivienda y demás gastos comunes, primero con sus recursos y, si no son suficientes, con su patrimonio (artículo 307.3); frente a terceros, la responsabilidad de los miembros de la pareja por estos gastos, si se adecuan a los usos sociales, es solidaria (artículo 307.4). El artículo 308 procede de la disposición adicional primera de la Ley de 1999.

La extinción se regula en el artículo 309; para la extinción en vida sin hijos comunes a cargo se contempla en el artículo 310 la posibilidad de exigir una compensación económica cuando se den los presupuestos y requisitos en él previstos; en el artículo 311 se regulan los derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes. Las parejas estables no casadas pueden adoptar conjuntamente (artículo 312), y sus miembros están obligados a prestarse entre sí alimentos (artículo 313), pero la pareja estable no casada no genera relación de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro (artículo 314).

La posibilidad de un miembro de la pareja estable no casada de ser defensor del otro si ha desaparecido, o su representante legal si ha sido declarado ausente, o su tutor o curador si el otro ha sido declarado judicialmente incapacitado, ya ha sido prevista en sus sedes respectivas (artículos 46 y 116). No son necesarios tampoco artículos específicos para indicar la

posibilidad de los miembros de la pareja estable de otorgar pacto sucesorio o testamento mancomunado, ni para poder nombrar al otro fiduciario ya que todo ello lo permite el Derecho de sucesiones a toda persona mayor de edad, como por hipótesis son los miembros de una pareja estable no casada.

V

LIBRO TERCERO
DERECHO DE SUCESIONES
POR CAUSA DE MUERTE

29

Regulación parcial de las sucesiones por causa de muerte

El legislador no ha pretendido agotar o llegar al límite de la competencia autonómica en materia de Derecho de sucesiones por causa de muerte, sino regular lo que ha entendido necesario, oportuno y acorde a las circunstancias. Fundamentalmente para aclarar, desarrollar y profundizar el Derecho anterior, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, completadas sus normas con otras que perfilan su alcance, hacen más segura su aplicación o atienden a aspectos necesitados de nuevas previsiones. También, dotando al conjunto de un marco de normas generales en el que las concretas instituciones sucesorias encuentren su acomodo natural y armónico, contribuyendo así a que el Derecho civil de Aragón aparezca a los ojos de todos como el Derecho civil común y general en Aragón.

El Código civil seguirá siendo supletorio en materia de sucesiones por causa de muerte, pues la nueva regulación no trata de excluir su aplicación entre nosotros. En realidad, los juristas aragoneses se sintieron en el siglo XIX coautores del Código civil y ni entonces ni ahora mostraron rechazo al mismo o suscitó este su repulsa. Por ello, es grande el espacio que el legislador autonómico deja a las normas del Código civil, en concepto de Derecho supletorio de acuerdo con el artículo 1 de este Código. Ahora bien, la nueva regulación procura evitar, mediante la

inclusión de normas específicas, la injerencia de aquellos preceptos del Código civil que no armonizan con los principios del Derecho aragonés o dificultan la aplicación o desarrollo de sus instituciones propias.

30

Sistemática

El Libro Tercero está dividido en siete Títulos. El Primero y más extenso de ellos se dedica a «las sucesiones en general» y es el que en mayor medida recoge preceptos formalmente nuevos que tienen, entre otras, la función de proporcionar a los más tradicionales y esenciales el entorno normativo apropiado para su correcta interpretación, aplicación y eficacia conformadora de las relaciones sociales, a la vez que facilitan el engarce con el Derecho supletorio.

El orden de los Títulos II a VII sigue el de la preferencia de los modos de delación, empezando, por tanto, por la sucesión voluntaria. Parece lo coherente en un Derecho de sucesiones que proclama (artículo 318) que «el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión... sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio *standum est chartae*».

Dentro de la sucesión voluntaria, se trata en primer lugar de los pactos sucesorios, que prevalecen frente al testamento, para seguir con este y, luego, con la fiducia sucesoria, siempre sujeta a la voluntad manifestada en pacto o testamento. Tras unas normas comunes a las sucesiones voluntarias, se aborda la regulación de la legítima de los descendientes — límite principal de la libertad de disponer por causa de muerte— y, finalmente, la sucesión legal, para cuando no existen o son insuficientes las disposiciones voluntarias.

31

Las sucesiones en general

El artículo 317 enuncia que «la sucesión se defiende por pacto, por testamento o por disposición de la Ley». Los pactos sucesorios y la fiducia sucesoria, fenómenos tan propios de

nuestro Derecho, requieren una formulación igualmente propia de las normas generales, que en otros ordenamientos, como el del Código civil, tienen en cuenta únicamente al testamento como cauce instrumental de sucesión voluntaria, y solo al testamento unipersonal, con proscripción del mancomunado y de la intervención normal de un tercero en la ordenación de la propia sucesión; mientras que el testamento mancomunado y la fiducia sucesoria tienen un papel central en nuestra vida jurídica. También la existencia de la sucesión troncal tiene su necesario reflejo en el Título Primero.

En este Título Primero se encuentra, asimismo, regulación más pormenorizada de cuestiones que ya tenían alguna en la Compilación, como la capacidad para aceptar o repudiar, la sustitución legal, la responsabilidad del heredero o el consorcio foral.

En cuanto a la sustitución legal, son conocidos los problemas y diversidad de interpretaciones que suscitó el artículo 141 de la Compilación. Se ha optado por mantener para todos los supuestos la denominación que recibió esta figura en 1967 (por considerarla preferible a la de representación) y reunir todas las reglas en un capítulo, el III del Título I, no sin antes comprobar por separado el funcionamiento del mecanismo sustitutorio en la sucesión voluntaria, en la legal y respecto de la legítima. De este modo, se aporta claridad en la determinación de cada uno de los supuestos y sus consecuencias, a la vez que se subraya que la sustitución legal no tiene lugar nunca en caso de renuncia o repudiación de la herencia por el llamado. El cambio legislativo en esta concreta cuestión ha dado lugar a la disposición transitoria decimosexta, que se atiene a la regla general en su apartado uno, pero admite una excepción en el segundo para supuestos en que cabe entender que el efecto sustitutorio es consecuencia, no simplemente de la ley derogada, sino de la voluntad del causante y para no contradecirla.

La responsabilidad del heredero, incluido el troncal, por las deudas y cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, tradicionalmente calificada como «beneficio legal de inventario», se mantiene tal como venía operando, con algunas aclaraciones en aspectos prácticos y, en

particular, se señala la vía por la que el heredero podrá defender sus bienes frente a los acreedores del causante y se establecen las preferencias a favor de estos respecto de los legatarios y los acreedores del heredero. El pago de las deudas hereditarias por los herederos, tanto antes como después de la partición, y el tipo de responsabilidad que en cada caso les incumbe es otro de los temas que ahora reciben atención pormenorizada.

La colación, como operación particional, sigue descansando únicamente en la voluntad del disponente. No procede por ministerio de la ley, que se limita a aportar breves reglas para cuando, en efecto, la voluntad de los particulares haya ordenado su práctica sin indicar otras.

De la partición propiamente dicha, se regula con detalle la intervención de menores de catorce años o incapacitados, así como la de menores mayores de catorce años, dada la frecuencia de estas situaciones en la vida jurídica y la conveniencia de la mayor claridad y seguridad en el modo de operar en ellas. También se atiende a las prohibiciones de partir y los pactos de indivisión, limitándolos temporalmente, y a la partición practicada por el causante o su fiduciario.

El «consorcio foral», reintroducido en la Compilación de 1967 tras vencer algunas dudas, es mantenido en la nueva regulación en sus rasgos básicos, pero añadiendo precisiones inspiradas en las necesidades de la práctica tanto en la previsión de los hechos que lo originan como en la determinación de sus efectos. En particular, parece llamada a tener frecuente aplicación la permisión de separación de un consorte por el sencillo medio de declarar su voluntad en escritura pública, con lo que tendrían fácil solución algunas situaciones indeseadas puestas de relieve por algunos autores.

32

La sucesión paccionada

La Compilación diseñó una regulación de conjunto de la sucesión paccionada, construida sobre los ricos materiales de la experiencia histórica con la ayuda de aportaciones doctrinales inspiradas en otros ordenamientos que, como el aragonés,

los reconocen y respetan como expresión de la libertad civil de sus otorgantes. La nueva regulación incorpora en su Título II, en lo sustancial, aquella regulación, que ha servido incluso de referencia a otros legisladores, ampliando formalmente el ámbito de los pactos al no vincularlos en ningún caso al otorgamiento de capítulos matrimoniales, a la vez que la enriquece con nuevos desarrollos más pormenorizados.

Se distingue, en concreto, la institución a favor de contratante, que puede ser «de presente» o «para después de los días», la institución recíproca, el pacto a favor de tercero y los pactos de renuncia. A todas estas modalidades, pero sobre todo a las primeras, se dedican preceptos que hagan más clara la posición jurídica de unos y otros en las distintas fases de este complejo fenómeno sucesorio y las consecuencias de los diferentes eventos que pueden acaecer con posterioridad al otorgamiento.

33

La sucesión testamentaria

El Título III, «De la sucesión testamentaria», se abre con unas disposiciones generales condicionadas, en buena medida, por el reflejo que necesariamente proyecta sobre ellas la figura del testamento mancomunado. Sin atender a esta modalidad testamentaria, que es en la práctica con mucho la más común, no puede normarse convenientemente en nuestro Derecho ni la capacidad, ni las formas ni la interpretación de los testamentos. Merece señalarse el precepto que indica los requisitos de forma del testamento mancomunado ológrafo, exigiendo los que han parecido mínimos imprescindibles para posibilitar en la realidad el otorgamiento de estos testamentos, sin mengua de la seriedad y libertad de la voluntad de ambos testadores. Por lo demás, se han introducido previsiones sobre número y capacidad de los testigos testamentarios para cuando sea necesaria su intervención, manteniendo la regla de principio contraria a esta necesidad vigente desde 1985.

No ha parecido necesario mantener la figura del testamento ante capellán, a pesar de su indudable antigüedad histórica. En 1999 su utilidad era muy limitada, suscitaba algunos reparos en

el terreno de la seguridad jurídica y era muy difícil, cuando no imposible, cohesionarlo plenamente con el principio constitucional de no discriminación por razón de religión.

Los artículos específicamente dedicados al testamento mancomunado no son muchos, pero todos ellos contienen alguna novedad. La más aparente es la que admite el otorgamiento de estos testamentos por cualesquiera dos personas, «sean o no cónyuges o parientes», mientras la Compilación exigía la condición de cónyuges. Es una apertura que parece adecuada a la realidad presente a la vez que apoyada en la experiencia histórica, pues documentos de varios siglos muestran, aunque no con gran frecuencia, la práctica del testamento mancomunado también entre personas no casadas entre sí. La institución recíproca entre los otorgantes, por otro lado, y asimismo a diferencia de lo dispuesto en la Compilación, no producirá los efectos del «pacto al más viviente» salvo que así lo hayan establecido los testadores, según parece más conforme para respetar su verdadera voluntad. Sobre la revocación unilateral del testamento, cuestión de siempre disputada, se ha buscado compaginar la mayor libertad de la misma —salvo en el caso de las disposiciones correspectivas— con la lealtad debida al otro otorgante, a quien hay que dar a conocer la revocación para que obre, si quiere, en consecuencia. Por ello se exige que en todo caso —haya o no cláusulas correspectivas— la revocación o modificación unilateral se haga en testamento abierto y que el notario la comunique al otro testador, sirviéndose de los datos que necesariamente ha de proporcionarle el revocante. Es también nueva la norma que atiende a las disposiciones de bienes entre vivos por parte de los testadores, para evitar que por este medio se dejen indirectamente sin efecto disposiciones correspectivas que no podrían revocarse o para atribuir a la disposición los efectos de la revocación, todo ello sin entorpecer el tráfico de bienes y la seguridad de los terceros adquirentes.

La doctrina de la invalidez de los testamentos tiene contornos muy borrosos en el Código civil, dada la ausencia de un régimen legal propio y el recurso necesario, pero no plenamente satisfactorio, a las normas dictadas para los contratos en este Cuerpo legal. Por ello, ha parecido útil distinguir en la nueva regulación diversas clases de invalidez de los testamentos y de

las disposiciones testamentarias, y las consecuencias de cada una de ellas, con indicación de las correspondientes acciones. Para la distinción de los casos en que opera una u otra clase de nulidad (la que, por dar lugar a acción imprescriptible, la doctrina acaso prefiera denominar de «inexistencia», o aquella otra en que la acción prescribe a los quince años), o bien la anulabilidad, hay que tener en cuenta que los requisitos y formalidades de los testamentos y de la voluntad testamentaria vienen establecidos predominantemente en el Código civil. Son las consecuencias de la ausencia o infracción de los requisitos lo que especialmente regula el Derecho aragonés con régimen específico, atendiendo primordialmente a la ponderación de los intereses en juego y a la seguridad jurídica, que es de creer queda reforzada ya por el simple hecho de la existencia de una regulación legal que permite saber a qué atenerse en cada caso. También la revocación del testamento se ha regulado de manera más realista que en el Código civil, siguiendo sustancialmente las indicaciones de la jurisprudencia.

34

La fiducia sucesoria

La fiducia sucesoria, objeto del Título IV, es un instrumento al servicio de la ordenación de la sucesión de quien ya ha fallecido que tiene notorio arraigo y frecuente uso entre nosotros. De manera similar a lo que se ha hecho en el testamento mancomunado, tampoco para el nombramiento de fiduciario se requiere la condición de cónyuge ni vínculo de parentesco. Se declara de la manera más terminante que, a todos los efectos legales, la delación de la herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o de la extinción de la misma, y se atiende con detalle a algunos problemas que la práctica venía señalando, muy en particular los relativos a la administración y disposición de los bienes durante el tiempo en que la herencia está pendiente de asignación y, por tanto, necesariamente yacente. Se han puesto límites temporales a esta situación señalando plazo de caducidad al fiduciario para el cumplimiento de su encargo, si bien, en atención a una realidad muy arraigada, para cuando el único fiduciario nombrado sea el cónyuge del causante su nombramiento se entenderá

hecho de por vida y podrá ejecutar el encargo en su propio testamento.

La preocupación por el eficaz cumplimiento del encargo se traduce también en diversas disposiciones referidas a la fiducia colectiva, incluida la que aprecia renuncia de su condición por quien, requerido notarial o judicialmente, no acepta el cargo, o la que permite el cumplimiento, en ciertos casos, aunque solo quede uno de los fiduciarios nombrados.

35

Normas comunes a las sucesiones voluntarias

El Título V, «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», tiene, en un ámbito más limitado, función similar a la del Primero en el ámbito total del Derecho de sucesiones. Se perfilan las figuras del heredero y del legatario así como algunas de sus modalidades, se aportan reglas supletorias o interpretativas de las disposiciones voluntarias y se atiende a algunos otros aspectos en que cabría dudar sobre el alcance de la libertad de los otorgantes.

Para todo ello se han tenido en cuenta como precedentes ciertas normas contenidas en los proyectos aragoneses anteriores al Apéndice de 1925. El derecho de acrecer se considera únicamente basado en la voluntad del disponente al otorgar llamamientos conjuntos, siguiendo la tradición doctrinal aragonesa; tradición asimismo determinante de la regla que permite al legatario de cosa cierta y determinada existente en la herencia tomar posesión de ella por sí mismo y conseguir su inscripción, siendo inmueble, en el Registro de la Propiedad. Se recoge también la exclusión de la reserva legal de bienes (a la que tanto el Apéndice como la Compilación hubieron de referirse para rechazar la aplicación del Código civil), que solo tiene lugar por expresa determinación voluntaria que señale sus reglas.

36

La legítima

El Título VI está dedicado a la legítima. Se han mantenido los rasgos fundamentales del sistema legitimario histórico en la forma en que se plasmó en la Compilación, con algunos

retoques favorables a la mayor libertad de disponer y una por menorizada regulación que evite la injerencia de normas del Código civil que, en esta materia aún más que en otras, corresponden a un sistema radicalmente distinto.

Por tanto, la legítima, como límite de la libertad de disponer de que gozan los aragoneses, sigue siendo legítima colectiva a favor de los descendientes, no hay más legitimarios que ellos, y el causante puede con la misma normalidad tanto dejar los bienes a uno solo de ellos (obviamente, también al nieto viviendo el hijo) como distribuirlos en forma tendencialmente igualitaria, todo ello según su criterio.

La innovación más visible operada en la nueva regulación consiste en la reducción de la porción legitimaria a la mitad del caudal, en lugar de los dos tercios en que consistía con anterioridad. Se atiende así a las voces, procedentes sobre todo de los ambientes urbanos, que demandan mayores posibilidades para favorecer al cónyuge con los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, especialmente cuando no son importantes los que a su vez se heredaron y, por otra parte, se costeó en su momento la formación de los hijos y se ayudó sustancialmente a su bienestar económico cuando se independizaron; ahora bien, no se restringe la mayor libertad a este fin específico, sino que queda abierta a las variadas circunstancias y motivaciones de cada causante.

En consideración al viudo, además, se introducen a su favor algunas desviaciones en las reglas sobre reducción de liberalidades e intangibilidad cualitativa de la legítima. Se define con precisión quiénes son legitimarios de grado preferente, pues de esta condición depende la legitimación para la acción de reducción de liberalidades y la de preterición. La acción de reducción de liberalidades (o de lesión de la legítima colectiva, si atendemos a su causa) es la principal que se ofrece a los legitimarios cuando el causante ha dispuesto infringiendo los límites legales. En efecto, además de ser la que procede cuando el conjunto de los descendientes no ha percibido beneficios en cuantía al menos de la mitad del caudal computable, es la única que, en su caso, corresponde a los legitimarios de grado preferente que hayan sido preteridos intencionalmente o excluidos voluntariamente.

PREÁMBULO

También en el supuesto de infracción de la intangibilidad cualitativa de la legítima por haberla atribuido el causante en bienes no relictos las consecuencias se regulan con referencia a la acción de reducción, pero en esta materia, además, se determinan con cuidado los gravámenes permitidos y los prohibidos sobre la legítima, la consecuencia de que el gravamen pueda tenerse por no puesto en el segundo caso, y las llamadas «cauteladas de opción compensatoria», sujetas a límites bastante estrictos.

Se ha evitado el concepto de «legítima formal», una novedad de la Compilación, que no parece haya podido cumplir la función sistematizadora y de auxilio a la interpretación que cabía esperar de ella. No hay, por tanto, un deber de nombrar o mencionar a ningún legitimario en el acto de disposición *mortis causa*. La preterición se ha regulado de acuerdo con la que se entiende debe ser su función propia en nuestro Derecho, que es evitar que un legitimario de grado preferente quede excluido de la herencia sin haberlo querido así el causante, como consecuencia de que este, al disponer, desconocía la existencia del legitimario o su condición de tal, en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido o desconocer que era descendiente suyo. En estos casos, el legitimario preterido tiene derecho a una porción en el caudal relicto igual a la del menos favorecido por el causante, salvo que preterido haya sido el único o todos los legitimarios de grado preferente, caso en que se produce la delación abintestato de todo el caudal relicto, a no ser que haya sido designado heredero o legatario algún otro descendiente.

Estas consecuencias son semejantes a las previstas en la Compilación, pero no así los supuestos. En particular, para cuando la preterición sea intencional, —cosa que, además, se presume— ningún derecho o acción específicos nacen para el así excluido por la omisión de toda atribución y mención a su favor. Mención, por lo demás, que para ser suficiente a efectos de evitar la preterición, basta en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura, aun sin disposición alguna o exclusión expresa.

Consiguientemente, la exclusión expresa, como la preterición intencional, no ha de producir otros efectos que, en su

caso, el derecho a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, efecto que no es, propiamente, de la preterición o exclusión, sino de la lesión de la legítima. La exclusión voluntaria de un legitimario sin necesidad de alegar causa alguna tiene, sin embargo, otros efectos cuando es absoluta, es decir, cuando el disponente expresa su voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión, lo que le priva en efecto (y salvo que afecte a todos o al único legitimario) incluso del derecho a suceder abintestato y del de ejercitar la acción de lesión, en los que será sustituido por su estirpe de descendientes si los tuviera.

Puesto que en el Derecho aragonés se ha podido, desde hace siglos, excluir de la herencia a alguno o algunos de los hijos sin más que dejarles, acaso, la manda simbólica de los famosos cinco sueldos o fórmulas similares, ya se comprende el muy distinto y limitado juego que la desheredación propiamente dicha ha tenido en nuestra vida jurídica. Es de suponer que se seguirá manteniendo en tan estrechos límites, pues solo parece tener sentido práctico cuando el causante quiere excluir de la herencia a todos o al único descendiente, finalidad que no podrá lograr si no concurre y, en su caso, se prueba, alguna de las causas tasadas para ello. Solo por este camino se puede llegar al excepcional resultado de la extinción de la legítima colectiva.

En todo otro caso, las consecuencias serán las de la exclusión absoluta.

Cierra el Título «De la legítima» una escueta referencia al derecho de alimentos que, en ciertos casos y de forma subsidiaria respecto de otras obligaciones alimenticias, puede nacer a favor de los legitimarios de grado preferente, manteniéndose así, en lo esencial, el precepto de la Compilación con algunas precisiones y restricciones.

37

La sucesión legal

Para el caso de que falte, total o parcialmente, la ordenación voluntaria de la sucesión, tiene lugar la «sucesión legal», objeto del Título VII. Se considera preferible hablar de «sucesión

PREÁMBULO

legal» en lugar de sucesión intestada o abintestato, teniendo en cuenta la posible existencia de los pactos sucesorios. La nueva regulación es formalmente completa, sin remisiones al Derecho supletorio, con pocas variaciones respecto del Derecho anteriormente vigente, pero con desarrollo más detallado que facilite su aplicación.

Naturalmente, en la nueva regulación se ha conservado la sucesión troncal, calificada expresamente como universal. Sus normas, aunque con otra formulación, no distan mucho de las anteriores, aunque limitando algo los supuestos. Para cuando proceda, la previsión sobre su constancia en las declaraciones de herederos abintestato facilitará hacer valer sus derechos a los herederos troncales. Se ha prescindido del recobro de dote y firma de dote, por el total desuso de estos institutos, pero se mantiene el de liberalidades hechas a favor de descendientes o hermanos.

Por lo demás, la sucesión de los descendientes y, respecto de los bienes no troncales ni recobrables, a favor de los ascendientes, el cónyuge y los colaterales queda regulada sin alteración de fondo, con el mismo límite del cuarto grado y la anteposición del cónyuge a todos los colaterales que la reforma del Código civil de 1981 introdujo en Aragón. Aunque la valoración de este criterio, perfectamente asumido en ambientes ciudadanos, quizás difiera en las distintas comarcas de Aragón, la existencia de normas propias para los bienes troncales lo hace adecuado para todos.

Se mantiene el llamamiento a favor de la Comunidad Autónoma en defecto de toda otra persona llamada a la sucesión, tal como determinó la Ley 4/1995, de 29 de marzo, así como el llamado Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en atención a lo razonable de esta tradición secular.

VI

LIBRO CUARTO
DERECHO PATRIMONIAL

38

Contenido y sistemática

La nueva regulación desarrolla el contenido del Libro Tercero, «Derecho de bienes», y del Libro Cuarto, «Derecho de obligaciones», de la Compilación del Derecho civil de Aragón. Como es sabido, estos libros, muy lejos de regular toda la materia de los derechos reales o de las obligaciones y contratos, se circunscriben a muy concretas instituciones: relaciones de vecindad, servidumbres, derecho de abolorio y contratos sobre ganadería. Estas instituciones son el objeto del presente Libro Cuarto. No ha parecido oportuno en la reforma de 2010 regular otras materias en el ámbito permitido por el artículo 149.1.8.^a de la Constitución.

El Libro Cuarto mantiene los enunciados de los Títulos de la Compilación y su mismo orden, pero evita la división en Libros («Derecho de bienes», «Derecho de obligaciones») que, además de evocar engañosamente contenidos mucho más amplios, parecería prejuzgar la naturaleza jurídica del derecho de abolorio.

En realidad, el Libro Cuarto se ocupa de tres materias con entidad propia: la primera, más amplia y de muy superior incidencia en la vida jurídica, se centra en las relaciones de vecindad y las servidumbres, con particular atención a la de luces y vistas e inclusión de las servidumbres y comunidades de pastos y adempios (artículos del 537 al 587); once artículos se ocupan luego del derecho de abolorio o de la saca, y uno solo, de los contratos de ganadería, el 599, que reproduce con las debidas adaptaciones el artículo 153 de la Compilación, con la finalidad principal de seguir señalando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa aragonesa en materia de contratos agrarios.

Las relaciones de vecindad

La Observancia 6.^a, *De aqua pluviali arcenda*, y la costumbre sirvieron de fundamento a la Compilación para construir un sistema de relaciones de vecindad de notable altura técnica, que ha mostrado durante decenios su idoneidad para regir en la práctica las situaciones y conductas tan frecuentes en este ámbito y tan proclives a pleitos. Reducir en lo posible estos fijando algunos puntos controvertidos de acuerdo con la experiencia es objetivo primordial del Título primero, presidido por el principio de buena fe, que exige conductas recíprocamente leales entre vecinos.

Las conductas permitidas y las situaciones toleradas de acuerdo con las reglas de vecindad no son expresión o consecuencia de un particular derecho subjetivo ni propician su adquisición. Son meras facultades o mero ejercicio de la libertad, que, por eso, ni consolidan derechos ni el paso del tiempo impide el ejercicio de las acciones dirigidas a exigir la correcta observancia de las normas.

Se mantiene el tratamiento singular que, desde antiguos fueros, recibió el árbol frutal que extiende sus ramas sobre el fundo vecino, en el marco de una regulación de las inmisiones de raíces y ramas que evita remisiones al Código civil. Asimismo, se establecen distancias entre plantaciones de manera menos exigente que en el Código civil, puesto que se refieren solo a arbustos o árboles en predios destinados a plantación o cultivo.

La regulación se completa con algunos preceptos sobre árboles que amenazan caerse, construcciones —en particular, en uso de pared medianera— y aguas pluviales, pero dedica la mayor atención a las normas genuinamente aragonesas de luces y vistas. En esta materia de tan frecuente aplicación, se recogen literalmente las normas de la Compilación, que se aclaran y se completan. Se subraya el derecho del propietario sobre cuyo fundo recaen las luces o las vistas a edificar o construir sin sujeción a distancia alguna y como estime conveniente. Estas luces y vistas no son un derecho de quien las

disfruta ni una limitación para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejercitar todas las facultades dominicales como estime conveniente, con los límites genéricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo. Siguiendo sugerencias tanto de los anteproyectos de Apéndice como de reciente jurisprudencia sobre protección de la intimidad personal y familiar, se reconoce también la posibilidad de obstaculizar o limitar las vistas a espacios utilizados para la vida familiar o personal, aun sin necesidad de realizar obras que puedan considerarse edificación o construcción.

Además, se precisan las distancias y la forma de medirlas, se atiende al supuesto de los huecos abiertos en pared medianera, se definen los voladizos, se indica el modo de colocar las protecciones de reja y red o sus equivalentes y se aclara, en concordancia con el apartado 3 del artículo 537 y el apartado 2 del artículo 549, que la acción para exigir la supresión de voladizos y la colocación de tales protecciones no prescribe.

40

Las servidumbres

Las normas sobre luces y vistas tienen su complemento y contrapartida en las que regulan las servidumbres de luces y vistas, señaladamente en cuanto a la usucapión de estas. Solo los voladizos que caigan sobre fundo ajeno y reúnan las características determinadas en el artículo 548 son signo aparente de servidumbre de luces y vistas; en ningún caso, la falta de reja y red ni los voladizos sobre fundo propio. Por tanto, nunca la existencia de huecos de cualesquiera dimensiones sin voladizos, tengan o no las protecciones exigibles, dará lugar a la adquisición por usucapión de una servidumbre de luces y vistas, pues, no habiendo signo aparente ni siendo susceptible de posesión, no cabe usucapión (artículos 567 y 575).

La usucapión de las servidumbres constituía la parte más importante que la Compilación dedicaba a estas. El sistema no se corresponde con el del Código civil ni con las consecuencias que en él tienen las clasificaciones de servidumbres positivas o negativas, continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. La regulación aragonesa estribaba en esta última distinción

PREÁMBULO

(aparentes y no aparentes), como explicaba la Exposición de Motivos de la Compilación de 1967, aunque la extraordinaria concisión de las normas compiladas ocasionaba que se aplicaran indebidamente normas del Código civil que responden a criterios muy distintos, con las consecuencias de la diversidad de opiniones doctrinales y la consiguiente inseguridad jurídica y el aumento de la litigiosidad.

En la nueva regulación, para evitar los anteriores inconvenientes, se introducen unas disposiciones generales sobre servidumbres con el suficiente detalle que evite la indebida injerencia de las normas del Derecho supletorio estatal.

Los preceptos sobre concepto y clases (artículos 551 y 552) tienen una finalidad estructural y no hay en ellos novedades apreciables. Tiene interés reseñar, en los siguientes artículos, la admisión explícita de servidumbres recíprocas, de servidumbres personales y de la posibilidad de sujetar todas las servidumbres a término o condición tanto suspensivos o iniciales como resolutorios o finales (artículos 553 y 555). La nota de indivisibilidad (artículo 554) queda matizada en el artículo 572, que prevé eventuales extinciones parciales en ciertos casos.

El criterio de ejercicio *civilliter* de las servidumbres, según el cual estas se ejercen de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca dominante y, a la vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente, se enuncia de manera general en el artículo 557, y luego se especifican consecuencias particulares en el 565, para la constitución forzosa de servidumbres, y, más concretamente, para las de paso y las de acceso a red general en los artículos 577.2 y 581.3. También el artículo 560 (modificación de la servidumbre) puede considerarse expresión del mismo principio, que trata de optimizar el balance de beneficios y perjuicios conjuntos de ambas propiedades.

En la Sección dedicada a la constitución de servidumbres destaca el precepto que establece que «las servidumbres negativas no pueden constituirse por usucapión». Se zanján así posibles dudas sobre la aplicación de criterios del Código civil contrarios a la tradición doctrinal aragonesa. «La falta de título constitutivo de las servidumbres negativas, continúa diciendo

el artículo 567, únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente».

Criterio innovador establece el artículo 564 al admitir la constitución de servidumbre sobre finca propia, atendiendo a requerimientos de la práctica. Naturalmente, mientras ambas fincas pertenezcan a un único propietario, este ejercerá todas sus facultades *iure proprietatis*, pero el Registro de la Propiedad podrá publicar la constitución de la servidumbre, que tendrá toda su eficacia cuando alguna de las fincas cambie de titular. Correlativamente, tampoco será por sí solo causa de extinción de una servidumbre el hecho de que se reúna en una misma persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente (artículo 571.2). Por otra parte, se aclara que, si la coincidencia de titulares de una y otra finca es solo parcial, la servidumbre puede existir normalmente.

La remisión que el artículo 145 de la Compilación hizo al artículo 541 del Código civil dio lugar a muy diversas interpretaciones sobre las que la jurisprudencia tuvo que sentar finalmente un criterio estable y acertado. Ahora, el artículo 566 atiende de manera general a la constitución de servidumbres por signo aparente («por destino del padre de familia» llamaba a esta figura la doctrina más tradicional), de modo que excluye la aplicación de aquel artículo del Código, y el 574, al aclarar que los voladizos sobre fundo ajeno son los únicos signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, hace segura legalmente la solución jurisprudencial.

A la usucapión de servidumbres se dedica una sección independiente, en atención a su importancia, que acoge el texto literal de los artículos 147 y 148 de la Compilación. Los artículos 567.1 y 575 complementan y aclaran estos preceptos, excluyendo de la usucapión las servidumbres negativas y las servidumbres no aparentes de luces y vistas, respectivamente.

Los preceptos sobre servidumbres de luces y vistas, que se recogen en un capítulo específico, se sitúan en una posición central en el texto. Se reproduce el artículo 145 de la Compilación, subrayando que los voladizos son los únicos signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, al tiempo que se excluyen de la usucapión las servidumbres no aparentes de

lucos y vistas. De este modo, se delimitan con precisión las situaciones de huecos para lucos y vistas fundados en relaciones de vecindad frente a los correspondientes derechos reales de servidumbre, singularizando los casos en que la presencia de voladizos sobre fondo ajeno mantenida durante tiempo puede dar lugar a la adquisición de una servidumbre por usucapión.

Las llamadas servidumbres forzosas se originan por voluntad del titular de la finca dominante en los casos en que la ley prevea la forzosa imposición del gravamen sobre la finca sirviente. Los supuestos vienen determinados no solo por este Código (que se ocupa únicamente de la servidumbre forzosa de paso y de la servidumbre forzosa de acceso a red general), sino en cualquier otra ley aplicable, autonómica o estatal. En todos ellos, si no hay acuerdo, será una resolución judicial la que constituya la servidumbre y fije la correspondiente indemnización.

41

Derechos de pastos y ademprios

«Alera» y «ademprio» son términos aragoneses que denotan una notable variedad de servidumbres y comunidades tradicionales sobre pastos, aguas, leñas y otros aprovechamientos de los fundos. Su heterogénea configuración responde a tradiciones sociales y jurídicas propias, que el proceso desamortizador y el Código civil pusieron en peligro y las transformaciones económicas de los últimos siglos han ido reduciendo en número y en trascendencia social.

La Compilación, sobre la base de una regulación mucho más amplia prevista en los Anteproyectos de Apéndice de 1899 y 1904, le dedicó un artículo, el 146, que ha sido clave en el enjuiciamiento de los conflictos que han llegado a los Tribunales y que, por su contenido, excluye la aplicación de los artículos 600 a 604 del Código civil (en particular, la redención forzosa) y presupone la posibilidad de servidumbres personales y de servidumbres recíprocas. Todo ello es aún más claro en la presente regulación, que distingue entre servidumbres y comunidades para adaptarse mejor a la rica variedad y complejidad que muestra la experiencia. No se ha pretendido, sin embargo, construir una regulación general de la comunidad de bienes en el Derecho

aragonés, por lo que puede ser inevitable el recurso al Derecho supletorio, siempre interpretado de acuerdo a los principios del Derecho aragonés y en lo que sea compatible con los mismos.

El régimen de la alera foral se entiende supletorio de las demás servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma, mientras que los adempros se configuran como derechos reales de aprovechamiento parcial y se presumen vitalicios, salvo que su titularidad corresponda a una comunidad. Las comunidades de este tipo (mancomunidades de pastos, leñas y demás adempros) que existan por título o posesión inmemorial se consideran indivisibles, salvo pacto unánime. Se regula también un tipo de comunidad pro diviso, en la que concurren diversos titulares dominicales sobre aprovechamientos diferenciados, uno de los cuales es el de pastos, leñas u otros adempros. Con estas previsiones, se pretende atender con mayor adecuación a la diversidad de situaciones que la realidad muestra, a la vez que dar cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tenga lugar de ahora en adelante.

42

El derecho de abolorio o de la saca

El derecho de abolorio o de la saca es un instrumento que permite evitar, en ciertos casos, que un inmueble salga de la familia por disposición de su actual titular. Conocido desde los fueros más antiguos, superó el trance de la codificación y quedó plasmado tanto en el Apéndice de 1925 como en la Compilación de 1967. Los inconvenientes que presenta en el tráfico inmobiliario no son suficientes para suprimirlo, pues responde a intereses y concepciones familiares dignos de protección. En cualquier caso, el derecho de abolorio no debe tener otros presupuestos, requisitos ni restricciones que los que la Ley establece, por lo que se prescinde de la referencia a la «moderación equitativa» por los tribunales que la Compilación introdujo.

El criterio que preside esta parte de la nueva regulación es mantener el derecho de abolorio con sus rasgos esenciales tal como fueron fijados por la Compilación y aclarar y completar aspectos debatidos o controvertibles con el fin de contribuir a una mayor seguridad jurídica. Es de esperar que coopere a este

objetivo la configuración del derecho de abolorio como tanteo y no solo como retracto, de modo que los profesionales del Derecho puedan asesorar sobre la conveniencia de notificar fehacientemente a los parientes el propósito de enajenar, con la consecuencia de que, pasados treinta días naturales, la venta a extraños resulte inatacable por este motivo.

Bienes de abolorio son, tradicionalmente, solo los inmuebles, de los que se excluyen ahora los que no tengan naturaleza rústica, salvo los edificios o parte de ellos, pues, fuera del suelo rústico, parece que solo los edificios conservan su impronta familiar con fuerza suficiente para justificar la preferencia de los parientes.

La permanencia en la familia durante dos generaciones se entiende del mismo modo que en la Compilación, pero, en cuanto a los parientes titulares del derecho, la presente regulación introduce en su artículo 590 una ampliación sustancial. Así, además de disponer de este derecho, de acuerdo con la formulación de la Compilación, los colaterales hasta el cuarto grado, se incluye a los ascendientes en el caso de que hubieran donado el inmueble, así como a los descendientes mayores de catorce años. En este último caso se requiere, además, que tales descendientes sean titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia. En todos los casos es indiferente la vecindad civil del titular del derecho, pues es requisito suficiente que los bienes estén situados en Aragón.

«Venta» incluye las efectuadas con carácter forzoso mediante subasta u otras formas de realización de bienes en procedimientos de apremio, y se prevén asimismo, los casos de enajenación de cuota indivisa de bienes de abolorio y los de enajenación de pluralidad de inmuebles.

Los artículos 594 y 595, sobre plazos y requisitos del ejercicio del derecho de abolorio, desarrollan el contenido del artículo 150 de la Compilación, que ya se alejaba de las previsiones del Código civil para los retractos en él regulados. Destaca el tratamiento separado del ejercicio del derecho de abolorio como tanteo y la notificación necesaria al efecto. Por otra parte, a falta de notificación de la transmisión, el plazo de ejercicio del derecho de retracto será de noventa días naturales a partir de aquel en que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones

esenciales. Este conocimiento puede obtenerlo el retrayente bien a través de los medios de información previstos en la legislación hipotecaria en los casos en los que se haya inscrito el título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio. Esta previsión, en cualquier caso, alentará la realización de notificaciones expresas, siempre deseables para aclarar las situaciones y evitar el planteamiento de litigios. En cualquier caso, en aras de la seguridad del tráfico, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajenación.

El artículo 595 pretende poner fin a las dudas y vacilaciones de la práctica sobre la forma de ejercicio judicial del derecho de abolorio, que ha de tener requisitos rigurosos pero no dejados al azar de interpretaciones de preceptos del Código civil o de las leyes de enjuiciamiento, que no fueron pensados para este caso ni se adaptan bien al mismo.

Son nuevos los preceptos sobre renuncia —posiblemente admitida del mismo modo en el Derecho anterior— y, en el artículo 598, una limitación de la prioridad del derecho de abolorio sobre cualesquiera otros de adquisición preferente, pues ahora prevalecerán el de comuneros y los establecidos a favor de entes públicos.

VII

DISPOSICIONES ADICIONALES

43

En la disposición adicional primera, sobre términos genéricos, se extiende a todo el Código lo dicho en sendas disposiciones de las Leyes de Derecho de la persona y de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, de manera que las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Código se entienden referidas también a su correspondiente femenino.

Las disposiciones adicionales Segunda, Tercera y Cuarta proceden de la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

44

Las disposiciones transitorias referidas al Libro Primero establecen una regla general de aplicación inmediata de los preceptos procedentes de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, a partir del 23 de abril de 2007 momento de su entrada en vigor, así como la sujeción a la nueva regulación del ejercicio de las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 2007. En particular, son aplicables desde la entrada en vigor de la Ley de Derecho de la persona las normas sobre nulidad y anulabilidad de los actos de los menores (mayores o no de catorce años), de los incapaces, de los sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de la Junta de Parientes.

Normas específicas de Derecho intertemporal se ocupan de la prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegración de su capacidad por las personas declaradas pródigas con anterioridad al 23 de abril de 2007; de los gastos de maternidad, señalando que el artículo 62 solo se aplicará respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad a esa fecha, y de la autoridad familiar de otras personas, acomodándola en todo caso a lo dispuesto en el artículo 88.3.

La sexta y la séptima son mera regularización de las disposiciones transitorias de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

Las disposiciones transitorias referidas al Libro Segundo parten del principio de aplicación inmediata desde el 23 de abril de 2003 de todas las normas procedentes de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, como parece exigir la índole misma de las modificaciones introducidas, a la vez que señalan que los hechos, actos o negocios relativos a los variados asuntos a que la nueva regulación se refiere solo se regirán por ella cuando se produzcan con

posterioridad al 23 de abril de 2003, fecha de su entrada en vigor. Se añaden dos sencillas reglas sobre comunidad conyugal continuada y sobre la limitación que, en caso de existencia de hijos no comunes, establecía el artículo 73 de la Compilación. En la refundición se ha añadido una disposición transitoria para indicar que las normas del Título VI son aplicables desde el 6 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

Las disposiciones transitorias referidas al Libro Tercero van dirigidas a facilitar el tránsito de la Compilación derogada a la nueva regulación, partiendo de la regla general que somete las sucesiones por causa de muerte a la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión. Las demás son excepciones o modalidades de esta para casos particulares, que tienden a mantener la validez y eficacia de los actos de disposición y también a producir efectos inmediatos en algunos fenómenos que se desarrollan en un tiempo posiblemente largo, como la sucesión paccionada, el consorcio foral o la fiducia sucesoria. La disposición transitoria decimosexta contiene regla especial para unos casos asimismo especiales de sustitución legal. En cuanto a la disposición transitoria vigésimo segunda, sobre preterición, acaso no fuera imprescindible, pues la interpretación llevaba en el Derecho de la Compilación a la misma regla que la más claramente expresada en la nueva regulación, pero se ha considerado prudente introducirla para disipar toda posible duda.

La mayor parte de las disposiciones del Libro Cuarto son de aplicación inmediata a todas las situaciones, aun anteriores al 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, como corresponde de ordinario al estatuto de la propiedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos cambios sustantivos introducidos en su regulación. La excepción es la regulación del derecho de abolorio, que, en atención a algunas modificaciones, solo será aplicable cuando la enajenación sea posterior al 1 de enero de 2011.

TÍTULO PRELIMINAR

LAS NORMAS EN EL DERECHO CIVIL DE ARAGÓN

Artículo 1.— *Fuentes jurídicas.*

1. Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico.
2. El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan.

Artículo 2.— *De la costumbre.*

1. La costumbre tendrá fuerza de obligar cuando no sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.
2. Los Tribunales apreciarán la existencia de la costumbre a virtud de sus propias averiguaciones y de las pruebas aportadas por los litigantes.

Artículo 3.— *«Standum est chartae».*

Conforme al principio *standum est chartae*, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.

LIBRO PRIMERO
DERECHO DE LA PERSONA

TÍTULO I
CAPACIDAD JURÍDICA Y ESTADO
DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO PRELIMINAR
CAPACIDAD JURÍDICA

Artículo 3-1.— *Igual dignidad, personalidad y capacidad jurídica.*

1. Todos los seres humanos son iguales ante la ley.
2. Toda persona tiene, por su dignidad inherente, personalidad y capacidad jurídica desde el nacimiento hasta la muerte.
3. En todo caso, los efectos jurídicos que le sean favorables se adquieren desde la concepción siempre que llegue a nacer viva, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.

Artículo 3-2.— *Capacidad jurídica.*

1. Toda persona tiene capacidad jurídica para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica no podrá modificarse por razón de discapacidad.
2. El ejercicio de la capacidad jurídica, tanto en aspectos personales como patrimoniales, a salvo las limitaciones o prohibiciones impuestas por la ley, corresponde:
 - a) A toda persona mayor de edad por sí sola o con los apoyos que a tal fin pueda necesitar.
 - b) A los menores de edad por sí solos, conforme al apartado 1 del artículo 7, o con la representación legal o asistencia en su caso debidas.

CAPÍTULO I
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
POR RAZÓN DE LA EDAD

Sección 1.^a
MAYORÍA Y MINORÍA DE EDAD

Artículo 4.— *Mayoría de edad.*

1. Es mayor de edad:
 - a) El que ha cumplido los dieciocho años.
 - b) El que ha contraído matrimonio.
2. La persona mayor de edad puede realizar, en ejercicio de su capacidad jurídica, todos los actos personales y patrimoniales de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley.
3. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría de edad adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe.

Artículo 5.— *Minoría de edad.*

1. El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación conforme a su personalidad.
2. El menor de edad está sujeto a autoridad familiar y, subsidiariamente, a tutela o curatela.
3. La representación legal del menor termina al cumplir los catorce años; desde entonces, el ejercicio de su capacidad jurídica requiere la asistencia.
4. Los guardadores legales ejercerán sus funciones siempre en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autonomía en la organización de su propia vida.
5. El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea ilícito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones.
6. En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública competente en materia de protección de menores adoptará en interés del menor las medidas oportunas.

Artículo 6.— *Derecho del menor a ser oído.*

Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años.

Artículo 7.— *Capacidad del menor.*

1. El menor que tenga suficiente madurez podrá por sí solo:
 - a) Ejercer los derechos de la personalidad.
 - b) Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes a los usos sociales.
 - c) Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda realizar sin necesidad de representación o asistencia.
2. Las limitaciones al ejercicio de la capacidad jurídica del menor se interpretarán de forma restrictiva.

Artículo 8.— *Patrimonio del menor.*

Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y, consiguientemente, su disfrute, así como los frutos y productos de cualesquiera otros que se le hubieren confiado.

Artículo 9.— *Administración y disposición.*

1. La administración de los bienes del menor no emancipado, así como la disposición hasta que cumpla los catorce años, compete a los padres, como función aneja a la autoridad familiar, y, en defecto de ambos, al tutor.
2. Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición correspondan al tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión. En los dos últimos casos se estará a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.

Artículo 10.— *Intervención judicial.*

En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará:

- a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este deber por sus guardadores.
- b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.
- c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción del menor por alguno de los progenitores o por terceras personas.
- d) En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Artículo 11.— *Cómputo de la edad.*

Para el cómputo de la edad se incluirá completo el día del nacimiento.

Sección 2.^a

LA PERSONA MENOR DE CATORCE AÑOS

Artículo 12.— *Representación legal.*

1. La representación legal del que no ha cumplido los catorce años incumbe a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.
2. Se exceptúan de la representación legal los actos relativos a derechos de la personalidad.
3. Las personas a las que corresponda la administración y disposición de los bienes del menor conforme al artículo 9 le representarán en la realización de dicho tipo de actos.

Artículo 13.— *Oposición de intereses.*

1. Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposición de intereses en algún asunto:
 - a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
 - b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, la actuación de este requiere autorización de la Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria además la autorización o aprobación que en su caso exija el acto. También podrá ser representado por un defensor judicial.
 - c) Si es por parte de ambos padres o tutores, la representación corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representación del menor en actos que requieran autorización o aprobación, esta será necesariamente judicial.
 - d) Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la administración de los mismos bienes, le representarán los titulares de la autoridad familiar o el tutor.
2. Cuando en el mismo acto varios menores, que habrían de ser representados por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.

Artículo 14.— *Atribuciones gratuitas.*

1. El representante legal del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribución gratuita en favor de este. Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución.
2. También precisa autorización previa para aceptar donaciones modales u onerosas. En caso de denegación, se entenderá rechazada la donación.

Artículo 15.— *Actos de disposición.*

1. El representante del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:

- a) Realizar actos de disposición sobre inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones económicas, valores mobiliarios, bienes muebles de valor extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se exceptúa la enajenación de acciones o derechos de suscripción preferente por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa.
 - b) Realizar actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades usuales.
 - c) Renunciar a derechos de crédito.
 - d) Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garantizar con derecho real obligaciones ajenas.
 - e) Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones económicas, por plazo superior a seis años, computándose a estos efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el contrato.
 - f) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.
 - g) Transigir o allanarse.
2. No será necesaria la indicada autorización para tomar dinero a préstamo o crédito, incluso por vía de subrogación, para financiar la adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garantía real sobre los bienes adquiridos.

Artículo 16.— *Autorización en caso de tutela.*

El tutor del menor que no ha cumplido los catorce años necesita también autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:

- a) Hacer gastos extraordinarios en los bienes.
- b) Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
- c) Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

- d) Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título.

Artículo 17.— *División de patrimonio o cosa común.*

La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido practicada en representación del menor:

- a) Por el tutor, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de Parientes o del Juez.
- b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial, si en el nombramiento de este así se ha dispuesto. Cuando intervenga la Junta de Parientes, la aprobación será necesariamente judicial.
- c) Por el único padre titular de la autoridad familiar con el que exista oposición de intereses si no se ha obtenido autorización previa.

Artículo 18.— *Concesión de la autorización o aprobación.*

1. La autorización o aprobación requerida en los artículos anteriores solo se concederá en interés del menor, por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.
2. La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
3. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos del menor.

Artículo 19.— *Falta de autorización o aprobación.*

Serán anulables los actos realizados sin la debida autorización o aprobación:

- a) A petición del representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta que el menor cumpla catorce años.

- b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

Artículo 20.— *Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.*

1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor de catorce años se regirá por las siguientes reglas:
 - a) Si tiene suficiente madurez, requerirá su consentimiento y la autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar o del tutor; en caso de negativa de alguno de ellos, su autorización podrá ser suplida por el Juez.
 - b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor.
 - c) Si no tiene suficiente madurez, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
2. Solo es posible el internamiento de un menor contra su voluntad cuando se lleve a cabo en un establecimiento de salud mental o en un centro de protección específico de menores con problemas de conducta y mediante autorización judicial, conforme a lo previsto en las leyes orgánicas reguladoras del internamiento involuntario.

Artículo 21.— *Prestación personal.*

Los contratos que impliquen alguna prestación personal del menor de catorce años que tenga suficiente madurez requieren su consentimiento previo y la autorización de quienes ostenten su representación legal.

Artículo 22.— *Invalidez de los actos del menor.*

1. El acto celebrado por un menor de catorce años sin capacidad para ello será inválido. No obstante, será válido si medió autorización previa de su representante legal y el acto no

requería la intervención de la Junta de Parientes o del Juez. Si la requería, se aplicará el artículo 19.

2. Si el acto no contó con dicha autorización previa, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, será anulable:
 - a) A petición de su representante legal, hasta que el menor cumpla catorce años.
 - b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica o señalan prohibiciones para el menor, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.

Sección 3.^a

EL MENOR MAYOR DE CATORCE AÑOS

Artículo 23.— *Capacidad.*

1. El menor de edad, cumplidos los catorce años, aunque no esté emancipado, puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.
2. La imposibilidad de prestar la asistencia permitirá al menor solicitarla a la Junta de Parientes o al Juez.
3. El menor mayor de catorce años no necesita asistencia en los actos que la ley le permita realizar por sí solo.

Artículo 24.— *Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.*

1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor mayor de catorce años dependerá de su exclusiva voluntad, con las salvedades siguientes:

- a) Si su decisión entraña un grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica, necesitará la asistencia prevista en el artículo anterior.
 - b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor.
2. Si el menor no está en condiciones de decidir sobre ella, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

Artículo 25.— *Nombre propio.*

Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.

Artículo 26.— *Administración de bienes.*

1. El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce años en representación suya, pero los actos de administración podrán ser realizados también por el menor con la debida asistencia.
2. Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la administración de:
 - a) Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.
 - b) Los que se le hubieren confiado a tal fin, así como los frutos y productos obtenidos con ellos.
 - c) Los que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así lo hubiere ordenado.

Artículo 27.— *Prestación de la asistencia.*

1. La prestación de asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses.
2. La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en esta puede bastar con la mera presencia sin oposición.
3. La asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la

misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.

Artículo 28.— *Oposición de intereses.*

1. Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia exista oposición de intereses en algún asunto:
 - a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia será prestada por el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
 - b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, así como si es por parte de ambos padres o tutores, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.
 - c) Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia será prestada por uno cualquiera de los padres o el tutor.
2. Cuando en el mismo acto varios menores, que habrían de ser asistidos por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.

Artículo 29.— *Anulabilidad por falta de asistencia.*

Será anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, el acto o contrato celebrado por el menor sin la debida asistencia:

- a) A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras el menor no pueda anularlo por sí solo.
- b) A petición del propio menor, con la debida asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

Sección 4.^a
EL MENOR EMANCIPADO

Artículo 30.— *Emancipación por concesión.*

1. La emancipación por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar requiere que el menor tenga catorce años

cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Encargado del Registro Civil.

2. El Juez podrá conceder la emancipación al menor mayor de catorce años si este la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela:
 - a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva maritalmente con persona que no sea también titular de la autoridad familiar sobre el menor.
 - b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.
 - c) Cuando concorra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar.
 - d) Cuando el menor esté sujeto a tutela.
3. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

Artículo 31.— *Inscripción.*

La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.

Artículo 32.— *Emancipación por vida independiente.*

El menor mayor de catorce años que, con beneplácito de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa, viva con independencia económica de ellos, será reputado para todos los efectos como emancipado. Quienes dieron este beneplácito podrán revocarlo.

Artículo 33.— *Efectos de la emancipación.*

1. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero necesitará la asistencia de uno cualquiera de sus progenitores que haya tenido el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, la de quien fue su tutor, y, en caso de fallecimiento o imposibilidad de estas personas, la de su curador para:
 - a) Realizar los actos enumerados en el artículo 15.

- b) Repudiar atribuciones gratuitas.
 - c) Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase.
2. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.

CAPÍTULO II

CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sección 1.^a

CAPACIDAD JURÍDICA Y MEDIDAS DE APOYO

Artículo 34.— *Capacidad jurídica de las personas con discapacidad.*

1. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
2. A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación, previsiblemente permanente, que impide o dificulta a la persona comprender, valorar o expresar por sí sola el consentimiento en la toma de decisiones, tanto en aspectos personales como patrimoniales.
3. Se garantizarán las medidas de apoyo que la persona con discapacidad pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Artículo 35.— *Funciones de las medidas de apoyo.*

1. Las medidas de apoyo, en atención a las circunstancias concurrentes, podrán consistir en el apoyo en la comunicación, la consideración de opciones y la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, así como en la asistencia o, en última instancia, la representación en la toma de decisiones.
2. Quien preste apoyos representativos a la persona con discapacidad no podrá, en nombre de esta, llevar a cabo aquellos actos para los que la ley exija una actuación estrictamente personal.

Artículo 36.— *Principios generales de las medidas de apoyo.*

1. Las medidas de apoyo deben respetar los derechos y la dignidad de la persona con discapacidad, limitarse a las estrictamente necesarias, ser proporcionales y estar adaptadas a sus circunstancias.
2. Las medidas de apoyo establecidas se aplicarán durante el plazo más corto posible, deberán estar sujetas a revisiones periódicas y se interpretarán de manera restrictiva.
3. Para el ejercicio de las medidas de apoyo se establecerán salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos y garantizar que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona.
4. La persona que preste el apoyo deberá actuar en beneficio de la persona apoyada y hacer todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría una persona razonable, actuando, como mínimo, con la misma diligencia que emplea en sus propios asuntos.

Artículo 37.— *Voluntad y preferencias en la adopción y prestación del apoyo.*

1. Tanto en la adopción como en la prestación del apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, las decisiones de los jueces y otras autoridades, así como las acciones de quienes presten el apoyo, respetarán la autonomía e independencia de la persona con discapacidad, con atención a su voluntad y preferencias, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, siempre que sea posible.
2. Cuando la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad no puedan conocerse, su cumplimiento resulte imposible o extraordinariamente difícil o puedan suponer un peligro significativo para su bienestar o el de las personas a su cargo o graves perjuicios a terceros, se actuará en función de lo que objetivamente sea mejor para la dignidad, los derechos e intereses de la persona afectada.

Artículo 38.— *El menor mayor de catorce años con discapacidad.*

1. Los titulares del ejercicio de la autoridad familiar o la tutela de un menor mayor de catorce años con discapacidad le proporcionarán los apoyos necesarios incluidos en sus respectivas facultades.
2. Si los apoyos necesarios exceden de las facultades de quienes prestan asistencia al menor mayor de catorce años, el Juez, en el procedimiento de provisión de apoyos, a petición del menor, de los titulares de la autoridad familiar, del tutor o del Ministerio Fiscal, podrá establecer en favor de los progenitores que estén en el ejercicio de la autoridad familiar o del tutor las facultades de representación que necesiten, incluyendo, en su caso, la aplicación de las reglas de la autoridad familiar o tutela a que estaba sujeto antes de dicha edad.
3. Del mismo modo, cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a autoridad familiar o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá acordar, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad, debiendo tener en cuenta las disposiciones voluntarias establecidas conforme a lo previsto en este Código.
4. Al menor con discapacidad que esté emancipado le serán de aplicación las medidas de apoyo previstas para el mayor de edad con discapacidad.

Artículo 39.— *Apoyos espontáneos e informales.*

1. Quienes espontáneamente presten apoyos a las personas que los precisen para la realización de actos jurídicos pueden servirse de los medios ordinarios del Derecho civil, tales como gestión de negocios sin mandato, pago por y para tercero, contrato a favor de terceros o prestación de fianzas o cualesquiera otros similares o que puedan servir a la misma finalidad.
2. En toda intervención emprendida con intención benévola se presumirá la buena fe y se exigirá la diligencia que el interviniente suele prestar en sus propios asuntos.

Sección 2.^a
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

Artículo 40.— *Presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica.*

1. Tiene aptitud para ejercitar la capacidad jurídica la persona que por sí sola puede comprender y valorar el significado y los efectos de un acto concreto en el contexto en que se produce y, en consecuencia, determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella.
2. La aptitud general de ejercitar por sí sola la capacidad jurídica se presume en la persona que ha cumplido los catorce años, si bien, mientras no sea mayor de edad, quedará sujeta al régimen de asistencia.
3. Se presume la aptitud para realizar un acto concreto siempre que para dicho acto la persona no esté sujeta a medidas de apoyo asistenciales o representativas, judiciales o voluntarias ya eficaces, y que no se demuestre lo contrario de forma cumplida y adecuada.

Artículo 41.— *Validez de los actos jurídicos de la persona con discapacidad.*

La persona que no tiene la suficiente aptitud para ejercer por sí sola su capacidad jurídica respecto de un acto concreto puede realizarlo válidamente con las medidas de apoyo adecuadas conforme a lo establecido en este Código.

Artículo 42.— *Oposición de intereses.*

1. Cuando entre la persona con discapacidad y quienes hayan de prestarle apoyo exista oposición de intereses en algún asunto:
 - a) Si hay otra persona que pueda prestarle el apoyo requerido con la que no haya oposición de intereses, lo prestará esta.
 - b) Si el apoyo preciso es asistencial y la oposición de intereses existe con todas las personas que pueden prestarle la asistencia, esta será suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.

c) Si el apoyo preciso es representativo y la oposición de intereses existe con la única persona que puede representarle, la actuación de esta requiere autorización de la Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria además la autorización o aprobación que, en su caso, exija el acto. También podrá ser representada por un defensor judicial.

d) Si tiene varios representantes y la oposición de intereses existe con todos ellos, la representación corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representación de la persona con discapacidad en actos que requieran la autorización o aprobación, esta será necesariamente judicial.

2. Cuando en el mismo acto varias personas con discapacidad, que habrían de recibir el apoyo de la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada una de ellas un defensor judicial.

Artículo 43.— *Intromisión en los derechos de la personalidad.*

1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los de la persona mayor de edad con discapacidad que esté en condiciones de decidirla por sí sola dependerá de su exclusiva voluntad.

2. Si no puede decidir la intromisión por sí sola, se estará a lo que haya podido prever voluntariamente al respecto. En su defecto, la intromisión solo será posible cuando lo exija el interés de la persona con discapacidad apreciado por quien le viene prestando apoyo y a falta, imposibilidad o negativa de este, por el Juez.

Artículo 44.— *Internamiento.*

En los términos previstos en las leyes orgánicas reguladoras del internamiento involuntario, para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial. Nadie podrá ser obligado a permanecer internado, salvo si media autorización judicial en tal sentido.

Sección 3.^a

INVALIDEZ E INEFICACIA DE ACTOS Y CONTRATOS

Artículo 45.— *Invalidez del acto de la persona sin aptitud para realizarlo.*

1. Será inválido el acto realizado por quien, en el momento de su celebración, carezca de la suficiente aptitud para ejercitar su capacidad jurídica y no cuente con las medidas de apoyo que procedan para suplir esa insuficiencia.
2. El acto realizado será anulable a instancias de:
 - a) El propio interesado o sus herederos.
 - b) La persona cuya asistencia o representación habría evitado la invalidez.
3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.

Artículo 45-1.— *Invalidez por falta de intervención del curador o mandatario de apoyo.*

1. El acto para el que la autoridad judicial hubiera establecido curatela asistencial o representativa que sea realizado por la persona con discapacidad sin la intervención del curador será anulable.
2. También será anulable el acto para el que se hubiera establecido un mandato de apoyo que hubiera iniciado su eficacia y que requiera la actuación con carácter asistencial o representativa del mandatario, cuando sea realizado por la persona con discapacidad sin su intervención.
3. Podrán instar la anulabilidad:
 - a) La persona con discapacidad o sus herederos.
 - b) El curador o mandatario de apoyo.

Artículo 45-2.— *Invalidez por defectos en la prestación del apoyo.*

1. Será anulable el acto realizado en representación de la persona con discapacidad sin la debida autorización o aprobación cuando el acto la requiera.

2. También será anulable el acto realizado con apoyo asistencial o representativo cuando exista oposición de intereses entre quien presta el apoyo y la persona con discapacidad.
3. Podrán instar la anulabilidad:
 - a) La persona con discapacidad o sus herederos.
 - b) Si fuesen varias las personas designadas para prestar apoyo, las que no hayan intervenido en el acto.

Artículo 45-3.— *Excepciones a la anulación.*

1. En los casos regulados en los artículos anteriores, el otro contratante podrá oponerse a la acción de anulabilidad probando que no conocía, ni razonablemente podía conocer, las causas en que se funda la acción de anulabilidad.
2. Tampoco procederá la anulación si el acto ha sido confirmado por quien podría impugnarlo.

Artículo 45-4.— *Régimen de la anulación.*

1. La acción prescribirá a los cuatro años desde la celebración del acto.
2. Anulado el contrato por alguna de las causas contempladas en los artículos anteriores, la persona con discapacidad no estará obligada a restituir sino en cuanto se haya enriquecido con la cosa o precio que haya recibido.
3. La pérdida de la prestación recibida por la persona con discapacidad no extinguirá la acción, a menos que hubiese ocurrido por dolo o culpa de esta después de haber recuperado la aptitud para ejercer su capacidad jurídica.

La pérdida de la prestación por culpa o dolo de la persona que ejerce el apoyo extingue la acción de anulabilidad.

Artículo 45-5.— *Excepción a la anulabilidad del pago.*

1. El pago a una persona mayor de edad que, en el momento de recibirlo, carezca de aptitud para administrar los bienes que recibe, hecho por quien conocía o debía conocer tal situación, será anulable, salvo en cuanto se hubiere convertido en utilidad de aquella.

2. Esta regla se aplica también al pago hecho a quien aparentemente presta apoyo a la persona con discapacidad si carece de título para ello y quien lo realizó lo conocía o debía conocerlo.

Artículo 45-6.— *Rescisión por obtención de una ventaja injusta.*

1. Será rescindible el contrato de una persona con discapacidad, tanto si ha sido celebrado por sí sola como con alguna medida de apoyo, cuando el otro contratante se haya aprovechado de la situación de discapacidad para obtener una ventaja injusta.
2. El contrato podrá ser rescindido a petición:
 - a) Del propio interesado o sus herederos.
 - b) De la persona que tenga atribuida la prestación de apoyo y no haya intervenido en el acto.
3. La acción para pedir la rescisión caducará a los cuatro años desde la celebración del contrato.

Sección 4.^a

OTRAS NORMAS GENERALES

Artículo 45-7.— *Patrimonio especial de las personas con discapacidad.*

1. La regulación del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, incluyendo las reglas previstas en este precepto, será de aplicación preferente a lo dispuesto en este Código.
2. También podrán constituir un patrimonio protegido, cuando la persona con discapacidad no tenga aptitud suficiente para el ejercicio de la capacidad jurídica, sus progenitores y quienes, sin serlo, ostenten la autoridad familiar.
3. La autorización de la Junta de Parientes tendrá el mismo valor que la judicial en los casos en que esta fuera precisa.
4. La obligación de rendición periódica de cuentas no será exigible cuando el administrador del patrimonio protegido sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio o sus progenitores.

Artículo 45-8.— *Situaciones de necesidad urgente de apoyo y de riesgo o desamparo.*

1. Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y no pueda prestársele con la urgencia requerida, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública que tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. La entidad dará conocimiento de la situación al Ministerio Fiscal en el plazo de cuarenta y ocho horas.
2. En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública competente adoptará en interés de la persona con discapacidad las medidas oportunas para facilitarle la ayuda adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluidas las medidas de apoyo que precise.

Artículo 45-9.— *Intervención judicial.*

En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia de la propia persona con discapacidad, de cualquier persona interesada o del Ministerio Fiscal, podrá acordar las medidas que considere oportunas para evitarle cualquier perjuicio o impedir los abusos en el ejercicio de las medidas de apoyo.

CAPÍTULO III LA AUSENCIA

Artículo 46.— *Defensor del desaparecido.*

Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haber tenido de ella más noticias, el nombramiento de defensor en la forma prevista en la legislación sobre jurisdicción voluntaria, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave, deberá recaer, por este orden, salvo que se aprecie motivo grave, en:

- a) El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho o el otro miembro de la pareja estable no casada.
- b) El heredero contractual del desaparecido.

- c) El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado, que discrecionalmente se designe, atendidas la cuantía de su porción hereditaria y la proximidad con el desaparecido.
- d) La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, oído el Ministerio Fiscal, discrecionalmente se designe, atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.

Artículo 47.— *Desaparición de cónyuge.*

En caso de desaparición de uno de los cónyuges, son de aplicación a la gestión de los bienes del consorcio conyugal los artículos 234 y 240.

Artículo 48.— *Legitimación.*

1. Tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de preferencia:
 - a) El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
 - b) El heredero contractual del desaparecido.
 - c) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
 - d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
2. Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.

Artículo 49.— *Representante del declarado ausente.*

Salvo que se aprecie motivo grave, el nombramiento de la persona encargada de la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones recaerá en las mismas personas enumeradas en el artículo 46 y por el mismo orden.

Artículo 50.— *Obligaciones del representante.*

1. El representante del declarado ausente quedará sujeto a las obligaciones siguientes:

- a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
 - b) Prestar la garantía que, atendidas las circunstancias, se le pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
 - c) Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
 - d) Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente.
2. Serán aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.

Artículo 51.— *Facultades y derechos del representante.*

1. Los representantes del declarado ausente disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos cuando el Letrado de la Administración de Justicia lo decida y en la cuantía que señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole.
2. Los representantes del declarado ausente necesitarán autorización de la Junta de Parientes o del Letrado de la Administración de Justicia en los mismos supuestos en los que el tutor precisa autorización parental o judicial.

Artículo 52.— *Derechos de terceros.*

Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda.

Artículo 53.— *Ausencia y economía del matrimonio.*

1. La gestión del patrimonio consorcial del declarado ausente se rige por lo dispuesto en el artículo 242.
2. El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su cónyuge se rigen por lo dispuesto en la regulación del derecho de viudedad durante el matrimonio.

Artículo 54.— *Ausencia y usufructo de viudedad.*

1. Fallecido el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los sucesores de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados, pero deberán hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo viudal del ausente.
2. Si apareciere el ausente, tendrá derecho desde ese momento al usufructo viudal, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Dicho derecho, conforme a lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 280 y en el apartado 2 del artículo 283, no se extenderá a los bienes enajenados por su cónyuge vigente la declaración de ausencia, ni a los que hubieran enajenado a título oneroso sus herederos antes de la aparición.
3. Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la apertura de la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales dejará a salvo el derecho de usufructo viudal a favor del cónyuge de dicho ausente.

Artículo 55.— *Llamamiento sucesorio a favor del ausente.*

1. Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de este deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales reservarán hasta la declaración de fallecimiento.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o causahabientes.

Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción.

3. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que reciban los que han resultado herederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este artículo.

TÍTULO II

DE LAS RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

CAPÍTULO I

EFFECTOS DE LA FILIACIÓN

Artículo 56.— *Principio de igualdad.*

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.

Artículo 57.— *Apellidos del hijo.*

1. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
2. El hijo, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, que se altere el orden de los apellidos.

Artículo 58.— *Deberes de padres e hijos.*

1. Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia.
2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.

Artículo 59.— *Padres con hijos menores.*

Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con el hijo menor, tienen el derecho y la obligación de:

- a) Velar por él.
- b) Visitarlo y relacionarse con él.
- c) Informarse recíprocamente, aun cuando vivan separados, acerca de la situación personal del hijo.

Artículo 60.— *Relación personal del hijo menor.*

1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja.
2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.
3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan separados.
4. La entidad pública competente regulará las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y demás parientes y allegados respecto de los menores declarados en situación de desamparo que se hallen bajo su tutela o bajo su guarda por resolución administrativa o judicial, pudiendo acordar motivadamente, en interés del hijo, la suspensión temporal de las visitas y comunicaciones previa audiencia de los afectados y del hijo si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. A tal efecto, el director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados informarán a la entidad pública de cualquier indicio de los efectos nocivos de estas visitas sobre el hijo.

El hijo, los afectados y el Ministerio Fiscal podrán oponerse a dichas resoluciones administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 61.— *Eficacia limitada de la filiación.*

1. Quedará excluido de la autoridad familiar y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el padre:
 - a) Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme.
 - b) Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.
2. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del padre en cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años, o, con anterioridad, su representante legal.
3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que cumpla los catorce años, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia.
4. El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en los artículos 58 y 59.

Artículo 62.— *Gastos de maternidad.*

El padre, aunque no esté casado o no conviva con la madre del hijo, está obligado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y parto, así como a prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre los parientes de esta, durante el período de embarazo y el primer año de vida del hijo si la madre se ocupa de él.

CAPÍTULO II
DEBER DE CRIANZA Y AUTORIDAD FAMILIAR

Sección 1.^a
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 63.— *Titularidad.*

1. El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres.
2. Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los casos legalmente previstos.

Artículo 64.— *Caracteres de la autoridad familiar.*

La autoridad familiar es una función inexcusable que se ejerce personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés del hijo.

Artículo 65.— *Contenido.*

1. La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes y derechos:
 - a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar o el de la persona o institución a que haya sido confiado, ni ser retirado de él por otras personas.
 - b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades.
 - c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años.
 - d) Corregirlos de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que atenten contra sus derechos.
2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos.

Artículo 66.— *Contribución personal del hijo.*

Mientras los hijos vivan con la familia tienen el deber de participar en el cuidado del hogar y colaborar en las tareas domésticas y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad, nivel de autonomía y aptitud personal, y sin que por ello tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Artículo 67.— *Contribución económica.*

1. Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del trabajo e industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo podrán destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente, otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios, pueden destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, según la situación económica de la familia, resulte equitativa.
2. En uso de su facultad, los padres pueden pedir la entrega de los frutos o la enajenación de los bienes de los hijos que ellos no administren.
3. La utilización para esos fines de frutos de bienes o bienes que correspondan al hijo por donación o sucesión no puede ser excluida por el donante o causante.

Artículo 68.— *Contribución cuando la autoridad familiar corresponda a otras personas.*

Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los que viva el hijo pueden destinar los productos del trabajo o industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación. Para ello podrán pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo. Esta facultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del hijo.

Artículo 69.— *Gastos de los hijos mayores o emancipados.*

1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y

educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

Artículo 70.— *Convivencia con hijos mayores de edad.*

La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación.

Sección 2.^a

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR POR LOS PADRES

Artículo 71.— *Ejercicio por ambos padres.*

1. Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuarán según lo que lícitamente hayan pactado en documento público. En defecto de previsión legal o pacto actuarán, conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares.
2. Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en correcto ejercicio de sus facultades.

Artículo 72.— *Ejercicio exclusivo por uno de los padres.*

1. El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción de la autoridad familiar del otro, y también cuando así se haya resuelto judicialmente.
2. En los supuestos y delitos contemplados en el artículo 80.6, desde que se inicie proceso penal por alguno de esos delitos contra uno de los progenitores, hasta la extinción de la responsabilidad penal, bastará el consentimiento del otro progenitor para la atención y asistencia psicológica a los

hijos e hijas menores de catorce años, debiendo ser previamente informado el primero. Para el mayor de catorce años se estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 24.

Artículo 73.— *Progenitor menor no emancipado o con discapacidad.*

1. El menor no emancipado que tenga suficiente madurez ejercerá la autoridad familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o de un defensor judicial.
2. El progenitor mayor de edad o emancipado con discapacidad la ejercerá por sí solo, o con los apoyos establecidos o que pueda necesitar para ello. En casos de desacuerdo o imposibilidad, la decisión corresponderá a la Junta de Parientes o a un defensor judicial.

Artículo 74.— *Divergencias entre los padres.*

1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo más favorable al interés del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.
2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atribuirlo total o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije.

Sección 3.^a

EFFECTOS DE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES CON HIJOS A CARGO

Subsección 1.^a

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 75.— *Objeto y finalidad.*

1. La presente Sección tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los supuestos de

separación, nulidad y divorcio y los procesos que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores.

2. La finalidad de esta sección es promover, en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, unas relaciones continuadas de estos con sus hijos mediante una participación responsable, compartida e igualitaria de ambos en su crianza y educación, y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación paterno filial. Asimismo, pretende que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre los padres a través de la mediación familiar, contemplada en esta Sección.
4. A los efectos de esta sección, se consideran hijos a cargo los comunes tanto menores como mayores de edad que se encuentren en situación de dependencia, ya sea por razón de discapacidad o por encontrarse en la situación del artículo 69.

Artículo 76.— *Derechos y principios.*

1. La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar ni a los deberes derivados de la relación paterno filial.
2. Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.
3. En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se respetarán los siguientes derechos:
 - a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar.
 - b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la igualdad en sus relaciones familiares.
4. Los hijos tienen derecho a ser oídos antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona.

5. Los anteriores derechos se armonizarán de acuerdo con los principios de libertad de pacto, de información recíproca y de lealtad en beneficio del hijo.

Subsección 2.^a

EL PACTO DE RELACIONES FAMILIARES

Artículo 77.— *El pacto de relaciones familiares.*

1. Los padres podrán otorgar un pacto de relaciones familiares como consecuencia de la ruptura de su convivencia, en el que fijarán los términos de sus nuevas relaciones familiares con los hijos.
2. El pacto de relaciones familiares deberá concretar, como mínimo, los acuerdos sobre los siguientes extremos relacionados con la vida familiar:
 - a) El régimen de convivencia o de visitas con los hijos.
 - b) El régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
 - c) El destino de la vivienda y el ajuar familiar.
 - d) La participación con la que cada progenitor contribuya a sufragar los gastos ordinarios de los hijos, incluidos en su caso los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan recursos económicos propios, la forma de pago, los criterios de actualización y, en su caso, las garantías de pago. También se fijarán la previsión de gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los mismos.
 - e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial.
 - f) La asignación familiar compensatoria, en su caso, que podrá determinarse en forma de pensión, entrega de capital o bienes, así como la duración de la misma.
3. La modificación o extinción del pacto de relaciones familiares se podrán llevar a cabo en los siguientes supuestos:
 - a) Por mutuo acuerdo de los padres.

- b) En virtud de las causas que consten en el propio pacto de relaciones familiares.
 - c) A petición de uno de los padres al sobrevenir circunstancias relevantes.
 - d) Por iniciativa del Ministerio Fiscal, en su función de velar por los derechos de los hijos menores o con discapacidad.
 - e) Por privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar a uno de los padres sobrevenida al pacto de relaciones familiares.
 - f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.
4. El pacto de relaciones familiares y sus modificaciones producirán efectos cuando sean aprobados por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y principios recogidos en el artículo anterior.
5. El Juez aprobará el pacto de relaciones familiares, salvo en aquellos aspectos que sean contrarios a normas imperativas o cuando no quede suficientemente preservado el interés de los hijos menores de edad no emancipados o resulten dañosos o gravemente perjudiciales para los hijos mayores o emancipados afectados. Si el pacto de relaciones familiares no fuera aprobado en todo o en parte, se concederá a los progenitores un plazo para que propongan uno nuevo, limitado, en su caso, a los aspectos que no hayan sido aprobados por el Juez. Presentado el nuevo pacto, o transcurrido el plazo concedido sin haberlo hecho, el Juez resolverá lo procedente.
6. Cuando del régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas se deriven derechos y obligaciones para estos, el Juez deberá darles audiencia antes de su aprobación.
7. Cuando no existan hijos menores no emancipados o hijos mayores o emancipados respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el pacto de relaciones familiares podrá acordarse ante el Letrado de la Administración de Justicia o en

escritura pública ante Notario, sin que deba ser aprobado por el Juez.

Si el Letrado de la Administración de Justicia o el Notario considerasen que el pacto pretendido pudiera ser contrario a normas imperativas o dañoso o gravemente perjudicial para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los progenitores solo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de pacto de relaciones familiares.

Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo pacto, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.

Subsección 3.^a **MEDIACIÓN FAMILIAR**

Artículo 78.— *Mediación familiar.*

1. Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.
2. En caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y designar para ello un mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.
3. Iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.
4. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar deberán ser aprobados por el Juez, en los

términos establecidos en el artículo anterior para el pacto de relaciones familiares.

5. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 80.

Subsección 4.^a

MEDIDAS DE APLICACIÓN EN DEFECTO DEL PACTO DE RELACIONES FAMILIARES

Artículo 79.— *Medidas judiciales.*

1. A falta de pacto entre los padres, el Juez determinará las medidas que deberán regir las relaciones familiares tras la ruptura de su convivencia, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los artículos siguientes. Podrá acordar también, si lo estima necesario, las medidas de apoyo que procedan en los supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 38.
2. El Juez, de oficio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier pariente o persona interesada o del Ministerio Fiscal, dictará las medidas necesarias a fin de:
 - a) Garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
 - b) Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas.
 - c) Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda y custodia.
3. El Juez podrá disponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
4. El incumplimiento grave o reiterado de las medidas aprobadas judicialmente podrá dar lugar a su modificación o a la exigencia de su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en las normas de ejecución judicial.
5. Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurren causas o circunstancias relevantes.

En particular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia Sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida.

Artículo 80.— *Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos.*

1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o el régimen de convivencia de los hijos mayores o emancipados con discapacidad a su cargo sean ejercidos de forma compartida por ambos o por uno solo de ellos.

En los casos de atribución compartida, se fijará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad.

En los casos de atribución individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor.

2. El Juez adoptará la custodia o convivencia compartida o individual de los hijos atendiendo a su interés, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:
 - a) La edad de los hijos y, en su caso, las necesidades derivadas de su discapacidad.
 - b) El arraigo social y familiar de los hijos.
 - c) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente madurez y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años y, si se trata de hijos con discapacidad, si tienen suficiente discernimiento.
 - d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos.

- e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.
 - f) La dedicación de cada progenitor/a al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia.
 - g) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.
3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia o convivencia.
 4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos.
 5. La objeción a la custodia o convivencia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener la custodia o convivencia individual no será base suficiente para considerar que la custodia o convivencia compartida no coincide con el mejor interés del hijo.
 6. No procederá la atribución de la custodia o convivencia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Artículo 81.— *Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.*

1. En los casos de custodia o convivencia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares.

2. Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia o convivencia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.
3. La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia.
4. Cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares.
5. El ajuar familiar permanecerá en el domicilio familiar salvo que se solicite en el plan de relaciones familiares la retirada de bienes privativos. En el caso de que ninguno de los padres continúe en el domicilio familiar se decidirá la entrega de los bienes entre los mismos según las relaciones jurídicas que les sean aplicables.

Artículo 82.— *Gastos de asistencia a los hijos.*

1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.
2. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres.
3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia o convivencia y, si es necesario, fijará un pago periódico entre los mismos.
4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto.

Artículo 83.— *La asignación compensatoria.*

1. El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria.
2. La cuantía y la naturaleza temporal o indefinida de la asignación serán determinadas por el Juez mediante la ponderación equitativa de los siguientes criterios:
 - a) Los recursos económicos de los padres.
 - b) La edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.
 - c) La edad y otras circunstancias de los hijos.
 - d) La atribución del uso de la vivienda familiar.
 - e) Las funciones familiares desempeñadas por los padres.
 - f) La duración de la convivencia.
3. La asignación compensatoria podrá tener cualquier contenido patrimonial, periódico o de única entrega, siempre que permita el cumplimiento de su finalidad.
4. La asignación compensatoria se revisará en los casos de variación sustancial de la situación económica del perceptor o del pagador.
5. La asignación compensatoria se extinguirá en los supuestos de nueva convivencia marital del perceptor, alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó, la muerte del perceptor, cumplimiento del plazo de duración, así como por el incumplimiento de su finalidad.

Subsección 5.^a

MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 84.— *Medidas provisionales.*

En los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, el Juez, a petición del padre, madre, hijos a cargo

mayores de catorce años o del Ministerio Fiscal en su función legal de velar por los derechos de los hijos menores o con discapacidad, podrá acordar la adopción de medidas provisionales sobre las relaciones familiares de acuerdo con los criterios establecidos en la presente sección.

Sección 4.^a

AUTORIDAD FAMILIAR DE OTRAS PERSONAS

Artículo 85.— *Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.*

1. El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad.
2. Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge podrá continuar teniendo en su compañía a los hijos menores de aquel y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.

Artículo 86.— *Autoridad familiar de los abuelos.*

1. Fallecidos los padres, si no se hace aplicación de lo previsto en el artículo anterior, o cuando de hecho aquellos no atiendan a sus hijos menores, los abuelos podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
2. Tendrán preferencia los abuelos de la rama con los que mejor relación tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan separados, la preferencia corresponderá al que de ellos más se ocupe del nieto y, en última instancia, al de menor edad.

Artículo 87.— *Autoridad familiar de los hermanos mayores.*

1. En los mismos supuestos del artículo anterior, a falta de abuelos que se hagan cargo de la crianza y educación de los nietos, podrá hacerlo uno de sus hermanos mayor de edad, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
2. Tendrá preferencia el hermano que mejor relación tenga con el menor y, en última instancia, el de mayor edad.

Artículo 88.— *Régimen.*

1. La autoridad familiar prevista en los artículos anteriores se asume de forma automática al hacerse cargo voluntariamente de la crianza y educación del menor.
2. Se estará al orden y al contenido señalados por la ley, salvo que, fallecidos los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su autoridad familiar hubiera establecido otra cosa en instrumento público.
3. Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento del oficio de criar y educar al menor, comprende, en el ámbito personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y no se extiende a la gestión de los bienes del menor.
4. Si no viven los padres, solo por motivos de mal trato o incumplimiento de dicha función podrá ser separado el menor del titular o titulares de esta autoridad.
5. La autoridad familiar de otras personas se podrá hacer constar en el Registro Civil.

Artículo 89.— *Divergencias.*

1. En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cualquiera de los interesados en ella puede solicitar al Juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin.
2. La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma de ejercicio, oír a los interesados y al menor que reúna los requisitos del artículo 6, y, teniendo en cuenta la previsión expresada al respecto si la hubiera, decidirá siempre en interés del menor; si el interés del menor lo requiere, promoverá otro régimen de guarda o protección.
3. Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar se resolverán según lo previsto para los padres.

Sección 5.^a
PRIVACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
DE LA AUTORIDAD FAMILIAR

Artículo 90.— *Privación.*

1. En interés del hijo, cualquiera de los padres podrá ser privado total o parcialmente de la autoridad familiar por sentencia firme fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
2. Los Tribunales podrán, en interés del hijo, acordar la recuperación de la autoridad familiar cuando hubiere cesado la causa que motivó su privación.
3. Este precepto será aplicable a la autoridad familiar de otras personas.

Artículo 91.— *Suspensión.*

1. La autoridad familiar quedará en suspenso, en su caso solo para el titular afectado, mientras dure:
 - a) La tutela automática de la entidad pública.
 - b) La declaración de fallecimiento o ausencia del titular o titulares, o de alguno de ellos, así como la declaración de fallecimiento del hijo.
 - c) La imposibilidad de ejercerla declarada en resolución judicial.
2. La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas no conlleva la suspensión de la de los padres.

Artículo 92.— *Consecuencias de la privación o suspensión.*

1. La privación o suspensión de la autoridad familiar no suprime las obligaciones de los padres establecidas en los artículos 58 y 59.
2. Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno solo de los titulares, continúa ejerciéndola el otro conforme al artículo 72.
3. La resolución judicial que establezca la privación o suspensión de la autoridad familiar a ambos titulares, o al único

titular de ella, determinará el régimen de guarda o protección, y nombrará a la persona o personas que hayan de cumplir estas funciones. Si la resolución estableciera la autoridad familiar de otras personas, proveerá también sobre la administración y disposición de los bienes del menor.

Artículo 93.— *Extinción.*

1. La autoridad familiar se acaba:
 - a) Por la muerte de los titulares o del hijo.
 - b) Por la emancipación o mayoría de edad del hijo.
2. En caso de adopción del hijo se extingue la autoridad de los padres anteriores, salvo si subsisten los vínculos jurídicos con alguno de ellos.

CAPÍTULO III **GESTIÓN DE LOS BIENES DE LOS HIJOS**

Artículo 94.— *Ejercicio de la gestión paterna.*

1. Cuando corresponda a los padres la gestión de los bienes del hijo, incluida la disposición hasta que este tenga catorce años, ejercerán esta función conforme a lo dispuesto para la autoridad familiar; en su caso cumplirán lo ordenado válidamente por la persona de quien procedan los bienes por donación o sucesión.
2. Se exceptúan de la gestión paterna:
 - a) Los bienes que el hijo adquiriera por sucesión en la que uno de los padres o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados indignos de suceder.
 - b) Los bienes dejados en título sucesorio o donados al hijo con exclusión de la administración de los padres.
3. Los bienes del apartado 2 serán gestionados, si nada ha ordenado el causante o donante, por el otro padre, o, si los dos están afectados, por un tutor real nombrado por el Juez.

Artículo 95.— *Obligaciones.*

1. Los padres gestionarán los bienes del hijo con la misma diligencia que los suyos propios, cumplirán las obligaciones

generales de todo administrador e inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.

2. Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gestión al cesar en ella. Solo tendrán que formalizar inventario o prestar fianza cuando existan fundados motivos para ello.

Artículo 96.— *Responsabilidad.*

1. Si en el ejercicio de la gestión se causa daño al patrimonio del hijo por dolo o culpa grave, responderán los padres o el que de ellos tenga atribuida en exclusiva la administración.
2. La responsabilidad será solidaria salvo si uno acredita no haber podido evitar el daño, en cuyo caso quedará exonerado de responsabilidad.
3. El padre que no haya intervenido en la gestión causante del daño podrá repetir del otro la totalidad de lo pagado.
4. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde que finalice su administración.

Artículo 97.— *Derechos.*

Los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la gestión, pero será a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los gastos soportados, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos sin su culpa que no pueda obtenerse de otro modo.

Artículo 98.— *Puesta en peligro del patrimonio del hijo.*

Cuando la gestión de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la gestión, o incluso nombrar un tutor real.

Artículo 99.— *Obligaciones al finalizar la administración.*

1. Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración deben restituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro caso, a quien corresponda la administración. Los gastos de restitución son a cargo del

hijo. En caso de muerte del hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los padres deben continuar atendiendo los negocios de este para evitar perjuicios a los herederos.

2. Al cesar la administración de los padres o de alguno de ellos, podrán exigirles la rendición de cuentas de su administración:
 - a) El hijo mayor de edad o emancipado.
 - b) El hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o aquel a quien corresponda la administración de sus bienes.
 - c) El representante legal del hijo menor de catorce años.

La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.

3. Solicitada la rendición de cuentas, deberá realizarse en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la reclamación. Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres meses como máximo.
4. El que no haya cumplido dieciocho años necesita, para aprobar las cuentas de administración de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de la misma, la asistencia de la Junta de Parientes o autorización judicial.

TÍTULO III

NORMAS COMUNES A LAS RELACIONES TUTELARES Y MEDIDAS DE APOYO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 100.— *Instituciones tutelares de menores.*

1. La guarda y protección de la persona y bienes o solo de la persona o de los bienes del menor se realizará, en los supuestos previstos en la ley, mediante:

- a) La tutela.
 - b) La curatela del emancipado.
 - c) El defensor judicial.
2. A la guarda y protección del menor pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela.

Artículo 101.— *Medidas de apoyo a personas con discapacidad.*

El apoyo que la persona mayor de edad o emancipada pueda necesitar para el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad se realizará, en atención a las circunstancias concurrentes y a lo previsto en la ley, mediante:

- a) El mandato de apoyo.
- b) La guarda de hecho.
- c) La curatela.
- d) El defensor judicial.

Artículo 102.— *Caracteres.*

1. La aceptación y el ejercicio de las funciones tutelares y de las medidas de apoyo judiciales constituyen un deber del que solo cabe excusarse en los supuestos legalmente previstos.
2. Las funciones tutelares y las medidas de apoyo se ejercen personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas.
3. Las funciones tutelares se ejercen siempre en interés del menor y las medidas de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.
4. Las funciones tutelares y las medidas de apoyo están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido expresamente una remuneración.

Artículo 103.— *Modos de delación.*

1. La tutela y la curatela se defieren por:
 - a) Disposición voluntaria en instrumento público.

b) Resolución judicial.

c) Disposición de la ley en caso de desamparo de menores.

2. La delación dativa es subsidiaria y complementaria de la voluntaria.

Artículo 104.— *Nombramiento.*

El Juez nombrará al tutor y al curador y el Letrado de la Administración de Justicia les dará posesión del cargo.

Artículo 105.— *Vigilancia y control.*

1. En defecto de medidas de vigilancia y control establecidas voluntariamente en instrumento público sobre tutela, curatela o mandato de apoyo, o si el Juez o el Ministerio Fiscal consideran insuficientes las establecidas, la autoridad judicial establecerá en la resolución por la que constituya la tutela o curatela, o en otra posterior, las medidas oportunas para evitar abusos y conflictos de intereses en su ejercicio. La autoridad judicial también podrá establecer para el guardador de hecho las medidas de control y vigilancia o las salvaguardias que estime necesarias.

2. El Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrán exigir en cualquier momento al tutor, al curador, al mandatario de apoyo y al guardador de hecho que les informe de la situación de la persona y bienes del sujeto a tutela o curatela, de su mandante o de la persona bajo su guarda, así como de su actuación en relación con ambos extremos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de estas instituciones o medidas. También podrán exigirles una información periódica.

3. Las funciones tutelares y las medidas de apoyo se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.

Artículo 106.— *Fianza.*

1. La autoridad judicial, cuando lo considere necesario por concurrir razones excepcionales, podrá exigir a cualquier tutor o curador la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad

y cuantía de la misma. Una vez constituida, la fianza será objeto de aprobación judicial.

2. La Junta de Parientes, del mismo modo, podrá exigir la prestación de fianza tanto al tutor como al curador.
3. En cualquier momento la autoridad judicial podrá modificar o dejar sin efecto la garantía que se hubiese prestado.
4. Las personas jurídicas públicas que ejerzan la tutela o la curatela en cualquiera de sus modalidades no vienen obligadas a prestar fianza.

Artículo 107.— *Inventario.*

1. Desde la toma de posesión del cargo, el tutor o curador que preste apoyos representativos vendrá obligado a hacer inventario notarial o judicial de los bienes del sujeto a tutela o curatela en el plazo otorgado.
2. El inventario judicial se formará ante el Letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo con la legislación sobre jurisdicción voluntaria. En el notarial intervendrá la Junta de Parientes y el tutor o curador depositará una copia en el Juzgado que haya acordado la medida de apoyo.
3. El tutor o curador que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra la persona con discapacidad se entenderá que los renuncia.
4. El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del letrado de la Administración de Justicia o de la Junta de Parientes, no deban quedar en poder del tutor o curador serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto.

Artículo 108.— *Gastos, daños y perjuicios.*

1. Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la función tutelar o la prestación de medidas de apoyo, incluidos, en su caso, los de realización del inventario, prestación de fianza y medidas de vigilancia y control, son a cargo del patrimonio del menor o de la persona con discapacidad, contra quien tendrá derecho de reembolso.

2. La persona que en el ejercicio de una función tutelar o medida de apoyo sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los bienes del menor o persona con discapacidad, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

Artículo 109.— *Remuneración.*

1. El derecho a remuneración por el desempeño de una función tutelar o medida de apoyo, así como la cuantía y forma de percibirla, podrán ser establecidos, siempre que el patrimonio del menor o persona con discapacidad lo permita y sin exceder del veinte por ciento de su rendimiento líquido, en la delación voluntaria. En otro caso, podrán hacerlo en todo momento la Junta de Parientes o el Juez, en atención a la dedicación que suponga el ejercicio de la función tutelar o medida de apoyo. La remuneración podrá ser fijada en especie si el titular de la institución o medida convive con el menor o persona necesitada de apoyo.
2. La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrá modificar en cualquier momento la remuneración prevista si han cambiado las circunstancias de la institución tutelar o medida de apoyo.
3. El ejercicio de la función tutelar o medida de apoyo por las personas jurídicas públicas será siempre gratuito.

Artículo 110.— *Responsabilidad.*

1. Todo el que intervenga en funciones tutelares o de apoyo responderá de los daños que su actuación cause al menor o persona con discapacidad por acción u omisión en la que intervenga culpa o negligencia.
2. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde el cese en el cargo o, en su caso, desde la rendición final de cuentas.

Artículo 111.— *Publicidad.*

1. Las resoluciones judiciales o administrativas y los documentos públicos notariales sobre instituciones tutelares de menores, incluida la guarda administrativa, o sobre medidas

de apoyo a mayores con discapacidad, así como los poderes preventivos sin mandato, se inscribirán en el registro individual del menor o de la persona con discapacidad en el Registro Civil. La inscripción expresará la extensión y límites de las medidas judiciales de apoyo.

Solo serán oponibles frente a terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones.

2. Quien preste apoyos de carácter patrimonial a una persona con discapacidad o ejerza la tutela de un menor, procurará:
 - a) Solicitar la inscripción de los bienes o derechos del menor o de la persona con discapacidad en el registro que corresponda.
 - b) Hacer constar la existencia de la medida de apoyo en vigor, en los registros públicos de bienes y derechos que corresponda de acuerdo con su correspondiente normativa.

Artículo 112.— *Administración voluntaria.*

1. El que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o persona con discapacidad provista de apoyos asistenciales o representativos puede establecer reglas de gestión, así como nombrar o excluir al administrador. Las funciones no conferidas al administrador, incluida la prestación de la debida asistencia, corresponden a los padres, al tutor o a la persona que preste los apoyos referidos.
2. El nombramiento del administrador no será eficaz sino desde la adquisición de la donación, herencia o legado.
3. El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorización de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes.
4. Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el administrador, a falta de sustituto voluntario, administrarán los padres, el tutor o la persona que preste el apoyo, salvo si resultare con claridad que fue otra la voluntad del disponente. En este caso se nombrará un tutor real para el menor y un defensor judicial para la persona requerida de apoyo.

5. La administración no tendrá la consideración de institución tutelar ni de medida de apoyo de la persona con discapacidad, si bien le será de aplicación lo establecido en los artículos 105, 108 y 110.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES VOLUNTARIAS SOBRE TUTELA O CURATELA

Artículo 113.— *Designación hecha por uno mismo.*

1. Conforme al principio *standum est chartae*, cualquier persona mayor de catorce años y con aptitud suficiente conforme al artículo 40, en previsión de quedar sujeta a tutela o de que concurren causas que dificulten el ejercicio de su capacidad jurídica, podrá, en escritura pública, designar a las personas que han de ejercer la función de tutor o curador y sus sustitutos, excluir a determinadas personas, así como dispensar las causas de inhabilidad conforme al apartado 2 del artículo 124.

El menor mayor de catorce años no emancipado necesitará para ello la debida asistencia y las disposiciones voluntarias que establezca sobre la curatela no tendrán eficacia hasta su mayoría de edad o emancipación.

Las mismas disposiciones podrá establecer la persona con discapacidad sujeta a curatela no representativa si actúa con la asistencia del curador.

2. Las mismas personas también podrán establecer los requisitos que debe reunir el tutor o curador, así como delegar en otra persona su elección de entre los que haya relacionado en la escritura pública o reúnan esos requisitos.
3. Toda persona designada voluntariamente para prestar apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica que no se configure como mandatario se considerará designado para ser curador, con independencia de la denominación que se le atribuya.
4. La entidad pública competente en materia de protección de menores o de promoción de la autonomía y asistencia de las

personas con discapacidad no podrá ser objeto de designación o exclusión voluntaria.

Artículo 114.— *Otras disposiciones voluntarias.*

1. Las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior podrán establecer en escritura pública disposiciones sobre el funcionamiento de la tutela o curatela y relativas a su persona y bienes, entre ellas:
 - a) Instrucciones relativas a su vida personal.
 - b) Reglas sobre administración y disposición de sus bienes. Podrán eximir al tutor o curador con facultad de representación de la autorización o aprobación de la Junta de Parientes o del Juez para llevar a cabo los actos regulados en el artículo 169-24, salvo los de carácter gratuito.
 - c) Establecer órganos de fiscalización de la actuación del tutor o curador, así como designar a las personas que hayan de integrarlos y determinar los requisitos que deben reunir. También podrán encomendar la fiscalización a la Junta de Parientes.
 - d) Establecer retribución para el tutor o curador.
 - e) Excluir la obligación de prestar fianza.
2. En ningún caso pueden excluir la vigilancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal, ni liberar al tutor o curador de su obligación de formar inventario y de rendir cuentas, ni de su responsabilidad por los daños y perjuicios que su actuación les pueda ocasionar, ni dejar sin efecto las causas legales de remoción. Tampoco pueden autorizar su actuación sin intervención de la Junta de Parientes o el defensor judicial si hubiera oposición de intereses entre la persona con discapacidad y el curador.

Artículo 115.— *Disposiciones de los titulares de la autoridad familiar sobre tutela.*

1. Las mismas disposiciones de los dos artículos anteriores podrán adoptar en instrumento público notarial, sea o no testamento, los titulares del ejercicio de la autoridad familiar respecto de la persona o bienes de los menores que sigan

bajo su autoridad para cuando llegue el día en el que ya no puedan ocuparse de ellos y deban quedar sujetos a tutela.

2. Las disposiciones testamentarias serán eficaces al fallecimiento del testador salvo que entonces se hallara privado por su culpa del ejercicio de la autoridad familiar; las hechas en escritura pública lo serán además en caso de que el disponente no pueda ejercer la autoridad familiar por causa no culpable.
3. Si hubiera disposiciones del propio menor conforme al artículo 113, prevalecerán sobre las de los titulares de la autoridad familiar en cuanto sean incompatibles.

Artículo 116.— *Disposiciones de los progenitores sobre la futura curatela de sus hijos.*

1. Cualquiera de los progenitores titulares del ejercicio de la autoridad familiar sobre menores con discapacidad o en previsión de llegar a tenerla podrá establecer en escritura pública disposiciones voluntarias sobre su curatela para cuando estos lleguen a la mayoría de edad y ninguno de los titulares de la autoridad familiar pueda ocuparse de ellos.
2. Cualquiera de los progenitores nombrados curadores con facultades de representación podrá también establecer en escritura pública disposiciones sobre la futura curatela del hijo para cuando dejen de ser curadores por causa distinta a la de su remoción.
3. Las mismas disposiciones podrán establecerse para la curatela a que quede sujeto el hijo emancipado.
4. A las disposiciones así establecidas les será aplicable el régimen de las disposiciones sobre autocratela. En todo caso, las disposiciones de la autocratela prevalecerán sobre las de los progenitores en cuanto sean incompatibles.

Artículo 117.— *Pluralidad de designados.*

1. Se puede designar tutor o curador a una o dos personas para que actúen conjunta o solidariamente. Designados dos tutores o curadores sin especificar la forma de actuación lo harán conjuntamente.

2. También se puede designar un tutor o curador para el ámbito personal y otro para el patrimonial.
3. Puede designarse un número indefinido de tutores o curadores para su actuación sucesiva.

Artículo 118.— *Disposiciones incompatibles.*

1. En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma persona, prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.
2. Cuando hayan sido designados varios sustitutos sucesivos sin concretar su orden, si lo han sido en documentos distintos, prevalece el posterior y, si lo han sido en el mismo documento, será preferido el propuesto en primer lugar.
3. Cuando existieren disposiciones de varias personas, se aplicarán unas y otras conjuntamente, en cuanto fueren compatibles. De no serlo, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez adoptará las que consideren más convenientes para el menor o la persona con discapacidad.
4. Si se hubiesen designado distintas personas para el ejercicio de la tutela o curatela, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez, elegirán al designado o designados por uno de ellos. A los no elegidos como tutores o curadores de la persona por la Junta o el Juez, corresponde la administración y disposición de los bienes que quien les designó haya atribuido por donación, herencia o legado al menor o persona con discapacidad.

Artículo 119.— *Vinculación de las disposiciones voluntarias.*

1. Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones voluntarias sobre la tutela o curatela vincularán al Juez, salvo que, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas llamadas por ley a ejercer la tutela o curatela o del Ministerio Fiscal, y siempre mediante decisión motivada, aprecie que se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias o que concurren hechos relevantes no tenidos en cuenta.
2. Las disposiciones voluntarias relativas a su propia persona serán vinculantes para el tutor o curador, salvo que su cumplimiento sea imposible o extraordinariamente difícil.

CAPÍTULO III
DELACIÓN DATIVA DE LA TUTELA O CURATELA

Artículo 120.— *Supletoriedad.*

En defecto, total o parcial, de disposición voluntaria válida y eficaz, corresponde a la autoridad judicial, oído el menor o la persona que requiere el apoyo, determinar o completar la tutela o curatela y, en su caso, designar a su titular.

Artículo 121.— *Designación.*

1. A falta de designación voluntaria válida y eficaz, para designar al titular de la tutela el Juez preferirá, por este orden:
 - a) A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden señalado por este libro para el ejercicio de la autoridad familiar.
 - b) Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de bienes en favor del menor.
 - c) A la persona que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, considere más idónea.
 - d) A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última instancia la entidad pública a la que esté encomendada la protección de menores.
2. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del apartado anterior si el interés del menor así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor.
3. A falta de designación voluntaria válida y eficaz, la autoridad judicial designará curador a quien considere más idóneo entre los siguientes:
 - a) El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
 - b) Los progenitores.
 - c) Quien estuviera actuando como guardador de hecho.
 - d) El hijo o descendiente mayor de edad. Si fueran varios, será preferido el que de ellos conviva con la persona con discapacidad.

- e) La persona o personas que el cónyuge o la pareja conviviente hubieran sugerido en documento público.
- f) Los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, otros parientes o allegados.
- g) La persona jurídica o entidad pública en la que concurren las condiciones establecidas en la ley.

Artículo 122.— *Tutela o curatela de varios hermanos.*

Si hubiese que designar tutor, curador o defensor judicial para varios hermanos de doble vínculo, se procurará que el nombramiento recaiga en la misma persona.

CAPÍTULO IV

CAPACIDAD, EXCUSA Y REMOCIÓN

Artículo 123.— *Capacidad.*

1. Podrá ser titular de funciones tutelares o medidas de apoyo toda persona mayor de edad que, encontrándose en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, no incurra en causa de inhabilidad.
2. También podrá ser titular de funciones tutelares o medidas de apoyo la persona jurídica que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección del menor o la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, siempre que no incurra en causa de inhabilidad.

Artículo 124.— *Causas de inhabilidad.*

1. No pueden ser titulares de funciones tutelares o medidas de apoyo:
 - a) Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el ejercicio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial o administrativa.
 - b) Las legalmente removidas de un cargo tutelar o medida de apoyo anterior.

- c) Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.
 - d) Las condenadas por un delito de violencia doméstica o de género.
 - e) Las condenadas por otro delito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñarán bien la función.
 - f) Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
 - g) Las que tengan enemistad manifiesta con el menor o la persona con discapacidad.
 - h) Las personas que por su conducta puedan perjudicar la formación del menor o la promoción e integración de la persona con discapacidad o que no dispongan de medios de vida conocidos.
 - i) Las que tengan importantes conflictos de intereses con el menor o la persona con discapacidad.
 - j) Las personas que hayan sido inhabilitadas para administrar bienes ajenos, mientras dure la inhabilitación, salvo que la tutela o curatela lo sea exclusivamente de la persona.
 - k) Las personas a quienes les sea imputable, de forma directa o como cómplices, la declaración como culpable de un concurso, salvo que la tutela o curatela lo sea exclusivamente de la persona.
2. No obstante, será válida la designación, conforme a las disposiciones de la autotutela o autocuratela, de un tutor o curador que incurra en las causas de las letras e), i) y k) del apartado anterior, siempre que quien haga la designación conociera su concurrencia y salvo que el Juez la considere no vinculante según lo dispuesto en el artículo 119.
3. En defecto de designación conforme a las disposiciones de la autotutela o autocuratela, también podrá el Juez nombrar un tutor o curador incurso en alguna de las causas a que se refiere el apartado anterior, siempre que concurren circunstancias excepcionales.

Artículo 125.— *Excusa.*

1. Tanto el desempeño inicial de la tutela o curatela como la continuación en su ejercicio serán excusables cuando, por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase con el menor o la persona con discapacidad o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo o su continuación.
2. Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el inicio o continuación del adecuado desempeño del cargo.
3. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá alegarla en cualquier momento, siempre que hubiera persona adecuada para sustituirle.

Artículo 126.— *Causas de remoción.*

1. Será removido del cargo el que después de tomar posesión incurra en causa legal de inhabilidad o se conduzca mal en el desempeño de su función, por incumplimiento de los deberes propios de la misma o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surjan problemas de convivencia graves y continuados.
2. Además, la persona jurídica será removida del cargo cuando deje de reunir los requisitos del apartado 2 del artículo 123.

Artículo 127.— *Procedimiento de remoción.*

La autoridad judicial, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o persona con discapacidad o de otra persona interesada, decretará la remoción del cargo, previa audiencia de este si, citado, compareciese.

Artículo 128.— *Efectos de la excusa o remoción.*

1. Durante la tramitación del procedimiento de excusa sobrevenida o de remoción, podrá el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al titular del cargo y se nombrará un defensor judicial.

2. La resolución que admita la excusa u ordene la remoción debe contener la designación de un nuevo titular, que solo podrá ocupar el cargo cuando la resolución sea firme.
3. En el procedimiento que corresponda, el Juez podrá acordar, atendidas la voluntad del disponente y las circunstancias del caso, que la aceptación de la excusa o la remoción conlleve la pérdida, total o parcial, de aquello que se haya dejado en consideración al nombramiento.

CAPÍTULO V

EL DEFENSOR JUDICIAL

Artículo 129.— *Supuestos.*

Se nombrará un defensor judicial que represente o asista a quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el menor o persona con discapacidad y quienes lo representen o asistan y, conforme a lo previsto en la ley, corresponda intervenir a un defensor judicial.
- b) Cuando, por cualquier causa, los titulares de la autoridad familiar, tutela o curatela o los mandatarios de apoyo no desempeñen sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe por resolución firme otra persona para desempeñarlas.
- c) Cuando se hubiera promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo a la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial.
- d) En todos los demás casos previstos en la ley, a los que lo regulado en este título solo será de aplicación supletoria.

Artículo 129-1.— *Nombramiento.*

Conforme a lo regulado en la legislación sobre jurisdicción voluntaria se nombrará defensor a la persona que se estime más idónea para el cargo.

Artículo 129-2.— *Régimen.*

1. El defensor judicial tendrá las atribuciones que se le hayan concedido y deberá dar cuenta de su gestión una vez concluida.
2. Los actos otorgados por el defensor judicial en representación del menor o de la persona con discapacidad no requerirán autorización o aprobación de la Junta de parientes o del Juez, salvo que en su nombramiento se disponga otra cosa.
3. Serán de aplicación al defensor judicial, con las necesarias adaptaciones, las disposiciones establecidas para la vigilancia y control y la inhabilidad, excusa y remoción del tutor o curador.

TÍTULO IV
RELACIONES TUTELARES DE MENORES

CAPÍTULO I
LA TUTELA

Sección 1.^a
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 130.— *Personas sujetas a tutela.*

1. Estarán sujetos a tutela ordinaria los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad familiar. En caso de autoridad familiar de otras personas se nombrará tutor de los bienes que carezcan de administrador.
2. Los menores declarados en situación de desamparo estarán sujetos a tutela automática.

Artículo 131.— *Promoción de la tutela ordinaria.*

1. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela desde el momento en que conocieren el hecho que la motiva los llamados a ella por disposición voluntaria y los

mencionados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 121, así como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor, y, si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Si el Ministerio Fiscal o el juez competente tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción algún menor que deba ser sometido a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.
3. Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, a fin de que se dé inicio al expediente de jurisdicción voluntaria legalmente previsto para su constitución.

Artículo 132.— *Tutela provisional.*

Quando se tenga conocimiento de que un menor puede ser sometido a tutela, y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, se podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.

Artículo 133.— *Constitución de la tutela ordinaria.*

1. El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de las personas obligadas a promoverla y de las demás que considere oportuno.
2. Antes de la constitución, el Juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de Última Voluntad, a efectos de comprobar la existencia de disposiciones voluntarias sobre la tutela.

Artículo 134.— *Número de tutores.*

La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:

- a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
- b) Cuando por disposición voluntaria se haya designado a dos tutores para actuar simultáneamente.

- c) Cuando la tutela corresponda a ambos abuelos paternos o maternos, así como a una persona casada si el Juez considera conveniente que su cónyuge, mientras lo sea, también la ejerza.

Artículo 135.— *Tutela y administración.*

El tutor es el administrador legal de los bienes del tutelado. No obstante, la administración podrá corresponder, en todo o en parte, a otras personas:

- a) Cuando la persona de quien procedan los bienes por título lucrativo haya designado para ellos un administrador, así como en el supuesto del apartado 4 del artículo 118.
- b) Cuando por disposición voluntaria se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
- c) Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que conviene separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes. También podrá hacer esta separación con posterioridad cuando concurren circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.

Sección 2.^a

CONTENIDO Y EJERCICIO DE LA TUTELA

Artículo 136.— *Contenido personal de la tutela.*

Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y tienen en cada etapa de su evolución el mismo contenido que la autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en este título.

Artículo 137.— *Alimentos.*

A falta o por insuficiencia del patrimonio del pupilo, así como de parientes obligados a prestarle alimentos, el tutor debe procurárselos por otras vías y, en última instancia, sufragarlos él mismo.

Artículo 138.— *Contenido económico.*

La administración y disposición de los bienes del pupilo tienen el mismo contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad, con las modificaciones previstas en este título.

Artículo 139.— *Ejercicio de la tutela plural.*

1. Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercerá en la forma establecida en su nombramiento y, en su defecto, de modo análogo a la autoridad familiar.
2. El tutor de la persona y el de los bienes o, en su caso, el administrador, actuarán independientemente en el ámbito de su competencia.
3. Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona, la tutela subsiste con el otro, a no ser que en su nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando cesa un tutor real respecto de los otros que administren los mismos bienes.

Artículo 140.— *Contribución a las cargas.*

1. El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al tutor de la persona los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.
2. Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su contribución a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes, o, en su defecto, el Juez, acordará la proporción en la que según la importancia y rendimiento de los bienes han de contribuir cada uno de ellos, incluido el tutor de la persona que también administre.

Sección 3.^a

**EXTINCIÓN DE LA TUTELA Y RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS**

Artículo 141.— *Extinción.*

La tutela se extingue:

- a) Por la emancipación.
- b) Por la mayoría de edad.
- c) Por la recuperación de la autoridad familiar por quien hubiera sido privado, excluido o suspendido de ella.
- d) Por la adopción.

- e) Por la determinación de la filiación que conlleve la atribución de la autoridad familiar.
- f) Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.

Artículo 142.— *Cuenta general de la gestión.*

1. El tutor, al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinción de la tutela, deberá rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses desde el cese, prorrogable por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo comienza a contar desde la aceptación de la herencia.
2. La rendición de cuentas puede ser exigida por la persona sujeta a tutela o, en su caso, su representante legal o sus herederos. La acción prescribe a los tres años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
3. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo de la persona sujeta a tutela.
4. A la restitución de los bienes se aplicará el apartado 1 del artículo 99.
5. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la tutela automática de entidad pública.

Artículo 143.— *Aprobación.*

1. Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.
2. La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.

Artículo 144.— *Devengo de intereses.*

1. Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general devengará el interés legal a favor o en contra del tutor.
2. Si el saldo es a favor del tutor, el interés legal se devengará desde el requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular.

3. Si el saldo es en contra del tutor, devengará el interés legal desde la aprobación de la cuenta.

CAPÍTULO II

LA CURATELA DEL MENOR EMANCIPADO

Artículo 145.— *Curatela de emancipados.*

1. Estarán sujetos a curatela los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la asistencia prevenida en el artículo 33 fallezcan o queden impedidas para hacerlo.
2. La curatela del emancipado, que solo se constituirá a su instancia, no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que aquel no pueda realizar por sí solo.
3. La asistencia al emancipado se rige, con las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la asistencia al menor mayor de catorce años.
4. La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto en el artículo 29, pero la acción del emancipado prescribirá a los cuatro años desde que alcance la mayoría de edad o, en su defecto, desde su fallecimiento.

CAPÍTULO III

LA GUARDA DE HECHO DEL MENOR

Artículo 146.— *Definición.*

Guardador de hecho es la persona física o jurídica que, por iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor en situación de desamparo.

Artículo 147.— *Obligación de notificar el hecho.*

El guardador debe poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal.

Artículo 148.— *Información, cautelas y acciones.*

1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que

informe de la situación del menor y de sus bienes, así como de la actuación del guardador en relación con ambos extremos.

2. Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente se podrá constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.
3. El guardador de hecho podrá instar la privación o suspensión de la autoridad familiar y la remoción o el nombramiento de tutor.

Artículo 149.— *Régimen jurídico.*

1. La actuación del guardador de hecho en función tutelar debe limitarse a cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de administración de sus bienes que sean necesarios. La realización de estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representación legal.
2. Para justificar la necesidad del acto y la condición de guardador de hecho será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del menor.
3. El acto declarado necesario por la Junta de Parientes será válido; los demás serán anulables si no eran necesarios, salvo si han redundado en utilidad del menor.

CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN DE MENORES POR LA ADMINISTRACIÓN

Sección 1.^a

DESAMPARO Y TUTELA ADMINISTRATIVA

Artículo 150.— *Desamparo.*

1. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

2. La situación de desamparo se interpretará de forma restrictiva. No se considerará indicador de desamparo la situación de pobreza de los titulares de la autoridad familiar, tutores o guardadores ni tampoco su discapacidad o la del propio menor.

Artículo 151.— *Asunción de funciones tutelares.*

1. Cuando la entidad pública a la que en Aragón esté encomendada la protección de menores constate, mediante resolución motivada, que un menor está en situación de desamparo, asumirá su tutela por ministerio de ley y adoptará las medidas de protección necesarias para su guarda.
2. La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la autoridad familiar o tutela ordinaria.

Artículo 152.— *Administración de bienes.*

1. La entidad pública tutora es la administradora legal de los bienes de sus pupilos y está obligada a hacer inventario de los mismos, pero no a prestar fianza.
2. Serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los titulares suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en representación del menor y que sean beneficiosos para él.
3. Al cesar la administración de la entidad pública serán de aplicación, con las necesarias adaptaciones, las obligaciones previstas en el artículo 99.

Artículo 153.— *Comunicaciones y notificaciones.*

1. La resolución que declare el desamparo y las medidas adoptadas en ella será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. Asimismo, se notificará a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
2. La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que han motivado la intervención de la Administración y los efectos de la decisión adoptada,

y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente por lo que hace al menor, esta información se facilitará de forma presencial.

Artículo 154.— *Oposición.*

1. Contra la resolución de desamparo, así como contra las restantes resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de menores, sin necesidad de reclamación administrativa previa, cabe formular oposición ante la jurisdicción civil, que gozará de una tramitación rápida y preferente, en el plazo y condiciones determinados en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Trascurridos dos años desde la notificación de la resolución que declare el desamparo, únicamente el Ministerio Fiscal estará legitimado para oponerse a ella o a las restantes resoluciones adoptadas por la entidad pública para la protección del menor.
3. Durante ese plazo de dos años, la entidad pública, ponderando la situación y poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida la propuesta de adopción del menor, cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

Artículo 155.— *Promoción del régimen ordinario.*

1. La entidad pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y decidir la reintegración del menor a quien tenga su autoridad familiar o tutela, siempre que se estime lo más adecuado para su interés. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.
2. En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pueden asumir la autoridad familiar o las funciones tutelares con beneficio para este, se promoverá que la asuman o que se les nombre cargo tutelar conforme a las reglas ordinarias.

A tal efecto podrán ejercitar la acción de privación de la autoridad familiar o de remoción del cargo tutelar el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al ejercicio de la tutela.

Artículo 156.— *Cese de la tutela automática.*

La tutela ejercida por la entidad pública también cesará cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su asunción, por alguno de los supuestos previstos en el artículo 141 y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
- b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma cuya entidad pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o medida de protección correspondiente o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.
- c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

Sección 2.^a

LA GUARDA ADMINISTRATIVA

Artículo 157.— *Guarda provisional.*

1. En cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, la entidad pública podrá asumir su guarda provisional mediante resolución administrativa, que se comunicará al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo.
2. La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela automática.

Artículo 158.— *Asunción de la guarda por la entidad pública.*

1. La entidad pública competente asumirá la guarda de un menor en los supuestos siguientes:
 - a) Cuando asuma la tutela por ministerio de la ley o resolución judicial.

- b) A solicitud de los titulares de la autoridad familiar o tutor, cuando justifiquen no poder cuidar al menor por circunstancias graves, transitorias y ajenas a su voluntad.
 - c) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en los que legalmente proceda, debiendo adoptar a tal fin la medida de protección que corresponda.
2. La entidad pública garantizará, respecto de los menores con discapacidad bajo su guarda, la continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopción de otros más adecuados a sus necesidades.

Artículo 159.— *Guarda a solicitud de los padres o tutores.*

1. La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, así como de la forma en la que dicha guarda va a ejercitarse por la Administración.
2. La resolución administrativa sobre la asunción de la guarda por la entidad pública, así como sobre cualquier variación posterior de su forma de ejercicio, será fundamentada y notificada a los titulares de la autoridad familiar o tutor y al Ministerio Fiscal.
3. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida.

Artículo 160.— *Disposiciones comunes a la guarda y tutela.*

1. La entidad pública adoptará las medidas de protección proporcionadas a la situación personal del menor, para lo que podrá contar con la colaboración de instituciones habilitadas a tal efecto. Se procurará no separar a los hermanos de doble vínculo.
2. Salvo cuando proceda la delegación de la guarda con fines de adopción, la guarda asumida por la entidad pública se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo este posible o conveniente para el menor, mediante el acogimiento residencial.

3. La resolución de la entidad pública en la que se formalice por escrito la medida de guarda se notificará a los titulares de la autoridad familiar no privados de la autoridad familiar o al tutor no removido de la tutela, así como al Ministerio Fiscal.
4. En todos los casos de asunción de la guarda por la entidad pública, podrá establecer la cantidad que deben abonar los titulares de la autoridad familiar o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en función de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atención del menor, así como los derivados de la responsabilidad civil que se le pudiera imputar por actos realizados por él.
5. Si surgen problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quienes haya sido confiado en acogimiento familiar, aquel, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los titulares de la autoridad familiar o el tutor que no estén privados de la potestad de guarda o cualquier persona interesada podrán solicitar a la entidad pública la modificación o cese del acogimiento.
6. Todas las actuaciones en materia de protección de menores se practicarán con la obligada reserva.

Artículo 161.— *Modalidades de acogimiento.*

1. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública, pero tendrán preferencia los parientes o allegados del menor que resulten idóneos. El acogimiento residencial se ejercerá por el director o responsable del centro donde sea acogido, conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de menores.
2. No podrán ser acogedores los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este Código.
3. La entidad pública podrá acordar, en relación con el menor en acogimiento residencial, cuando sea conveniente a su interés, estancias, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias ajenas o instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto, solo se seleccionará a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor.

Dicha medida solo podrá ser acordada una vez hayan sido oídos el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, así como sus acogedores. Una vez acordada, será notificada a los titulares de la autoridad familiar o tutores, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la autoridad familiar o removidos de la tutela.

Se preservarán los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el interés del menor o concurra justa causa.

Artículo 162.— *Vigilancia del Ministerio Fiscal.*

1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o acogimiento de los menores a los que se refiere este capítulo.
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.
3. El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.
4. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe.
5. Para el cumplimiento de su función de superior vigilancia, cuando sea necesario, podrá el Ministerio Fiscal recabar la elaboración de informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones públicas competentes.

A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones públicas competentes atenderán las solicitudes de información remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situación de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor.

Sección 3.^a
EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Artículo 163.— *Contenido y ejercicio.*

1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de la familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía y alimentarlo, así como educar y procurar al menor una formación integral en un entorno afectivo.
2. Tratándose de menores con discapacidad, el acogimiento deberá garantizar la continuidad de los apoyos especializados que esté recibiendo o, en su caso, adoptar otros más adecuados para sus necesidades.
3. Este acogimiento se ejercerá por la persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor.

Artículo 164.— *Formalización.*

1. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la entidad pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento.
2. El acogimiento requiere el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años.
3. Cuando fueran conocidos los titulares de la autoridad familiar o el tutor, se les dará la debida audiencia en el procedimiento, siempre que no hubiesen sido privados de la autoridad familiar o removidos de la tutela.
4. A la resolución de formalización del acogimiento familiar se acompañará un documento anexo que incluirá los extremos previstos en la legislación aplicable en materia de protección de menores.
5. La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo máximo de un mes.

Artículo 165.— *Modalidades de acogimiento familiar.*

1. El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duración y objetivos:

- a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis años, que tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda.
 - b) Acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reintegración de este en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable como el acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva.
 - c) Acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. La entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor.
2. El acogimiento familiar, cualquiera que sea su modalidad, podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este último caso ser especializado y, si así se determina, profesionalizado.

Artículo 166.— *Guarda con fines de adopción.*

1. La entidad pública podrá delegar la guarda de un menor declarado en situación de desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas idóneas y asignadas para su adopción. A tal efecto, la entidad pública, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, delegará la guarda con fines de adopción hasta que se dicte la resolución judicial de

adopción, mediante resolución administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados, del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, y de los titulares de su autoridad familiar o tutor, siempre que sean conocidos y no hubiesen sido privados de la autoridad familiar o removidos de la tutela.

Los guardadores con fines de adopción tendrán los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares, conforme a la legislación aplicable en materia de protección de menores.

2. Salvo que convenga otra cosa al interés del menor o se den las circunstancias de la adopción abierta, la entidad pública procederá a suspender el régimen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el período de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 167.— *Cese del acogimiento familiar.*

El acogimiento familiar cesará:

- a) Por resolución de la entidad pública, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de los titulares de la autoridad familiar, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, el menor y los titulares de la autoridad familiar o tutela.
- b) Por decisión de las personas acogedoras, previa comunicación de estas a la entidad pública.
- c) Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores.
- d) Por la mayoría de edad o emancipación del menor.
- e) Por el cumplimiento del plazo fijado.

TÍTULO V MEDIDAS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULO I MANDATOS DE APOYO Y PODERES SIN MANDATO

Artículo 168.— *El mandato de apoyo.*

1. Cualquier persona mayor de catorce años y con aptitud suficiente conforme al artículo 40, en previsión de la concurrencia de causas que dificulten el ejercicio de su capacidad jurídica, podrá encomendar mediante mandato otorgado en escritura pública a una o varias personas que le presten el apoyo necesario para gestionar sus intereses personales o patrimoniales, con o sin poder de representación.
2. El menor mayor de catorce años no emancipado solo podrá otorgar un mandato de apoyo con la debida asistencia y no surtirá efecto hasta su mayoría de edad.

Artículo 169.— *Contenido.*

1. El mandato determinará los concretos apoyos a prestar por el mandatario, pudiendo incluir cualesquiera de las funciones previstas en el artículo 35.
2. El mandato podrá ser general o especial, en función del alcance de los asuntos personales o patrimoniales que requieran el apoyo del mandatario. Podrá otorgarse con carácter general respecto de una pluralidad de actos de la misma naturaleza.

Artículo 169-1.— *Inicio de eficacia.*

1. Para acreditar la concurrencia de las causas que dificulten el ejercicio de la capacidad jurídica, el mandatario comparecerá ante Notario con un dictamen pericial emitido por profesional especializado en el ámbito social o sanitario en el que se declare la concurrencia de dicha situación y la fecha desde la que se entiende producida.
2. Si hubiera previsiones del mandante sobre el inicio de eficacia, también deberán ponerse de manifiesto ante el Notario.

3. El Notario podrá entrevistar al mandante y solicitar pruebas complementarias.
4. En el acta notarial que se levantará al efecto se harán constar la declaración del mandatario, el informe pericial y las demás diligencias y pruebas practicadas, así como el inicio de eficacia de las diversas medidas de apoyo previstas.
5. Autorizada el acta, se presumirá ante tercero de buena fe la vigencia del mandato.

Artículo 169-2.— *Aptitud para ser mandatario.*

1. Podrá ser mandataria toda persona mayor de edad en pleno ejercicio de su capacidad jurídica.
2. También podrá ser mandataria la persona jurídica sin finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad.

Artículo 169-3.— *Obligatoriedad y responsabilidad.*

El mandatario queda obligado a cumplir el mandato de apoyo y responderá de los daños y perjuicios que su actuación cause al mandante por acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia.

Artículo 169-4.— *Condiciones de ejercicio.*

1. El mandatario debe actuar conforme a los límites del mandato.
2. De ser varios los mandatarios, actuarán conforme a lo previsto por el mandante; a falta de previsiones, se entenderán designados conjuntamente y, salvo instrucción distinta, adoptarán las decisiones y actuarán en régimen de mayoría.
3. El mandatario ejecutará personalmente el mandato y no podrá nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello, pero podrá contar con la colaboración de otras personas.

Artículo 169-5.— *Medidas de control.*

El mandante podrá establecer las medidas de control que estime oportunas y designar a las personas a quien corresponda su ejercicio. También podrá encomendarlo a la Junta de Parientes.

Artículo 169-6.— *Extinción.*

1. El mandato se extingue:
 - 1.º Por las causas establecidas por el mandante.
 - 2.º Por muerte o declaración de fallecimiento del mandante o del mandatario.
 - 3.º Por revocación del mandante en escritura pública, que deberá ser notificada fehacientemente al mandatario.
 - 4.º Por renuncia del mandatario formalizada ante Notario y notificada fehacientemente al mandante. Si por la renuncia quedara el mandante sin medidas de apoyo, el mandatario vendrá obligado a continuar la gestión hasta que se establezcan otras medidas de apoyo.
 - 5.º Por necesitar también el mandatario medidas de apoyo que le impidan el adecuado ejercicio del mandato.
 - 6.º Por decisión judicial, a instancia del mandante o de cualquier otra persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos, cuando la ejecución del mandato ponga en peligro los intereses del mandante. El Juez que ponga fin al mandato deberá sustituirlo por una medida judicial de apoyo.
2. Cuando hayan sido designados varios mandatarios, la pérdida de tal condición por uno de ellos no impedirá el cumplimiento del encargo por los restantes, aunque solo quede uno, salvo previsión en contrario del mandante.

Artículo 169-7.— *Preferencia del mandato de apoyo.*

Incoado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo, el Juez recabará de oficio certificación al Registro Civil, al objeto de comprobar la existencia y vigencia del mandato de apoyo. De haberlo, solo adoptará una medida judicial de apoyo complementaria o supletoria cuando considere, por resolución motivada, que el mandato resulta insuficiente, inadecuado o no se está ejecutando eficazmente.

Artículo 169-8.— *Poderes preventivos sin mandato.*

1. El poder que incluya cláusula de que subsista si en el futuro el poderdante precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad

jurídica o que se otorgue para cuando se produzca esa situación, y que no se base en un mandato de apoyo, no se considerará medida de apoyo de la persona con discapacidad.

2. A estos poderes, además de las reglas propias del poder, se les aplicarán las siguientes:

- a) Habrán de otorgarse en escritura pública.
- b) Deberán comunicarse al Registro Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 111.
- c) El Juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir al apoderado la rendición de cuentas de su actuación.
- d) El Juez, en resolución motivada, los podrá declarar extinguidos en todo o en parte, tanto al constituir la curatela, como posteriormente a instancia del curador.

Si el poder no se extingue al establecerse la medida de apoyo judicial, el apoderado deberá rendir cuentas de su actuación al curador.

5. En el supuesto de que el poder se otorgue para cuando se precise apoyo, el inicio de su eficacia se regirá por lo dispuesto en el artículo 169-1.

CAPÍTULO II

LA GUARDA DE HECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 169-9.— *Definición.*

Guardador de hecho es la persona física o jurídica que por iniciativa propia presta los apoyos precisos a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica con ánimo de permanencia.

Artículo 169-10.— *Relación con otras medidas de apoyo.*

1. La existencia de mandato de apoyo que abarque todos los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica excluye la guarda de hecho, que sí que podrá existir respecto de aquellos apoyos no comprendidos en el mandato y

también cuando la persona con discapacidad se encuentre en situación de desamparo.

2. Si a la persona con discapacidad se le hubiera nombrado curador, no podrá haber guarda de hecho, salvo que se encuentre en situación de desamparo.
3. El guardador de hecho podrá instar su nombramiento como curador, conforme a lo regulado en este título.

Artículo 169-11.— *Guarda de hecho plural.*

1. La guarda de hecho de las personas con discapacidad podrá ser ejercida simultáneamente por ambos progenitores respecto de sus hijos mayores o por varios hermanos respecto de sus progenitores o hermanos.
2. Los guardadores de hecho podrán actuar de manera conjunta o separada, según lo hayan acordado.
3. Respecto del tercero de buena fe, se presumirá que cada guardador actúa en el correcto ejercicio de sus funciones.

Artículo 169-12.— *Régimen jurídico.*

1. La actuación del guardador de hecho comprende el acompañamiento, el cuidado y la asistencia que la persona con discapacidad necesite tanto en aspectos personales como patrimoniales.
2. En el ámbito patrimonial, el guardador de hecho podrá realizar actos de administración, incluyendo la disposición de dinero para los gastos ordinarios, así como también actos de disposición de escasa importancia en relación con su patrimonio.
3. En el ámbito personal, asistirá a la persona con discapacidad en la toma de decisiones y, en el sanitario, estará legitimado para obtener información de la persona con discapacidad y para prestar el consentimiento que exige la ley si el paciente no puede darlo.
4. Tanto en el orden personal como patrimonial, el guardador de hecho podrá solicitar y gestionar las prestaciones asistenciales o ayudas de cualquier tipo en beneficio de la persona con discapacidad.

5. La realización de los actos comprendidos en los apartados anteriores comporta, frente a terceros, la necesaria representación legal y no requiere autorización o aprobación de la Junta de Parientes o del Juez.
6. Cuando se requiera la actuación representativa del guardador de hecho para llevar a cabo actuaciones personales o patrimoniales no comprendidas en los párrafos anteriores, deberá obtener autorización previa o, en su caso, aprobación posterior de la Junta de Parientes o del Juez y se dará audiencia a la persona con discapacidad. La autorización o aprobación podrá comprender uno o varios actos necesarios para el adecuado ejercicio de la función de apoyo.

Artículo 169-13.— *Acreditación de la condición de guardador de hecho.*

1. La guarda de hecho es una medida de apoyo que no necesita ser declarada judicialmente para acreditar su existencia.
2. La guarda de hecho podrá acreditarse por cualesquiera medios de los admitidos en Derecho y, en particular, por haber ejercido la autoridad familiar sobre la persona con discapacidad, por la convivencia en el mismo domicilio, la relación de parentesco dentro del cuarto grado o la condición de cónyuge o pareja estable no casada.
3. También servirá como acreditación de la guarda de hecho:
 - a) La declaración de la Junta de Parientes de la persona con discapacidad realizada dentro de los dos años anteriores.
 - b) La declaración de notoriedad en acta notarial dentro de los dos años anteriores.

Artículo 169-14.— *Extinción.*

El guardador de hecho perderá su condición:

- 1.º Cuando deje de ser precisa la prestación de apoyo.
- 2.º Cuando deje de actuar como tal, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o de la entidad pública competente en materia de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con

discapacidad, salvo imposibilidad de hacerlo o que otra persona asuma la guarda de hecho.

- 3.º Cuando la autoridad judicial lo considere conveniente, a solicitud de la persona con discapacidad, del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer el apoyo de la persona bajo guarda.

CAPÍTULO III **LA CURATELA**

Sección 1.ª **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 169-15.— *Concepto y legitimación.*

1. La curatela es una medida de apoyo estable, cuya extensión graduará la autoridad judicial en atención a las concretas necesidades de apoyo que la persona tenga para el ejercicio de su capacidad jurídica.
2. Podrán instar la constitución de la curatela el Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y sus descendientes, ascendientes o hermanos, así como las personas físicas o jurídicas que le vinieran prestando apoyo.

Artículo 169-16.— *Relación con otras medidas de apoyo.*

1. Podrá constituirse la curatela cuando la persona con discapacidad carezca de mandatario de apoyo o guardador de hecho que le preste los apoyos precisos en el ejercicio de la capacidad jurídica.
2. Si la persona con discapacidad tuviera mandato de apoyo, solo podrá constituirse la curatela en los supuestos a los que se refiere el artículo 169-7.
3. Aun existiendo guarda de hecho, podrá constituirse la curatela, si así lo solicita el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad o el guardador de hecho.

Artículo 169-17.— *Deber de comunicación.*

El curador mantendrá un contacto permanente con la persona necesitada de apoyo, debiendo visitarla, por lo menos, una vez al mes o con la periodicidad que la autoridad judicial juzgue conveniente.

Artículo 169-18.— *Revisión.*

1. La curatela se revisará cada tres años. No obstante, la autoridad judicial podrá, de manera excepcional y motivada, en el procedimiento de provisión o, en su caso, de modificación de apoyos, establecer un plazo de revisión superior.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la curatela se revisará, en todo caso, ante cualquier cambio relevante en la situación de la persona que pueda requerir su modificación.

Sección 2.^a

MODALIDADES DE CURATELA

Artículo 169-19.— *Modalidades de curatela y compatibilidad.*

1. Las modalidades de curatela de las personas con discapacidad son tres: curatela de comunicación y acompañamiento, de asistencia y con facultades de representación.
2. El Juez determinará la modalidad de curatela en atención a las circunstancias concurrentes, señalando los actos que requieran la prestación de apoyo.
3. Todas las modalidades de curatela son compatibles entre sí, sin que sea necesaria la designación de diversos curadores, salvo que el Juez así lo establezca en atención a las circunstancias concurrentes.

Artículo 169-20.— *Curatela de comunicación y acompañamiento.*

Procederá esta modalidad cuando la persona con discapacidad presente problemas de comunicación para manifestar su voluntad y necesite de una persona que lo acompañe para poder darla a conocer, así como cuando precise apoyo para la consideración de opciones y la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias.

Artículo 169-21.— *Curatela asistencial.*

Esta modalidad tiene como finalidad ayudar a la persona concernida a formar su voluntad en relación a actos o negocios de índole personal o patrimonial y prestarle asistencia para la válida formación de su consentimiento.

Artículo 169-22.— *Prestación de asistencia.*

1. La prestación de asistencia requiere conocer el acto que la persona con discapacidad se propone realizar, valorar sus preferencias, informarle de la trascendencia del acto o negocio y considerarlo conforme a sus intereses.
2. La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en esta, puede bastar con la mera presencia sin oposición.
3. La prestación de asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.

Artículo 169-23.— *Curatela con facultades de representación.*

Procederá esta modalidad para aquellos actos en los que, con los apoyos de las modalidades anteriores, la persona con discapacidad no pueda determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella.

Artículo 169-24.— *Actos que requieren autorización o aprobación.*

1. El curador que ejerza funciones de representación necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para llevar a cabo los actos o negocios que determine la resolución y, en todo caso, para los enumerados en los artículos 14, 15 y 16 de este Código.
2. La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido practicada en representación de la persona con discapacidad:

- a) Por el curador, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de Parientes o del Juez.
- b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial, si en el nombramiento de este así se ha dispuesto. Cuando intervenga la Junta de Parientes, la aprobación será necesariamente judicial.

Artículo 169-25.— *Concesión de la autorización o aprobación.*

1. La autorización o aprobación requerida en el artículo anterior solo se concederá por causas justificadas de utilidad o necesidad para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.
2. La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
3. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos de la persona con discapacidad.

Sección 3.ª

EJERCICIO DE LA CURATELA

Artículo 169-26.— *Ejercicio de la curatela plural.*

1. Cuando el juez designe varios curadores, determinará la modalidad de curatela que corresponda a cada uno y, si fueran para la misma modalidad, su ámbito y forma de actuación.

Si surgieran divergencias entre los curadores mancomunados que no pudieran resolverse conforme a lo previsto en su designación, se procederá en la forma regulada en el artículo 74.
2. Cuando para el ejercicio de una modalidad de curatela se designe un curador para el ámbito personal y otro para el patrimonial, cada uno de ellos actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien el segundo, así como

el administrador, si lo hay, deberán facilitar los correspondientes recursos que el curador de la persona precise para el cumplimiento de su función y, si no logran un acuerdo, se procederá conforme al apartado 2 del artículo 140.

3. Cuando por cualquier causa cese uno de los curadores, se procederá a la designación de uno nuevo, salvo que el Juez haya previsto otra cosa.

Artículo 169-27.— *Impedimento transitorio.*

1. Cuando quien desempeñe la curatela esté impedido de modo transitorio para actuar en un caso concreto, prestará el apoyo la Junta de Parientes o un defensor judicial.
2. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representación de la persona con discapacidad en actos que requieran autorización o aprobación, esta será necesariamente judicial.
3. Cuando haya curadores con las mismas funciones y se produzca el supuesto de hecho previsto en el apartado 1 de este precepto, el apoyo será prestado por quien de entre ellos no esté afectado por el impedimento.
4. Si la situación de impedimento fuera prolongada o reiterada en el tiempo, la autoridad judicial de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, de la Junta de Parientes, de cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos o de cualquier otro curador, previa audiencia a la persona con discapacidad y al Ministerio Fiscal, podrá reorganizar el funcionamiento de la curatela e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador.

Artículo 169-28.— *Curatela por progenitores.*

1. Cuando la curatela se haya confiado a los progenitores no se aplicarán las normas sobre remuneración, inventario e información periódica, y solo precisarán autorización o aprobación de la Junta de Parientes o del Juez para los actos en que la requerirían si el hijo fuera menor de edad.
2. No obstante, la autoridad judicial, a instancia del Ministerio Fiscal o del hijo con discapacidad, en atención a las

circunstancias concurrentes, podrá acordar la modificación o inaplicación en todo o en parte de este régimen especial.

3. Podrá también la autoridad judicial, si las circunstancias lo justifican y oído el Ministerio Fiscal, aplicar en todo o en parte este régimen especial cuando la curatela se haya confiado al cónyuge, al otro miembro de la pareja estable no casada, a un descendiente o a un hermano de la persona con discapacidad.

Artículo 169-29.— *Extinción de la curatela.*

La curatela se extingue:

- a) Por resolución judicial cuando ya no sea precisa o se adopte otra medida de apoyo más adecuada.
- b) Por el fallecimiento de la persona sometida a curatela.

Artículo 169-30.— *Cuenta general de la gestión.*

1. El curador que preste apoyo asistencial o representativo, al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinción de la curatela, deberá rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial.
2. A la rendición de cuentas se aplicará lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 144.

TÍTULO VI DE LA JUNTA DE PARIENTES

Artículo 170.— *Llamamiento.*

1. Si en virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en determinados asuntos familiares, sucesorios o relativos a medidas de apoyo a personas con discapacidad no sujetos a normas imperativas, actuarán aquellos reunidos en Junta.
2. Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los interesados, este deberá constar en documento público.

Artículo 171.— *Reglas aplicables.*

1. La Junta de Parientes se regirá por las disposiciones del llamamiento y, en su defecto o para completarlas, por las reglas contenidas en el presente Título.
2. La fiducia a favor de parientes se regirá, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, por lo dispuesto en su normativa específica y, supletoriamente, por las normas de este Título.
3. Serán de aplicación supletoria a los miembros de la Junta de Parientes, en la medida que su naturaleza lo permita, las normas relativas a los cargos tutelares, especialmente en materia de causas de inhabilidad, excusa, remoción y responsabilidad.

Artículo 172.— *Composición.*

1. Cuando la composición de la Junta no estuviere determinada, la formarán los dos más próximos parientes en pleno ejercicio de su capacidad jurídica, mayores de edad y no incurso en causa de inidoneidad, uno por cada línea o grupo familiar. En igualdad de grado, será preferido el de más edad, salvo entre ascendientes, en cuyo caso se preferirá al de menos. No obstante, el Notario y el Letrado de la Administración de Justicia podrán, motivadamente, apartarse del principio de proximidad de parentesco y de la preferencia por razón de edad.
2. La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se formará con un pariente de cada una de ellas.

Artículo 173.— *Causas de idoneidad.*

Carecen de idoneidad para ser miembros de la Junta:

- a) Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en documento público o testamento.
- b) Los que en la decisión a tomar por la Junta tengan oposición de intereses con el menor o persona con discapacidad.
- c) Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.

- d) Los que estén excluidos, privados o suspendidos de la autoridad familiar, así como los excluidos o removidos del cargo tutelar o medida de apoyo sobre el menor o persona con discapacidad de cuya Junta se trate.

Artículo 174.— *Constitución y funcionamiento bajo fe notarial.*

Sin necesidad de ninguna formalidad previa, podrá reunirse y acordar válidamente la Junta de Parientes cada vez que, hallándose juntos sus miembros, decidan por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados.

Artículo 175.— *Constitución judicial y funcionamiento de esta Junta.*

1. Cuando en documento público se haya configurado como órgano permanente, así como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe notarial, el Letrado de la Administración de Justicia del domicilio de la persona o familia de cuya Junta se trate ordenará, a instancia de parte interesada, su constitución en expediente de jurisdicción voluntaria.
2. De la misma forma, podrá cubrir las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia, pérdida de idoneidad o incumplimiento de los deberes propios, previa remoción del cargo en los dos últimos supuestos.
3. Una vez constituida, funcionará la Junta en la forma que los vocales decidan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la integran. De los acuerdos se levantará acta, que firmarán todos.

Artículo 176.— *Asistencia a la reunión.*

1. La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse personalmente. Quien falte a la reunión sin causa justificada responderá de los daños y perjuicios.
2. Los gastos legítimos ocasionados por la reunión de la Junta serán de cuenta de aquellos que la motivan.

Artículo 177.— *Toma de decisiones.*

Las decisiones de la Junta serán tomadas mediante deliberación conjunta, conforme al leal saber y entender de los vocales, y con libertad de procedimiento.

Artículo 178.— *Eficacia de las decisiones.*

1. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez.
2. La decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, incluso si este hubiera podido intervenir en él de forma alternativa o subsidiaria.
3. La decisión de la Junta de Parientes que resuelva una controversia sometida a su juicio por acuerdo de las partes tendrá, si no han pactado otra cosa, la fuerza de obligar de un contrato.
4. Lo decidido podrá ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez cuando con posterioridad ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión.

Artículo 179.— *Invalidez de las decisiones.*

1. A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicará la regulación de los contratos en el Código civil.
2. Los defectos formales en la constitución o funcionamiento de aquella, que no sean de mero trámite, acarrearán la nulidad absoluta de sus acuerdos.

Artículo 180.— *Cauce procesal.*

Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado a los demandados y, cuando proceda, al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo previsto en el artículo 405 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Artículo 181.— *Falta de acuerdo de la Junta.*

En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de Parientes, si solicitada su intervención transcurre un mes sin haber obtenido acuerdo, se podrá optar por acudir a la decisión judicial o, en su caso, al nombramiento de un defensor judicial.

Artículo 182.— *Llamamiento de no parientes.*

Cuando por acto jurídico fueran llamadas personas determinadas o determinables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, serán aplicables en lo pertinente las normas de este Título.

LIBRO SEGUNDO

DERECHO DE LA FAMILIA

TÍTULO I

EFFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO

Artículo 183.— *Comunidad de vida.*

1. El matrimonio constituye una comunidad de vida entre los cónyuges en la que ambos son iguales en derechos y obligaciones.
2. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente, vivir juntos, guardarse fidelidad y actuar en interés de la familia.

Artículo 184.— *Domicilio familiar.*

1. Los cónyuges determinan de común acuerdo el domicilio familiar.
2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia.
3. En caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el domicilio familiar, cualquiera de ellos puede solicitar al Juez su determinación, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.

Artículo 185.— *Principio de libertad de regulación.*

1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después de contraer el matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio *standum est chartae*.
2. Las normas de los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194 son imperativas.

Artículo 186.— *Dirección de la vida familiar.*

Corresponden a ambos cónyuges el gobierno de la familia y las decisiones sobre la economía familiar.

Artículo 187.— *Satisfacción de las necesidades familiares.*

1. Ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades familiares con la atención directa al hogar y a los hijos, la dedicación de sus bienes al uso familiar, la remuneración de su trabajo, los rendimientos de sus capitales y otros ingresos y, en último término, con su patrimonio.
2. En defecto de pacto, para determinar la contribución de cada cónyuge se tendrán en cuenta los medios económicos de cada uno, así como sus aptitudes para el trabajo y para la atención al hogar y los hijos.
3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres, deben contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares conforme a lo previsto en los artículos 66, 67 y 70.

Artículo 188.— *Deber de información recíproca.*

Cada cónyuge está facultado para exigir al otro información suficiente y periódica de la gestión de su patrimonio, de sus ingresos y de sus actividades económicas, en orden a la toma de decisiones sobre la economía familiar y la atención de las necesidades familiares.

Artículo 189.— *Responsabilidad frente a terceros.*

Los cónyuges responden solidariamente, frente a terceros de buena fe, de las obligaciones contraídas por uno de ellos para atender a la satisfacción de las necesidades familiares.

Artículo 190.— *Vivienda familiar.*

1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los derechos que a uno de los cónyuges correspondan sobre la vivienda habitual de la familia o el mobiliario ordinario de la misma, así como para sustraerlos al uso común, será necesario el consentimiento del otro o, en su defecto, autorización judicial. En ambos casos, con la enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad.
2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar judicialmente la nulidad de los actos de disposición

realizados por el otro sin el debido consentimiento o autorización en el plazo de cuatro años desde que los conoció o pudo razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución del matrimonio o la separación conyugal.

3. No procede la anulación contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe cuando el disponente manifestó que no constituía vivienda o mobiliario familiar.

Artículo 191.— *Mandatos entre cónyuges.*

A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las reglas del mandato, pero el mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya dispuesto otra cosa, y no podrá nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.

Artículo 192.— *Derecho de viudedad.*

La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las consecuencias y la regulación contenidas en el Título V de este Libro.

Artículo 193.— *Régimen económico matrimonial.*

1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones que otorguen los cónyuges.
2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el Título IV de este Libro.
3. Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen económico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 194.— *Derechos de terceros.*

La modificación del régimen económico del matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.

TÍTULO II DE LOS CAPÍTULO MATRIMONIALES

Artículo 195.— *Contenido y forma de los capítulos.*

1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes con ellos concurren al otorgamiento, sin más límites que los del principio *standum est chartae*.
2. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para su validez, el otorgamiento en escritura pública.

Artículo 196.— *Idioma de los capítulos.*

Los capítulos matrimoniales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los otorgantes elijan. Si el notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, los capítulos se otorgarán en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el notario, que deberá firmar el documento.

Artículo 197.— *Tiempo y eficacia.*

1. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse y modificarse antes del matrimonio y durante el mismo.
2. Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la celebración de este, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia.
3. En cualquier caso, los otorgantes pueden someter la eficacia de las estipulaciones a condición o término, incluso darles efecto retroactivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 198.— *Inoponibilidad a terceros.*

1. Las estipulaciones capitulares sobre régimen económico matrimonial son inoponibles a los terceros de buena fe.
2. La buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de los capítulos matrimoniales conste en el Registro Civil.

Artículo 199.— *Capacidad.*

1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. Sin embargo:
 - a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están emancipados, necesitarán la asistencia debida.
 - b) Los mayores de edad o emancipados con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica actuarán conforme a lo previsto en ellas.
2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.

Artículo 200.— *Modificación de estipulaciones capitulares.*

1. Tanto antes como después de celebrado el matrimonio, la modificación de las estipulaciones que determinan el régimen económico familiar requiere únicamente el consentimiento de las personas que están o han de quedar sujetas a dicho régimen.
2. La modificación del régimen económico matrimonial permite la revocación de los actos y negocios patrimoniales contenidos en los capítulos y que se otorgaron en atención al régimen que ahora se modifica, a no ser que sus otorgantes presten consentimiento para la modificación. El notario que autorice la escritura de modificación notificará su otorgamiento a los que intervinieron en las capitulaciones matrimoniales que se modifican dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la modificación.
3. La revocación unilateral de los pactos sucesorios precisará de los requisitos establecidos en el artículo 401.

Artículo 201.— *Instituciones familiares consuetudinarias.*

Quando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares consuetudinarias, tales como «dote», «firma de dote», «hermandad llana», «agermanamiento» o «casamiento al más viviente», «casamiento en casa», «acogimiento o casamiento

a sobre bienes», «consorcio universal o juntar dos casas» y «dación personal», se estará a lo pactado, y se interpretarán aquellas con arreglo a la costumbre y a los usos locales.

Artículo 202.— *Otras situaciones de comunidad.*

Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, los beneficios obtenidos con el trabajo común se dividirán entre los asociados en proporción equitativa, conforme a la costumbre y atendidas las diversas aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás circunstancias.

TÍTULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

Artículo 203.— *Aplicación del régimen.*

El régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes:

- a) Cuando así lo hayan acordado los cónyuges en capitulaciones matrimoniales.
- b) En todo caso de exclusión o disolución del consorcio conyugal, si los cónyuges no han pactado otro régimen.

Artículo 204.— *Régimen jurídico.*

El régimen económico de separación de bienes se regirá en primer término por lo convenido por los cónyuges en los capítulos que lo establezcan; en su defecto, por las normas establecidas en el presente Título para este régimen y, subsidiariamente, por las normas del consorcio conyugal en tanto lo permita su naturaleza.

Artículo 205.— *Contenido.*

1. En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge los que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo,

corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes.

2. Salvo renuncia expresa, ambos cónyuges conservarán el derecho de viudedad.

Artículo 206.— *Titularidad de los bienes.*

1. La titularidad de los bienes corresponderá a quien determine el título de su adquisición.
2. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges corresponde la titularidad de algún bien o derecho o en qué proporción, se entenderá que pertenece a ambos por mitades indivisas.
3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes muebles de uso personal o que estén directamente destinados al desarrollo de la actividad o profesión de uno de los cónyuges y que no sean de extraordinario valor, que se presumirá que pertenecen a este.

Artículo 207.— *Gestión con mandato expreso.*

Cada cónyuge podrá en cualquier tiempo conferir al otro mandato expreso para la administración de sus bienes, así como revocarlo, condicionarlo o restringirlo.

Artículo 208.— *Gestión sin mandato expreso.*

1. Cuando uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o intereses del otro sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
2. El cónyuge que administre bienes del otro contra su voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.

Artículo 209.— *Responsabilidad por deudas.*

El régimen de separación de bienes atribuye a cada cónyuge la responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas, salvo en los casos previstos en el artículo 189.

TÍTULO IV
DEL CONSORCIO CONYUGAL

CAPÍTULO I
BIENES COMUNES Y PRIVATIVOS

Artículo 210.— *Bienes comunes.*

1. Al iniciarse el régimen, constituyen el patrimonio común los bienes aportados por los cónyuges para que ingresen en él y los que les son donados por razón del matrimonio con carácter consorcial.
2. Durante el consorcio, ingresan en el patrimonio común los bienes enumerados en los apartados siguientes:
 - a) Los adquiridos por título lucrativo cuando así lo disponga el donante o causante.
 - b) Los que los cónyuges acuerden que tengan carácter consorcial.
 - c) Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges a costa del caudal común. Si el precio ha quedado aplazado en todo o en parte, serán comunes, salvo que la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo.
 - d) Los bienes que los cónyuges obtienen de su trabajo o actividad.
 - e) Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o cese de actividad profesional.
 - f) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes o privativos, así como el beneficio obtenido de las empresas y explotaciones económicas.
 - g) Las cantidades devengadas por pensiones cuya titularidad corresponda a cualquiera de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 212.
 - h) La diferencia positiva entre el importe actualizado del valor al ingresar en el patrimonio privativo y el que tengan al producirse el reembolso o disolverse el consorcio

conyugal de los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos.

- i) Los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el consorcio.
- j) Las empresas y explotaciones económicas fundadas por uno cualquiera de los cónyuges durante el consorcio, salvo que sea totalmente a expensas del patrimonio privado de uno solo de ellos.
- k) Las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase adquiridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno solo de los cónyuges; pero, en este caso, en las relaciones con el ente social, se estará a lo dispuesto en las normas por que se rija.

Artículo 211.— *Bienes privativos.*

Son bienes privativos de cada cónyuge los que le pertenecieren al iniciarse el consorcio y los enumerados en los apartados siguientes:

- a) Los que, durante el consorcio, ambos cónyuges acuerden atribuirles carácter privativo.
- b) Los adquiridos por usucapión comenzada antes de iniciarse el consorcio, así como los adquiridos en virtud de títulos anteriores cuando la adquisición se consolide durante su vigencia y los comprados antes con precio aplazado, salvo que la totalidad del precio sea satisfecha con fondos comunes.
- c) Los adquiridos a título lucrativo. Si hubieran sido adquiridos por ambos cónyuges sin designación de partes, corresponderán a cada uno de ellos por mitad, y no se dará el derecho de acrecer salvo que lo hubiera dispuesto el transmitente o que, tratándose de una adquisición por causa de muerte, procediera según la regulación de la sucesión.
- d) Los adquiridos en escritura pública a costa del patrimonio común si en el título de adquisición ambos cónyuges establecen la atribución privativa a uno de ellos.

- e) Los que vienen a reemplazar a otros propios, y ello aunque se adquirieran con fondos comunes, así como el dinero obtenido por la enajenación o privación de bienes propios y el resarcimiento de los daños inferidos a los mismos.
- f) Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los adquiridos por derecho de retracto, opción, suscripción preferente o cualquier otro de adquisición preferente o de acceso a la propiedad que pertenezca con carácter privativo a uno de los cónyuges.
- g) Los adjudicados a un cónyuge en la partición o división de cualquier comunidad cuando la cuota que le correspondía fuera privativa, y ello aunque reciba un exceso de adjudicación que se abone con cargo al caudal común.
- h) Las accesiones o incrementos de los bienes propios.

Artículo 212.— *Bienes patrimoniales de carácter personal.*

1. Son también privativos:

- a) Los bienes y derechos inherentes a la persona y los intransmisibles entre vivos, mientras conserven estos caracteres. Pero serán comunes los rendimientos de bienes de esta clase, como el derecho de autor sobre obra propia o el derecho a la propia imagen, devengados durante el consorcio.
- b) El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a la persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se cobra en forma de capital como de pensión.
- c) Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos de seguros.
- d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.

Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el consorcio por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las cantidades devengadas antes de la disolución de aquel. En este caso, se

reintegrará al patrimonio privativo el valor actualizado de las primas satisfechas a su costa.

2. En los seguros sobre la vida contratados por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro y que no constituyan acto de previsión acorde con las circunstancias familiares, deberá reembolsarse al patrimonio común el valor actualizado de las primas que se hayan satisfecho a costa de dicho patrimonio.

Artículo 213.— *Presunción de privatividad.*

1. Adquirido bajo fe notarial dinero privativo, se presume que es privativo el bien que se adquiera por cantidad igual o inferior en escritura pública autorizada por el mismo notario o su sucesor, siempre que el adquirente declare en dicha escritura que el precio se paga con aquel dinero y no haya pasado el plazo de dos años entre ambas escrituras.
2. La presunción admite en juicio prueba en contrario.

Artículo 214.— *Reconocimiento de privatividad.*

1. Se considerará privativo un bien determinado cuando la atribución por un cónyuge de tal carácter al dinero o contraprestación con que lo adquiera sea confirmada por declaración o confesión del otro, que habrá de constar en documento público si ha de acceder al Registro de la Propiedad.
2. La titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun fallecido el otro cónyuge, no puede quedar afectada o limitada sino por el ejercicio de las acciones que puedan corresponder a acreedores y legitimarios en defensa de su derecho.

Artículo 215.— *Ampliación o restricción de la comunidad.*

1. A efectos de extender o restringir la comunidad, ambos cónyuges podrán, mediante pacto en escritura pública, atribuir a bienes privativos el carácter de comunes o, a estos, la condición de privativos, así como asignar, en el momento de su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido.
2. Salvo disposición en contrario, los pactos regulados en este precepto darán lugar al correspondiente derecho de reembolso o reintegro entre los patrimonios privativos y el común.

Artículo 216.— *Bienes de origen familiar.*

Cuando por cualquier título ingrese en el patrimonio común algún bien procedente de la familia de uno de los cónyuges, se considerará que el bien ha salido de la familia de procedencia y que ningún otro bien o derecho ha adquirido por subrogación su condición de bien de origen familiar.

Artículo 217.— *Presunción de comunidad.*

1. Se presumen comunes todos aquellos bienes cuyo carácter privativo, con arreglo a los artículos anteriores, no pueda justificarse.
2. La adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso, durante el consorcio, se considerará hecha a costa del caudal común.

CAPÍTULO II **DEUDAS COMUNES Y PRIVATIVAS**

Artículo 218.— *Deudas comunes.*

1. Son de cargo del patrimonio común:
 - a) Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge, incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo de ellos que convivan con el matrimonio.
 - b) Los réditos e intereses normales devengados durante el consorcio por las obligaciones de cada cónyuge.
 - c) Las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usufructuario.
 - d) Los alimentos legales entre parientes debidos por cualquiera de los cónyuges, así como la crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges no incluida en el apartado a).
 - e) Toda deuda de uno u otro cónyuge contraída en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aunque no haya redundado en beneficio común, o en el ejercicio de cualquier otra actividad, pero en este caso

solo hasta el importe del beneficio obtenido con ella por el consorcio. Son actividades objetivamente útiles al consorcio las de la letra a) del apartado 1 del artículo siguiente.

- f) Las indemnizaciones debidas por daños a terceros, si bien los causados con dolo o culpa grave, únicamente hasta el importe del beneficio obtenido con la actividad en la que se causó el daño.
2. No son, sin embargo, de cargo del patrimonio común las deudas del apartado anterior contraídas por un cónyuge con intención de perjudicar al consorcio o con grave descuido de los intereses familiares.

Artículo 219.— *Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.*

1. Frente a terceros de buena fe, los bienes comunes responden siempre del pago:
 - a) De las deudas que cada cónyuge contrae en el ejercicio, incluso solo aparente, de sus facultades de administración o disposición de los bienes comunes o de administración ordinaria de los suyos propios, así como en la explotación regular de sus negocios o en el desempeño corriente de su profesión.
 - b) De las indemnizaciones por daños a terceros causados en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aun por dolo o culpa grave.
2. También responden los bienes comunes frente a terceros por las deudas enunciadas en el apartado 1 del artículo 218 contraídas por uno solo de los cónyuges.
3. De las deudas contraídas por ambos cónyuges responden siempre los bienes comunes junto a sus privativos.

Artículo 220.— *Responsabilidad de los bienes privativos.*

1. Los bienes privativos de cada cónyuge responden en todo caso de las deudas por él contraídas.
2. En defecto de bienes comunes, de las deudas contraídas por un cónyuge para satisfacer las atenciones señaladas en

la letra a) del apartado 1 del artículo 218 responde también el patrimonio privativo del otro.

Artículo 221.— *Contribución en defecto de bienes comunes.*

En defecto de bienes comunes, en la relación interna, los cónyuges contribuirán por mitad, o en la proporción pactada, a las deudas de la letra a) del apartado 1 del artículo 218 y a aquellas otras que el cónyuge que las contrajo demuestre que proceden de una actividad que, efectivamente, haya redundado en beneficio común.

Artículo 222.— *Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes.*

El bien común adquirido por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro responde, en todo caso, del precio aplazado y demás gastos de adquisición pendientes de pago.

Artículo 223.— *Deudas privativas.*

1. Son privativas las deudas contraídas por un cónyuge cuando no sean de cargo del patrimonio común de acuerdo con el artículo 218.
2. En particular, son privativas las deudas de cada cónyuge anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones.

Artículo 224.— *Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.*

1. De las deudas contraídas por un cónyuge distintas de las enunciadas en el artículo 219 responden en primer lugar los bienes privativos del cónyuge deudor y, faltando o siendo estos insuficientes, los bienes comunes, a salvo siempre el valor que en ellos corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes.
2. El valor actualizado de los bienes comunes empleados en el pago de deudas privativas se imputará en la participación del cónyuge deudor hasta que lo reembolse, y se tendrá en cuenta para ulteriores reclamaciones de acreedores privativos.

Artículo 225.— *Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.*

1. Cuando en una ejecución sobre bienes comunes, seguida a causa de deudas distintas de las enunciadas en el artículo 219, el cónyuge del deudor quiera, en el procedimiento previsto por la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales, hacer valer su derecho a que quede a salvo el valor que en el patrimonio común le corresponde, podrá pedir la liquidación del mismo al exclusivo n de constatar el valor que ha de quedarle a salvo, sin disolución del consorcio. En este caso, la ejecución proseguirá tan pronto se constate la existencia de bienes que sobrepasen el valor que ha de quedar a salvo y solo sobre aquellos bienes, alzándose en todo caso el embargo sobre los demás.
2. El cónyuge del deudor podrá también optar por la disolución del consorcio y división de los bienes comunes. Producida la disolución, el matrimonio se regirá por el régimen de separación de bienes.

Artículo 226.— *Relaciones entre patrimonios.*

1. Los patrimonios de los cónyuges y el común deben reintegrarse entre sí aquellos valores que cada uno hubiese lucrado sin causa a costa de los otros.
2. En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al reintegro del importe actualizado:
 - a) De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o empleados en la adquisición de bienes comunes.
 - b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de la comunidad.
3. En particular, el consorcio tiene derecho a ser reembolsado del importe actualizado:
 - a) De los bienes comunes empleados en la adquisición de bienes privativos.
 - b) De los bienes comunes empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de los patrimonios privativos.

4. Los patrimonios privativos deben indemnizar al común el importe actualizado de los daños y perjuicios que uno u otro cónyuge le hayan causado por acción dolosa o gravemente negligente.
5. El pago de las obligaciones existentes entre el patrimonio consorcial y los privativos, aunque válido en cualquier momento por acuerdo entre los cónyuges, solo puede exigirse antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hubiera pactado o cuando medie justa causa. Es siempre justa causa la disposición abusiva de capital común en beneficio propio.

CAPÍTULO III **GESTIÓN DEL CONSORCIO**

Sección 1.^a **DE LA ECONOMÍA FAMILIAR**

Artículo 227.— *Reglas generales.*

1. Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges.
2. Los cónyuges gestionarán el patrimonio común y los suyos privativos con la debida diligencia y teniendo en cuenta el interés de la familia.
3. Los cónyuges deben informarse recíprocamente sobre la gestión del patrimonio común y de los suyos privativos, y sobre los resultados económicos de la profesión o negocio que ejerzan.

Artículo 228.— *Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.*

1. En los supuestos de graves o reiterados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar del Juez la disolución y división del consorcio, rigiendo en su caso, y para lo sucesivo, la separación de bienes.
2. La misma decisión podrá solicitar un cónyuge cuando el otro incumpla reiteradamente su deber de informar.

Sección 2.^a
GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES

Artículo 229.— *Pactos sobre gestión.*

1. La gestión del patrimonio común corresponde a los cónyuges, conjuntamente o por separado, en la forma pactada en capitulaciones matrimoniales.
2. En defecto de pactos válidos o para completarlos se aplicará lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 230.— *Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.*

Cada uno de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo sobre los bienes que integran el patrimonio común:

- a) Actos de administración ordinaria.
- b) Actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas expresamente para el consorcio conyugal, como agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva o constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal. Si estuvieran inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para su inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las hubiera adquirido.
- c) Actos de defensa, judicial o extrajudicial.
- d) Actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 218. Para justificar la necesidad del acto, será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del otro cónyuge.

Artículo 231.— *Ejercicio de profesión o negocio.*

1. Cada cónyuge estará legitimado para realizar los actos de administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio.
2. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.

Artículo 232.— *Actuación frente a terceros.*

En cuanto a los bienes que figuren a su nombre exclusiva o indistintamente, o se encuentren en su poder, cada cónyuge está legitimado, frente a terceros de buena fe, para realizar actos de administración, así como los de disposición a título oneroso de dinero, valores mobiliarios, derechos de crédito y cualesquiera otros bienes muebles.

Artículo 233.— *Actuación conjunta de ambos cónyuges.*

En los supuestos no comprendidos en los artículos anteriores, la realización de actos de administración extraordinaria o de disposición de bienes comunes corresponde a ambos cónyuges conjuntamente o a uno de ellos con el consentimiento del otro.

Artículo 234.— *Autorización judicial.*

Cuando un cónyuge pretenda realizar o haya realizado actos de administración o disposición a título oneroso que requieran el consentimiento del otro cónyuge y este se halle impedido para prestarlo o se niegue injustificadamente a ello, resolverá el Juez.

Artículo 235.— *Falta de consentimiento en actos a título oneroso.*

1. La venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos es válida y produce sus efectos obligacionales exclusivamente entre las partes contratantes y sus herederos, pero la entrega de la cosa, en cualquier forma que se realice, no transmite la propiedad al comprador.
2. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. Mientras no consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que se declare que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como exigir la restitución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de las reglas de protección de terceros de buena fe.
3. El comprador tiene contra el vendedor las acciones de incumplimiento y las demás que deriven de la compraventa.

4. Las mismas reglas se aplicarán en los demás casos de transmisión o disposición de bienes comunes a título oneroso.

Artículo 236.— *Rescisión por fraude.*

El acto de disposición realizado a título oneroso por uno de los cónyuges sobre el patrimonio común en fraude de los derechos del otro cónyuge podrá rescindirse a solicitud de este último, si el adquirente hubiese sido cómplice en el fraude.

Artículo 237.— *Actos inter vivos a título lucrativo.*

Será nula de pleno derecho la donación de un bien consorcial realizada por uno solo de los cónyuges. Se exceptúan las liberalidades usuales según las circunstancias de la familia.

Artículo 238.— *Disposiciones por causa de muerte.*

1. Cualquiera de los cónyuges podrá disponer por causa de muerte de su participación en el patrimonio común.
2. A la disposición por causa de muerte de bienes determinados del patrimonio común, en defecto de otra previsión, le serán de aplicación las siguientes reglas:
 - a) Si la realizara un cónyuge a favor del otro, este adquirirá su propiedad directamente al deferirse la herencia de aquel, sin necesidad de liquidación del consorcio.
 - b) Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la herencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que en la liquidación del consorcio la mitad indivisa de los indicados bienes se adjudique a la parte correspondiente al causante.
 - c) Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro, solo producirá sus efectos si al liquidarse el consorcio los bienes fueran adjudicados a la herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá legado el valor que tuvieran al tiempo de la delación.
3. Si un cónyuge lega los derechos que le corresponden en un bien determinado del patrimonio común, el legado se limitará a una mitad indivisa del mismo o, si todo él se adjudica al otro cónyuge, al valor de la mitad al tiempo de la delación.

Artículo 239.— *Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.*

Cuando un bien haya sido adquirido por uno solo de los cónyuges a costa del patrimonio común contra la voluntad del otro cónyuge, por solicitud de este último al liquidarse el consorcio el bien adquirido se integrará en el patrimonio privativo del adquirente, reembolsando al patrimonio común el valor actualizado del precio y demás gastos de la adquisición.

Artículo 240.— *Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.*

El cónyuge cuyo consorte se encuentre imposibilitado para la gestión del patrimonio común o cuando no sea él quien preste las medidas de apoyo a su consorte con discapacidad, podrá solicitar del Juez que se la confiera a él solo. El Juez podrá acceder a lo solicitado y señalar límites o cautelas a la gestión concedida, según las circunstancias.

Artículo 241.— *Privación de la gestión.*

Cuando por actos de uno de los cónyuges se haya puesto en peligro repetidamente la economía familiar, el otro cónyuge puede pedir al Juez que prive a aquel en todo o en parte de sus facultades de gestión.

Artículo 242.— *Concreción automática de facultades.*

Cuando uno de los cónyuges haya sido declarado ausente o esté sujeto a medidas de apoyo representativas en la esfera patrimonial y corresponda prestar el apoyo a su consorte, la gestión del patrimonio común corresponderá en estos casos al otro cónyuge, que necesitará, no obstante, autorización del Juez o de la Junta de Parientes del cónyuge ausente o sujeto a medidas de apoyo para los actos de disposición sobre inmuebles o establecimientos mercantiles.

Sección 3.^a

GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOS

Artículo 243.— *Gestión de los bienes privativos.*

1. Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus propios bienes.

2. El cónyuge que administra bienes privativos de su consorte con su consentimiento o sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
3. El cónyuge que administre bienes privativos del otro contra su voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.

CAPÍTULO IV

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN DEL CONSORCIO

Sección 1.^a

DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 244.— *Causas de disolución de pleno derecho.*

El consorcio conyugal concluirá de pleno derecho:

- a) Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos matrimoniales.
- b) Cuando se disuelva el matrimonio.
- c) Cuando sea declarado nulo.
- d) Cuando se declare la separación legal de los cónyuges.

Artículo 245.— *Causas de disolución por decisión judicial.*

El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, en los casos siguientes:

- a) Haber sido el otro cónyuge declarado ausente o encontrarse en la situación de discapacidad a que se refiere el apartado 2 del artículo 34, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al cónyuge ausente o con discapacidad o este mismo con el apoyo asistencial que, en su caso, tuviera establecido.

- b) Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.

En los casos de ausencia declarada y de condena por abandono de familia, para que el Juez acuerde la disolución bastará que quien la pida presente la correspondiente resolución judicial.

- c) Llevar separados de hecho más de un año.
- d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 228.
- e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 225.
- f) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa, conforme a la legislación concursal.

Artículo 246.— *Medidas provisionales.*

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya solicitado la disolución del consorcio, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario y, a falta de acuerdo entre los cónyuges, el Juez señalará las reglas que deban observarse en la administración y disposición de los bienes comunes. En defecto de acuerdo entre los cónyuges, se requerirá autorización judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria.

Artículo 247.— *Momento de eficacia de la disolución.*

1. La disolución, si es de pleno derecho, se produce desde que concurre su causa y, en los casos que requieren decisión judicial, desde la fecha que en ella se fije o, en su defecto, desde la fecha de la resolución en que se acuerde.
2. En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de disolución de la comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez podrá retrotraer los efectos de la disolución hasta el

momento de admisión a trámite de la demanda, pero quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 248.— *Régimen subsiguiente.*

1. Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, existirá entre los cónyuges separación de bienes, salvo que pacten otro régimen.
2. La separación de bienes no se altera por la reconciliación de los cónyuges en caso de separación personal o por la desaparición de cualquiera de las demás causas que la hubiesen motivado.

Artículo 249.— *Disolución por nulidad del matrimonio.*

Si la sentencia de nulidad del matrimonio declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de este capítulo o por la aplicación retroactiva del régimen de separación de bienes.

Sección 2.^a

LA COMUNIDAD QUE CONTINÚA TRAS LA DISOLUCIÓN

Artículo 250.— *Bienes comunes.*

Disuelta la comunidad matrimonial y hasta tanto no se divida, ingresarán en el patrimonio común:

- a) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes.
- b) Los bienes y caudales procedentes de sustitución o enajenación de bienes comunes.
- c) Los incrementos y accesiones de los bienes comunes, sin perjuicio de los reintegros que procedan.

Artículo 251.— *Deudas comunes.*

1. Además de las deudas y responsabilidades comunes originadas durante el consorcio conyugal, tras la disolución serán también de responsabilidad de los bienes comunes las deudas y gastos derivados de la gestión del patrimonio común.

2. De las deudas comunes contraídas tras la disolución responde también el gestor que las contrajo, quien, en defecto de bienes comunes, podrá obligar a los demás partícipes a contribuir al pago en proporción a sus cuotas.

Artículo 252.— *Responsabilidad de los bienes comunes.*

1. Hasta la división, el patrimonio común responde del pago de las deudas comunes, pero los acreedores que pretendan cobrar una deuda de esta naturaleza sobre bienes comunes habrán de proceder contra ambos cónyuges o sus herederos.
2. Los acreedores privativos de los cónyuges o de sus herederos no pueden proceder contra bienes concretos de la comunidad disuelta y no dividida, pero sí contra los derechos que a su deudor puedan corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquella.

Artículo 253.— *Disolución por muerte.*

1. Disuelto el consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cónyuge viudo lo administrará, salvo cuando al producirse la disolución se encontrasen ya en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación, o la disolución del consorcio.
2. El cónyuge viudo podrá deducir del patrimonio de la comunidad disuelta alimentos para sí y las personas que con el matrimonio convivían y mientras continúen viviendo en casa, pero cuando sea titular del usufructo de viudedad solo a falta o insuficiencia de frutos de los bienes comunes.
3. El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede por sí solo, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación análoga a la que ambos cónyuges hayan otorgado a favor de hijo o hija casados en vida de los dos.
4. El cónyuge viudo responderá de su gestión como administrador y dará cuenta de ella a los partícipes en cuanto exceda de las facultades que le pudieran corresponder en

virtud del usufructo de viudedad. Cualquiera de los partícipes podrá, entonces, solicitar la aplicación de las mismas cautelas previstas para el usufructo viudal.

5. Habiendo solo hijos comunes, los bienes consumibles que no aparezcan al tiempo de la división se presumen aprovechados en beneficio del consorcio.

Artículo 254.— *Disolución por otras causas.*

En los demás casos de disolución, la administración y disposición de los bienes comunes se regirá por lo acordado por los cónyuges o partícipes y, en su defecto, se estará a lo dispuesto por el Juez en el correspondiente procedimiento.

Artículo 255.— *Disposición por causa de muerte.*

La disposición por causa de muerte mientras la masa común no haya sido dividida se regirá por lo dispuesto en el artículo 238.

Artículo 256.— *Preferencia del derecho de viudedad.*

Los derechos y obligaciones derivados de la viudedad son preferentes a los contenidos en esta sección.

Artículo 257.— *Régimen supletorio.*

A la comunidad regulada en esta sección le será de aplicación, en cuanto no contradiga su naturaleza, el régimen jurídico de la comunidad hereditaria.

Sección 3.^a **LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN**

Artículo 258.— *Derecho a la división.*

1. Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes tiene derecho a promover en cualquier tiempo la liquidación y división del patrimonio consorcial. También se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del cónyuge premuerto o de cualquier partícipe.
2. En caso de disolución por muerte, a la prohibición de división pactada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos cónyuges y al convenio de indivisión

unánimemente acordado por los partícipes se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 365.

Artículo 259.— *Modalidades de liquidación y división.*

1. Los cónyuges o partícipes pueden, mediante acuerdo unánime, liquidar y dividir por sí mismos el patrimonio consorcial, así como encomendar a terceros la liquidación y división.
2. El fiduciario o contador partidor de la herencia del premuerto, actuando junto con el cónyuge viudo que no ejerza dichos cargos, pueden practicar la liquidación y división de la comunidad matrimonial disuelta sin que sea necesaria la concurrencia de los partícipes.
3. El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto, para realizar la liquidación y división, necesitará la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena aptitud para el ejercicio de su capacidad jurídica y, si son todos menores o sin aptitud plena, de la Junta de Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisará de la autorización del Juez. Dichas autorizaciones no serán necesarias cuando se limite a adjudicar proindiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos del cónyuge premuerto y a él mismo en igual proporción en que sean cotitulares del patrimonio.
4. Si la liquidación y división no se pudiera llevar a cabo de alguna de las formas recogidas en este precepto, se practicará, a instancia de cualquiera de los cónyuges o partícipes, conforme a lo previsto en la Ley de enjuiciamiento civil.

Artículo 260.— *Capacidad.*

A la liquidación y división voluntaria con cónyuges con discapacidad o partícipes en igual situación o menores de edad se le aplicarán las previsiones contenidas en los artículos 366 y 367.

Artículo 261.— *Inventario.*

A petición de cualquiera de los cónyuges o partícipes, la liquidación de la comunidad conyugal disuelta comenzará por un inventario del activo y pasivo del patrimonio consorcial.

Artículo 262.— *Activo del inventario.*

En el activo se incluirán las siguientes partidas:

- a) Todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes, así como aquellos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial, todo ello a salvo de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 253 y en el artículo 269.
- b) Los créditos de la comunidad contra terceros.
- c) Los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios privativos de los cónyuges.

Artículo 263.— *Pasivo del inventario.*

En el pasivo se incluirán las siguientes partidas:

- a) Las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad.
- b) Los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios privativos de los cónyuges.

Artículo 264.— *Liquidación concursal.*

Cuando el activo inventariado no baste para satisfacer las deudas consorciales y los reintegros a los patrimonios privativos, se aplicarán las normas sobre concurrencia y prelación de créditos.

Artículo 265.— *Liquidación ordinaria.*

1. Una vez determinado que existe efectivamente un activo consorcial superior al pasivo y cuál sea aquel, la liquidación seguirá este orden:
 - 1.º Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios privativos con lo que estos, por cualquier concepto, deban a aquella.
 - 2.º Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la respectiva participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta agotar su importe, salvo que opte por el reembolso en metálico o se acuerde su pago mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.

- 3.º Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido ser objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
 - 4.º Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las pendientes.
 - 5.º Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo acreedor resultante de la compensación del número 1.º, que, a falta de metálico suficiente, podrá hacerse mediante dación en pago de bienes consorciales.
2. Los reembolsos y reintegros se harán por su importe actualizado al tiempo de la liquidación.
 3. Si para las operaciones precedentes fuera necesario vender o dar en pago bienes consorciales, se respetarán, en tanto sea posible, los mencionados en los dos artículos siguientes.

Artículo 266.— *Aventajas.*

1. Los cónyuges tienen derecho a detraer de los bienes comunes, como ventajas, sin que sean computados en su lote, sus bienes de uso personal o profesional de un valor no desproporcionado al patrimonio consorcial.
2. Fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá detraer ajuar de casa en consonancia con el tenor de vida del matrimonio; además de cualesquiera otros bienes comunes que, como tales ventajas, le conceda la costumbre local.
3. El derecho a las ventajas es personalísimo y no se transmite a los herederos.

Artículo 267.— *División y adjudicación.*

1. Liquidado el patrimonio y detraídas las ventajas, el caudal remanente se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus respectivos herederos por mitad o en la proporción y forma pactadas.
2. Cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su lote, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, los siguientes bienes:

- a) Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.
- b) Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan ventajas.
- c) La empresa o explotación económica que dirigiera.
- d) Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas exclusivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o pactadas, para su transmisión al otro cónyuge o sus herederos, o cuando el adquirente forme parte del órgano de administración de la sociedad.
- e) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
- f) Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
- g) En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo del fallecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.

Artículo 268.— *Las deudas comunes tras la división.*

1. La división no modifica la responsabilidad por deudas que correspondía a los patrimonios privativos o al común.
2. El cónyuge no deudor o sus herederos responderán solidariamente de las deudas comunes, pero exclusivamente con los bienes que les hayan sido adjudicados, aunque no se haya hecho inventario. Sin embargo, cuando dichos bienes no sean suficientes, responderán con su propio patrimonio del valor de lo adjudicado que hayan enajenado o consumido, así como del valor de la pérdida o deterioro de los bienes recibidos.
3. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado un partícipe mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra los que resultasen favorecidos y en la proporción en que lo hayan sido.

Artículo 269.— *Liquidación de varias comunidades.*

Quando, extinguida la comunidad, contrae uno de los anteriores cónyuges ulteriores nupcias sin previa división, se hará

separadamente liquidación de cada comunidad. Entre ellas se verificarán los reintegros y reembolsos que procedan. Los bienes y deudas cuya condición no pudiera ser exactamente determinada se distribuirán equitativamente, atendiendo además al tiempo y duración de cada comunidad y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges.

Artículo 270.— *Régimen supletorio.*

A la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de aplicación, en lo no previsto en esta sección y en tanto lo permita su naturaleza, las normas de la liquidación y partición de la comunidad hereditaria.

TÍTULO V DE LA VIUDEDAD

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 271.— *Origen.*

1. La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca.
2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante.
3. El derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen económico matrimonial.

Artículo 272.— *Pactos.*

1. Los cónyuges pueden pactar en escritura pública o disponer de mancomún en su testamento la exclusión o limitación del derecho de viudedad, para los dos o para uno solo de ellos, o regularlo como libremente convengan. Antes del matrimonio, los pactos entre contrayentes habrán de constar en capitulaciones matrimoniales.

2. Pueden asimismo pactar, en escritura pública, la exclusión del derecho expectante de viudedad, conservando para su caso el de usufructo viudal.
3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas a la viudedad se entenderán siempre en sentido favorable a la misma.

Artículo 273.— *Inalienabilidad.*

El derecho de viudedad es inalienable e inembargable.

Artículo 274.— *Renuncia.*

1. Cada cónyuge puede renunciar, en escritura pública, a su derecho de viudedad sobre todos los bienes del otro o parte de ellos.
2. También es válida la renuncia, en escritura pública, solamente al derecho expectante de viudedad, sobre todos o parte de los bienes del otro.

Artículo 275.— *Privación.*

Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho de viudedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar a la desheredación de acuerdo con el artículo 510.

La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del cónyuge premuerto, si el viudo la niega.

Artículo 276.— *Extinción.*

1. El derecho de viudedad se extingue necesariamente con la disolución del matrimonio por causa distinta de la muerte y por la declaración de su nulidad.
2. Se extingue también por la separación legal ante Notario, así como por la admisión a trámite de la demanda de separación, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, y por la petición de separación o divorcio de mutuo acuerdo, a menos que pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista. El derecho de viudedad nace de nuevo cuando el proceso finaliza en vida de ambos cónyuges sin sentencia firme estimatoria o decreto que declare la

separación o divorcio, se reconcilian los cónyuges separados o así lo pactan estos.

3. Se extingue también cuando, al fallecer un cónyuge, incurre el supérstite en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 328 como causas de indignidad.

Artículo 277.— *Limitaciones.*

1. El derecho de viudedad no comprende los bienes que los cónyuges reciban a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su fallecimiento pasen a tercera persona.
2. Sin embargo, los ascendientes no pueden prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a este por donación o sucesión.

Artículo 278.— *Derecho de transmisión y consorcio foral.*

Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia quedan sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 354; y los adquiridos por el acrecimiento derivado del consorcio foral regulado en el apartado 3 del artículo 374, al del cónyuge del consorte fallecido.

CAPÍTULO II

EL DERECHO DE VIUEDAD DURANTE EL MATRIMONIO

Artículo 279.— *Derecho expectante de viudedad.*

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 271, durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante a favor de cada uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y los consorciales.

Artículo 280.— *Disposición de bienes inmuebles.*

1. El derecho expectante de viudedad sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue por su enajenación, salvo en los siguientes supuestos:

- a) Renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
 - b) Enajenación válida de un bien consorcial.
 - c) Enajenación de bienes privativos de uno de los cónyuges incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.
 - d) Partición y división de bienes, incluso con exceso de adjudicación, respecto de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.
 - e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.
 - f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento administrativo.
2. Salvo reserva expresa, en toda enajenación en que hayan concurrido ambos cónyuges se extinguirá el derecho expectante de viudedad.
 3. A petición de un cónyuge, el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante del otro sobre un bien, antes o después de su enajenación, en razón de las necesidades o intereses familiares.
 4. También se extingue el derecho expectante cuando se haya notificado fehacientemente al cónyuge la enajenación, con el requerimiento para que manifieste su voluntad de conservar o renunciar su derecho con las consecuencias legales que de ello se derivan, y hayan transcurrido dos años desde dicha notificación sin que en el Registro de la Propiedad conste la voluntad del cónyuge de conservar el derecho expectante.

Artículo 281.— *Enajenación judicial de bienes inmuebles.*

1. Se extingue el derecho expectante de viudedad en la enajenación judicial por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos cuando sean de cargo o responsabilidad

común, así como por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de sucesiones o donaciones.

2. También se extingue en la enajenación judicial por deudas contraídas por uno de los cónyuges si, notificado el embargo del bien común o privativo al menos diez días hábiles antes de la celebración de la subasta al otro cónyuge, este no manifiesta en el citado plazo su voluntad de conservarlo por no ser deudas de las enumeradas en el apartado anterior. Corresponde al acreedor probar que la deuda es de las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales.

Artículo 282.— *Disposición de bienes muebles.*

El derecho expectante de viudedad sobre bienes muebles se extingue cuando salen del patrimonio común o privativo, salvo que se hayan enajenado en fraude del derecho de viudedad.

CAPÍTULO III USUFRUCTO VIDUAL

Artículo 283.— *Comienzo y extensión del usufructo vidual.*

1. El fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto, así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad, de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores.
2. Cuando un cónyuge hubiera sido declarado ausente, quedan excluidos de su derecho de usufructo vidual los bienes enajenados válidamente por los herederos del premuerto antes de la aparición de aquel. Al usufructo de viudedad en caso de ausencia se aplican también las demás previsiones del artículo 54.
3. Por voluntad de uno de los cónyuges expresada en testamento o escritura pública, podrán excluirse del usufructo vidual los bienes de su herencia que recaigan en descendientes suyos

que no sean comunes, siempre que el valor de esos bienes no exceda de la mitad del caudal hereditario.

4. Desde el fallecimiento de un cónyuge el sobreviviente adquiere la posesión de los bienes afectos al usufructo viual.

Artículo 284.— *Explotaciones económicas.*

1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que se transmitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o escritura pública, la sustitución del usufructo viual del sobreviviente sobre las mismas por una renta mensual a cargo del adquirente.
2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera producido la explotación durante los cinco años anteriores al fallecimiento.
3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones del índice general de precios al consumo y se extinguirá por las mismas causas que el usufructo viual.
4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán, en cualquier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en este precepto por el ordinario del usufructo viual.
5. La transmisión por el titular de la explotación económica por actos entre vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas futuras.

Artículo 285.— *Inventario y fianza.*

El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de los bienes usufructuados y a prestar fianza:

- a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en testamento u otro instrumento público.
- b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto.
- c) Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.

Artículo 286.— *Formalización del inventario.*

1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con citación de los nudo propietarios de los bienes o sus representantes legales y comprenderá todos los bienes sujetos al usufructo viudal.
2. El plazo para terminarlo será:
 - a) En el caso de la letra a) del artículo 285, el fijado por el causante y, en su defecto, el de seis meses contados desde el fallecimiento.
 - b) En el caso de la letra b) del artículo 285, el de cincuenta días, contados desde el oportuno requerimiento fehaciente.
 - c) Y en el caso de la letra c) del artículo 285, el señalado por el Juez y, en su defecto, el de cincuenta días a contar desde la notificación de la resolución judicial que ordene su práctica.

En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o cualquiera de los nudo propietarios podrá pedir al Juez y este acordar la prórroga o reducción del plazo.
3. El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura pública.

Artículo 287.— *Otras medidas cautelares.*

Cuando proceda el inventario y hasta tanto este se formalice y, en su caso, se constituya la fianza, los nudo propietarios podrán instar del Juez la adopción de medidas de aseguramiento respecto de los bienes sujetos al usufructo.

Artículo 288.— *Sanción de la falta de inventario.*

Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya dentro del plazo, podrá ser requerido por los nudo propietarios para que lo termine. Los disfrutes de viudedad, desde el día del requerimiento y hasta la terminación del inventario, corresponderán definitivamente a los nudo propietarios.

Artículo 289.— *Derechos y obligaciones.*

El usufructo viudal atribuye a su titular los derechos y obligaciones de todo usufructuario, con las modificaciones que resultan del presente Capítulo.

Artículo 290.— *Inalienabilidad e inembargabilidad.*

1. El usufructo viudal sobre los bienes afectos al mismo es inalienable e inembargable.
2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados, concurriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario. Salvo pacto en contrario, quedarán subrogados el precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado.
3. El usufructo de viudedad sobre bienes determinados solo podrá embargarse y transmitirse como consecuencia del procedimiento de ejecución conjuntamente con la nuda propiedad.
4. Son susceptibles de enajenación y embargo los frutos y rentas resultantes del disfrute de los bienes afectos al usufructo de viudedad.

Artículo 291.— *Transformación del usufructo.*

El viudo usufructuario y los nudo propietarios pueden pactar la transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno.

Artículo 292.— *Intervención de los nudo propietarios.*

Cuando los nudo propietarios estimen que de la administración y explotación de los bienes por el usufructuario se derivan graves perjuicios para ellos, podrán acudir al Juez para que dicte las medidas oportunas, incluida la transformación del usufructo.

Artículo 293.— *Liquidación de frutos.*

A la constitución o extinción del usufructo, la liquidación de los frutos naturales, industriales y civiles obtenidos durante el correspondiente período productivo se hará en proporción a la duración en él del respectivo derecho. La misma regla regirá en cuanto a los gastos de producción.

Artículo 294.— *Gastos y mejoras.*

1. Son a cargo del usufructuario los gastos de producción, conservación, mantenimiento y reparaciones ordinarias.
2. El usufructuario tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y útiles que no sean de su cargo, pudiendo retener

la cosa hasta que se le satisfagan. El nudo propietario podrá optar por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.

3. No se abonarán al usufructuario los gastos de puro lujo o mero recreo, pero podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido la cosa principal si no sufre deterioro, y si el nudo propietario no prefiere abonar el importe de lo satisfecho.

Artículo 295.— *Reparaciones extraordinarias.*

1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias cuando los nudo propietarios fueran descendientes suyos.
2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas.
3. Si el nudo propietario hiciera las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciera cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos.

Artículo 296.— *Tributos.*

1. Serán de cargo del usufructuario los tributos que graven los bienes usufructuados.
2. Cuando los nudo propietarios no fueren descendientes del viudo usufructuario serán a cargo de aquellos los tributos de carácter extraordinario.

Artículo 297.— *Seguro de los bienes sujetos a usufructo viudal.*

1. Si un bien afecto al usufructo viudal estuviera asegurado en vida del cónyuge difunto deberá el viudo mantenerlo asegurado, siendo de su cargo el pago de las primas.

2. De no estar asegurado al fallecimiento de su cónyuge, el viudo no tendrá obligación de hacerlo. De asegurarlo el nudo propietario, será de su cargo el pago de las primas.
3. Producido el siniestro, el nudo propietario podrá emplear el importe de la indemnización en la reparación, reconstrucción o sustitución del bien. De no hacerlo, se aplicarán a la indemnización las reglas del usufructo de dinero.

Artículo 298.— *Alimentos.*

La obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que corresponde a los ascendientes, se extiende para el viudo usufructuario respecto de los descendientes no comunes del cónyuge premuerto.

Artículo 299.— *Usufructo de dinero.*

El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualizado del dinero dispuesto.

Artículo 300.— *Usufructo de fondos de inversión.*

1. En los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos, corresponde al viudo la diferencia positiva entre el importe actualizado de su valor al comienzo del usufructo y el que tengan al producirse el reembolso o extinguirse el usufructo.
2. La facultad de exigir el reembolso corresponde al nudo propietario. No obstante, el usufructuario podrá disponer con periodicidad anual de aquellas participaciones del fondo que sean equivalentes al importe que le corresponde conforme al apartado anterior, haciendo suya definitivamente la cantidad así obtenida.
3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo con el usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese momento, las reglas del usufructo de dinero a la parte del importe obtenido que no corresponda al viudo.

Artículo 301.— *Extinción del usufructo viudal.*

1. Se extingue el usufructo de viudedad:
 - a) Por muerte del usufructuario.
 - b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública.
 - c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario.
 - d) Por corromper o abandonar a los hijos.
 - e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario.
 - f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cónyuge.
2. Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:
 - a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
 - b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma persona.
 - c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

Artículo 302.— *Posesión de los propietarios.*

Extinguida la viudedad, los propietarios podrán entrar en posesión de los bienes usufructuados por el mismo procedimiento previsto para los herederos.

TÍTULO VI DE LAS PAREJAS ESTABLES NO CASADAS

Artículo 303.— *Concepto.*

Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las formadas por personas mayores de edad entre

las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en este Título.

Artículo 304.— *Registro administrativo.*

Toda pareja estable no casada deberá ser inscrita en un Registro de la Diputación General de Aragón para que le sean aplicables las medidas administrativas que le correspondan, así como anotada o mencionada en el Registro Civil competente si la legislación estatal lo previera.

Artículo 305.— *Existencia de pareja estable no casada.*

1. Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública.
2. Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el transcurso de los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente, a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia.

Artículo 306.— *Requisitos de capacidad.*

No podrán constituir una pareja estable no casada:

- a) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
- b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
- c) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
- d) Los que formen pareja estable con otra persona.

Artículo 307.— *Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria.*

1. La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones correspondientes podrán regularse en sus aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos,

siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón.

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición.
3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.

Tendrán la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda.

4. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos a que se refiere el número anterior, si se adecuan a los usos sociales; en cualquier otro caso, tan solo respondería quien hubiera contraído la obligación.

Artículo 308.— *Capitulaciones matrimoniales.*

Si así lo hubieran acordado expresamente en la escritura, el régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada adquirirá el valor de capitulaciones matrimoniales, en caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio.

Artículo 309.— *Causas de extinción.*

1. La pareja estable no casada se extingue:
 - a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.
 - b) De común acuerdo.
 - c) Por decisión unilateral.
 - d) Por separación de hecho de más de un año.
 - e) Por matrimonio de uno de sus miembros.

2. Cualquier miembro de la pareja estable podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro.
3. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera otorgado.
4. En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior.
5. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

Artículo 310.— *Efectos patrimoniales de la extinción en vida.*

1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos:
 - a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.
 - b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para este.
2. La reclamación por cualquiera de los miembros de la pareja del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia.

Artículo 311.— *Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes.*

1. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución, del testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar.
2. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de una pareja estable no casada, el otro miembro de la pareja debe poder tomar parte, en las mismas condiciones que en caso de matrimonio, en los trámites y las gestiones relativos a la identificación y disposición del cadáver, el entierro, la recepción de objetos personales o cualquier otro trámite o gestión necesaria.

Artículo 312.— *Adopción.*

Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente.

Artículo 313.— *Derecho de alimentos.*

Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualesquiera otras personas legalmente obligadas.

Artículo 314.— *Inexistencia de parentesco.*

La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro.

Artículo 315.— *Normativa aragonesa de Derecho público.*

Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho público, que no tenga carácter tributario, serán de igual aplicación a los miembros de la pareja estable no casada.

LIBRO TERCERO
DERECHO DE SUCESIONES
POR CAUSA DE MUERTE

TÍTULO I
DE LAS SUCESIONES EN GENERAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 316.— *La sucesión por causa de muerte.*

La sucesión por causa de muerte es la ordenación del destino de las relaciones jurídicas de una persona fallecida que no se extingan por su muerte y no estén sujetas a reglas distintas. En los pactos sucesorios algunos efectos de la sucesión *mortis causa* se anticipan a la muerte del instituyente.

Artículo 317.— *Modos de delación.*

1. La sucesión se defiere por pacto, por testamento o por disposición de la ley.
2. Los distintos modos de delación son compatibles entre sí.

Artículo 318.— *Ordenación voluntaria.*

El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio *standum est chartae*.

Artículo 319.— *Sucesores por causa de muerte.*

1. Los llamamientos sucesorios pueden realizarse a título universal o particular; en los primeros se sucede en la totalidad o en una parte alícuota del patrimonio del fallecido, mientras que en los segundos se sucede en bienes o derechos determinados.
2. Los sucesores por causa de muerte pueden ser herederos, legatarios o sucesores a título particular por disposición legal.

3. Es también legatario quien recibe del disponente algún derecho que no forma parte de la herencia.

Artículo 320.— *Momento y lugar de apertura de la sucesión.*

1. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante, y en el lugar de su último domicilio.
2. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a suceder, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.

Artículo 321.— *Momento de la delación.*

1. La sucesión se defiere en el momento del fallecimiento del causante.
2. En la sucesión bajo condición suspensiva, la delación tendrá lugar al tiempo de cumplirse la condición.
3. En los llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento anterior, la sucesión se entiende deferida al sustituto al tiempo del fallecimiento del causante. No habiéndose frustrado el llamamiento anterior, la sustitución tiene lugar cuando fallezca el heredero precedente o de otra forma se extinga su derecho.
4. En la sucesión contractual y en la fiducia, el momento de la delación se rige por sus respectivas normas.

Artículo 322.— *Adquisición de la herencia.*

1. El llamado a título de heredero que acepta la herencia adquiere los bienes y derechos de la misma, se subroga en las obligaciones del causante y queda obligado a cumplir las cargas hereditarias, todo ello desde el momento de la delación.
2. En la herencia deferida por pacto sucesorio los efectos transmisivos dependen de lo pactado, sin que tras la muerte del instituyente se requiera nueva aceptación del instituido que intervino en el pacto.
3. El sucesor a título particular adquiere su derecho desde el momento de la delación, sin perjuicio de la posibilidad de repudiarlo.

Artículo 323.— *Ineficacia del llamamiento voluntario.*

1. Cuando resulte ineficaz un llamamiento voluntario, no haya sustituto del mismo carácter o legal ni tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del llamado a heredar pasará a los herederos legales del causante y si se trata de un legado se refundirá con la masa de la herencia.
2. Quien hereda como consecuencia de la ineficacia de un llamamiento voluntario, aunque sea como heredero legal, queda sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas al primeramente designado, salvo que sean puramente personales de este o que el disponente hubiera previsto otra cosa.

Artículo 324.— *La herencia yacente.*

1. Desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación del llamado la herencia carece de titular.
2. La administración de la herencia yacente corresponderá a la persona que hubiera designado, en su caso, el causante.
3. A falta de administrador los llamados como herederos podrán realizar exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia y de administración de la herencia. Dichos actos por sí solos no implican la aceptación de la misma.
4. Asimismo, los llamados como herederos podrán instar el nombramiento de un administrador judicial de la herencia de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales.
5. La situación jurídica de la herencia yacente en los casos de fiducia se regirá por sus propias normas.

CAPÍTULO II

CAPACIDAD E INDIGNIDAD PARA SUCEDER

Artículo 325.— *Capacidad sucesoria de las personas físicas.*

1. Tienen capacidad sucesoria todas las personas nacidas o concebidas al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan al causante. No obstante, en la sucesión voluntaria puede disponerse a favor de los hijos aún no concebidos

de persona determinada viva al tiempo de la apertura de la sucesión.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá concebido al tiempo de la apertura de la sucesión el que nazca antes de los trescientos días siguientes al fallecimiento del causante.
3. Si el causante ha expresado en debida forma su voluntad de fecundación asistida *post mortem* con su material reproductor, los hijos así nacidos se considerarán concebidos al tiempo de la apertura de la sucesión siempre que se cumplan los requisitos que la legislación sobre esas técnicas de reproducción establece para determinar la filiación.

Artículo 326.— *Llamamientos a favor de no nacidos.*

La herencia deferida a favor de un todavía no nacido, esté concebido o no, se pondrá en administración, con sujeción a las reglas de la herencia bajo condición suspensiva.

Artículo 327.— *Capacidad sucesoria de las personas jurídicas.*

1. Tienen capacidad sucesoria las personas jurídicas constituidas legalmente al tiempo de la apertura de la sucesión.
2. Si el causante, en su disposición por causa de muerte, crea u ordena crear una persona jurídica que solo quede constituida legalmente después de la apertura de la sucesión, esta tendrá capacidad para adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por el causante desde que tenga personalidad, pero los efectos se retrotraerán al momento de la delación.

Artículo 328.— *Causas de indignidad.*

Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

- a) El que fuera condenado en sentencia firme por haber atentado dolosamente contra la vida o por haber causado lesiones graves al causante, su cónyuge o pareja estable no casada, descendientes o ascendientes, al fiduciario o a otro llamado a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión al indigno.
- b) El que fuera condenado en sentencia firme a pena grave por haber ejercido habitualmente violencia física o

psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge o pareja estable no casada, descendientes o ascendientes.

- c) El que fuera condenado en sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante o alguna de las personas a que se refiere la letra anterior.
- d) El que fuera condenado en sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares, respecto de la herencia de la persona agraviada.
- e) El que fuera privado por resolución judicial firme de la autoridad familiar o removido de la tutela o curatela o cesado del acogimiento familiar de un menor por causa que le sea imputable por dolo o culpa grave, respecto de la herencia del mismo y sus descendientes.
- f) El que fuera condenado en sentencia firme por denuncia falsa o falso testimonio contra el causante o el fiduciario por un delito para el cual la ley señale una pena grave.
- g) El que, sabedor de la muerte violenta del causante, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando esta no hubiera procedido ya de oficio, salvo que, según la ley, no tuviera obligación de acusar.
- h) El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al causante o al fiduciario a otorgar, revocar o modificar las disposiciones sucesorias.
- i) El que por iguales medios impidiera a otro otorgar pacto sucesorio, testamento o acto de ejecución de la fiducia, o revocar o modificar los que tuviese hechos, o destruyera, suplantara, ocultara o alterase otros posteriores.
- j) Cuando el causante haya precisado de medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica:
 - El que, sin causa justificada para ello, no aceptase la responsabilidad del ejercicio de medidas de apoyo o renunciase a la misma.
 - El que por acción u omisión negligente grave o dolosa haya sido judicialmente removido de la responsabilidad del ejercicio de medidas de apoyo.

Artículo 329.— *Momento para calificar la capacidad.*

1. Para calificar la capacidad sucesoria se atenderá al tiempo de la delación.
2. En los casos a), b), c), d), e) y f) del artículo anterior se esperará a que se dicte la sentencia o resolución firme, y en el g) a que transcurra el mes señalado para la denuncia.
3. Cuando no exista sentencia penal condenatoria por fallecimiento u otra imposibilidad jurídica, el Juez civil podrá apreciar la concurrencia de la causa.

Artículo 330.— *Efectos de la indignidad.*

1. Las causas de indignidad sucesoria producirán efecto cuando las invoquen personas que resultarían favorecidas en la sucesión, caso de declararse la indignidad, pero, una vez declarada, sus efectos se retrotraerán al tiempo de la delación.
2. La indignidad declarada priva al indigno de la herencia o legado y, en su caso, de la condición de legitimario.

Artículo 331.— *Deber de restitución.*

El indigno de suceder que hubiera entrado en posesión de los bienes de la herencia o del legado tendrá que restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido.

Artículo 332.— *Rehabilitación del indigno.*

1. Las causas de indignidad sucesoria no surtirán efecto si el causante, conociéndolas, hace disposiciones a favor del indigno, se reconcilia con él o le perdona en escritura pública. La reconciliación y el perdón serán irrevocables.
2. El fiduciario podrá dejar ineficaces las causas de indignidad por los mismos actos que el causante, salvo que este expresamente se lo haya prohibido.

Artículo 333.— *Caducidad de la acción.*

La acción declarativa de la indignidad caducará transcurridos cinco años desde que el indigno de suceder esté en posesión de la herencia o legado.

CAPÍTULO III SUSTITUCIÓN LEGAL

Artículo 334.— *Concepto.*

Los descendientes de un llamado a título universal o particular o legitimario de grado preferente ocupan el lugar de este en la sucesión o en la legítima por sustitución legal en los casos previstos en este Código.

Artículo 335.— *Ámbito.*

1. La sustitución legal puede darse en la sucesión voluntaria y en la legal, así como en la legítima.
2. La sustitución legal tiene lugar en la línea recta descendente, pero no en la ascendente. En la línea colateral solo tiene lugar en favor de los descendientes de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.

Artículo 336.— *Sucesiones voluntarias.*

1. En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar, salvo previsión en contrario del disponente, cuando el llamado ha premuerto o ha sido declarado ausente o indigno de suceder.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de grado, del sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante. Cuando el sustituido sea descendiente del causante y la sustitución favorezca a sus nietos o descendientes ulteriores, heredarán siempre por estirpes, aunque todos los sustitutos sean del mismo grado. Si el sustituido es hermano del causante y entre sus sustitutos concurren hijos y descendientes ulteriores, aquellos suceden por cabezas y estos por estirpes; si solo hay nietos, heredarán por cabezas.
3. Los sustitutos que reciban la porción del llamado a la herencia declarado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone el artículo 55.

Artículo 337.— *Sucesión paccionada.*

Las reglas del artículo anterior son de aplicación a la sucesión paccionada, salvo en el caso de premoriencia del instituido al instituyente regulado en el artículo 387.

Artículo 338.— *Sucesión legal.*

1. En la sucesión legal la sustitución tiene lugar cuando el llamado ha premuerto, ha sido declarado ausente o indigno de suceder, así como cuando ha sido desheredado con causa legal o excluido absolutamente en la sucesión.
2. En tales supuestos, la sustitución legal en favor de los descendientes del descendiente sustituido, se produce sin limitación de grado y aunque concurren solos dividen por estirpes; mientras que la sustitución legal en favor de los descendientes del hermano sustituido, solo llega hasta el cuarto grado a contar del propio causante y si concurren con algún hermano del causante dividen por estirpes, pero si concurren solamente hijos o solamente nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, si bien cuando concurren por sustitución solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los primeros dividen por cabezas y los segundo por estirpes.

Artículo 339.— *Sustitución legal en la legítima.*

1. La sustitución legal en la condición de legitimario de grado preferente tiene lugar cuando el legitimario ha premuerto, ha sido desheredado con causa legal o declarado indigno de suceder.
2. Al legitimario de grado preferente excluido absolutamente en la sucesión le sustituyen también sus descendientes, pero conserva el derecho de alimentos previsto en el artículo 515.

Artículo 340.— *Efectos.*

1. Por la sustitución legal, la delación en favor del sustituido o su condición de legitimario de grado preferente corresponde a su estirpe de descendientes, de modo que el sustituto o sustitutos legales ocupan el lugar que habría correspondido al sustituido si no hubiera concurrido causa de sustitución.
2. Para que opere la sustitución legal no es preciso que el sustituto llegue a heredar al sustituido.

Artículo 341.— *Inexistencia en caso de renuncia.*

En caso de renuncia o repudiación no tiene lugar la sustitución legal.

CAPÍTULO IV

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

Artículo 342.— *Libertad para aceptar o repudiar.*

1. El llamado a una herencia podrá libremente aceptarla o repudiarla, una vez producida la delación a su favor.
2. Si son varios los llamados a la herencia, cada uno de ellos puede aceptarla o repudiarla con independencia de los otros.
3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la aceptación o renuncia de uno o varios contratantes de un pacto sucesorio.

Artículo 343.— *Caracteres de la aceptación y la repudiación.*

1. La aceptación y la repudiación son actos unilaterales e irrevocables del llamado a la herencia y sus efectos se retrotraen al momento del fallecimiento del causante.
2. Son nulas la aceptación y la repudiación de la herencia hechas a plazo o condicionalmente.

Artículo 344.— *Diversidad de llamamientos a una misma herencia.*

1. El llamado a una herencia por disposición voluntaria que sin ella estuviera también llamado por disposición de la ley, se entiende que si la repudia por el primer título la ha repudiado por los dos, salvo que en el mismo acto manifieste su voluntad de aceptar como heredero legal. En este último caso, quedará sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas por el disponente.
2. Si el llamado repudia la herencia como heredero legal y sin noticia de su llamamiento voluntario, puede aceptarla todavía por este.

Artículo 345.— *Aceptación y repudiación parcial.*

1. Es nula la aceptación o la repudiación parcial de la herencia o cuota de ella deferida al llamado.
2. El llamado por distintos modos de delación puede aceptar por un llamamiento y repudiar por otro.

3. El llamado simultáneamente como heredero y legatario puede aceptar por un concepto y repudiar por el otro.

Artículo 346.— *Capacidad de las personas físicas para aceptar o repudiar.*

1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce años que tengan aptitud para ejercitar su capacidad jurídica por sí solas, pero para repudiarla los menores de edad mayores de catorce años, aunque estén emancipados, necesitarán la debida asistencia.
2. La aceptación y la repudiación de las atribuciones deferidas a menores de catorce años o a personas con discapacidad sujetas a medidas de apoyo representativas corresponde a sus representantes; pero para repudiarlas necesitan autorización de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución sucesoria.

Cuando sean representantes ambos padres, puede aceptar en nombre del hijo uno cualquiera de ellos; sin embargo, la repudiación exigirá la intervención de ambos.

3. Para aceptar o repudiar una herencia las personas con discapacidad sujetas a medidas de apoyo no representativo deberán actuar conforme a ellas.

Artículo 347.— *Aceptación y repudiación por las personas jurídicas.*

La capacidad y los requisitos para la aceptación y repudiación de las herencias deferidas a las personas jurídicas de derecho público o privado se rigen por las normas que específicamente les sean aplicables. A falta de estas, se aplican a la aceptación las reglas de la persona jurídica relativas a los actos de administración y a la repudiación las reglas de los actos de disposición de bienes.

Artículo 348.— *Interpelación.*

1. Transcurridos treinta días desde que se haya producido la delación, cualquier tercero interesado podrá solicitar al Juez que señale al llamado un plazo, que no podrá exceder

de sesenta días, para que manifieste si acepta o repudia la herencia; también podrá acudir al Notario para que este comunique al llamado que tiene un plazo de sesenta días para aceptar o repudiar.

2. El Juez apercibirá al llamado de que, si transcurrido el plazo señalado no ha manifestado su voluntad de aceptar o repudiar, se tendrá la herencia por aceptada; lo mismo le indicará el Notario que practique la interpelación.

Artículo 349.— *Formas de aceptación.*

1. El llamado puede aceptar la herencia expresa o tácitamente.
2. Aceptación expresa es la que el llamado hace en documento público o privado en el que manifiesta su voluntad de aceptar la herencia.
3. Tácita, es la que tiene lugar mediante actos del llamado que suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no podría realizar si no fuera heredero.

Artículo 350.— *Aceptación tácita.*

1. En particular, se considera aceptada la herencia por el llamado que:
 - a) Dona o transmite a título oneroso su derecho a la herencia o alguno de los bienes que la componen.
 - b) Renuncia a favor de solo alguno o algunos de los llamados a la herencia.
 - c) Sustraer u oculta bienes de la herencia.
2. No se entiende aceptada la herencia por el llamado que realiza actos posesorios, de conservación, vigilancia o administración de la herencia, o que paga los impuestos que gravan la sucesión, salvo que con ellos tome el título o la cualidad de heredero.
3. Tampoco se entiende aceptada la herencia por el llamado que renuncia gratuitamente a ella en favor de todas las personas a las que se defiere la cuota del renunciante.

Artículo 351.— *Forma de la repudiación.*

La repudiación de la herencia ha de hacerse de forma expresa en escritura pública o mediante escrito dirigido al Juez competente.

Artículo 352.— *Efectos de la repudiación.*

A todos los efectos legales, se entenderá que el que repudia la herencia deferida a su favor no ha sido llamado nunca a ella.

Artículo 353.— *Repudiación en perjuicio de acreedores.*

1. Si el llamado repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, podrán estos pedir al Juez que les autorice para aceptarla en nombre de aquel.
2. Concedida la autorización, el único efecto que produce es el de facultar a los acreedores para hacer efectivos sus créditos sobre el patrimonio hereditario.
3. El derecho de los acreedores para solicitar la citada autorización caduca a los cuatro años a contar desde la repudiación.

Artículo 354.— *Transmisión del derecho a aceptar o repudiar.*

1. Salvo expresa previsión en contrario del disponente, por la muerte del llamado sin aceptar ni repudiar la herencia se transmite por ministerio de la ley a sus herederos, en la proporción en que lo sean, el mismo derecho que él tenía a aceptarla o repudiarla.
2. La transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del causante solo tiene lugar en favor del llamado que acepta la herencia del transmitente; si son varios los que la aceptan, cada uno puede ejercitar el derecho transmitido con independencia de los otros y con derecho preferente de acrecer entre ellos.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 278, el usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente se extenderá a los bienes así adquiridos por los herederos de este, sin perjuicio del que, en su caso, previamente corresponda al cónyuge del primer causante.

CAPÍTULO V RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

Artículo 355.— *Limitación de la responsabilidad del heredero.*

1. El heredero, incluido el troncal, responde de las obligaciones del causante y de los legados y demás cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, aunque no se haga inventario.
2. Sin embargo, cuando los bienes heredados existentes no sean suficientes, el heredero responderá con su propio patrimonio del valor de lo heredado que enajene, consuma o emplee en el pago de créditos hereditarios no vencidos; así como del valor de la pérdida o deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes heredados.

Artículo 356.— *Cargas hereditarias.*

Entre las cargas hereditarias se incluyen los gastos causados por la última enfermedad del causante, así como los de su funeral y entierro o incineración, los de conservación y defensa de los bienes de la herencia causados en interés común y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Artículo 357.— *Separación de patrimonios.*

1. La confusión de patrimonios no se produce en daño del heredero ni de quienes tengan derechos sobre el caudal relicto.
2. La aceptación de la herencia no produce la extinción de los derechos y créditos del heredero contra la herencia, ni de los de esta contra aquel.

Artículo 358.— *Embargo de bienes del heredero.*

El heredero puede oponerse al embargo de bienes de su propio patrimonio basado en créditos contra la herencia por la vía de la tercería de dominio. A la demanda deberá acompañarse necesariamente un inventario de los bienes relictos recibidos, que podrá ser impugnado por el acreedor en el mismo procedimiento.

Artículo 359.— *Preferencias.*

1. Con relación a los bienes del caudal relicto, los acreedores de la herencia gozan de preferencia sobre los legatarios y ambos sobre los acreedores personales del heredero.
2. Cuando el heredero deba responder con su patrimonio personal del valor de lo heredado, los acreedores hereditarios y legatarios concurrirán sin preferencia con los acreedores particulares del heredero.

Artículo 360.— *Pago de deudas y legados.*

1. El heredero pagará a los acreedores del causante a medida que se presenten, cobrará sus créditos y, finalmente, cumplirá los legados.
2. No obstante, si consta que alguno de los créditos conocidos es preferente, no se hará el pago sin previa caución a favor del acreedor de mejor derecho.

Artículo 361.— *Formas de pago.*

1. El heredero puede pagar las deudas y cargas de la herencia con los bienes recibidos del caudal relicto o con su propio patrimonio.
2. Si el heredero se excediere del valor de lo heredado en el pago a los acreedores, estos no estarán obligados a restituir.

CAPÍTULO VI
COLACIÓN Y PARTICIÓN

Sección 1.^a
COLACIÓN

Artículo 362.— *Voluntariedad.*

1. La colación de liberalidades no procede por ministerio de la ley, mas puede ordenarse en el título de la propia liberalidad o en pacto sucesorio o testamento.
2. La obligación de colacionar impuesta podrá ser dispensada posteriormente por el disponente en testamento o en escritura pública.

Artículo 363.— *Liberalidades no colacionables.*

Quando el causante hubiera dispuesto la colación de las liberalidades hechas por él, no se entenderán comprendidos, salvo que expresamente así lo declare, las liberalidades y gastos a que se refiere el apartado 2 del artículo 489.

Artículo 364.— *Práctica de la colación.*

1. No han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino el valor que tuvieran al tiempo de la donación actualizando su importe al momento en que se evalúen los bienes hereditarios.
2. El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.
3. Si un coheredero, mediante las liberalidades colacionables, ha recibido más de lo que le correspondería en la partición, no está obligado a restituir el exceso ni ha de recibir nada en la partición.

Sección 2.^a
PARTICIÓN

Artículo 365.— *Derecho a la división.*

1. Todo titular de una cuota en una herencia o porción de ella tiene derecho a promover en cualquier tiempo la división de la comunidad.
2. No obstante, el disponente podrá ordenar que tanto respecto a la herencia como a bienes concretos de esta no se proceda a la partición durante un tiempo determinado, que no podrá exceder de quince años a contar desde la apertura de la sucesión, o por el tiempo en que los bienes estén sujetos al usufructo del viudo. Igualmente, los partícipes podrán convenir unánimemente la indivisión por un plazo máximo de quince años. En ambos casos, podrá prorrogarse la indivisión por acuerdo unánime de los partícipes por término que, cada vez, no sea superior a quince años.

3. Aunque haya prohibición o pacto de indivisión, el Juez puede autorizar la partición a instancia de cualquier partícipe si concurre una justa causa sobrevenida.

Artículo 366.— *Partición con menores de catorce años.*

1. La representación de las personas menores de catorce años en la solicitud y práctica de la partición se rige por lo dispuesto en los artículos 9, 13 y 17, pero si el ejercicio de la autoridad familiar lo ostentan ambos padres, se requiere la actuación conjunta de los dos.
2. No será necesaria la intervención de ambos padres ni la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se limite a adjudicar proindiviso a los herederos, en la proporción en que lo sean, todos los bienes integrantes de la herencia.

Artículo 367.— *Partición con mayores de catorce años y personas con discapacidad.*

1. Los menores de edad mayores de catorce años que tengan aptitud para ejercitar su capacidad jurídica pueden solicitar la partición e intervenir en ella con la debida asistencia. Si carecen de dicha aptitud y requieren apoyos representativos, la partición corresponderá a sus representantes legales y será precisa la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez en los casos a que se refiere el artículo 169-24.
2. Las personas con discapacidad mayores de edad o emancipadas sujetas a medidas de apoyo representativo deberán actuar a través de su representante y, si este es su curador, será precisa la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez en los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 169-24.

Si están sujetas a otro tipo de medidas de apoyo, deberán actuar conforme a ellas.

3. No será necesaria la aprobación de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se limite a adjudicar proindiviso a los herederos en la proporción en que lo sean todos los bienes integrantes de la herencia.

Artículo 368.— *Partición por el disponente.*

1. El causante o su fiduciario pueden hacer la partición de la herencia o parte de ella, así como establecer normas vinculantes para su realización, en acto de última voluntad o de ejecución de la fiducia. También podrán hacerlo en acto entre vivos sin sujeción a forma determinada, salvo que se refieran a la herencia deferida por sucesión legal.
2. Si la partición la hace el disponente en el mismo acto de disposición por causa de muerte, las cláusulas de partición prevalecen sobre las dispositivas en caso de contradicción. Si la hace en acto separado, prevalecerán las cláusulas dispositivas salvo que sean revocables y puedan ser efectivamente revocadas por el acto de partición.

Sección 3.^a

**PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS
POR LOS COHEREDEROS**

Artículo 369.— *Responsabilidad antes de la partición.*

Los acreedores hereditarios, incluido el heredero que también lo sea, mientras no se realice la partición, habrán de proceder contra todos los herederos para exigir el pago de las deudas y cargas de la herencia.

Artículo 370.— *Derechos de los acreedores.*

1. Los acreedores hereditarios reconocidos como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o garantice el importe de sus créditos.
2. Los acreedores de uno o más de los partícipes pueden intervenir a su costa en la partición para evitar que esta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.

Artículo 371.— *Responsabilidad después de la partición.*

1. Hecha la partición, los acreedores hereditarios pueden exigir el pago de cualquiera de los herederos hasta el límite de su responsabilidad.
2. Igualmente, el coheredero acreedor de la herencia puede también reclamar de cualquiera de los otros el pago de

su crédito, pero deducida su parte proporcional como tal heredero.

3. El demandado tiene derecho a hacer llamar a sus coherederos para que intervengan en el proceso, a menos que por disposición del causante o su fiduciario o a consecuencia de la partición hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda.

Artículo 372.— *Acción de regreso entre coherederos.*

El coheredero que hubiese pagado más de lo que le correspondía por su participación en la herencia, puede reclamar la diferencia procediendo contra los demás coherederos y, si se ha practicado ya la partición, puede reclamar a cada uno su parte proporcional hasta el límite de su respectiva responsabilidad.

CAPÍTULO VII CONSORCIO FORAL

Artículo 373.— *Consortio foral.*

1. Salvo previsión en contrario del disponente, desde que varios hermanos o hijos de hermanos hereden de un ascendiente bienes inmuebles, queda establecido entre ellos, y en tanto subsista la indivisión, el llamado «consorcio o fideicomiso foral».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también a los inmuebles adquiridos proindiviso por legado o donación.

Artículo 374.— *Efectos.*

1. Vigente el consorcio foral, solo son válidos los actos de disposición, *inter vivos* o *mortis causa*, realizados por un consorte sobre su cuota en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran cuando se otorguen a favor de sus descendientes, que con ello adquirirán la condición de consortes, o de otro consorte.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, es embargable la cuota de un consorte en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran, sin que pase a formar parte

del consorcio el extraño que la adquiera en el procedimiento de apremio.

3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consortes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó el consorcio, pero sujeta al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido conforme al artículo 278. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no se produce respecto de los bienes recobrados.

Artículo 375.— *Separación de un consorte.*

1. Dejarán de aplicarse los efectos del consorcio al consorte que declare su voluntad de separarse totalmente del mismo en escritura pública.
2. La separación deberá comunicarse fehacientemente a los demás consortes, entre los que continuará el consorcio.

Artículo 376.— *Disolución del consorcio.*

El consorcio se disuelve por la división del inmueble o inmuebles y por acuerdo de todos los consortes.

TÍTULO II DE LA SUCESIÓN PACCIONADA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 377.— *Validez y forma.*

Son válidos los pactos que sobre la propia sucesión se convingan en escritura pública, así como los que en relación con dicha sucesión otorguen otras personas en el mismo acto.

Artículo 378.— *Capacidad.*

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben ser mayores de edad.

Artículo 379.— *Carácter personalísimo.*

Los otorgantes de un pacto sucesorio solo pueden formalizarlo personalmente, no admitiéndose representación.

Artículo 380.— *Modalidades.*

Los pactos sucesorios pueden ser:

- a) De disposición *mortis causa* de uno o varios contratantes a favor de otro u otros de ellos.
- b) De institución recíproca.
- c) De disposición *mortis causa* de los contratantes a favor de tercero o terceros.
- d) De renuncia de uno o varios contratantes a la herencia del otro u otros.

Artículo 381.— *Contenido.*

1. Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera estipulaciones *mortis causa* a favor de los contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustituciones, reservas, fiducias, modalidades, cargas y obligaciones que se convengan.
2. Además del régimen sucesorio, puede también pactarse en capitulaciones matrimoniales en consideración a la casa el establecimiento de una comunidad familiar entre instituyentes e instituido y sus familiares, regulando los derechos y las obligaciones de los que la integran.

Artículo 382.— *Idioma de los pactos sucesorios.*

Los pactos sucesorios podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los contratantes elijan. Si el Notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, el pacto se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el Notario, que deberá firmar el documento.

Artículo 383.— *Carácter de las donaciones.*

1. La donación universal de bienes habidos y por haber equivale a institución contractual de heredero, salvo pacto en contrario.
2. La donación *mortis causa* de bienes singulares tendrá el carácter de pacto sucesorio.

Artículo 384.— *Interpretación y normas supletorias.*

1. Los pactos sucesorios se interpretarán en los términos en que hayan sido redactados, atendiendo a la costumbre, usos y observancias del lugar, a los que deberá estarse cuando el pacto se refiera a determinadas instituciones consuetudinarias.
2. Como supletorias se aplicarán las normas generales sobre contratos y disposiciones testamentarias, según la respectiva naturaleza de las estipulaciones.

CAPÍTULO II **INSTITUCIÓN A FAVOR DE CONTRATANTE**

Sección 1.^a **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 385.— *Aceptación de la herencia o legado.*

En la institución a favor de contratante, el consentimiento de este implica la aceptación de la herencia o legado. En consecuencia, fallecido el instituyente, el instituido heredero o legatario no podrá repudiar la herencia o renunciar al legado.

Artículo 386.— *Clases.*

1. La institución de heredero o legatario en pacto sucesorio puede ser:
 - a) «De presente», con transmisión actual de los bienes al instituido.
 - b) «Para después de los días» del instituyente y, por lo tanto, sin transmisión actual de los bienes al instituido.
2. No disponiéndose claramente lo contrario, se entenderá que la institución es para después de los días.

Artículo 387.— *Derecho de transmisión.*

1. Salvo lo establecido en el pacto sucesorio, cuando el instituido premuera al instituyente, transmitirá a sus descendientes los derechos y obligaciones derivados del pacto y, en su caso, los bienes adquiridos de presente.

2. Si tales descendientes fueren varios, podrá el instituyente designar a uno de ellos como heredero en testamento o escritura pública, o encomendar la designación a fiduciarios, si no lo hubiere hecho ya el primer favorecido.
3. La institución quedará sin efecto cuando el instituido premuera al instituyente sin dejar descendientes. En este caso, los bienes transmitidos de presente que aún subsistan en el patrimonio del instituido revertirán al instituyente.

Artículo 388.— *«Señorío mayor».*

La reserva del señorío mayor en el heredamiento de casa aragonesa atribuye al instituyente el usufructo y administración de los bienes, cuyo producto deberá destinarse al sostenimiento y mejora de la casa.

Sección 2.^a
INSTITUCIÓN DE PRESENTE

Artículo 389.— *Efectos.*

1. En la institución de presente de heredero universal, el instituido adquiere todos los derechos de que sea titular el instituyente al otorgamiento del pacto, salvo los que se hubiera reservado.
2. Salvo pacto en contrario, los bienes que el instituyente adquiriera con posterioridad pasarán al instituido en la forma establecida para la institución para después de los días.

Artículo 390.— *Disposición de los bienes entre vivos.*

Salvo pacto en contrario, el poder de disposición sobre los bienes que le hayan sido transmitidos corresponde al instituido, con las limitaciones establecidas.

Artículo 391.— *Responsabilidad de los bienes transmitidos.*

Sobre los bienes transmitidos de presente, los acreedores por deudas contraídas por el instituyente con anterioridad al pacto sucesorio tienen preferencia respecto de los acreedores del instituido.

Sección 3.^a
INSTITUCIÓN PARA DESPUÉS DE LOS DÍAS

Artículo 392.— *Efectos.*

En la institución para después de los días, la adquisición de los bienes por el instituido solo se produce una vez fallecido el instituyente.

Artículo 393.— *Disposición de los bienes entre vivos.*

1. Salvo pacto en contrario, el instituyente podrá disponer a título oneroso de los bienes objeto de la institución.
2. Para disponer a título gratuito de los bienes objeto de la institución, el instituyente necesitará el consentimiento del instituido. Se exceptúan las liberalidades usuales o de escaso valor.

Artículo 394.— *Responsabilidad de los bienes.*

Los bienes objeto de la institución para después de los días responden de las deudas contraídas por el instituyente.

CAPÍTULO III
INSTITUCIÓN RECÍPROCA

Artículo 395.— *Efectos.*

1. En la recíproca institución de heredero, o pacto al más viviente, el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que este no tenga descendientes, o todos ellos fallezcan antes de llegar a la edad para poder testar.
2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán en los procedentes del primeramente fallecido directamente de este, como sustitutos de aquel, salvo estipulación en contrario.
3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de este, como herederos

suyos y sustitutos de aquel. A falta de estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del sobreviviente.

4. A la institución recíproca le son aplicables los artículos 392 a 394.

Artículo 396.— *Supervivencia de descendientes.*

1. Los otorgantes podrán establecer las previsiones que tengan por conveniente para el caso de que les sobrevivan descendientes, comunes o no, respetando la legítima de los mismos.
2. A falta de disposición expresa sobre este particular, la institución no surtirá efecto cuando al momento de la apertura de la sucesión sobrevivan descendientes del premuerto que no lo sean del supérstite. Habiendo solo descendientes comunes, el pacto equivale a la concesión al sobreviviente de usufructo universal y vitalicio sobre los bienes del premuerto y de la facultad de distribuir la herencia.

CAPÍTULO IV

PACTO EN FAVOR DE TERCERO

Artículo 397.— *Adquisición de la herencia o legado.*

En el pacto sucesorio a favor de tercero, no podrá este aceptar la herencia o adquirir el legado hasta que, fallecido el instituyente, no se le defieran.

Artículo 398.— *Disposición de los bienes entre vivos.*

Salvo que otra cosa se haya pactado, el instituyente podrá disponer entre vivos de sus bienes, tanto a título oneroso como lucrativo.

CAPÍTULO V

PACTOS DE RENUNCIA

Artículo 399.— *Validez y modalidades.*

1. Son válidos los pactos de renuncia o transacción sobre la herencia futura otorgados entre el renunciante o renunciantes y la persona o personas de cuya sucesión se trate.

2. Tales pactos pueden referirse a todos los derechos sucesorios o a parte de ellos, establecerse a título gratuito u oneroso y sujetarse a condición.

CAPÍTULO VI **REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN E INEFICACIA**

Artículo 400.— *Modificación y revocación convencional.*

1. Las estipulaciones contractuales pueden modificarse o revocarse mediante pacto sucesorio celebrado por las mismas personas o sus herederos.
2. Cuando solo fueran dos los otorgantes del pacto, también podrá ser modificado o dejado sin efecto por ulterior testamento mancomunado otorgado por ambos.

Artículo 401.— *Revocación unilateral.*

1. El disponente solo puede revocar unilateralmente su disposición paccionada:
 - a) Por las causas expresamente pactadas.
 - b) Por incumplimiento grave de las cargas y prestaciones impuestas al instituido, así como cuando este, con su conducta, impida la normal convivencia familiar si esta hubiera sido pactada.
 - c) Por haber incurrido el instituido en causa de indignidad o en situación que, de ser legitimario, implicaría causa de desheredación.
2. La revocación unilateral deberá hacerse en escritura pública. El Notario la notificará a los demás otorgantes, dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la revocación.
3. Si la institución contractual se hubiera inscrito en el Registro de la Propiedad, su revocación podrá hacerse constar en el mismo una vez transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la escritura.

Artículo 402.— *Efectos de la revocación en la institución de presente.*

Si no se hubiera convenido otra cosa, la revocación de la institución de presente produce la reversión al instituyente de los bienes transmitidos al instituido que este conserve y de los subrogados en ellos.

Artículo 403.— *Efectos en las estipulaciones recíprocamente condicionadas.*

La nulidad, revocación unilateral o ineficacia de una disposición hereditaria paccionada lleva aparejada la de aquellas que, en el mismo documento, se hallen recíprocamente condicionadas.

Artículo 404.— *Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.*

Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, se hallaran divorciados o separados legalmente o estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos ante el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia dirigidos a ese fin.

TÍTULO III DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 405.— *Voluntad testamentaria.*

1. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del disponente o disponentes manifestada consciente y libremente en testamento otorgado conforme a la ley.
2. El testamento podrá contener cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión del testador o testadores.
3. Las disposiciones de carácter no patrimonial que la ley permite insertar en testamento son válidas si forman parte de

un acto revestido de forma testamentaria, aunque en él no figuren disposiciones de carácter patrimonial.

Artículo 406.— *Tipos de testamento.*

1. El testamento puede ser unipersonal o mancomunado.
2. El testamento unipersonal es el acto unilateral y esencialmente revocable por el cual una persona ordena, para después de su muerte, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.
3. El testamento mancomunado es el acto naturalmente revocable por el cual dos personas ordenan en un mismo instrumento, para después de su muerte, con o sin liberalidades mutuas y disposiciones correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.

Artículo 407.— *Caracteres comunes.*

1. El testamento es acto personalísimo, no susceptible de ser hecho por medio de representante, si bien las personas capaces de testar pueden encomendar a fiduciarios que, tras su muerte, ordenen su sucesión.
2. El testamento es un acto solemne, en cuyo otorgamiento han de observarse las formalidades previstas en la ley.

Artículo 408.— *Capacidad para testar.*

1. Pueden testar todas las personas físicas que, al tiempo de otorgar el testamento, sean mayores de catorce años y puedan determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, utilizando, para ello, si fueran precisos, los medios técnicos, materiales o personales necesarios. Si el testamento fuera notarial, el Notario procurará que el testador desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, ayudándole en su comprensión y razonamiento, con los ajustes que resulten necesarios.
2. Pueden otorgar testamento ológrafo quienes sean mayores de edad.
3. La falta de capacidad de testar, general o para una forma concreta de testamento, en uno de los testadores impide otorgar el testamento mancomunadamente.

Artículo 409.— *Forma de los testamentos.*

1. El testamento mancomunado, en tanto sea compatible con los requisitos establecidos para cada una de ellas, y el unipersonal pueden revestir cualquier forma, común, especial o excepcional, admitida por la ley.
2. Basta que concurren en uno de los testadores las circunstancias requeridas por cualquier forma especial o excepcional de testamento para que se pueda otorgar mancomunadamente.

Artículo 410.— *Testamento mancomunado cerrado.*

1. El testamento mancomunado cerrado podrá estar escrito del puño y letra de uno de los testadores, por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego de alguno de ellos. El testador que lo hubiera escrito de su puño y letra bastará con que lo firme al final; los demás testadores deberán poner su firma en todas sus hojas y al pie del testamento.
2. Ambos testadores comparecerán ante el Notario y manifestarán de forma expresa que el sobre que presentan contiene su testamento mancomunado, expresando también la forma en que se halla escrito y firmado.
3. Autorizado el testamento mancomunado cerrado, se depositará en poder del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo, de donde solo podrá ser retirado por ambos testadores.

Artículo 411.— *Testamento mancomunado ológrafo.*

1. El testamento ológrafo mancomunado basta que esté escrito todo él por uno de los testadores, con expresión del año, mes y día, y que el otro declare también por escrito de su puño y letra, antes de las firmas de ambos, que valga igualmente como testamento suyo y firme en todas sus hojas y al pie del mismo.
2. A la muerte del primero de los testadores que fallezca, se adverbará y protocolizará el testamento mancomunado ológrafo con la necesaria participación del otro otorgante que sobreviviere.

Artículo 412.— *Idioma del testamento.*

1. Los testamentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los testadores elijan. Si el autorizante o, en su caso, los testigos o demás personas intervinientes en el otorgamiento no conocieran la lengua o modalidad lingüística elegida, el testamento se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los testadores y aceptado por el autorizante, quien deberá firmar el documento.
2. Igualmente, los testamentos cerrados y los ológrafos podrán otorgarse en cualquier lengua o modalidad lingüística de Aragón.

Artículo 413.— *Testigos en el testamento notarial.*

1. En el testamento notarial otorgado en Aragón no será precisa la intervención de testigos, salvo que concurren circunstancias especiales en un testador o que expresamente lo requieran uno de los testadores o el Notario autorizante.
2. Se considera que concurren circunstancias especiales en un testador cuando este declara que no sabe o no puede firmar el testamento. Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento, o para oír la lectura de su contenido, además, en su caso, de la intervención de testigos, el Notario podrá utilizar los medios técnicos, materiales o humanos que considere adecuados para asegurarse de que el testador ha entendido la información y sus explicaciones, y de que el testamento recoge fielmente su voluntad.

Artículo 414.— *Número y capacidad de los testigos.*

1. En todos los casos en que sea necesaria la intervención de testigos, serán dos, deberán entender al testador o testadores y al Notario o persona ante quien se otorgue el testamento y deberán saber firmar.
2. No será necesario que sean rogados ni que conozcan al testador ni que tengan su misma residencia.

Artículo 415.— *Incapacidad para ser testigo.*

1. No pueden ser testigos en los testamentos:
 - a) Los menores de catorce años y los que carezcan de discernimiento suficiente para desarrollar la labor testifical.
 - b) Quienes para su intervención necesiten testigos conforme a la legislación notarial.
 - c) Los favorecidos por el testamento.
 - d) El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del heredero instituido o del legatario designado y del Notario o persona ante quien se otorguen.
2. Estas prohibiciones se aplican también a los facultativos, intérpretes y expertos que intervengan en el testamento.

Artículo 416.— *Interpretación del testamento.*

1. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador o, si el testamento fuera mancomunado, la común de ambos testadores. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador o testadores según el tenor del mismo testamento.
2. Las cláusulas ambiguas u oscuras se interpretarán en sentido favorable a su eficacia, comparando unas con otras, y de existir contradicción irreductible no será válida ninguna de las que pugnen sustancialmente entre ellas. Las disposiciones ininteligibles se considerarán no formuladas.
3. En los casos de duda, la interpretación se realizará en sentido favorable al heredero instituido y las disposiciones que impongan cualquier carga se interpretarán restrictivamente.
4. En la interpretación de las disposiciones correspectivas del testamento mancomunado deberá integrarse lo dispuesto en este artículo con las normas de interpretación de los contratos.

CAPÍTULO II TESTAMENTO MANCOMUNADO

Artículo 417.— *Testadores.*

1. Los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden testar de mancomún, aun fuera de Aragón.
2. Si uno de los dos testadores es aragonés y el otro no lo tiene prohibido por su ley personal, pueden testar mancomunadamente, incluso fuera de Aragón.

Artículo 418.— *Apertura de la sucesión.*

Al morir el primero de los testadores se abre su sucesión y producen sus efectos las disposiciones del testamento mancomunado reguladoras de la misma. Los interesados en su sucesión tendrán derecho a copia del testamento, que sin embargo no podrá incluir las disposiciones que solo afecten a la sucesión del otro testador.

Artículo 419.— *Institución recíproca entre otorgantes.*

1. Si los testadores no establecen los efectos del «pacto al más viviente», las disposiciones sucesorias recíprocas entre ellos producirán los que les son propios, sin perjuicio, en su caso, de los derechos legitimarios.
2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los testadores sucederán en los procedentes del primeramente fallecido directamente de este, como sustitutos de aquel, salvo previsión contraria en el testamento.
3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el testador supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de este, como herederos suyos y sustitutos de aquel. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente.

Artículo 420.— *Disposiciones correspondientes.*

1. Son correspondientes entre sí las disposiciones de contenido patrimonial de uno y otro testador cuya eficacia, por

voluntad declarada por ambos en un mismo testamento o contrato sucesorio, estuviera recíprocamente condicionada, sean en beneficio mutuo o de tercero. La corresponsividad no se presume.

2. La nulidad o anulación de una disposición produce la ineficacia total de la corresponsiva. Sin embargo, la ineficacia sobrevenida de una disposición no produce la de su corresponsiva, que dejará de tener ese carácter.

Artículo 421.— *Revocación.*

1. El testamento mancomunado puede ser revocado o modificado por ambos testadores en un mismo acto u otorgamiento.
2. También puede cada testador revocar o modificar unilateralmente sus propias disposiciones no corresponsivas.
3. La revocación o modificación unilateral de disposiciones corresponsivas solo podrá hacerla un testador en vida del otro o, después, si concurre alguna causa de las que posibilitan la revocación unilateral de los pactos sucesorios, y producirá la ineficacia total de las disposiciones corresponsivas del otro. Todo ello salvo que en el testamento o en el contrato sucesorio se prevea otra cosa.
4. Toda revocación o modificación unilateral en vida del otro testador deberá hacerse en testamento abierto ante Notario. El otorgante hará saber al Notario la existencia del anterior testamento y el domicilio del otro otorgante, a quien el Notario notificará, dentro de los ocho días hábiles siguientes, el mero hecho del nuevo otorgamiento. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de esas manifestaciones del otorgante o de la notificación no afectará a la eficacia de la revocación o modificación.

Artículo 422.— *Disposición de bienes entre vivos.*

1. Aunque el testamento mancomunado contuviere cláusula en contrario, cada uno de los testadores podrá disponer entre vivos de sus bienes, a título oneroso o gratuito, aun después del fallecimiento del otro, con las únicas excepciones y modalidades contenidas en los apartados siguientes.

2. En vida de ambos otorgantes, la disposición de bienes comprendidos en una disposición correspectiva que implique su revocación o modificación sustancial produce la ineficacia total de la correspectiva del otro.
3. Muerto un otorgante, podrá el otro disponer de los bienes comprendidos en una disposición correspectiva. Si lo hiciera por título lucrativo, la persona a quien el testamento atribuía dichos bienes podrá, una vez fallecido el disponente, pedir a los donatarios o sus herederos su valor actualizado. Y si la disposición fuera onerosa y supusiera la ineficacia de la disposición correspectiva, podrá, de igual forma, reclamar el valor actualizado, en este caso de los herederos del disponente. Estos derechos caducan en el plazo de dos años contados desde el fallecimiento del disponente.

CAPÍTULO III

INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS

Sección 1.^a

NULIDAD Y ANULABILIDAD

Artículo 423.— *Invalidez del testamento.*

1. Son nulos:
 - a) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los requisitos esenciales prescritos por la ley para los testadores, el contenido o la forma del testamento otorgado.
 - b) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los restantes requisitos y formalidades requeridos por la ley. No obstante, la falta de expresión de la hora del testamento no anulará este si el testador no otorgó ningún otro en aquella fecha. Tampoco lo anulará la falta de indicación en el testamento de que se ha cumplido alguno de sus requisitos y formalidades cuando pueda demostrarse que efectivamente fue cumplido.
2. Son anulables los testamentos que, aun reuniendo los requisitos y formalidades legales, hayan sido otorgados por

persona con la edad requerida para testar pero que al tiempo del otorgamiento no hubiera podido determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, así como los otorgados con engaño, violencia o intimidación grave.

Artículo 424.— *Invalidez de la disposición testamentaria.*

1. Es nula la disposición testamentaria esencialmente determinada por un motivo contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
2. Será anulable la disposición testamentaria que haya sido otorgada con error en la persona o en el objeto, con engaño, violencia o intimidación grave y en los casos en que resulte que se ha otorgado por error, de hecho o de derecho, en los motivos si del testamento resulta que el testador no la habría otorgado de haber conocido el error.
3. La nulidad, anulación, revocación o ineficacia de una disposición testamentaria no afectará a la validez o eficacia de las demás, a no ser otra la voluntad del testador. Queda a salvo lo dispuesto sobre las disposiciones correspondientes del testamento mancomunado.

Artículo 425.— *Error en la indicación de la persona o de los bienes.*

Si el testador hubiera indicado erróneamente la persona del heredero o del legatario, o los bienes que son objeto de la disposición, pero de la interpretación del testamento fuera posible concluir a qué persona o bienes pretendía referirse, la disposición vale relativamente a esta persona o a estos bienes.

Artículo 426.— *Acción de nulidad.*

1. La nulidad del testamento contemplada en la letra a) del apartado 1 del artículo 423 es imprescriptible, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de la usucapión con relación a cada una de las cosas poseídas.
2. La acción de nulidad del testamento a la que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 423, o de alguna de sus disposiciones, prescribe a los quince años a contar desde el fallecimiento del testador.

Artículo 427.— *Acción de anulabilidad.*

Siendo anulable el testamento o cualquiera de sus disposiciones, la acción prescribe a los cuatro años a contar desde el fallecimiento del testador.

Artículo 428.— *Límites en el ejercicio de la acción.*

No puede ejercitar las correspondientes acciones quien, conociendo la causa de nulidad o anulabilidad del testamento o de cualquiera de sus disposiciones, le ha dado voluntaria ejecución o ha renunciado a la acción.

Artículo 429.— *Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar.*

El testador no puede prohibir que sea impugnado su testamento en los casos en que concurra causa de nulidad o anulabilidad.

Artículo 430.— *Conversión del testamento nulo.*

1. El testamento nulo por defecto de forma será válido si reúne los requisitos formales de otra clase de testamento.
2. El testamento mancomunado nulo por causa que afecte solo a uno de los otorgantes vale como testamento unipersonal del otro si cumple los requisitos propios de su clase.

Sección 2.^a

REVOCACIÓN E INEFICACIA

Artículo 431.— *Facultad de revocación.*

1. Las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Queda a salvo lo establecido para las correspondientes del testamento mancomunado.
2. El testador no puede renunciar la facultad de revocar, en todo o en parte, su testamento.
3. Se tendrá por no escrita cualquier cláusula que contraríe la facultad de revocación, como la derogatoria de disposiciones futuras o aquella en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no lo hiciera con ciertas palabras o señales.

4. La revocación de un testamento no afectará a la validez y eficacia, en su caso, del reconocimiento de hijos no matrimoniales.

Artículo 432.— *Revocación.*

El testamento anterior queda revocado por el pacto sucesorio o testamento posteriores perfectos, salvo que del contenido de estos se infiera la subsistencia del anterior testamento en todo o en parte. Se presume la subsistencia cuando el pacto sucesorio o testamento no tienen contenido patrimonial o este se limita a solo una parte del caudal hereditario.

Artículo 433.— *Revocación e ineficacia del pacto o testamento revocatorio.*

1. La revocación produce su efecto aunque el pacto o testamento revocatorio sea a su vez revocado o pierda luego su eficacia por cualquier causa.
2. El testamento anterior recobra, no obstante, su fuerza si el testador, al revocar el pacto o testamento posterior, declara ser su voluntad que revivan las disposiciones del primero o si se limita a revocar un testamento meramente revocatorio del anterior.

Artículo 434.— *Otorgamientos en el mismo día.*

1. Si aparecieren dos testamentos de la misma fecha, sin que sea posible determinar cuál es posterior, se tendrán por no escritas en ambos las disposiciones contradictorias de uno y otro.
2. Si aparecieren un pacto y un testamento de la misma fecha, sin que sea posible determinar cuál es posterior, prevalecerán las disposiciones contradictorias del pacto sobre las del testamento.

Artículo 435.— *Inutilización del testamento cerrado.*

1. Se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autoricen.
2. Este testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento

del testador, o hallándose afectado por alteraciones graves de salud mental; pero si aparecieren rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar además la autenticidad del testamento para su validez.

3. Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se entenderá que el vicio procede de ella y no será aquel válido como no se pruebe su autenticidad, si estuvieren rota la cubierta o quebrantados los sellos; y si una y otros se hallaren íntegros, pero con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será válido el testamento, como no se justifique haber sido entregado el pliego en esta forma por el mismo testador.

Artículo 436.— *Inutilización del testamento ológrafo.*

El testamento ológrafo se presume revocado si aparece rasgado o inutilizado, o aparecen borradas, raspadas o enmendadas sin salvar las firmas que lo autoricen, salvo que se pruebe que los citados hechos ocurrieron sin la voluntad o sin el conocimiento de alguno de los testadores o que han sido llevados a cabo por el testador hallándose afectado por alteraciones graves de salud mental.

Artículo 437.— *Supuestos de ineficacia.*

La institución de heredero y el nombramiento de legatario devienen ineficaces, a falta de sustitución voluntaria o derecho de acrecer, entre otros, en los siguientes casos:

- a) Si el instituido o nombrado fallece antes que el testador, salvo que haya sustitución legal.
- b) Si la institución o el nombramiento estuvieran sujetos a condición suspensiva y el sucesor falleciere antes de que la condición se cumpla.
- c) Si el instituido o nombrado se torna incapaz de adquirir la herencia o el legado, salvo que haya sustitución legal.
- d) Si el llamado a suceder repudia la herencia o el legado.

Artículo 438.— *Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.*

Salvo que del testamento resulte que la voluntad del testador o testadores fue otra, no surtirán efecto las disposiciones

correspectivas entre los cónyuges, ni las liberalidades concedidas en testamento por uno de ellos al otro, si al fallecer aquel estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.

TÍTULO IV DE LA FIDUCIA SUCESORIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 439.— *Comitente.*

Todo aragonés capaz para testar puede nombrar uno o varios fiduciarios para que ordenen su sucesión actuando individual, conjunta o sucesivamente. Nombrados varios sin señalar cómo deben actuar, se entenderá que el llamamiento es conjunto.

Artículo 440.— *Fiduciarios.*

1. El fiduciario habrá de ser mayor de edad y tener plena aptitud para ejercitar por sí solo su capacidad jurídica en el momento del fallecimiento del causante.
2. Salvo disposición del comitente, no surtirá efecto el nombramiento del cónyuge como fiduciario si al fallecimiento de aquel se hallaran divorciados o separados legalmente o estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos ante el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia dirigidos a ese fin.
3. El cargo es voluntario y gratuito, salvo que el causante hubiese previsto que fuera retribuido; las facultades del fiduciario se entenderá que tienen carácter personalísimo.

Artículo 441.— *Subsidiariedad.*

Salvo expresa autorización del comitente, el fiduciario, cualquiera que sea la forma en que haya sido designado, no podrá

modificar las disposiciones sucesorias del causante, sean anteriores o posteriores a su nombramiento.

Artículo 442.— *Forma del nombramiento.*

La designación de fiduciario y las instrucciones del comitente, si las hubiere, sobre ejecución de la fiducia, o administración y disposición de los bienes sujetos a ella, deberán constar necesariamente en testamento o escritura pública.

Artículo 443.— *Revocación del nombramiento.*

1. El nombramiento de fiduciario, con independencia de la forma en que se haya efectuado, podrá ser revocado por el causante en testamento o escritura pública.
2. El nombramiento de nuevo fiduciario producirá la revocación de los anteriormente designados, a no ser que resulte clara la voluntad del causante de que actúen conjunta o sucesivamente.

Artículo 444.— *Plazo.*

1. El fiduciario deberá cumplir su encargo en el plazo que expresamente le haya señalado el comitente.
2. A falta de señalamiento expreso, la fiducia deberá ejecutarse dentro del plazo de tres años, pero si el único fiduciario es el cónyuge del comitente, su nombramiento se entenderá hecho de por vida.
3. En los casos en que el llamamiento deba reiterarse y haya caducado el plazo, el fiduciario deberá ejecutar su encargo en un nuevo plazo de dos años.
4. Los plazos que establece este artículo son de caducidad.

Artículo 445.— *Cómputo del plazo.*

Los plazos expresados en el artículo anterior se computarán:

- a) Desde el fallecimiento del causante. Si al fallecimiento del causante existen legitimarios de grado preferente menores de edad, el plazo de ejecución de la fiducia no finalizará hasta que transcurran tres años desde que alcancen la mayoría de edad todos ellos.

- b) En las fiducias sucesivas, desde que legalmente sea posible su ejecución.
- c) En el caso de reiteración del llamamiento, desde que el anterior resulte ineficaz.

Artículo 446.— *Prórroga del plazo.*

En todo caso, los fiduciarios podrán solicitar antes de que caduque al Juez la prórroga del plazo establecido, quien, previa audiencia del Ministerio Fiscal, podrá concederla, mediando justa causa, hasta un máximo de dos años.

Artículo 447.— *Reducción del plazo.*

Salvo que el único fiduciario fuera el cónyuge viudo, cualquier persona con interés legítimo puede solicitar del Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, señale un plazo más breve del que en principio corresponda, si la situación de pendencia pudiera producir graves daños al patrimonio hereditario.

Artículo 448.— *Delación.*

- 1. A todos los efectos legales, la delación de la herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o de su extinción.
- 2. Mientras no se defiera la herencia, se considerará en situación de herencia yacente, y su administración y representación se regirá por lo establecido en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO II

LA HERENCIA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN

Artículo 449.— *Administrador y representante.*

- 1. Pendiente de ejecución la fiducia, la administración y representación del patrimonio hereditario corresponderá:
 - 1.º Al cónyuge viudo sobre todos los bienes y derechos del premuerto, mientras tenga la condición de administrador de la comunidad conyugal, o, en otro caso, solo sobre los bienes afectos al usufructo de viudedad.
 - 2.º Al fiduciario o fiduciarios.

2. En las fiducias colectivas, la administración del patrimonio pendiente de asignación solo corresponderá a los fiduciarios si el causante no hubiera designado un administrador.

Artículo 450.— *Inventario.*

1. En el plazo fijado por el comitente o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a su fallecimiento, el administrador deberá formalizar en escritura pública un inventario comprensivo de todos los bienes, derechos, cargas y obligaciones de la sucesión.
2. Mediando causa justificada, el administrador podrá solicitar del Juez una prórroga para su realización.
3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al cónyuge, este quedará exonerado de la obligación de realizar el inventario, salvo que expresamente lo haya exigido el causante o lo acuerde el Juez a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.
4. Transcurrido el plazo para realizar el inventario sin que el administrador lo haya formalizado, cualquiera de los parientes del causante dentro del cuarto grado, o cualquier otro interesado en la herencia, podrá solicitar del Juez que le requiera para que lo formalice. El Juez, previa audiencia del administrador, le concederá un nuevo plazo por el tiempo que estime oportuno, con apercibimiento de que, si no lo hace, lo realizará a su costa un tercero designado judicialmente, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir.

Artículo 451.— *Obligaciones y cargas.*

Se pagarán con cargo al caudal relicto:

- a) Los alimentos debidos a los hijos y descendientes del causante cuando esta obligación no corresponda a otras personas.
- b) Las cargas y deudas de la herencia.
- c) Los gastos de conservación de los bienes, los tributos, primas de seguro u otros gastos a que se hallen afectos aquellos así como las obligaciones contraídas por el

administrador en la gestión de los negocios del causante o que se deriven de su explotación, en cuanto no hayan de ser satisfechos por el cónyuge usufructuario.

- d) En caso de aplazamiento, la garantía del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 452.— *Contenido de la administración y representación.*

1. El administrador satisfará las obligaciones y cargas a que se refiere el artículo anterior, gestionará los negocios que formen parte del caudal, podrá cobrar créditos vencidos y consentir la cancelación de las fianzas y derechos que los garanticen y realizar cualesquiera otros actos propios de todo administrador, así como ejercer las facultades de gestión que el causante le haya podido atribuir.
2. En el ámbito procesal, el administrador estará legitimado activa y pasivamente respecto de cualesquiera acciones referidas al patrimonio hereditario.

Artículo 453.— *Facultades de disposición.*

1. El fiduciario podrá disponer a título oneroso de los bienes o derechos hereditarios sujetos a fiducia si el comitente le hubiera autorizado para ello, o para atender el pago de las obligaciones y cargas señaladas en el artículo 451, o cuando lo juzgue conveniente para sustituirlos por otros. En las fiducias colectivas, a falta de instrucciones del causante, el acuerdo sobre la disposición se tomará por unanimidad.
2. La contraprestación obtenida quedará subrogada en lugar de los bienes enajenados, salvo que se haya destinado al pago de las deudas y cargas del caudal pendiente de asignación.
3. El fiduciario o fiduciarios no administradores darán cuenta al administrador de toda enajenación que hayan realizado y, en su caso, de los bienes adquiridos que han sustituido a los enajenados.

Artículo 454.— *Disposición habiendo legitimarios.*

Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición de inmuebles por naturaleza, empresas y explotaciones

económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos será necesaria la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena aptitud para el ejercicio de su capacidad jurídica y, si todos son menores o sin aptitud plena, de la Junta de Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisará de la autorización del Juez.

Artículo 455.— *Facultades de liquidación.*

El fiduciario puede solicitar la liquidación de la comunidad conyugal disuelta y tiene además las facultades de liquidación y división de la misma señaladas en el artículo 259.

CAPÍTULO III EJECUCIÓN DE LA FIDUCIA

Artículo 456.— *Forma.*

1. La fiducia deberá ejecutarse necesariamente por acto *inter vivos* formalizado en escritura pública.
2. Cuando se haya designado como único fiduciario al cónyuge, este podrá cumplir su encargo también en testamento, salvo disposición contraria del causante o que la fiducia se haya sometido a plazo.

Artículo 457.— *Modo de actuar.*

1. Salvo disposición en contra del comitente, cuando en el momento de ejecutar la fiducia existan descendientes suyos, el fiduciario habrá de ordenar la sucesión exclusivamente a favor de alguno o algunos de ellos, con la misma libertad con que podría hacerlo el causante.
2. El fiduciario podrá hacer uso total o parcial, y aun en tiempos distintos, de sus facultades, a menos que el causante hubiere dispuesto otra cosa.
3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al cónyuge, este, en uso parcial de la fiducia, podrá atribuir bienes pertenecientes a la disuelta comunidad conyugal con el causante, sin necesidad de practicar su previa liquidación conforme a lo previsto en el artículo 259.

Artículo 458.— *Eficacia.*

1. Los actos *inter vivos* que en ejecución de la fiducia realicen los fiduciarios serán irrevocables.
2. No obstante, podrá reiterarse el llamamiento si resulta ineficaz la atribución porque los beneficiarios llamados no quieran o no puedan aceptarla, o porque sea declarada nula.
3. Los actos de ejecución de la fiducia en forma testamentaria son siempre revocables y no impiden la eficacia de los actos de disposición realizados por el viudo fiduciario con posterioridad.

Artículo 459.— *Integrantes de la fiducia colectiva.*

1. De la fiducia colectiva formará parte también el cónyuge viudo si el comitente no lo ha excluido expresamente y existen solamente descendientes comunes.
2. Establecida la fiducia a favor de parientes, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, se entenderán llamados, hasta un número de tres, los que tengan capacidad para ser fiduciarios, con el siguiente orden de prelación:
 - 1.º Ascendientes más próximos del causante de menor edad de una u otra línea.
 - 2.º Hermanos que hayan convivido familiarmente con el causante, con preferencia del mayor sobre el menor.
 - 3.º Los colaterales que dentro del cuarto grado nombre el Juez, oído el Ministerio Fiscal.

Artículo 460.— *Ejecución de la fiducia colectiva.*

1. A falta de instrucciones del causante, los acuerdos sobre ejecución total o parcial de la fiducia se tomarán por mayoría de los fiduciarios en acto al que habrán de ser convocados todos ellos.
2. Al otorgamiento de la escritura pública concurrirán todos los fiduciarios. No obstante, bastará con que concurra la mayoría de ellos si los comparecientes manifiestan bajo su responsabilidad que la decisión se adoptó tras deliberación a la que fueron convocados la totalidad de los fiduciarios.

Artículo 461.— *Sucesión de la casa.*

1. En los supuestos de que la casa o un patrimonio deban deferirse a un solo heredero, sin determinación de normas para su nombramiento o cuando resulten de imposible cumplimiento, la elección deberá efectuarse por el cónyuge sobreviviente, y, en su defecto o cuando este hubiere fallecido sin realizarla, por las personas llamadas a integrar la fiducia colectiva conforme al artículo 459.
2. La elección deberá recaer en uno de los hijos o descendientes del causante y, en su defecto, en uno de los parientes de este con preferencia de los comprendidos hasta el cuarto grado.

CAPÍTULO IV
EXTINCIÓN

Artículo 462.— *Pérdida de la condición de fiduciario.*

La condición de fiduciario se pierde:

- a) Por las causas establecidas por el causante.
- b) Por expirar el plazo establecido para su ejecución.
- c) Cuando el fiduciario fallezca, sea declarado ausente o fallecido, privado de la plena administración de sus bienes o quede sujeto a curatela asistencial o representativa o de otra forma se acredite que se encuentra en la situación de discapacidad a que se refiere el apartado 2 del artículo 34.
- d) Por renuncia del fiduciario. Se considerará que renuncian a su condición de fiduciarios los que requeridos notarial o judicialmente por cualquier persona con interés legítimo no la aceptaren pura y simplemente en igual forma en los sesenta días naturales siguientes a la notificación.
- e) Cuando el cónyuge viudo fiduciario contraiga nuevas nupcias o lleve vida marital de hecho, salvo que el comitente hubiera dispuesto expresamente otra cosa.
- f) Por incurrir el fiduciario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas legales de desheredación o indignidad para suceder.

Artículo 463.— *Extinción de la fiducia.*

1. En la fiducia individual, la pérdida de la condición de fiduciario producirá la extinción de la misma, salvo que proceda el llamamiento de otro fiduciario en los casos de fiducia sucesiva. En todo caso, conservarán su eficacia los actos ya efectuados con anterioridad por el fiduciario, salvo los de disposición que el cónyuge viudo fiduciario hubiere efectuado en su testamento en los casos de las letras e) y f) del artículo anterior.
2. Cuando los fiduciarios sean varios, la pérdida de tal condición por alguno de ellos, una vez agotada la posibilidad de designación en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 459, no impedirá el cumplimiento del encargo por los restantes, aunque solo quede uno, salvo que sea el cónyuge no designado por el comitente o que este haya dispuesto otra cosa.

TÍTULO V

NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS

CAPÍTULO I

DESIGNACIÓN DE SUCESOR

Artículo 464.— *Sucesión voluntaria.*

1. Quien no tenga legitimarios puede disponer, por pacto o testamento, de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquier persona que tenga capacidad para suceder.
2. El que tenga legitimarios solo puede disponer de sus bienes con las limitaciones que se establecen en este Libro.
3. La reserva de bienes no tendrá lugar sino cuando aparezca previamente determinada en testamento abierto u otra escritura pública.

Artículo 465.— *No exigencia de la institución de heredero.*

1. El pacto sucesorio y el testamento serán válidos aunque no contengan institución de heredero, o esta no comprenda la

totalidad de los bienes. También lo serán aunque el instituido sea incapaz de heredar o no acepte la herencia.

2. En estos casos se cumplirán las disposiciones paccionadas o testamentarias hechas con arreglo a las leyes, y el remanente de los bienes se deferirá a los herederos legales, abriéndose para ellos la sucesión legal.

Artículo 466.— *Nombramiento de heredero.*

1. Tendrá la consideración de heredero el nombrado para suceder, en todo o en parte, en las relaciones patrimoniales y personales del causante que no se extingan por su muerte, cualquiera que sea la denominación que este le haya dado y tanto si ha sido llamado a la totalidad o a una cuota del caudal como a uno o varios bienes determinados.
2. Los designados sucesores por causa de muerte que no sean herederos tendrán la consideración de legatarios.
3. El llamado a una cuota de la herencia será considerado heredero y el llamado a cosa determinada, legatario, salvo que resulte que otra es la voluntad del causante.

Artículo 467.— *Heredero ex re certa.*

1. Si es voluntad del disponente que el instituido en cosa cierta y determinada sea heredero, responderá de las obligaciones y cargas hereditarias en proporción al valor de lo así recibido; pero no tendrá derecho de acrecer.
2. Si toda la herencia ha sido distribuida entre herederos instituidos en cosa cierta y determinada, sucederán en los bienes de nueva aparición en proporción al valor de lo recibido por cada uno.
3. El instituido en el derecho de usufructo de la herencia, o de una parte o cuota de ella, cuando la voluntad del disponente es que sea heredero, tiene la consideración de heredero ex re certa.

Artículo 468.— *Legado de parte alícuota.*

Si es voluntad del disponente que el llamado a parte alícuota de la herencia sea legatario, no será deudor de las obligaciones y cargas de la herencia y concurrirá a la partición con el heredero, pero cuando no sea legitimario solo tendrá derecho

a percibir el valor de lo legado en bienes del activo hereditario líquido si el heredero no opta por pagarlo en dinero, aunque no lo haya en la herencia.

Artículo 469.— *Distribución de toda la herencia en legados.*

1. Si la voluntad del disponente ha sido distribuir toda la herencia en legados, se prorratarán las deudas y cargas entre los legatarios en proporción a sus cuotas, a no ser que se hubiera previsto otra cosa.
2. La responsabilidad de los legatarios se mantendrá por la parte que proporcionalmente se derive de sus cuotas aunque concurren con herederos legales sobrevenidos por la aparición de nuevos bienes.

Artículo 470.— *Certeza de la designación.*

Se tendrá por no puesta toda disposición paccionada o testamentaria en favor de persona incierta, a menos que por algún evento pueda resultar cierta.

Artículo 471.— *Motivación de la disposición.*

La expresión en el pacto o testamento de los motivos de una disposición no afectará a su eficacia, a no ser que, siendo falsos o ilícitos, resultara del propio título sucesorio que han sido esencialmente determinantes de la disposición.

Artículo 472.— *Concurrencia de designados.*

En el llamamiento sucesorio a varias personas, salvo que otra cosa resulte del mismo, se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Los sucesores designados simultáneamente sin atribución de partes se entienden llamados por partes iguales. Por excepción, si se llama a los hermanos del causante sin hacerlo nominalmente, los de padre y madre toman doble porción que los medio hermanos.
- b) Si se llama simultáneamente a varias personas, a unas individual y a otras colectivamente, se entiende que estas lo son también individualmente.
- c) Los designados conjuntamente se entienden llamados simultánea y no sucesivamente. Asimismo, cuando sean

llamados a una sucesión una persona y sus hijos, se entienden todos instituidos simultánea y no sucesivamente.

- d) Cuando se designa a los «hijos», «descendientes» o «hijos y descendientes» del causante o de otra persona, se entienden llamados en primer término los hijos, sustituidos por sus estirpes de descendientes conforme a las reglas de la sustitución legal.
- e) Cuando se llama a un determinado grupo de parientes, como «hijos» o «hermanos», sean del causante o de otra persona, se entienden comprendidos los matrimoniales, no matrimoniales y adoptivos que vivan o estén concebidos al tiempo en que se de era la herencia.

Artículo 473.— *Disposición a favor del alma o a favor de los pobres.*

1. Los bienes objeto de disposición para sufragios y obras pías, cuando se haya hecho indeterminadamente y sin especificar su aplicación, se ofrecerán por los albaceas a las instituciones beneficiarias y, si alguna no los quisiera recibir en especie, se venderán por aquellos, que entregarán la mitad del importe a la Iglesia o confesión religiosa legalmente reconocida a la que pertenecía el causante, para que los destinen a los indicados sufragios y para atender sus necesidades, y la otra mitad a la Diputación General de Aragón para fines benéficos de la población o comarca correspondiente al domicilio del difunto o de alcance más general. Si el disponente pertenecía a una confesión religiosa no reconocida legalmente, la mitad que le habría correspondido acrecerá a la Diputación General.
2. En la disposición a favor de los pobres en general o para obras asistenciales que no precisen su destino, la Diputación General de Aragón destinará los bienes, o el importe de su venta, a entidades asistenciales, preferentemente de la población o comarca del domicilio del disponente.
3. No obstante, en el supuesto de disposición para obras asistenciales sin precisar su destino:
 - a) Si el causante hubiera sido persona con discapacidad sujeta a medidas de apoyo para el ejercicio de su

capacidad, la Diputación General de Aragón destinará los bienes, o el importe de su venta, a la entidad del sector público responsable de la aplicación de las medidas de apoyo de las personas que las han precisado para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.

- b) Si el causante fallecido hubiera tenido su última residencia habitual en un centro residencial de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Diputación General de Aragón destinará los bienes, o el importe de su venta, a dicho centro residencial.

Artículo 474.— *Disposición a favor de parientes o herederos.*

1. Si no resulta otra cosa del pacto o testamento, la disposición a favor de parientes del disponente o de un tercero sin determinación de quiénes sean, se considerará hecha a favor de los que serían llamados por ley a suceder en el momento de la delación y en la proporción resultante de las reglas de la sucesión legal, pero sin limitación de grado y excluyendo al cónyuge.
2. Si para designar a los sucesores se utilizan expresiones como los «herederos», «herederos legales», «herederos legítimos» u otras semejantes, ya lo sean del causante o de otra persona, en defecto de previsiones en el título sucesorio, se entenderán llamados quienes deban heredar según las reglas de la sucesión legal.

Artículo 475.— *Prohibiciones de adquirir por causa de muerte.*

1. Es nula la disposición por causa de muerte a favor de las siguientes personas:
 - a) El Notario autorizante del acto, o las personas ante las que se otorgan los testamentos especiales, y su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado.
 - b) Los testigos, facultativos, expertos e intérpretes que intervengan en el otorgamiento del pacto o testamento.
 - c) La persona que escribe el testamento cerrado a ruego del testador.

- d) El tutor o curador del disponente, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no hubiesen que rendirse estas, después de la extinción de la tutela o curatela. Es, sin embargo, válida la disposición a su favor cuando se trate de ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge del disponente.
2. Abierta la sucesión, los efectos retroactivos, el deber de restitución y la caducidad de la acción declarativa de la incapacidad relativa del heredero o legatario a quien se haya deferido la herencia, se rigen por las normas de la indignidad.

Artículo 476.— *Condiciones válidas.*

Son válidas todas las condiciones que no sean imposibles o contrarias a las leyes o las buenas costumbres. En particular, es válida la condición de contraer o no contraer primero o ulterior matrimonio o hacerlo con persona determinada, así como la condición de que el heredero o legatario haga alguna disposición *mortis causa* en favor del disponente o de otra persona.

Artículo 476 bis.— *Sustitución ejemplar.*

1. El ascendiente puede nombrar sustituto al descendiente sujeto a medidas de apoyo representativas, si bien la sustitución será ineficaz si el descendiente ha otorgado pacto o testamento válido, antes o después de dictarse las medidas de apoyo, o si estas hubieran quedado sin efecto con anterioridad a su fallecimiento.
2. El ascendiente tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la voluntad y preferencias del sustituido.
3. La sustitución ejemplar comprenderá la totalidad de los bienes del sustituido.
4. En el caso de que varios ascendientes hubieran hecho uso de la sustitución, se preferirá la disposición realizada por el ascendiente fallecido de grado más próximo. Si son del mismo grado se atenderá a las disposiciones de todos si son compatibles. Si no lo son, prevalecerá la de cada uno en lo que hubiera dejado al descendiente, y el resto se entenderá dispuesto proporcionalmente.

CAPÍTULO II LEGADOS

Artículo 477.— *Adquisición del legado.*

1. En los legados de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, el legatario adquiere su propiedad desde que se le defiende. En los demás legados, la delación le convierte en acreedor de la persona gravada.
2. El legatario que acepte el legado consolidará su adquisición, pero si lo repudia se considerará que no ha tenido lugar la delación a su favor.

Artículo 478.— *Derecho de transmisión.*

1. El legado deferido y no aceptado ni repudiado se transmitirá por fallecimiento del legatario a sus herederos, con la misma facultad de aceptarlo o repudiarlo, salvo voluntad contraria del disponente o que se trate de legados de usufructo, de renta, de pensión vitalicia u otros de carácter personalísimo.
2. De existir una pluralidad de herederos del legatario, cada uno podrá repudiar o aceptar la parte que le corresponda en el legado.

Artículo 479.— *Posesión del legado.*

El legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública en que formalice su aceptación.

Artículo 480.— *Prelación entre legatarios.*

Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, su pago se hará en el orden siguiente:

- 1.º Los que el causante haya declarado preferentes.
- 2.º Los remuneratorios.
- 3.º Los de cosa cierta y determinada que forme parte del caudal hereditario.
- 4.º Los de alimentos.

- 5.º Los de educación.
- 6.º Los demás a prorrata.

CAPÍTULO III **DERECHO DE ACRECER**

Artículo 481.— *Casos en que procede.*

Habiendo sido llamadas dos o más personas conjuntamente a la totalidad de una herencia o legado o porción de ellos, si alguna no quiere o no puede suceder, su porción acrecerá a las demás, salvo que el disponente hubiera nombrado sustituto o excluido el derecho de acrecer o procedieran la sustitución legal o el derecho de transmisión regulado en el artículo 387.

Artículo 482.— *Acrecimiento por grupos.*

Si quien no llega a suceder forma parte de un grupo de llamados, aunque hubiera otras personas llamadas conjuntamente, el acrecimiento tendrá lugar con preferencia dentro del grupo.

Artículo 483.— *Efectos del derecho de acrecer.*

Los herederos o legatarios favorecidos por el acrecimiento adquieren la parte acrecida por imperio de la ley, sin necesidad de aceptación y sin poder repudiar separadamente esa parte.

CAPÍTULO IV **ALBACEA**

Artículo 484.— *Carácter dispositivo.*

El disponente puede nombrar en pacto sucesorio o testamento uno o más albaceas y establecer con entera libertad las determinaciones que tenga por conveniente.

Artículo 485.— *Testamento mancomunado.*

En el testamento mancomunado, el plazo señalado al albacea común a los testadores se contará, en cuanto a cada sucesión, desde la fecha de fallecimiento del respectivo causante.

TÍTULO VI DE LA LEGÍTIMA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 486.— *Legítima colectiva.*

1. La mitad del caudal fijado conforme al artículo 489 debe recaer en descendientes, de cualquier grado, del causante, que son los únicos legitimarios.
2. Esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo. Si no se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se entiende distribuida entre los legitimarios de grado preferente conforme a las reglas de la sucesión legal.

Artículo 487.— *Títulos de atribución.*

1. La legítima puede atribuirse por cualquier título lucrativo.
2. La existencia de legitimarios no impide al disponente instituir, de forma clara y explícita, heredero a un extraño.

Artículo 488.— *Legitimarios de grado preferente.*

1. Son legitimarios de grado preferente los hijos y, en lugar de los premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos y sucesivamente por sus estirpes de descendientes.
2. No tendrán esta condición los descendientes de los que hubieran renunciado a su legítima.

Artículo 489.— *Cálculo.*

1. El caudal computable a efectos del cálculo de la legítima se forma de la siguiente manera:
 - 1.º Se parte del caudal relicto valorado al tiempo de liquidarse la legítima.
 - 2.º Se añade el valor de los bienes donados por el causante calculado al tiempo de la donación, pero actualizado su importe al tiempo de liquidarse la legítima.

2. Por excepción, no se computan:

- a) Las liberalidades usuales.
- b) Los gastos de alimentación, educación y asistencia en enfermedades de parientes dentro del cuarto grado que estén en situación de necesidad, aunque el causante no tuviera obligación legal de prestarles alimentos. Los gastos de educación y colocación de los hijos solo se computarán cuando sean extraordinarios.

Artículo 490.— *Imputación.*

1. Serán imputables a la legítima colectiva las liberalidades recibidas del causante por cualquiera de sus descendientes, incluso premuertos, incapaces de suceder, desheredados con causa legal o renunciantes a la legítima.
2. A la imputación se le aplican las mismas reglas de valoración del artículo anterior. No se deducirá del valor de las liberalidades por causa de muerte el de los gravámenes impuestos por el causante a los descendientes, los cuales tendrán el derecho que les confiere el artículo 499, ni el de los impuestos por la ley.

Artículo 491.— *Liberalidades no imputables.*

No se imputan a la legítima:

- a) Las liberalidades que el causante hubiera excluido de imputación.
- b) Las no computables para el cálculo de la legítima.

Artículo 492.— *Renuncia a la legítima.*

1. La renuncia a la legítima puede hacerse tanto después como antes de la delación de la sucesión, y en este caso unilateralmente o como resultado de un pacto sucesorio.
2. Los requisitos de capacidad y forma de la renuncia a la legítima son, cuando se hace después de la delación, los mismos de la repudiación de la herencia, y, cuando se hace antes, los mismos del otorgamiento de pactos sucesorios.
3. La renuncia a la legítima, salvo declaración en contrario, no afectará a los derechos que correspondan al renunciante en

la sucesión legal ni a los que le provengan de la sucesión voluntaria del causante.

4. La renuncia a cualquier atribución patrimonial por causa de muerte procedente del ascendiente implica la renuncia a la legítima.

Artículo 493.— *Prescripción de acciones.*

1. Las acciones reguladas en este Título prescriben en el plazo de cinco años contados desde el fallecimiento del causante o desde la delación de la herencia si esta se produce con posterioridad.
2. Si el legitimado para el ejercicio de estas acciones fuera menor de catorce años al iniciarse el cómputo, el plazo finalizará para él cuando cumpla diecinueve.

CAPÍTULO II

INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA

Artículo 494.— *Lesión de la legítima.*

1. No alcanzando los beneficios percibidos por el conjunto de los descendientes la cuantía de la legítima colectiva, podrán reducirse las liberalidades hechas en favor de no descendientes en la forma regulada a continuación.
2. Salvo que la voluntad del disponente sea otra, el derecho a obtener la reducción corresponderá a los legitimarios de grado preferente y cada uno tendrá derecho a obtener una fracción del importe de la lesión proporcional a su cuota en la sucesión legal.
3. La renuncia o la simple falta de ejercicio por alguno de su derecho de reclamación no incrementa el de los demás.

Artículo 495.— *Prelación en la reducción de liberalidades.*

Las liberalidades lesivas se reducirán en el orden que el causante hubiera dispuesto y en lo no previsto se procederá de la siguiente forma:

- a) Se reducirán primero las liberalidades por causa de muerte, a prorrata, con independencia de su título de atribución.

- b) Si no fuera suficiente, se reducirán las liberalidades entre vivos, empezando por las de fecha más reciente; las de la misma fecha se reducirán a prorrata.

Artículo 496.— *Forma de practicar la reducción.*

1. Si la reclamación de reducción se dirige contra el cónyuge viudo, podrá este evitarla pagando en metálico lo que al legítimo reclamante le correspondiera percibir.
2. Si quien sufriera la reducción hubiera recibido del causante varios bienes, tendrá derecho a determinar cuáles de ellos, que cubran el valor reclamado, son objeto de la misma.
3. Si el objeto de la reducción fuera un bien o un conjunto de ellos que no admita cómoda división, ambas partes podrán compensarse en metálico como convengan. En defecto de acuerdo, si la reducción no absorbe la mitad de su valor, quedará para el que hubiera recibido la liberalidad; en caso contrario, para el legítimo que reclama, debiéndose compensar la diferencia en metálico.

CAPÍTULO III INTANGIBILIDAD CUALITATIVA

Artículo 497.— *Cumplimiento en bienes relictos.*

1. La legítima debe atribuirse en bienes relictos.
2. El incumplimiento del deber de atribuir en bienes relictos lo que falte para alcanzar la cuantía de la legítima colectiva, computadas las donaciones imputables, faculta individualmente a los legítimos afectados para pedir que la parte proporcional que en la diferencia les corresponda les sea entregada en bienes relictos por los extraños que los han recibido, renunciando en favor de estos a los correspondientes bienes no relictos.
3. La reducción de liberalidades de bienes relictos hechas en favor de no descendientes no podrá afectar al cónyuge viudo y para su práctica será de aplicación el artículo 496.

Artículo 498.— *Prohibición de gravámenes sobre la legítima.*

1. El causante solo puede imponer gravámenes sobre los bienes relictos que atribuya a sus descendientes cuando el valor de los atribuidos libres de gravamen sumado al de las donaciones imputables a la legítima cubra el importe de la legítima colectiva.
2. Se entiende a estos efectos por gravamen toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación impuestos en el título sucesorio que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondían al causante. No se consideran gravámenes los legados en titularidad plena de bienes ciertos con que el causante hubiera gravado a un descendiente.

Artículo 499.— *Efectos de la infracción.*

El legitimario a quien se hubiera impuesto un gravamen que contravenga lo dispuesto en el artículo anterior tiene derecho a que se tenga por no puesto. A este derecho se le aplicarán las siguientes reglas:

- 1.^a El gravamen se tendrá por no puesto solo en la parte que vulnere la prohibición. Pero si por su naturaleza no fuera posible dejarlo sin efecto parcialmente, se tendrá por no puesto en su totalidad.
- 2.^a Si fueran varios los descendientes sujetos a gravamen, la parte que deba quedar sin efecto se repartirá entre ellos en la misma proporción en que hayan sido favorecidos por el causante en sus disposiciones por causa de muerte.
- 3.^a El descendiente al que se hubieran impuesto varios gravámenes podrá decidir el orden en que deben quedar sin efecto.

Artículo 500.— *Cautelas de opción compensatoria.*

1. Para que sea válida la facultad concedida por el causante a algún legitimario de optar entre una determinada atribución por causa de muerte libre de gravamen y otra de mayor

importe pero sujeta a gravamen que infrinja lo dispuesto en el artículo 498, es preciso que concurren los siguientes requisitos:

- a) Que si se optara por la atribución libre de gravamen, no haya lesión en la legítima colectiva.
 - b) Y que si se optara por la atribución gravada, el conjunto de liberalidades recibidas por los legitimarios cubra además la mitad de la parte de libre disposición.
2. La opción que incumpla los requisitos del apartado 1 es ineficaz y al gravamen impuesto se le aplicarán las reglas previstas en el artículo anterior.

Artículo 501.— *Gravámenes permitidos.*

No se incluyen en la prohibición del artículo 498 los siguientes gravámenes:

- 1.º Aquellos dispuestos en beneficio de otros descendientes, presentes o futuros, dentro de los límites de las sustituciones fideicomisarias.
- 2.º Los establecidos para el caso de fallecer todos los legitimarios sin descendencia, y solo relativamente a los bienes de que cada uno no hubiere dispuesto.
- 3.º Los establecidos con justa causa, que esté expresada en el título sucesorio o en documento público, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.
- 4.º Los demás previstos por la ley.

Artículo 502.— *Justa causa de gravamen.*

1. Solo es justa la causa que busca un mayor beneficio del legitimario gravado o de los demás legitimarios.
2. Si el gravamen impusiera una obligación cuyo incumplimiento produzca la transferencia de los bienes heredados por el gravado a otra persona, solo será válido cuando esa persona sea otro descendiente.
3. La causa expresada deberá tenerse como justa mientras no se demuestre que no lo es.

CAPÍTULO IV PRETERICIÓN

Artículo 503.— *Supuestos de preterición.*

1. Se entienden preteridos aquellos legitimarios de grado preferente que, no favorecidos en vida del causante ni en su sucesión legal, no han sido mencionados en el pacto o testamento, o en el acto de ejecución de la fiducia.
2. No se consideran preteridos quienes en el momento de la delación de la herencia son legitimarios de grado preferente por sustitución de un ascendiente que no había sido preterido.

Artículo 504.— *Mención suficiente.*

1. Es suficiente para que no haya preterición cualquier mención del legitimario en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura en que se ordene la sucesión, aun sin disposición alguna a su favor ni exclusión expresa de la legítima o de beneficios sucesorios.
2. Es también suficiente cualquier atribución de carácter simbólico o de valor irrelevante.
3. No es mención suficiente, respecto de los nacidos después de otorgarse el testamento o la escritura, el uso de expresiones no referidas especialmente a ellos. Tampoco es mención suficiente la referencia a un descendiente como fallecido cuando en realidad vive.

Artículo 505.— *Preterición intencional.*

1. Es intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la sucesión, conocía la existencia del legitimario y su condición de tal.
2. La preterición se presumirá intencional, salvo prueba en contrario.

Artículo 506.— *Preterición no intencional.*

Es no intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la sucesión, desconocía la existencia del legitimario o su condición de tal, y en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido o desconocer que era descendiente suyo.

Artículo 507.— *Consecuencias de la preterición intencional.*

El legitimario preterido intencionalmente no tiene otro derecho que el que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.

Artículo 508.— *Consecuencias de la preterición no intencional.*

1. El legitimario preterido no intencionalmente tiene derecho, salvo previsión distinta del disponente, a una porción del caudal relicto igual a la que después de la reducción corresponda al menos favorecido por aquel. Esta porción se formará reduciendo proporcionalmente las participaciones de los restantes legitimarios, aunque estos tendrán derecho a pagar al preterido su parte en metálico. A la reducción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 496.
2. Cuando todos o el único legitimario de grado preferente hayan sido preteridos no intencionalmente y no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, se produce la delación legal de todo el caudal relicto.
3. El preterido no intencionalmente tendrá, además, el derecho que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.

CAPÍTULO V **DESHEREDACIÓN Y EXCLUSIÓN**

Artículo 509.— *Desheredación con causa legal.*

1. Solo produce los efectos dispuestos en el artículo 511 la desheredación que se funda en una causa legal, cierta y expresada en el pacto o testamento, o en el acto de ejecución de la fiducia.
2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del causante, si el desheredado la niega.

Artículo 510.— *Causas legales de desheredación.*

Son causas legales de desheredación:

- a) Las de indignidad para suceder.

- b) Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.
- c) Haberle causado maltrato grave de obra o psicológico, así como a su cónyuge o pareja estable siempre que sean ascendientes del desheredado.
- d) Haber sido judicialmente privado de la autoridad familiar sobre descendientes del causante por sentencia fundada en el incumplimiento del deber de crianza y educación.
- e) La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa principalmente imputable al legitimario.

Artículo 511.— *Efectos de la desheredación con causa legal.*

1. La desheredación realizada conforme al artículo 509 priva al desheredado de la condición de legitimario y de las atribuciones sucesorias que le correspondan por cualquier título, excepto de las voluntarias posteriores a la desheredación.
2. Además, extingue la legítima colectiva si no hubiera otros descendientes que conserven la condición de legitimarios.
3. La reconciliación posterior entre el disponente y el desheredado o el perdón de aquel a este, privan al disponente del derecho a desheredar y dejan sin efecto la desheredación ya hecha.

Artículo 512.— *Exclusión voluntaria de descendientes.*

1. El disponente puede excluir a los legitimarios de grado preferente aunque no concurren los requisitos del artículo 509 y aun sin alegación de causa alguna.
2. Los legitimarios excluidos no tienen otros derechos que el que pueda corresponderles a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma, y los que les correspondan en la sucesión legal, salvo lo dispuesto en los dos artículos siguientes.

Artículo 513.— *Exclusión absoluta.*

1. La exclusión es absoluta cuando el disponente ha expresado su voluntad de privar al excluido de todo derecho en

la sucesión. La misma consideración tiene la desheredación pretendida que no cumpla los requisitos expresados en el artículo 509.

2. Los excluidos absolutamente quedan privados del derecho a suceder abintestato y del de ejercitar la acción de lesión que pudiera corresponderles, en los que serán sustituidos por sus estirpes de descendientes si los tuvieran.
3. No obstante, si la exclusión absoluta afecta a todos o al único legitimario, conservarán el derecho a suceder abintestato y a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma.

Artículo 514.— *Error en el motivo o la causa.*

Si el motivo de la exclusión, aun absoluta, o la causa de la desheredación, expresados en el título sucesorio, son erróneos, pero no han sido determinantes, se tienen por no puestos. Si han sido determinantes, se producen para los legitimarios de grado preferente las consecuencias de la preterición no intencional.

CAPÍTULO VI ALIMENTOS

Artículo 515.— *Derecho a alimentos.*

1. Los legitimarios de grado preferente que al hacerse efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos podrán reclamar los que les correspondieran, como descendientes del causante, de los sucesores de este, en proporción a los bienes recibidos.
2. Estos derechos de alimentos solo procederán en la medida en que no esté obligado a prestarlos el viudo usufructuario o los parientes del alimentista conforme a la legislación general.

TÍTULO VII DE LA SUCESIÓN LEGAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 516.— *Procedencia.*

En defecto, total o parcial, de sucesión ordenada válida y eficazmente por pacto o testamento, se abre la sucesión legal.

Artículo 517.— *Orden de sucesión legal.*

1. En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los parientes de la línea recta descendente.
2. En defecto de descendientes:
 - 1.º Los bienes recobrables y los troncales se defieren a las personas con derecho a recobro y a los parientes troncales, respectivamente.
 - 2.º Los bienes no recobrables ni troncales, y también estos si no hay parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Artículo 518.— *Diversidad de llamamientos universales.*

1. En la sucesión legal de una persona pueden concurrir diferentes llamamientos universales en atención al carácter troncal o no troncal de los bienes que integran el caudal relicto.
2. La declaración de herederos legales deberá expresar si se refiere solo a los bienes no troncales, solo a los troncales, con indicación de la línea de que procedan, o a ambos tipos de bienes. Si falta dicha mención, se presumirá que la declaración se ha limitado a los bienes no troncales y no impedirá instar una nueva declaración referida a los troncales.

Artículo 519.— *Principio de proximidad de grado.*

1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal.

2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.
3. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en contrario.

Artículo 520.— *Ineficacia del llamamiento.*

1. Cuando el llamado a la sucesión legal no puede o no quiere suceder, se procede conforme al siguiente orden:
 - 1.º Si se trata de un descendiente o hermano del causante y de alguno de los supuestos de sustitución legal, ocupan su lugar sus estirpes de descendientes.
 - 2.º No aplicándose la sustitución legal, su parte acrecerá a los coherederos.
 - 3.º Si tampoco hubiera acrecimiento, sucederán por derecho propio los parientes del grado siguiente o, en su caso, las personas que ocuparan el siguiente lugar, todo ello según el orden de delación legal.
2. Quienes reciban la porción del llamado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone el artículo 55.

CAPÍTULO II

SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES

Artículo 521.— *No discriminación.*

Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.

Artículo 522.— *Sucesión a favor de los hijos.*

Los hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia en partes iguales.

Artículo 523.— *Sucesión a favor de otros descendientes.*

1. Los nietos y demás descendientes heredan por sustitución legal, en los casos y en la forma previstos en el Capítulo III del Título Primero de este Libro.

2. Repudiando la herencia el descendiente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los descendientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.

CAPÍTULO III RECOBROS Y SUCESIÓN TRONCAL

Artículo 524.— *Recobro de liberalidades.*

1. Los ascendientes o hermanos de quien fallece sin pacto o testamento y sin descendencia recobran, si le sobreviven, los mismos bienes que hubieran donado a este y que aún existan en el caudal.
2. El recobro de los hermanos, en los casos en que proceda la sustitución legal, pasará a sus hijos o nietos.
3. El recobro de liberalidades por los ascendientes o hermanos se entenderá sin perjuicio del derecho de viudedad que corresponda al cónyuge del donatario fallecido.
4. Cuando los bienes donados pertenecieran a la comunidad conyugal, el recobro se ejercitará por cada cónyuge sobre la mitad indivisa de aquellos y para su patrimonio privativo.

Artículo 525.— *Recobro, habiendo descendientes.*

Procede también el recobro ordenado en el artículo anterior si, habiendo ya recaído por título lucrativo los bienes en descendientes del finado, fallecen todos estos sin dejar descendencia ni haber dispuesto de dichos bienes, antes que la persona con derecho a tal recobro.

Artículo 526.— *Sucesión troncal.*

Quando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los bienes troncales se deferirá:

- 1.º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los bienes. Los hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por derecho propio conforme a lo dispuesto en el artículo 532.
- 2.º Al padre o madre, según la línea de donde los bienes procedan.

3.º A los más próximos colaterales del causante hasta el cuarto grado, o hasta el sexto si se trata de bienes troncales de abolorio, entre los que desciendan de un ascendiente común propietario de los bienes y, en su defecto, entre los que sean parientes de mejor grado de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito. Concurriendo tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros sean parientes del mismo grado respecto del causante, los primeros serán excluidos por los segundos.

Artículo 527.— *Bienes troncales de abolorio.*

1. Son bienes troncales de abolorio todos aquellos que hayan permanecido en la casa o familia del causante durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.
2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores, cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos del causante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.

Artículo 528.— *Bienes troncales simples.*

1. Son bienes troncales simples los que el causante haya recibido a título gratuito de ascendientes o colaterales hasta el sexto grado.
2. Se exceptúan los que el causante hubiera adquirido de uno de sus padres procedentes de la comunidad conyugal de ambos cuando según las reglas de la sucesión no troncal le correspondiera heredar al otro progenitor.

CAPÍTULO IV **SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES**

Artículo 529.— *Sucesión a favor de los padres.*

1. La herencia se defiende al padre y a la madre por partes iguales.

2. En el caso de que uno de los padres haya premuerto al causante o no quiera o no pueda aceptar la herencia, su parte acrecerá al otro progenitor.

Artículo 530.— *Sucesión a favor de otros ascendientes.*

1. A falta de padre y de madre, o cuando ambos no quieran o no puedan aceptar, la herencia se defiere a los ascendientes más próximos en grado.
2. Si concurren varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la misma línea paterna o materna, la herencia se defiere por cabezas. Si alguno de los llamados no quiere o no puede aceptar, su parte acrecerá a los demás coherederos.
3. Si los ascendientes son de líneas diferentes, pero de igual grado, la mitad se defiere a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. En cada línea, la división se hará por cabezas, con derecho de acrecer en favor de los coherederos de la misma línea en caso de que algún llamado no quiera o no pueda aceptar la herencia. Si todos los ascendientes de una línea no quieren o no pueden aceptar, su mitad acrecerá a los ascendientes del mismo grado de la otra línea.

CAPÍTULO V

SUCESIÓN DEL CÓNYUGE Y LOS COLATERALES

Artículo 531.— *Sucesión a favor del cónyuge viudo.*

1. El llamamiento al cónyuge sobreviviente no tendrá lugar si al fallecimiento del causante estuvieran separados legalmente o de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente, o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos ante el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación.
2. Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título de todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los parientes del premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como herederos de este y sustitutos de aquel. A falta de estos

parientes, tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente.

Artículo 532.— *Sucesión a favor de hermanos y sobrinos.*

1. Los hermanos e hijos y nietos de hermanos son llamados con preferencia a los demás colaterales.
2. Si no concurren más que hermanos de doble vínculo, la delación tiene lugar por partes iguales.
3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo sustituidos, la herencia se defiere a los primeros por derecho propio y a los segundos por sustitución legal.
4. Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos sustituidos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren solo hijos o solo nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 338.

Artículo 533.— *Sucesión a favor de medio hermanos y sobrinos.*

1. Si concurren hermanos de doble vínculo con medio hermanos, los primeros son llamados a doble cuota de la herencia que los segundos.
2. En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de padre y otros por la de la madre, la herencia se defiere a todos por partes iguales.
3. La herencia se defiere a los hijos y nietos de los medio hermanos por cabezas o por estirpes, según las reglas establecidas para los descendientes de hermanos de doble vínculo.

Artículo 534.— *Sucesión a favor de otros colaterales.*

1. No habiendo hermanos ni hijos o nietos de hermanos, la herencia se defiere a los demás parientes del causante en línea colateral hasta el cuarto grado.
2. La delación en favor de estos colaterales se verifica sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo.

CAPÍTULO VI

SUCESIÓN EN DEFECTO DE PARIENTES Y CÓNYUGE

Artículo 535.— *Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma.*

1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma.
2. Previa declaración de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.

Artículo 536.— *Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.*

En los supuestos del artículo anterior, serán llamadas, con preferencia, a la sucesión legal las siguientes instituciones:

- 1) El Hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes.

Previa declaración de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital.

- 2) La entidad del sector público responsable de la aplicación de las medidas de apoyo de las personas que las han precisado para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, será llamada, con preferencia, a la sucesión legal de los causantes que fallezcan durante la vigencia de dichas medidas de apoyo.

Previa declaración de herederos a favor de dicha entidad, esta destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de la atención de las personas que precisen medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.

- 3) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los causantes que

hubieran tenido su última residencia habitual en centros residenciales de su titularidad.

Previa declaración de herederos a favor del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, este destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación, preferentemente, a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del centro residencial en el que fallezca el causante.

LIBRO CUARTO

DERECHO PATRIMONIAL

TÍTULO I

DE LAS RELACIONES DE VECINDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 537.— *Relaciones de vecindad.*

1. Los vecinos podrán establecer normas específicas para sus relaciones de vecindad, que obligarán únicamente a quienes las acordaron.
2. Los actos realizados y soportados en el ámbito de las relaciones de vecindad se presumen de mera tolerancia.
3. No se extinguen por prescripción las acciones para exigir la correcta observancia de las relaciones de vecindad.

Artículo 538.— *Del uso adecuado de los inmuebles o sitios.*

Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho real o personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus derechos, no pueden causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los que resulten del uso razonable de la finca según su naturaleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe.

CAPÍTULO II

ÁRBOLES Y PLANTACIONES

Artículo 539.— *Inmisión de raíces y ramas.*

1. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una finca vecina, tendrá el titular de esta derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el titular del suelo en que se

introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad, en ambos casos mediando justa causa.

2. Si es un árbol frutal el que extiende sus ramas sobre la finca vecina, el titular de esta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan, salvo pacto o costumbre distinta. En caso de que las raíces o ramas ocasionen un perjuicio a su finca, podrá utilizar las facultades que le concede el apartado anterior.
3. Si, reclamado el corte de las ramas, el poseedor del árbol no lo hiciere en un tiempo prudencial, el titular del suelo podrá cortar las que se hayan introducido en su finca.
4. El corte de raíces y ramas se hará en la época y con las técnicas más adecuadas para la conservación del árbol.

Artículo 540.— *Plantaciones.*

1. El propietario que plante arbustos o árboles en predios destinados a plantación o cultivo deberá hacerlo a la distancia mínima autorizada por la costumbre u ordenanzas del lugar, y, en su defecto, a la de cincuenta centímetros si son arbustos o dos metros si son árboles, a contar desde la línea divisoria.
2. Los árboles existentes en un seto vivo medianero se presumen también medianeros y no podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes, salvo que causen un perjuicio grave a cualquiera de los dueños.
3. En las plantaciones forestales se estará a lo dispuesto por la legislación especial.

Artículo 541.— *Árboles que amenazan caerse.*

1. Cuando algún árbol amenazare caerse de modo que pueda causar perjuicio a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular, el dueño del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo, y, si no lo verificare, se hará a su costa por mandato de la autoridad competente.
2. El dueño responderá de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.

CAPÍTULO III **CONSTRUCCIONES**

Artículo 542.— *Paso por razón de obras.*

Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por finca ajena o colocar en ella andamios u otros objetos para la obra, el titular de esta finca está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

Artículo 543.— *Uso de pared medianera.*

El condueño de una pared medianera está facultado para realizar cualquier uso y aprovechamiento de la misma hasta donde su destino y estado actuales lo permitan, siempre que no perturbe el uso común y respectivo de los otros condueños, e indemnizando los perjuicios que cause.

CAPÍTULO IV **AGUAS PLUVIALES**

Artículo 544.— *Paso natural del agua pluvial.*

Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra humana descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso, sin que el dueño del predio inferior pueda hacer obras que lo impidan, ni el del superior, obras que lo agraven.

CAPÍTULO V **LUCES Y VISTAS**

Artículo 545.— *Régimen normal de luces y vistas.*

1. Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en pared medianera, pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas.
2. Dichos huecos carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar provistos de reja de hierro remetida en la

pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en vistas rectas o sesenta centímetros en vistas de costado u oblicuas.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable a los huecos abiertos sobre una vía de uso público.

Artículo 546.— *Toma de medidas.*

Las distancias de que habla el apartado 2 del artículo 545 se medirán, en las vistas rectas, desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos y desde la línea de estos donde los haya, y, para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.

Artículo 547.— *Huecos en pared medianera.*

1. Si la pared medianera tiene adosadas al otro lado edificaciones o construcciones, los huecos para luces y vistas solo pueden abrirse por encima del punto común de elevación.
2. Los huecos para luces y vistas no son un signo contrario a la condición medianera de la pared.

Artículo 548.— *Voladizos.*

1. Se entiende por voladizo los balcones y demás salientes que sobresalen suficientemente del paramento de la pared, están colocados debajo de un hueco de la misma y permiten asomarse, apoyarse o moverse por el saliente y mirar la finca vecina.
2. No se consideran voladizos los aleros, los elementos arquitectónicos de la pared ni otros elementos salientes existentes en la finca.
3. No prescribe la acción para exigir la supresión de los voladizos existentes dentro de las distancias determinadas en el apartado 2 del artículo 545.

Artículo 549.— *Protecciones.*

1. Las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina. En pared medianera, no podrán colocarse más allá de su eje.
2. No prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones.

Artículo 550.— *Derecho a edificar o construir.*

1. La facultad de abrir huecos para luces y vistas concedida en los artículos anteriores no limita, altera ni modifica el derecho del propietario del fondo vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna y como estime conveniente.
2. También podrá, sin necesidad de edificar o construir, obstaculizar o limitar las vistas a espacios utilizados para su vida familiar o personal.

TÍTULO II
DE LAS SERVIDUMBRES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.^a
CONCEPTO, CLASES Y CARACTERES

Artículo 551.— *Concepto.*

1. La servidumbre es el derecho real limitado de goce establecido sobre una finca en beneficio de otra.
2. La finca a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama finca dominante; la que la sufre, finca sirviente.

Artículo 552.— *Clases de servidumbres.*

1. Las servidumbres pueden ser aparentes o no aparentes, positivas o negativas, continuas o discontinuas.
2. Es aparente la servidumbre que se anuncia por signos exteriores, visibles, materiales, objetivos y permanentes que revelan el uso y aprovechamiento de la misma, siendo servidumbres no aparentes todas las demás.
3. La servidumbre es positiva cuando otorga al titular de la finca dominante un determinado uso de la finca sirviente, y es negativa cuando consiste en una limitación de las facultades del titular de la finca sirviente.

4. La servidumbre continua es aquella cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención humana. La servidumbre discontinua es la que se usa a intervalos más o menos largos y depende de actos humanos.

Artículo 553.— *Utilidad, inseparabilidad y permanencia.*

1. La servidumbre se constituye para utilidad exclusiva de la finca dominante, de la que es inseparable. También pueden constituirse servidumbres recíprocas entre fincas dominantes y sirvientes.
2. La servidumbre tiene carácter permanente, salvo si ha sido constituida bajo término o condición.

Artículo 554.— *Indivisibilidad.*

1. Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide o se segrega una parte de la misma, la servidumbre no se modifica, y cada uno de los titulares de las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.
2. Si la finca dominante se divide o se segrega una parte de la misma, cada uno de los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera.

Artículo 555.— *Derechos reales de aprovechamiento parcial.*

Los derechos reales de aprovechamiento parcial establecidos a favor de una o varias personas o de una comunidad sobre una finca ajena, con independencia de toda relación entre fincas, se rigen, en todo aquello que no determine su título constitutivo, por el régimen general de las servidumbres, en lo que sea compatible.

Sección 2.^a

CONTENIDO DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 556.— *Contenido de las servidumbres.*

1. Al establecerse una servidumbre, se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso.
2. El título y, en su caso, el signo aparente o la posesión de la servidumbre constituida por usucapión determinan los

derechos de la finca dominante y las obligaciones de la sirviente. En su defecto, la servidumbre se regirá por las disposiciones del presente Título que le sean aplicables.

3. A falta de acuerdo entre los interesados sobre el contenido de la servidumbre, su determinación se llevará a efecto por decisión judicial en atención al título, los signos aparentes, las circunstancias de las fincas y la costumbre del lugar.

Artículo 557.— *Ejercicio civiliter.*

La servidumbre se ejerce de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente.

Artículo 558.— *Obras en las fincas.*

1. Las obras y los trabajos necesarios para el establecimiento, el uso y la conservación de la servidumbre corren a cargo del titular de la finca dominante, salvo que el título de constitución establezca otra cosa. El propietario de la finca sirviente, si es preciso, debe tolerar su ocupación temporal para que se ejecuten dichas obras.
2. Si fuesen varias las fincas dominantes, los titulares de todas ellas estarán obligados a contribuir a los gastos de que trata el apartado anterior en proporción al beneficio que a cada uno reporte la obra. El que no quiera contribuir podrá eximirse renunciando a la servidumbre.
3. Si la servidumbre reporta una utilidad efectiva a la finca sirviente, su titular debe contribuir a los gastos de establecimiento, uso y conservación en la proporción antes expresada, salvo pacto en contrario.
4. El titular de la finca sirviente no puede hacer ninguna obra que perjudique o dificulte el ejercicio de la servidumbre.

Artículo 559.— *Liberación de cargas.*

Si el titular de la finca sirviente se hubiere obligado, al constituirse la servidumbre, a costear las obras necesarias para el uso y conservación de la misma, podrá liberarse de esta carga abandonando su finca al titular de la dominante.

Artículo 560.— *Modificación de la servidumbre.*

1. El propietario de la finca sirviente, si el ejercicio de la servidumbre le resulta excesivamente gravoso o incómodo, puede exigir, a su cargo, las modificaciones que crea convenientes en la forma y el lugar de prestación de la servidumbre, siempre que no disminuyan su valor y utilidad.
2. La forma de prestar la servidumbre puede adquirirse por usucapión o extinguirse por prescripción, como la servidumbre misma y de la misma manera.

Sección 3.^a

CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 561.— *Constitución.*

Las servidumbres se constituyen:

- a) Por voluntad de los titulares de las fincas dominante y sirviente.
- b) Por voluntad del titular de la finca dominante, con carácter forzoso para el de la finca sirviente, cuando la ley así lo contempla.
- c) Por signo aparente.
- d) Por usucapión.

Artículo 562.— *Legitimación.*

1. Pueden constituir una servidumbre los propietarios de la finca dominante o sirviente y los titulares de derechos reales posesorios sobre estas. En este último caso, la servidumbre tiene el alcance y la duración de sus derechos.
2. El que tenga la propiedad de una finca cuyo usufructo pertenezca a otro podrá imponer sobre ella, sin el consentimiento del usufructuario, las servidumbres que no perjudiquen al derecho del usufructo.

Artículo 563.— *Servidumbre sobre finca indivisa.*

1. Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los cotitulares.

2. La concesión hecha solamente por algunos de los cotitulares quedará en suspenso hasta el momento en que la otorgue el último de todos ellos.

Artículo 564.— *Servidumbre sobre finca propia.*

1. Es posible constituir servidumbre sobre finca propia, quedando su efectividad subordinada a que la finca dominante o la sirviente cambien de titularidad.
2. Si los titulares de la finca dominante y de la sirviente coinciden parcialmente, la servidumbre producirá efectos desde el momento de su constitución.

Artículo 565.— *Constitución forzosa de servidumbres.*

Cuando la ley conceda al titular de una finca derecho a constituir servidumbre sobre finca ajena y no hubiera acuerdo sobre su constitución o la forma de su ejercicio, resolverá el juez, que fijará la forma menos gravosa para quien deba padecerla, así como la correspondiente indemnización.

Artículo 566.— *Constitución por signo aparente.*

1. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará suficiente, cuando se enajenare una, para que se entienda constituida la servidumbre, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación.
2. La regla establecida en el apartado anterior se aplicará a las fincas resultantes por división o segregación de aquella sobre la que existiera el signo aparente.

Artículo 567.— *Constitución de las servidumbres negativas.*

1. Las servidumbres negativas no pueden constituirse por usucapión.
2. La falta de título constitutivo de las servidumbres negativas únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente.

Sección 4.^a
USUCAPIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 568.— *Usucapión de las servidumbres aparentes.*

Todas las servidumbres aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo título ni buena fe.

Artículo 569.— *Usucapión de las servidumbres no aparentes.*

Las servidumbres no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. En todo caso, la posesión inmemorial, pacífica y no interrumpida produce, sin otro requisito, los efectos de la prescripción adquisitiva.

Artículo 570.— *Cómputo del tiempo.*

En la constitución de servidumbres por usucapión, el tiempo de la posesión se contará desde el día en que el titular de la finca dominante hubiera empezado a ejercerla sobre la finca sirviente.

Sección 5.^a
EXTINCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 571.— *Causas de extinción.*

1. Las servidumbres se extinguen por:
 - a) El no uso durante veinte años.
 - b) Este término empezará a contarse desde el día en que hubiera dejado de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas y desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario a la servidumbre respecto a las continuas, excepto en el supuesto de servidumbre sobre finca propia.
 - c) El cumplimiento del plazo o la realización de la condición si la servidumbre se hubiera sometido a término o condición resolutorios.
 - d) La renuncia del titular de la finca dominante.
 - e) La redención convenida entre el titular de la finca dominante y el de la sirviente.

- f) Cuando la servidumbre se hubiera constituido por el titular de un derecho real posesorio sobre la finca, al extinguirse este.
 - g) La pérdida total de la finca sirviente o de la dominante.
2. La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y sirviente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas declara su voluntad en tal sentido.

Artículo 572.— *Extinción por modificación de las fincas.*

- 1. La división o segregación de la finca dominante permite al titular de la finca sirviente exigir la extinción de la servidumbre respecto de las fincas resultantes para las que no sea necesario el uso de la misma.
- 2. La división o segregación de la finca sirviente permite a los titulares de las fincas resultantes que no sean necesarias para el uso de la servidumbre exigir la extinción de la misma respecto a estas fincas.

Artículo 573.— *Prescripción extintiva sobre finca en comunidad.*

Si la finca dominante perteneciera a varios en común, el uso de la servidumbre hecho por uno impide la prescripción respecto de los demás.

CAPÍTULO II

SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS

Artículo 574.— *Signos aparentes.*

Los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno son los únicos signos aparentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la falta de la protección señalada en el artículo 545 ni tampoco los voladizos sobre fundo propio.

Artículo 575.— *Imposibilidad de usucapión.*

La servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de posesión, no puede adquirirse por usucapión.

Artículo 576.— *Efectos.*

Cuando, por cualquier título, se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de la manera indicada en el artículo 546.

CAPÍTULO III
SERVIDUMBRE FORZOSA DE PASO

Artículo 577.— *Servidumbre de paso.*

1. El titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida o con salida insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente indemnización.
2. El paso debe darse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fincas gravadas y, si es compatible, por el punto más beneficioso para la finca dominante.
3. La anchura y las características de la servidumbre de paso serán las adecuadas para la utilización normal de la finca dominante.

Artículo 578.— *Indemnizaciones.*

1. Si la servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para la finca dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en la finca sirviente.
2. Cuando la servidumbre se limite al paso necesario a través de la finca sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.

Artículo 579.— *Constitución por partición o enajenación.*

Si, adquirida una finca por partición o cualquier otro título, quedare sin salida a una vía pública, el copartícipe o transmitente está obligado a dar paso, sin que, salvo pacto en contrario, proceda indemnización.

Artículo 580.— *Desaparición de la necesidad de paso.*

1. Si el paso concedido a una finca deja de ser necesario por haber adquirido su titular otra colindante que esté contigua a la vía pública, el titular de la finca sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiera recibido por indemnización.
2. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse una nueva vía que dé acceso a la finca enclavada.

CAPÍTULO IV

SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACCESO A RED GENERAL

Artículo 581.— *Servidumbre de acceso a red general.*

1. El titular de una finca que carezca de conexión a una red general de saneamiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y las comunicaciones u otros servicios, tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de acceso a la red, pagando la correspondiente indemnización.
2. La servidumbre solo puede exigirse cuando la conexión a la red general no pueda realizarse por otro sitio sin gastos desproporcionados.
3. El acceso debe darse por el punto menos perjudicial para las fincas gravadas y, si es compatible, por el más beneficioso para la finca dominante, con respeto, en todo caso, de las disposiciones legalmente aplicables al tipo de red de que se trate.

CAPÍTULO V

DERECHOS DE PASTOS Y ADEMPRIOS

Sección 1.^a

SERVIDUMBRES

Artículo 582.— *Alera foral.*

1. La servidumbre de pastos de día, unilateral o recíproca, entre términos de pueblos contiguos, denominada alera foral, se

regirá por lo estatuido en el título, por la costumbre local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos.

2. El régimen de la alera foral será supletorio, en lo que sea compatible, del de las servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma.

Artículo 583.— *Servidumbres de pastos.*

1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero deberá dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación corresponde a los titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las cosechas, si no existe paso cabañal o acceso por vía pública.
3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abrevar.

Artículo 584.— *Ademprios.*

1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que constituyan derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté fundada en título escrito o en la posesión inmemorial, se registrarán con preferencia por lo estatuido en aquel o lo que resulte de esta, y, en su defecto, por la costumbre.
2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de titularidad comunitaria, se presumen de duración indefinida.

Sección 2.^a
COMUNIDADES

Artículo 585.— *Comunidad en mancomún.*

1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por título o posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer de su parte sin consentimiento de todos los titulares.

2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las cuotas o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de vecinos de cada pueblo al tiempo de la división.

Artículo 586.— *Comunidad pro diviso.*

1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titulares dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a varios, de los aprovechamientos de pastos, leñas y demás adempios producidos por la finca.
2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por causa de muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros partícipes podrán ejercitar el retracto de comuneros, prefiriéndose, en caso de concurrencia, al retrayente titular del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.
3. La comunidad de adempios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime de los partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la permanencia de la comunidad. Podrá también decidirse la concentración de derechos en función de la utilidad más adecuada de la finca.

Artículo 587.— *Régimen común.*

Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por la costumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a los demás titulares.

TÍTULO III DEL DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA

Artículo 588.— *Concepto.*

El derecho de abolorio o de la saca es un derecho de adquisición preferente, ejercitable como tanteo y, subsidiariamente, como retracto, que la ley concede a determinados parientes de

quien pretenda enajenar o enajene bienes de abolorio a quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes.

Artículo 589.— *Bienes de abolorio.*

1. A los efectos de este Título, son bienes de abolorio los inmuebles de naturaleza rústica y los edificios o parte de ellos, siempre que estén situados en Aragón y hayan permanecido como tales en la familia durante las dos generaciones anteriores a la del enajenante, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.
2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos del enajenante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.

Artículo 590.— *Titulares del derecho.*

1. Pueden ejercitar el derecho de abolorio, cualquiera que sea su vecindad civil, los descendientes del enajenante mayores de catorce años que sean titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia, los parientes colaterales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, así como los ascendientes que le hubiesen donado el inmueble.
2. Si concurren dos o más titulares en el ejercicio del derecho de abolorio, tendrán preferencia, por este orden:
 - 1.º El descendiente más próximo en grado al enajenante.
 - 2.º El ascendiente o hermano que hubiese donado el inmueble al enajenante.
 - 3.º El pariente colateral más próximo en grado al enajenante.
 - 4.º En igualdad de grado, el primero en ejercitarlo.

Artículo 591.— *Enajenaciones.*

El derecho de abolorio tiene lugar en toda venta o dación en pago, incluso en las efectuadas con carácter forzoso mediante subasta, judicial o extrajudicial, u otras formas de realización de bienes en procedimientos de apremio.

Artículo 592.— *Cuota indivisa.*

1. El derecho de abolorio es susceptible de ejercicio en la enajenación de cuota indivisa de bienes de abolorio.
2. Si se enajena un inmueble en su totalidad, no cabe ejercitar el derecho de abolorio sobre una cuota indivisa del mismo.

Artículo 593.— *Pluralidad de bienes.*

Quando se enajene una pluralidad de inmuebles, podrá ejercitarse separadamente el derecho de abolorio sobre cualquiera de aquellos que tengan la consideración de bienes de abolorio, aunque la contraprestación sea única.

Artículo 594.— *Plazos de ejercicio.*

1. El derecho de abolorio podrá ejercerse como tanteo, si se hubiese notificado fehacientemente el propósito de enajenar, con indicación del precio y demás condiciones esenciales del contrato, en el plazo de caducidad de treinta días naturales a contar desde la notificación.
2. Realizada la notificación previa a la enajenación, el propietario queda obligado frente al destinatario de aquella durante el plazo de los treinta días, aunque desista de su intención de enajenar.
3. Los efectos de la notificación caducarán si la transmisión proyectada no se lleva a cabo en el plazo de un año, de modo que, si la transmisión tiene lugar transcurrido ese plazo, el destinatario de la notificación podrá ejercer el retracto en los términos previstos en el apartado siguiente.
4. El derecho de abolorio podrá ejercerse como retracto si no se hubiese notificado el propósito de enajenar, si la notificación hubiese sido incompleta, si la enajenación tuviera lugar en condiciones diferentes de las notificadas o si se efectuara antes del transcurso del plazo previsto en el apartado 1, dentro de los siguientes plazos de caducidad:
 - a) Cuando se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con indicación del precio y demás condiciones esenciales del contrato, treinta días naturales a contar desde la notificación.

b) A falta de notificación de la transmisión, el plazo será de noventa días naturales a partir de aquel en el que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales, bien a través de los medios de información previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción del título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio.

5. En todo caso, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajenación.

Artículo 595.— *Requisitos del ejercicio del derecho de abolorio.*

1. El ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o consignación del precio, en metálico o mediante un medio de garantía como la prestación de aval bancario o el libramiento de cheque conformado dentro de los plazos expresados en el artículo anterior.

2. Cuando el precio no fuera conocido, tendrá que consignarse o garantizarse el precio estimado. Si el juez considerase insuficiente la cantidad consignada o garantizada, fijará la que proceda y concederá al retrayente un plazo de diez días para completarla.

3. Para la admisión de la demanda será necesaria, además de acompañar el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados anteriores, la presentación de un principio de prueba documental del parentesco con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados o que se pretenden enajenar.

Artículo 596.— *Efectos.*

1. Por el ejercicio del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en las mismas condiciones en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado.

2. Si se ejercita después de la enajenación, deberá abonar, además del precio, los gastos de la transmisión y los gastos necesarios y útiles hechos en el bien transmitido.

3. El adquirente por derecho de abolorio no podrá enajenar el bien adquirido por acto voluntario entre vivos durante cinco años, a no ser que venga a peor fortuna.

Artículo 597.— *Renuncia.*

Es válida la renuncia al derecho de abolorio realizada sobre bienes concretos, incluso la hecha sin contemplación a una determinada enajenación.

Artículo 598.— *Concurso de derechos de adquisición preferente.*

El derecho de abolorio tiene prioridad sobre cualquier otro derecho de adquisición preferente, salvo el de comuneros y los establecidos a favor de entes públicos.

TÍTULO III BIS

ADQUISICIÓN DE BIENES POR MINISTERIO DE LA LEY

Artículo 598 bis.— *Adquisición por la Comunidad Autónoma.*

Pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo dispuesto en su legislación sobre patrimonio:

- a) Los bienes inmuebles vacantes situados en su territorio.
- b) Los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por las personas interesadas que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.

TÍTULO IV

DE LOS CONTRATOS SOBRE GANADERÍA

Artículo 599.— *Normas supletorias.*

Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, regirán los usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios generales en los que, tradicionalmente,

se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.— *Términos genéricos.*

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Código se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Segunda.— *Especialidades procesales en los casos de nulidad, separación o divorcio con hijos a cargo.*

1. En los casos de nulidad, separación y divorcio las medidas judiciales sobre las relaciones familiares de los padres con hijos a cargo, se adoptarán en el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento civil, adaptado a las especialidades de la Sección 3.^a del Capítulo II del Título II del Libro Primero del presente Código.
2. Las referencias realizadas al convenio regulador se entenderán hechas al pacto de relaciones familiares.
3. La demanda y la reconvenición deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares.

Tercera.— *Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo.*

En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones familiares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda según la Ley de Enjuiciamiento civil. La demanda y la reconvenición deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares.

Cuarta.— *Revisión de la guarda y custodia.*

Los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el apartado 6 del artículo 80 del presente Código serán revisables en los supuestos de sentencia firme absoluta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO PRIMERO

Primera.— *Aplicación inmediata.*

1. Las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libro Primero, salvo la Sección 3.^a del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, cualquiera que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de su persona o bienes.
2. Las normas contenidas en el Título IV del Libro Primero se aplican también íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, cualquiera que sea la fecha del llamamiento a la Junta de Parientes.

Segunda.— *Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía.*

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 2007, pero no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente, pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en este Código.
2. En particular, las normas contenidas en el Libro Primero sobre nulidad o anulabilidad de actos son aplicables desde el 23 de abril de 2007, aunque el acto se hubiera otorgado con anterioridad.

Tercera.— *Prodigalidad.*

1. Desde el 23 de abril de 2007 nadie puede ser declarado pródigo.
2. Las personas declaradas pródigas con anterioridad siguen rigiéndose por las normas de la legislación anterior, pero pueden solicitar judicialmente la reintegración de su capacidad.

Cuarta.— *Gastos de maternidad.*

Lo dispuesto en el artículo 62 sobre gastos de maternidad no se aplica cuando el nacimiento ha tenido lugar antes del 23 de abril de 2007.

Quinta.— *Autoridad familiar por personas distintas de los padres.*

El contenido de la autoridad familiar de otras personas se regula en todo caso por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 aunque aquella se hubiera constituido antes del 23 de abril de 2007.

Sexta.— *Revisión de convenios reguladores y de medidas judiciales.*

1. Las normas de la Sección 3.^a del Capítulo II del Título II son de aplicación a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
2. La solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de 2010.

Séptima.— *Régimen provisional de mediación familiar.*

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a que hace referencia la disposición final segunda de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, es de aplicación lo previsto en la presente disposición transitoria, en los siguientes términos:

1. Se entiende por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado que afecten a menores de edad derivados de la ruptura de la pareja, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial,

informa, orienta y asiste a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas.

2. El Gobierno de Aragón facilitará servicios de mediación familiar, que priorizarán en cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde la Administración de Justicia o desde los servicios sociales.
3. Los colegios profesionales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro podrán colaborar con el Gobierno de Aragón en materia de mediación familiar.
4. La mediación familiar se rige por los principios de voluntariedad, igualdad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, carácter personalísimo y buena fe.
5. Mediante Orden del Departamento competente se podrá desarrollar este régimen provisional de mediación familiar.

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO SEGUNDO

Octava.— *Aplicación inmediata.*

Las normas de los Títulos Primero, II, III, IV y V del Libro Segundo son aplicables de inmediato, desde el 23 de abril de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio del usufructo viudal, con las excepciones señaladas en las tres disposiciones siguientes.

Novena.— *Hechos, actos y negocios.*

Los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación de capitulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones, gestión o disposición de bienes y disolución, liquidación o división del consorcio conyugal, así como los relativos al derecho expectante y al usufructo de viudedad, solo se rigen por este Código cuando tengan lugar o hayan sido realizados a partir del 23 de abril de 2003.

Décima.— *Comunidad conyugal continuada.*

Las comunidades conyugales continuadas existentes el 23 de abril de 2003 siguen rigiéndose por las normas de la Compilación del Derecho Civil.

Undécima.— *Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.*

En el supuesto de existencia de hijos no comunes del cónyuge premuerto, a la extensión del usufructo de viudedad ya causado el 23 de abril de 2003 se le siguen aplicando las limitaciones del artículo 73 de la Compilación del Derecho Civil.

Duodécima.— *Parejas estables no casadas.*

Las normas del Título VI son aplicables desde el 6 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO TERCERO

Decimotercera.— *Ley aplicable a la sucesión.*

Las sucesiones por causa de muerte se rigen por la ley vigente en el momento de apertura de la sucesión.

Decimocuarta.— *Validez de los actos por causa de muerte anteriores.*

1. Conservan su validez los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, que sean válidos con arreglo a la legislación anterior.
2. También son válidos los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999 que lo sean con arreglo a este Código, aunque no lo fueran según la legislación anterior, siempre que la apertura de la sucesión se produzca a partir de dicha fecha.

Decimoquinta.— *Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía.*

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 1999, pero no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en este Código.
2. Los plazos se cuentan desde el 23 de abril de 1999 en las sucesiones abiertas con anterioridad, pero se aplican los de la legislación anterior si habían de cerrarse antes que los de este Código.

Decimosesta.— *Sustitución legal.*

1. No es causa de sustitución legal la renuncia a la herencia producida con posterioridad al 23 de abril de 1999.
2. No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado antes del 23 de abril de 1999 se hubiera previsto expresamente la aplicación del régimen contenido en el artículo 141 de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen el que se aplique.

Decimoséptima.— *Normas sobre aceptación, repudiación y partición.*

Las normas de este Código sobre aceptación, repudiación y partición de la herencia se aplican a las realizadas a partir del 23 de abril de 1999 aunque la sucesión se haya abierto antes.

Decimooctava.— *Consortio foral.*

Los efectos del consorcio foral y la facultad de cada consorte de separarse del mismo previstos en este Código son de aplicación desde el 23 de abril de 1999 aunque el consorcio se hubiera originado antes.

Decimonovena.— *Sucesión paccionada.*

Las normas del Título II en cuanto a efectos, disposición de bienes entre vivos y responsabilidad de los bienes transmitidos, así como la reguladora de los efectos de la revocación de

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

la institución de presente, son también aplicables a los pactos sucesorios otorgados con anterioridad al 23 de abril de 1999.

Vigésima.— *Modificación o revocación de actos y disposiciones por causa de muerte.*

Las normas del presente Código sobre modificación o revocación de los actos por causa de muerte o de cualquiera de las disposiciones contenidas en ellos son aplicables desde el 23 de abril de 1999 aunque los actos que se modifican o revocan se hubieran otorgado con anterioridad.

Vigésimo primera.— *Fiducia sucesoria.*

El artículo 447 y los Capítulos II, III y IV del Título IV de este Libro son también aplicables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, para las que, sin embargo, no regirán los artículos 444 a 446.

Vigésimo segunda.— *Preterición.*

Lo dispuesto en el artículo 504 sobre mención suficiente se aplica también a las sucesiones abiertas antes del 23 de abril de 1999.

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO CUARTO

Vigésimo tercera.— *Aplicación inmediata.*

Las normas contenidas en el Libro Cuarto son aplicables de inmediato, desde el 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, a todas las situaciones contempladas en él.

Vigésimo cuarta.— *Derecho de abolorio.*

La regulación del derecho de abolorio contenida en este Código es aplicable cuando la enajenación se haya realizado a partir del 1 de enero de 2011.

ANEXO

**MODIFICACIONES AL
CÓDIGO DEL DERECHO FORAL
DE ARAGÓN**

Ley 3/2016, de 4 de febrero, de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de Aragón

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La Ley estatal 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria, mediante su disposición final octava, da nueva redacción al apartado 6 del artículo 20 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según la cual cuando «sea llamada la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, corresponderá a la Administración llamada a suceder en cada caso efectuar en vía administrativa la declaración de su condición de heredero abintestato». Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, llamada a suceder legalmente de acuerdo con el artículo 535 del Código del Derecho Foral de Aragón en defecto de parientes y de cónyuge. Asimismo, en el apartado cinco de la citada disposición final octava de la Ley 15/2015 se añade una disposición adicional vigésima tercera a la Ley 33/2003, sobre sucesión abintestato del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que dispone que «la declaración como heredero abintestato del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza se realizará por la Diputación General de Aragón».

La nueva regulación estatal no afecta para nada al Derecho civil sustantivo aragonés, que es el que regula la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma o el Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Por otra parte, no parece necesaria una regulación aragonesa específica sobre el aspecto accesorio de la tramitación de la declaración de herederos legales, que hallaría fundamento en el artículo 149.1-6.^a

de la Constitución Española y el artículo 71-3.^a del Estatuto de Autonomía de Aragón.

En consecuencia, puesto que son aplicables las normas estatales mencionadas y los procedimientos previstos en la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que modifica en su artículo 26 diversos preceptos del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, resulta oportuno modificar ligeramente la redacción de los artículos 535 y 536 del Código de Derecho Foral de Aragón, a los solos efectos de la mayor claridad textual y seguridad en su aplicación.

Artículo único.— *Modificación de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de Aragón.*

[...]

Disposición final.— *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 4 de febrero de 2016.— El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.

Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

PREÁMBULO

En el planteamiento de la presente ley hemos de partir de cuatro ideas previas.

La primera, que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se incluye bajo la rúbrica de «Hacienda general» y, de acuerdo con la Constitución española, artículo 149.1. 14.^a, es de la competencia exclusiva del Estado.

La segunda, que se trata de un impuesto cedido, de conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuyo artículo 11 alude al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre los impuestos que pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, a las que el artículo 19 atribuye muy amplias competencias para la ejecución y organización de la aplicación de los tributos, lo que significará posibles reducciones de la base y tipos así como particularidades en la gestión fiscal.

Nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 104, dentro de la Hacienda autonómica, incluye el rendimiento de los tributos cedidos total o parcialmente, correspondiendo a la Comunidad Autónoma su gestión, liquidación y recaudación, de conformidad con la ley estatal (artículo 106). La disposición adicional segunda considera como tributo cedido totalmente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La tercera, que en la presente legislatura, como resultado de la negociación y acuerdo de distintas fuerzas parlamentarias, con el propósito de reducir la mayor carga fiscal que, en términos comparativos con otras Comunidades Autónomas, soportaban las familias aragonesas por este impuesto, se ha aprobado recientemente la Ley 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, objetivo que, igualmente, está presente en esta iniciativa legislativa.

La cuarta, que en la historia y en el derecho aragonés siempre tuvo una destacada importancia la fiducia, figura jurídica desconocida para el Código civil y el derecho común.

El origen de la fiducia está muy vinculado al de la «casa aragonesa» y a la necesidad de conservar indivisos los pequeños patrimonios rurales, para que pudieran cumplir con la finalidad de sustentar a una familia. En este contexto, se explica que la transmisión de la «casa» se realizara a favor de un único heredero y que surgiera la figura de la fiducia. Dado que el titular de la «casa» no podía hacer la designación de su heredero con garantías de acierto, al ignorar lo que iba a suceder en el futuro, encomendaba dicha tarea a un tercero, que le iba a sobrevivir y que generalmente era su cónyuge.

En definitiva, se trataba de evitar que la división del patrimonio familiar condujera a su desaparición, al no ser viables ni rentables las porciones hereditarias resultantes de la herencia. El objetivo siempre fue mantener el patrimonio familiar generación tras generación, del mismo modo que otras instituciones de nuestro derecho foral, como la legítima colectiva y el usufructo universal del cónyuge viudo.

En la sociedad actual y en el ámbito urbano, la fiducia sigue teniendo también una destacada importancia. A través de la fiducia y para el caso de fallecimiento de un cónyuge, se refuerza la posición del cónyuge viudo, que no solamente tendrá el usufructo universal, sino que además dispondrá de todos los bienes, generalmente a favor de los hijos que lo cuiden en sus últimos años.

En cualquier caso, el Código del Derecho Foral de Aragón es consciente de la importancia de la fiducia y la regula detenidamente en los artículos 439 a 463, con una normativa pormenorizada, donde se indica quién puede ser fiduciario, cómo debe realizarse el nombramiento, sus obligaciones, ejecución y extinción de la fiducia.

Desde el punto de vista tributario, y en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la fiducia siempre presentó graves dificultades técnicas, porque no hay herederos de la plena o nuda propiedad hasta que los designe en el futuro

el fiduciario, al que se le dio el encargo de distribuir los bienes de la herencia. Nos encontramos ante una herencia pendiente de asignación, que queda en una nebulosa. En buena lógica, mientras la herencia estuviera pendiente de asignación, no debería liquidarse el Impuesto sobre Sucesiones, ya que no se sabe quiénes son los herederos ni qué cuota van a recibir. No puede considerarse ni siquiera que hayan adquirido la nuda propiedad que, como se deduce de lo anterior, es lo que queda de la plena propiedad si hay usufructuario.

Sin embargo, en la legislación estatal se gravaba la fiducia como si los posibles herederos tuvieran algún derecho. En desarrollo de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el artículo 54.8 del Reglamento de dicho Impuesto decía: «En la fiducia aragonesa, sin perjuicio de la liquidación que se gire a cargo del cónyuge sobreviviente, en cuanto al resto del caudal, se girarán otras con carácter provisional a cargo de todos los herederos, con arreglo a sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante y sobre la base que resulte de dividir por partes iguales entre todos la masa hereditaria. Al formalizarse la institución por el comisario se girarán las liquidaciones complementarias si hubiere lugar, pero si por consecuencia de la institución formalizada las liquidaciones exigibles fueren de menor cuantía que las satisfechas provisionalmente, podrá solicitarse la devolución correspondiente».

La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, continuó aplicando el criterio tradicional de liquidación de herencias con fiducia ya fijado en el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón (artículo 133-2), así como en la ley y el reglamento estatales, con liquidaciones a cuenta y complementarias en su caso. Se indica en la ley aragonesa que:

1. El procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia se aplicará a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o varios fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Código del Derecho Foral de Aragón.

2. Cuando en el plazo de presentación de la autoliquidación no se hubiera ejecutado totalmente el encargo fiduciario, deberá presentarse una liquidación a cuenta respecto de la parte de la herencia no asignada por quien tuviera la condición legal de heredero conforme a lo previsto en el Código del Derecho Foral de Aragón, con arreglo a sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.
3. Si el pago del impuesto correspondiera a varias personas, la liquidación resultante a cada una de ellas será la derivada de imputar a partes iguales el valor de la parte de la herencia no asignada.
4. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, el destino de los bienes sea distinto del que fiscalmente se tomó en consideración, se girarán las liquidaciones complementarias a las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del caudal relicto que realmente se le defirió.
5. La mencionada liquidación a cuenta tendrá el tratamiento que proceda conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 451 del Código del Derecho Foral de Aragón.

En definitiva, habida cuenta de que la fiducia es una institución tradicional en Aragón que debe ser objeto de una especial protección, tanto desde el punto de vista jurídico como tributario, se trata de ajustar la normativa fiscal a la regulación civil aragonesa de la misma. A todo ello responde la presente modificación del artículo 133-2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

Artículo único.— *Modificación del artículo 133-2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.*

El artículo 133-2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, queda redactado como sigue:

«Artículo 133-2. *Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia.*

1. El procedimiento establecido en este artículo se aplicará a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o varios fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título IV, del Código del Derecho Foral de Aragón, texto refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
2. Cuando en el plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no se hubiere ejecutado totalmente el encargo fiduciario, deberá presentarse una declaración informativa y copia de la escritura pública a que hace referencia el artículo 450 del Código del Derecho Foral de Aragón por quien tenga la condición de administrador del patrimonio hereditario pendiente de asignación.

La declaración informativa tendrá el contenido que se fije mediante orden del Consejero competente en materia de hacienda y deberá presentarse con periodicidad anual hasta la completa ejecución fiduciaria. Entre otros datos, deberá contener información suficiente sobre los pagos, disposiciones o ejercicio de facultades a que se refieren los artículos 451 a 455 del Código del Derecho Foral de Aragón.

3. En cada ejecución fiduciaria deberá presentarse la correspondiente autoliquidación en los plazos previstos con carácter general.
4. En el caso de que existieran varias ejecuciones a favor de una misma persona, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota tributaria, se aplicará a la base liquidable de la actual adquisición el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones efectivamente adjudicadas a una misma persona.

A estos efectos, el límite previsto en el artículo 131-5 del presente texto refundido se aplicará sobre el conjunto de las ejecuciones y no individualmente.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el administrador podrá optar por presentar, en el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, una autoliquidación a cargo de la herencia yacente. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, se conozca el destino de los bienes, se girarán liquidaciones complementarias a las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del caudal relicto que realmente se le defirió.»

Disposición adicional única.— *Modificación del artículo 451 del Código del Derecho Foral de Aragón, texto refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.*

Se adiciona una nueva letra d) en el artículo 451 del Código del Derecho Foral de Aragón, texto refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

[...]

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2018.— El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.

**Ley 18/2018, de 20 de diciembre,
de igualdad y protección integral contra
la discriminación por razón de orientación
sexual, expresión e identidad de género
en la Comunidad Autónoma de Aragón**

Disposición final tercera.— *Modificación del texto refundido de las Leyes civiles aragonesas que, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», se aprueba por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.*

Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 311 del texto refundido de las Leyes civiles aragonesas que, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», se aprueba por Decreto Legislativo 1/2001, de 22 de marzo, con la siguiente redacción:

[...]

Disposición final sexta.— *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2018.— El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.

**Ley 6/2019, de 21 de marzo,
de modificación del Decreto Legislativo 1/2011,
de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba, con el título de
«Código del Derecho Foral de Aragón»,
el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas
en materia de custodia**

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

En esta legislatura, y en la Ponencia Especial de Estudio del Derecho Foral, se ha tratado la aplicación del sistema de custodia compartida existente en Aragón, habiendo sido un criterio unánime que el interés que debía regir el régimen de custodia y convivencia con los progenitores en caso de separación es, esencialmente, el interés de los y las menores.

Este principio, además, está expresamente contemplado en el artículo 76.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, en coherencia con la Ley 12/2001, de 3 de julio, de la infancia y la adolescencia de Aragón; en las Convenciones de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; en la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo; la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley de 26/2015, de 28 de julio, y en la sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de mayo de 2000 (STC 141/2000), entre otras.

La legislación antes mencionada recoge en su articulado que «Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado».

Es lógico pensar que el interés de los y las menores debe examinarse e integrarse en cada caso concreto, sin apriorismos, para cumplir con el principio de orden público y un mandato que es ineludible.

De este modo, en caso de ruptura de la convivencia de los progenitores y a falta de acuerdo entre ellos sobre la custodia de sus descendientes, los tribunales deben decidir sobre el régimen de custodia, y deben hacerlo atendiendo única y exclusivamente al beneficio de los menores, al superior interés del menor, sin que parezca conveniente que el legislador preestablezca con carácter general o preferente lo que solo debe ser el resultado del análisis de los factores que se contienen en el apartado 2 del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón.

De hecho, ninguna de las normativas actualmente vigentes en el Estado español que prevén la posibilidad de adoptar la custodia compartida como la individual generaliza o prejuzga qué clase de custodia debe adoptarse con carácter general, salvo excepciones. Por el contrario, todas ellas prevén que sea el juzgador o el tribunal el que, en cada caso, debe resolver lo que sea más beneficioso para el menor, atendiendo a las circunstancias concurrentes y entendiendo algunas de ellas que la custodia compartida es un objetivo a conseguir como resultado del ejercicio de corresponsabilidad en el cuidado de los descendientes durante la convivencia.

Cierto que el interés del menor es un concepto jurídico indeterminado, pero el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, ha establecido unos criterios generales que deben tenerse en cuenta para la interpretación, en cada caso, de que sea lo más beneficioso o que represente el interés del menor, de manera que el tribunal debe resolver, con el margen de discrecionalidad necesario y con arreglo a las normas de la sana crítica, lo que sea más beneficioso para los y las menores en cada asunto que le sea sometido a decisión.

Así lo entiende también la mayoría social y, de hecho, en el encuentro de Jueces y Abogados de Familia que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2015, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, concluyó a este respecto lo siguiente: «La guarda y custodia compartida se otorgará en función del interés

del menor en cada caso concreto. Ninguna forma de custodia debe ser preferente».

Sin embargo, en Aragón, la Ley 2/2010, de 26 de mayo, pionera en esta materia, previó la adopción con carácter preferente de la custodia compartida en caso de ruptura y en el supuesto de desacuerdo de los progenitores al respecto, cuyo contenido fue incorporado al artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, lo que claramente contraviene lo deseable según lo explicado anteriormente. Así mismo, tampoco se incluyó la dedicación anterior a los cuidados de los y las menores como un elemento de análisis a la hora de determinar el régimen de custodia, cuando sí que se ha incluido en legislaciones más novedosas que la nuestra y supone, sin ninguna duda, una garantía de cuidados en el futuro de los y las menores.

Es por todo lo anterior que se viene a presentar esta Ley de modificación del artículo 80.2 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, integrado en el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

Artículo único.— *Modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.*

Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 80.2 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, que queda redactado como sigue:

[...]

Disposición final.— *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 21 de marzo de 2019.— El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.

**Ley 2/2021, de 25 de marzo,
por la que se modifica el «Código del Derecho
Foral de Aragón», Texto Refundido
de las Leyes civiles aragonesas, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo,
del Gobierno de Aragón**

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, estableció la modificación del artículo 156 del Código Civil, de tal forma que se añade un nuevo párrafo segundo al citado artículo, con la siguiente redacción:

«Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos.»

Dicha modificación lo es relativa al ejercicio de la patria potestad por los progenitores de los menores de edad en aquellos supuestos a los que se hace referencia y, derivada de las medidas adoptadas en el Pacto de Estado contra la violencia

de género, de forma tal que se establece excepción en tales circunstancias al principio de ejercicio conjunto de ambos progenitores de la patria potestad sobre los hijos comunes menores de edad.

No obstante, tal modificación legislativa derivada del Pacto de Estado contra la violencia de género se circunscribe única y exclusivamente al régimen del Código Civil español y no se dirige a las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, como es el caso de Aragón. Además, la regulación del vigente artículo 156 del Código Civil no es traspasable sin más a nuestro Derecho teniendo en cuenta la hipótesis de partida muy diferente en el sistema civil aragonés, tanto en lo que atañe al ejercicio de la autoridad familiar como en lo referido a la resolución de conflictos cuando hay desacuerdos sobre su ejercicio y también en relación con el diferente sistema de capacidad de las personas por razón de la edad, regulado extensamente en los artículos 4 a 33 del Código del Derecho Foral de Aragón.

En consecuencia, para incorporar al Derecho civil de Aragón la norma contenida en el artículo 156.2 del Código Civil sin perturbar los principios que informan nuestro Ordenamiento, es necesario articular una redacción diferente.

Nuestro Código del Derecho Foral de Aragón, en relación con el supuesto de hecho del artículo 156.2 del Código Civil, recoge la figura específica de la «autoridad familiar» (artículos 71 y siguientes), frente a la «patria potestad» del Derecho civil común y es en el seno del ejercicio de la autoridad familiar cuando se realiza esta previsión.

También nuestro Código Foral establece la distinción entre menor de edad y menor emancipado. Ambas acepciones deben tenerse en cuenta en la incorporación de la norma de la legislación común al derecho foral aragonés.

En nuestro sistema civil aragonés, la finalidad de la reforma pasa por permitir que, cuando un progenitor está incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos o hijas y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten

indicios fundados y racionales de criminalidad, o cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género, el progenitor no violento pueda prestar su autorización, cuando esta sea necesaria, para que los hijos menores de edad no emancipados reciban atención y asistencia psicológica, tomando como premisa que el Juez ha mantenido el ejercicio conjunto de la autoridad familiar al conocer en vía penal de esta situación.

Artículo único.— *Modificación del Código del Derecho Foral de Aragón, Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.*

El apartado único del artículo 72 del Código del Derecho Foral de Aragón, Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se numera como apartado 1 y se añade un nuevo apartado 2 con el siguiente tenor literal:

[...]

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

Zaragoza, 25 de marzo de 2021.— El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés.

**Ley 6/2021, de 29 de junio,
por la que se modifican el Código del Derecho
Foral de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo,
del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido
de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, en lo que afecta
a la regulación de los inmuebles vacantes
y los saldos y depósitos abandonados**

En nombre del Rey, y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La Constitución española establece en su artículo 149.1.8.^a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Tal es el caso de Aragón, cuyo Estatuto de Autonomía reconoce en su artículo 71.2.^a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en ese ámbito de la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil propio, es decir, del Derecho Foral aragonés.

El Tribunal Constitucional ha delimitado, en repetidas ocasiones, esa competencia, considerando que es posible que las comunidades autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en sus respectivas compilaciones, dentro de una actualización o innovación de los contenidos de estas según los principios informadores peculiares del Derecho foral.

En lo que a la materia objeto de la presente norma se refiere, es importante tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/2018, de 26 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que el Estado planteó, ante dicho tribunal, contra la Comunidad Foral de Navarra, por considerar que la atribución a esta de los bienes vacantes y de los saldos y depósitos abandonados, prevista en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, podía contravenir lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prevé su atribución al Estado.

El Tribunal Constitucional, en sus consideraciones, observa la concurrencia de conexión suficiente entre las figuras de los inmuebles vacantes y depósitos y saldos abandonados con los vacantes abintestatos, que no dejan de pertenecer a una misma clase o institución, que es la de los bienes abandonados y sin dueño conocido, lo que le lleva a reconocer la competencia del legislador autonómico para legislar en materia de atribución de los bienes vacantes y, consecuentemente, a estimar la conformidad con la Constitución Española de los preceptos de la Ley del Patrimonio de Navarra.

La Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, en su disposición adicional sexta, estableció que se atribuirían a la Comunidad Autónoma las fincas que reemplazasen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido en procesos de concentración parcelaria. Esta previsión fue recurrida por el Presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y resuelta en Sentencia 41/2018, de 26 de abril.

El Tribunal Constitucional aprecia en esta Sentencia la existencia de una innegable relación entre el Derecho propio de Aragón, relativo al régimen de la sucesión intestada, con la atribución de los inmuebles vacantes resultantes de las operaciones de concentración parcelaria, de modo que dicha conexión legitimaría constitucionalmente la regulación impugnada.

Además de lo anterior, el Alto Tribunal tuvo en cuenta su propia doctrina respecto a la interpretación del artículo 149.1.8.^a de la Constitución Española en relación con el desarrollo de los Derechos civiles forales, a la que se aludía con anterioridad, y

excluyó la vulneración competencial denunciada, considerando que las razones expuestas en la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 40/2018, Fundamento Jurídico 7, eran en todo aplicables a este caso.

De este modo, y a partir de esta sentencia, se reconoce la legitimidad de la Comunidad Autónoma de Aragón para disponer que los saldos y depósitos abandonados y los bienes inmuebles ubicados en Aragón que no tengan dueño o dueña —o se desconozca si lo tienen o no, pues están abandonados— se atribuyan *ex lege* a esta Administración, desplazando la atribución que hasta ahora se hacía a favor del Estado bajo el principio de *nulla res sine domino*.

Ambas sentencias, en definitiva, desestiman los respectivos recursos de inconstitucionalidad, al considerar que la materia objeto de regulación, tanto por Navarra como por Aragón, es propia del Derecho civil y que las resoluciones impugnadas se han dictado en ejercicio de las competencias que ambas Comunidades Autónomas tienen para el desarrollo de su Derecho civil propio.

En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia para regular el destino de los inmuebles vacantes en su territorio y de los saldos y depósitos bancarios abandonados, al tratarse de una materia directamente vinculada con la sucesión legal, regulada a su favor en el Código del Derecho Foral de Aragón, materia que puede abordar además en desarrollo de su Derecho civil propio.

Según lo expuesto, se estima que queda plenamente justificado y procede modificar a través de la presente Ley tanto el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, como el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.

En la elaboración de la presente norma se han seguido los trámites establecidos en el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, y se han emitido los informes preceptivos; entre otros, el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, así como el informe

de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil previsto en el artículo 34 de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.

Artículo primero.— *Modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de Código del Derecho Foral de Aragón, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.*

Se añade al libro IV del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, un título III bis, con la siguiente rúbrica y contenido:

«TÍTULO III BIS

ADQUISICIÓN DE BIENES POR MINISTERIO DE LA LEY

Artículo 598 bis.— *Adquisición por la Comunidad Autónoma.*

[...]

Artículo segundo.— *Modificación del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.*

Se añade una sección 2.^a bis al capítulo II del título II del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, con la siguiente rúbrica y contenido:

«Sección 2.^a bis

ADQUISICIONES POR MINISTERIO DE LA LEY

Artículo 31 bis.— *Inmuebles vacantes.*

1. Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 598 bis del Código del Derecho Foral de Aragón, los bienes inmuebles vacantes situados en territorio aragonés pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma.
2. No obstante, no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para ella por razón de la propiedad de estos bienes en tanto no se produzca la efectiva incorporación de

los mismos al patrimonio de Aragón, previa tramitación de expediente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 77 de este texto refundido.

3. La Comunidad Autónoma podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por persona alguna a título de propietaria, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
4. Si existiese una persona poseedora en concepto de propietaria, la Comunidad Autónoma habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 31 ter.— *Saldos y depósitos abandonados.*

1. Conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 598 bis del Código del Derecho Foral de Aragón, pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por las personas interesadas que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
2. Las entidades depositarias están obligadas a comunicar al Departamento competente en materia de patrimonio la existencia de estos bienes en la forma que se determine por la persona titular del Departamento.
3. En los informes de auditoría que se emitan en relación con las cuentas de estas entidades, se hará constar, en su caso, la existencia de estos bienes.
4. La incorporación de estos bienes al patrimonio de Aragón se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 77 de este texto refundido.
5. La gestión, administración y explotación de estos bienes corresponderá al Departamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá enajenarlos de conformidad con lo

dispuesto en este texto refundido, según la naturaleza de los bienes de que se trate.»

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

Zaragoza, 29 de junio de 2021.— El Presidente de Aragón,
Javier Lambán Montañés.

**Ley 10/2023, de 30 de marzo,
de modificación del Libro Tercero
del Código del Derecho Foral de Aragón,
relativo a las sucesiones por causa de muerte**

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La tarea legislativa de actualizar y modificar el Derecho aragonés en materia de sucesiones por causa de muerte corresponde a las Cortes de Aragón, de acuerdo con el artículo 149.1.8.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan».

En coherencia con ello, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene reconocida en el artículo 71.2.^a de su Estatuto de Autonomía la competencia exclusiva en materia de «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su sistema de fuentes». Todo ello, de conformidad con la amplia interpretación que de estos conceptos realiza la doctrina constitucional en la STC 88/1993, de 12 de marzo, y teniendo la Comunidad Autónoma su propia regulación en esta materia en el Libro tercero del Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón».

En primer lugar, la presente reforma obedece a la necesidad de introducir tres modificaciones en el Libro Tercero del Código del Derecho Foral para adecuarlo a los nuevos valores sociales

en materia de apoyo a personas discapacitadas para el ejercicio de su capacidad jurídica:

- a) Por una parte, se modifica el artículo 328, relativo a las causas de indignidad, introduciendo dos nuevas causas de indignidad que penalizan con la exclusión de la sucesión por causa de muerte a quienes se inhiben o realizan dejación de funciones en su responsabilidad de atención a las personas que precisan apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica.
- b) Por otra, se modifica el artículo 473 en relación a las disposiciones sucesorias genéricas para sufragios u obras asistenciales, precisando cuál debe ser el destino de estos recursos cuando el causante se trate de una persona que esté recibiendo apoyos por parte de la entidad pública correspondiente para el ejercicio de su capacidad jurídica o bien de una persona que tenga su última residencia habitual en centros residenciales de titularidad del organismo autonómico competente en materia de servicios sociales.
- c) Finalmente, se dota de nueva redacción al artículo 536 en relación al denominado privilegio que se reconoce en nuestra tradición foral al Hospital de Nuestra señora de Gracia, extendiéndolo, por entender que responde al mismo fundamento e identidad de razón, a la entidad pública que ejerza las medidas de apoyo de las personas discapacitadas, así como a los centros residenciales de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, otorgándoles a todos ellos preferencia en la sucesión legal intestada de aquellas personas a las que proporcionan atención.

Por otra parte, la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón aprobó el 31 de mayo de 2021 la Proposición no de Ley número 229/21, sobre la modificación del Código del Derecho Foral en materia de aceptación y repudiación de la herencia, y acordó lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que lleve a cabo las acciones oportunas para la modificación del Código del Derecho Foral de Aragón, encargando la redacción del anteproyecto a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, máximo órgano consultivo en la materia, a fin de que baste un requerimiento

notarial dirigido a los herederos llamados a aceptar o repudiar la herencia, evitando la necesidad de acudir en tales casos a la jurisdicción voluntaria».in de dar cumplimiento a la proposición no de Ley 229/21». La Comisión Aragonesa de Derecho civil aprobó el anteproyecto encomendado en su reunión de 12 de julio de 2021.

Por todo ello, en esta reforma se introduce una mejora técnica de carácter eminentemente práctico en el artículo 348, incluyendo la posibilidad de interpelación al llamado a la herencia mediante intervención notarial, manteniendo en todo caso la vía de la jurisdicción voluntaria y precisando la determinación del plazo para el caso en que sea el Notario el que practique la interpelación.

Finalmente, esta modificación legislativa responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico y la distribución de competencias derivada de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón e incorporándose la redacción completa de los artículos que se modifican. En cuanto al principio de transparencia, la norma ha sido objeto de un proceso de audiencia pública. Por último, en relación con el principio de eficiencia, no se impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.

En la elaboración de la presente norma se han seguido los trámites establecidos en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, y en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y se han emitido los informes

preceptivos; entre otros, el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, así como el informe de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil previsto en el artículo 34 de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.

Artículo único.— *Modificación del Texto Refundido de las Leyes Civiles Aragonesas aprobado, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.*

Uno. Se modifica el artículo 328, que queda redactado como sigue: «Artículo 328. *Causas de indignidad.*

[...]

Dos. Se modifica el artículo 348, que queda redactado como sigue: «Artículo 348. *Interpelación.*

[...]

Tres. Se modifica el artículo 473, que queda redactado como sigue: «Artículo 473. *Disposición a favor del alma o a favor de los pobres.*

[...]

Cuatro. Se modifica el artículo 536, que queda redactado como sigue: «Artículo 536. *Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y otras instituciones.*

[...]

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

Zaragoza, 30 de marzo de 2023.— El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés.

Ley 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

I

PRINCIPIOS INFORMADORES

La presente modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas tiene por finalidad ajustar la regulación aragonesa de la «incapacidad e incapacitación» y de las «relaciones tutelares» de menores e «incapacitados» a los principios de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006; y pretende hacerlo sin introducir particularidades sustantivas que requieran especialidades procesales respecto de los cauces aprobados por el Estado mediante la Ley 8/2021, de 2 de junio. Esta reforma afecta fundamentalmente al libro primero «Derecho de la Persona». Pero también incluye otras modificaciones atinentes al libro II «Derecho de Familia» y al libro III «Derecho de Sucesiones», dirigidas a adecuar a la Convención aquellas previsiones que, vinculadas a ciertas instituciones familiares y sucesorias, se refieren a la discapacidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 149.1.8.^a de la Constitución española (CE) y el artículo 71.2.^a y 3.^a del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias para adaptar el Código del Derecho Foral a la Convención. Es más, tiene obligación de hacerlo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención. Hay que

destacar que el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas, también de quienes tienen discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ha sido un rasgo permanente del Derecho aragonés. Por ello, los Fueros y Observancias rechazaron la patria potestad para regular en su lugar el deber de crianza, se rebajó la mayoría de edad para ciertos actos a los catorce años o se introdujo el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Hace ya un tiempo que la manera de interactuar con las personas con discapacidad, en el ámbito jurídico y social, está cambiando. Esta ley supone un paso más.

Se parte, como principio inspirador fundamental, de la plena capacidad jurídica de toda persona, derivada de su propia dignidad. Por ello, se respeta la voluntad manifestada por quien entiende el contenido de un acto y los efectos del mismo, aunque luego estas facultades se pierdan. Cuando una persona carece de ellas o las tiene limitadas, se reconoce, en algunos momentos y situaciones y en su propio beneficio, que necesitan protección y apoyo.

Otro de los principios inspiradores de la reforma es el de intervención mínima, lo que se traduce en una importante potenciación de la guarda de hecho para las normales decisiones que la vida exige, incluidas las del ámbito sanitario. No necesita ser acreditada judicialmente. Es compatible con otras medidas de apoyo.

A falta de medidas de apoyo, tomadas por el interesado cuando sabía lo que hacía, de acuerdo con el principio de intervención judicial mínima, el juez podrá adoptar las estrictamente necesarias, proporcionales y revisables. Cuando no sean suficientes las medidas puntuales, lo normal será constituir la curatela, que puede ser de comunicación y acompañamiento, asistencial o con facultades de representación. Puede coexistir con otras medidas o mandatos de apoyo.

Esta ley tiene en cuenta que cada persona es diferente, como debe ser la solución a adoptar en cada caso. Por ello, confía en los operadores jurídicos, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, notarios, abogados y demás colaboradores, dándoles instrumentos para elegir cuál es el más adecuado

al caso concreto. Por eso, muchas veces se indica: «el Juez, el Fiscal, el Notario... podrán». Es flexible al hacer compatibles la voluntad de la persona con discapacidad con medidas de apoyo puntuales, desde mínimas hasta las más amplias, desde la guarda de hecho hasta la curatela representativa.

Se reconoce el papel fundamental que en la mayoría de los casos presta la familia a las personas necesitadas de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, procurando facilitar la gestión y la responsabilidad que asumen los familiares. Aunque se ha prescindido de la prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda, por resultar poco acordes con la Convención de Nueva York, se ha adoptado una figura alternativa que facilite el ejercicio de los apoyos que los progenitores deben prestar a sus hijos con discapacidad. Se articula así una curatela por los progenitores, dotada de un régimen especial que se traduce en la sujeción a menos obligaciones que las previstas en el régimen general de la curatela (artículo 169-28).

El indicado ajuste a la Convención ha llevado a reformar y replantear las instituciones del Código del Derecho Foral de Aragón a las que se someten las personas mayores de edad o emancipadas con discapacidad, así como a formular legalmente los nuevos principios y reglas generales sobre las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En consecuencia, se suprime toda referencia a la incapacitación y a las personas incapacitadas que, con esta reforma y por disposición de la ley, recuperan su plena capacidad jurídica y son tratadas con la dignidad inherente a todo ser humano, si bien, cuando las personas con discapacidad no pueden ejercitar su capacidad jurídica por sí solas, la ley les ofrece un completo sistema de medidas de apoyo para que puedan actuar en plano de igualdad con las demás personas. La tutela queda reservada a los menores de edad no emancipados y desaparece la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada. Se separa lo específico de las relaciones tutelares de menores de lo propio de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pero sin renunciar a refundir en un título previo las normas comunes a ambos regímenes.

Las principales modificaciones afectan al libro primero de «Derecho de la persona»:

- a) La primera cambia la rúbrica del título I que pasa a ser «Capacidad jurídica y estado de las personas» y le añade un capítulo preliminar, integrado por dos artículos, sobre «Capacidad jurídica».
- b) La segunda modifica por completo el capítulo II del título I, que ya no utiliza los términos «incapacidad e incapacitación» ni de «la persona incapaz y la incapacitada» ni de «prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda». Ahora su rúbrica es «Capacidad jurídica de las personas con discapacidad» y consta de 21 artículos divididos en cuatro Secciones: «Capacidad jurídica y medidas de apoyo» (1.^a); «Ejercicio de la capacidad jurídica» (2.^a); «Invalidez e ineficacia de actos y contratos» (3.^a), y «Otras normas generales» (4.^a).
- c) La tercera y más extensa es la que afecta al título III, «De las relaciones tutelares», que se desdobra en tres nuevos títulos: El título III, de «Normas comunes a las relaciones tutelares y medidas de apoyo», dividido en cinco capítulos y un total de 32 artículos; el título IV, de «Relaciones tutelares de menores», dividido en cuatro capítulos, algunos con varias secciones, y un total de 38 artículos; y el título V, de «Medidas de apoyo a las personas con discapacidad», dividido en tres capítulos sobre «Mandatos de apoyo y poderes sin mandato», «La guarda de hecho de las personas con discapacidad» y «La curatela» y un total de 32 artículos. Manteniendo sus caracteres esenciales, se introduce alguna modificación puntual en el defensor judicial en orden a ampliar su ámbito de actuación.

Hay otras modificaciones en lo que resta del libro primero, en el libro II, «Derecho de la familia», y en el libro III, «Derecho de sucesiones por causa de muerte». La mayoría de ellas se dirigen a suprimir las referencias a personas «incapacitadas» y sustituirlas por otras adecuadas a su nueva situación como personas con capacidad jurídica y a las medidas de apoyo que, según los casos, pueden necesitar para actuar de forma válida; también, en ocasiones, pretenden ajustar las referencias al Juez a las nuevas competencias que la Ley de Jurisdicción Voluntaria atribuye al Letrado de la Administración de Justicia.

Se establecen unas disposiciones transitorias razonables que compaginan el respeto a la persona y a la seguridad jurídica, sustituyendo las anteriores tutelas por curatelas con representación mientras no se modifiquen judicialmente. Se mantienen los mandatos y medidas de apoyo establecidos, siempre que sean compatibles con la nueva ley.

II

CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MEDIDAS DE APOYO

El capítulo II del título I del libro primero del Código del Derecho Foral de Aragón aborda la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su ejercicio. La titularidad es igual que en las demás personas, pero en razón de su discapacidad, puede necesitar medidas de apoyo en su ejercicio, cuando la situación de discapacidad, previsiblemente permanente, impide a la persona comprender, valorar o expresar por sí sola el consentimiento en la toma de decisiones; en tal caso, se le deben garantizar las medidas de apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (artículo 34), alguna de las previstas en los nuevos títulos III y V del libro primero, pero sin descartar los apoyos espontáneos e informales que le puede prestar cualquier persona con intención benévola.

En atención a las circunstancias concurrentes, las funciones de los apoyos podrán consistir en la ayuda en la comunicación, la consideración de opciones y la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, así como en la asistencia o, en última instancia, en la representación en la toma de decisiones. No obstante, quien preste apoyos representativos a la persona con discapacidad no podrá, en nombre de esta, llevar a cabo aquellos actos para los que la ley exija una actuación estrictamente personal, entre otros, contraer matrimonio o hacer testamento (artículo 35).

De manera sintética pero completa se recogen los principios generales que, de conformidad con la Convención, deben regir la adopción y la prestación de las medidas de apoyo, en especial, el de respetar la autonomía e independencia de la persona con discapacidad, con atención a su voluntad y preferencias,

incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, siempre que sea posible; pero cuando no lo sea, o hacerlo suponga un peligro significativo para ella o las personas a su cargo, o un grave perjuicio para terceros, se actuará en función de lo que objetivamente sea mejor para la dignidad, los derechos e intereses de la persona afectada (artículo 37).

Las medidas de apoyo están pensadas para las personas mayores o emancipadas con discapacidad; de los menores de catorce años se ocupan sus representantes legales, pero el régimen legal de asistencia al menor mayor de catorce años puede ser insuficiente para proporcionarle los apoyos representativos que por su discapacidad pueda necesitar. Para este supuesto se articula el procedimiento para que el Juez pueda establecer a favor de los titulares de la potestad de guarda las facultades de representación que necesiten. Del mismo modo, cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a autoridad familiar o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá acordar, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad, debiendo tener en cuenta, en su caso, las disposiciones voluntarias establecidas a tal fin (artículo 38).

III

VALIDEZ, INVALIDEZ E INEFICACIA DE ACTOS Y CONTRATOS

La persona que no tiene la suficiente aptitud para ejercer por sí sola su capacidad jurídica respecto de un acto concreto puede realizarlo válidamente con las medidas de apoyo adecuadas. Tiene aptitud para ejercitar la capacidad jurídica la persona que por sí sola puede comprender y valorar el significado y los efectos de un acto concreto en el contexto en que se produce y, en consecuencia, determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella (artículo 40-1).

A partir de este concepto de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, se formulan, como hizo el artículo 34 del

Código del Derecho Foral de Aragón, dos presunciones de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica: a) una general, que no admite prueba alguna en contrario, pues, desaparecida la incapacitación, toda persona tiene capacidad jurídica desde el nacimiento hasta la muerte, lo que incluye la posibilidad de ejercitarla en abstracto por sí sola desde los catorce años, si bien, mientras no sea mayor de edad, quedará sujeta al régimen de asistencia (artículo 40-2); b) otra, para un acto concreto, que solo será eficaz si para dicho acto la persona no está sujeta a medidas de apoyo asistenciales o representativas y, en tal caso, mientras no se demuestre lo contrario de forma cumplida y adecuada (artículo 40-3).

Para los casos de oposición de intereses entre la persona con discapacidad y quienes hayan de prestarle apoyo, para decidir sobre la intromisión en los derechos de la personalidad de la persona mayor de edad con discapacidad o para interarla contra su voluntad, existen normas específicas (artículos 42, 43 y 44).

La invalidez puede producirse en actos realizados por la persona con discapacidad sin aptitud para ello (artículo 45) o sin la intervención del curador o mandatario de apoyo que debía prestar la asistencia o representarle (artículo 45-1); pero también puede darse en los actos realizados por quien presta apoyo a la persona con discapacidad, si realiza el acto en representación sin la debida autorización o aprobación de la Junta de Parientes o del juez cuando el acto la requiera, y cuando quien presta el apoyo asistencial o representativo tenga oposición de intereses con la persona con discapacidad (artículo 45-2).

La reforma ha llevado a un artículo independiente, lo que llama «excepciones a la anulación» (artículo 45-3), en el que, junto a la posibilidad de confirmar el acto anulable por quien podría anularlo, se ha introducido otra excepción novedosa: «En los casos regulados en los artículos anteriores, el otro contratante podrá oponerse a la acción de anulabilidad probando que no conocía, ni razonablemente podía conocer, las causas en que se funda la acción de anulabilidad». La discapacidad que puede provocar la anulabilidad de un acto concreto puede no ser conocida por la otra parte contratante, en particular cuando

no hay medidas de apoyo notariales o judiciales establecidas; pero incluso cuando las haya, no es fácil conocer su existencia, al menos en una contratación privada sin intervención de Notario, pues la publicidad que suministra el Registro Civil de la discapacidad y las medidas de apoyo es restringida al tratarse de datos especialmente protegidos. Por ello, si la otra parte actúa de buena fe, puede oponerse a la anulación del acto. El trato de favor a la persona con discapacidad que conlleva el régimen de la anulabilidad requiere que la otra parte no actúe de buena fe.

En un precepto independiente, el artículo 45-4, se regula, junto al plazo de cuatro años de prescripción de la acción de anulabilidad, la tradicional limitación de la obligación de restituir de la persona con discapacidad solo a cuanto se haya enriquecido con la cosa o precio que haya recibido, así como la también tradicional limitación de las consecuencias de la pérdida de la prestación recibida por la persona con discapacidad cuando no media dolo o culpa de esta, con adición de una excepción en el párrafo segundo del apartado 3.

Se regula también la tradicional excepción a la anulabilidad del pago hecho a la persona con discapacidad (artículo 45-5).

Por último, el artículo 45-6 introduce en nuestro Derecho un supuesto de rescisión del contrato de una persona con discapacidad, para cuando el otro contratante se haya aprovechado de la situación de discapacidad para obtener una ventaja injusta.

IV

OTRAS NORMAS GENERALES

En la cuarta y última sección del capítulo II, se contienen otras tres normas de alcance general: la primera de ellas sobre el patrimonio especial de las personas con discapacidad (artículo 45-7), que actualiza las adaptaciones al Derecho aragonés contenidas en el anterior artículo 40 del Código del Derecho Foral de Aragón a la vista de las modificaciones introducidas en 2021 en la Ley estatal 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. La segunda, suprimida la delación automática de la tutela administrativa de las personas incapacitadas en situación de desamparo, se refiere a las situaciones de necesidad urgente

de apoyo y de riesgo o desamparo (artículo 45-8), situaciones en las que la entidad pública que tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad debe prestar el apoyo de modo provisional o facilitar la ayuda adecuada. La tercera norma general, a imitación del artículo 10 del Código del Derecho Foral de Aragón para los menores de edad, facilita la intervención judicial (artículo 45-9) para adoptar medidas que puedan evitar a la persona con discapacidad cualquier perjuicio o impedir los abusos en el ejercicio de las medidas de apoyo.

V

DISPOSICIONES VOLUNTARIAS SOBRE TUTELA O CURATELA

Entre las normas comunes a las relaciones tutelares y medidas de apoyo (título III), se incluye una regulación de las disposiciones voluntarias tanto sobre tutela como sobre curatela (capítulo II). Siguiendo lo que ya establecía el Derecho aragonés y en línea con la Convención de Nueva York, estas disposiciones voluntarias tienen prevalencia, puesto que vinculan al Juez que debe intervenir en la tutela o curatela, excepto que se haya producido una alteración sustancial de las circunstancias o que concurren hechos relevantes no tenidos en cuenta y, si se trata de disposiciones relativas a la propia persona, que su cumplimiento sea imposible o extraordinariamente difícil (artículo 119).

Las disposiciones voluntarias puede establecerlas la propia persona afectada que sea mayor de catorce años y tenga aptitud suficiente para determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella (artículo 113).

Pero, además, en una línea de reconocimiento de que los progenitores son casi siempre las personas más idóneas para la solución de los problemas que plantea la discapacidad de las personas, se concede a los titulares de la autoridad familiar la facultad de hacer disposiciones sobre la tutela de sus hijos menores que sigan bajo su autoridad para cuando llegue el día en que no puedan ocuparse de ellos y deban quedar sujetos a tutela, si bien prevalecerán las disposiciones del propio menor, si las hubiera (artículo 115). Igualmente, se concede

a los progenitores titulares del ejercicio de la autoridad familiar la facultad de establecer disposiciones voluntarias sobre la curatela de sus hijos menores con discapacidad o en previsión de que lleguen a tenerla para cuando alcancen la mayoría de edad; incluso, se atribuye a los progenitores que sean curadores representativos de sus hijos mayores la facultad de establecer disposiciones sobre la futura curatela de estos para cuando dejen de ser curadores (artículo 116). Se prevén reglas para cuando haya varias disposiciones incompatibles.

El objeto de estas disposiciones voluntarias, que requieren en todo caso instrumento público notarial, puede consistir en designar a las personas que han de ejercer la función de tutor o curador, o establecer los requisitos que deben reunir, o delegar en otra persona su elección entre los varios designados o las personas que reúnan los requisitos fijados. Asimismo, pueden establecer disposiciones muy amplias sobre el funcionamiento de la tutela o curatela y relativas a su persona y bienes (artículo 114).

Toda persona que se designe voluntariamente para prestar apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica que no se configure como mandatario se considerará designada para ser curador, con independencia de la denominación que se le atribuya (artículo 113-3), con lo que se pretende evitar la existencia de medidas de apoyo atípicas, cuyo encaje y régimen jurídico podrían plantear dificultad.

VI

MANDATOS DE APOYO

El capítulo I del título V se ocupa de la medida voluntaria de apoyo por excelencia en el nuevo sistema articulado en el Código, como es el mandato de apoyo. Se pretende así potenciar esta modalidad de mandato, a la que se dio entrada en el ordenamiento jurídico aragonés con la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, bajo la denominación «mandato que no se extingue por incapacidad o incapacitación», si bien con una regulación muy fragmentaria, que acabó convirtiéndolo en un mero poder preventivo o con cláusula de subsistencia. Partiendo de su preferencia sobre las demás medidas de apoyo

(artículo 101), la nueva regulación modifica su denominación, de modo acorde con la Convención de Nueva York, a la par que le dota de un régimen jurídico muy detallado, a fin de resolver las dudas que pueda plantear su aplicación práctica.

El rasgo definitorio y clave para entender esta modalidad de contrato de mandato radica en su especial finalidad, que especifica el artículo 168: se trata de que una persona, en previsión de la concurrencia de causas que dificulten el ejercicio de su capacidad jurídica, encomiende mediante mandato otorgado en escritura pública a otra u otras la prestación de apoyo que pueda necesitar para gestionar sus intereses personales o patrimoniales, con o sin poder de representación. La edad para ser mandante se supedita a la especial situación jurídica del menor mayor de catorce años, no así la del mandatario, al que se requiere, por razón del encargo encomendado, ser mayor de edad y, además, estar en pleno ejercicio de su capacidad jurídica (artículo 169-2). Al alcance o contenido del mandato se refiere el artículo 169, para prever que podrá ser general o especial. El artículo 169-1 resuelve una de las cuestiones más complejas que plantea esta institución como es la determinación del inicio de su vigencia como medida de apoyo, habiéndose optado a tal objeto por un sistema de intervención notarial.

Otras previsiones complementarias tienen que ver con el régimen de responsabilidad del mandatario y las condiciones a cumplir en el ejercicio de sus obligaciones derivadas del mandato (artículos 169-3 y 169-4). Es de notar, asimismo, la facultad reconocida al mandante de establecer las medidas de control que estime oportunas, incluida la posible intervención de la Junta de Parientes (artículo 169-5). A las específicas causas de extinción de esta modalidad de mandato se dedica el artículo 169-6. Su régimen jurídico se cierra con una norma dirigida al Juez, a fin de garantizar la preferencia de esta medida voluntaria sobre las judiciales de apoyo (artículo 169-7).

Junto al mandato de apoyo, el artículo 169-8 contempla la posibilidad de otorgar poderes preventivos sin mandato. No se les atribuye la condición de medida de apoyo y se les dota de un régimen específico, a fin de complementar el referido a los poderes ordinarios.

VII

GUARDA DE HECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La guarda de hecho se contempla en el capítulo II del título V del libro primero. En la regulación de la guarda de hecho, el legislador aragonés ha tenido en cuenta la realidad social en la prestación de apoyos dentro de su entorno familiar a los hijos con discapacidad que alcanzan la mayoría de edad, pero también a los progenitores, hermanos u otros familiares que, con el paso del tiempo, van perdiendo facultades y necesitan apoyo para ejercer en condiciones de igualdad su capacidad jurídica, y son los hijos, hermanos o sobrinos quienes prestan estos apoyos. Por ello, el guardador de hecho es la persona física o jurídica que, por iniciativa propia, presta estos apoyos. En razón de ello, si existen medidas formales de apoyo, mandatos o curatela, no tiene razón de ser esta medida, salvo que la persona con discapacidad esté en situación de desamparo (artículo 169-10). Por esta razón, también se legitima al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y al propio guardador para instar la curatela, a pesar de la existencia de esta guarda (artículo 169-3).

El legislador aragonés regula la forma de acreditación frente a terceros de esta medida de apoyo, para la que no es necesario un pronunciamiento judicial al respecto. La prueba puede llevarse a cabo por cualquier medio admitido en Derecho y se hace referencia a dos específicos medios de acreditación: la declaración de la Junta de Parientes en tal sentido o la declaración en acta de notoriedad, y en ambos casos exigiendo que se hayan efectuado en los dos años anteriores al acto que se vaya a realizar (artículo 169-13).

Se regula expresamente el régimen jurídico de esta medida de apoyo indicando los actos que el guardador de hecho por sí solo puede llevar a cabo con facultades de representación, tanto en el orden personal como patrimonial e indicando que, para aquellos actos no señalados en la ley y en los que sea necesario llevar a cabo una actuación representativa, será necesaria la autorización previa o posterior aprobación de la Junta de Parientes o del Juez (artículo 169-12).

VIII CURATELA

La curatela de la persona con discapacidad se presenta en el Derecho aragonés como una medida formal y estable que debe ser graduada por la autoridad judicial en función de las concretas necesidades de la persona con discapacidad (artículo 169-15), siguiendo con ello la máxima aragonesa de no ayudar a nadie más de lo que necesite, fomentando con ello su autonomía de la voluntad.

La regulación de esta medida de apoyo se desarrolla en tres secciones. La primera, relativa a las disposiciones generales, tiene por objeto definir esta medida e indicar quién está legitimado para solicitarla; pero, sobre todo, regular la relación de la misma con otras medidas de apoyo. La curatela se constituirá cuando la persona con discapacidad no esté sujeta a medidas de apoyo voluntarias o guarda de hecho, pero aun en estos casos se prevé la posibilidad de constituir la curatela a instancias del guardador de hecho o incluso cuando el mandato de apoyo no sea suficiente (artículo 169-16). Se establece también el deber de comunicación del curador con la persona con discapacidad, única manera de conocer su voluntad y preferencias al objeto de prestarle el preciso apoyo (artículo 169-17). Por último, se establecen también los plazos de revisión a los que está sujeta esta medida (artículo 169-18).

La sección 2.^a regula las Modalidades de curatela que, como indica el artículo 169-19, son tres: la curatela de comunicación y acompañamiento, de asistencia y con facultades de representación; todas ellas compatibles entre sí y que fijará el Juez en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso.

Seguidamente, se define el objeto de cada uno de los tipos de curatela y su régimen jurídico, pasando de una curatela de comunicación y acompañamiento, en la que la persona con discapacidad puede formar su voluntad, pero no exteriorizarla (artículo 169-20); la curatela asistencial, que tiene como finalidad ayudar a la persona con discapacidad a formar su voluntad en relación a actos o negocios de índole personal o patrimonial y prestarle asistencia para la válida formación de su consentimiento (artículo 169-21); hasta llegar a la curatela con

facultades de representación para aquellos actos en los que, con los apoyos de las modalidades anteriores, la persona con discapacidad no pueda determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella (artículo 169-23).

La sección 3.^a regula el régimen de la curatela plural (artículo 169.26); los impedimentos transitorios en el ejercicio de la misma (artículo 169-27), las causas de extinción (artículo 169.29) y la cuenta general de gestión (artículo 169-30). Junto a todo lo anterior se establece un régimen especial en el artículo 169-28 bajo la rúbrica «Curatela por los progenitores», que pretende dar respuesta a una realidad social y poner en valor el apoyo desinteresado que los progenitores, a lo largo de toda su vida, prestan a sus hijos con discapacidad. Teniendo difícil ajuste a la Convención de Nueva York la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, sí es necesario facilitar el tránsito de la menor edad a la mayor edad de la persona con discapacidad que sigue contando con el apoyo de sus progenitores y eximir a estos de ciertas normas generales sobre curatela, como la necesidad de hacer inventario o una rendición periódica de cuentas. Este régimen especial podrá aplicarse también al cónyuge, al otro miembro de la pareja estable no casada, a un descendiente o a un hermano de la persona con discapacidad cuando a ellos se les haya encomendado la curatela.

IX

OTRAS MODIFICACIONES

Entre las demás modificaciones que se llevan a cabo del Código del Derecho Foral de Aragón, pueden destacarse varias de ellas.

El régimen de la Junta de Parientes se flexibiliza, para facilitar su funcionamiento. Su constitución judicial se atribuye, en vez de al Juez, como anteriormente, al Letrado de la Administración de Justicia (artículo 175), y tanto este como el Notario en la constitución notarial, cuando fijen su composición, pueden, motivadamente, apartarse del principio de proximidad de parentesco y de la preferencia por razón de edad (artículo 172). Además, ya no constituye causa de inidoneidad para ser miembro de la Junta tener interés personal directo en la decisión que

debe tomar, que se sustituye por tener oposición de intereses con el menor o persona con discapacidad (artículo 173.b).

Se introduce la regulación de la sustitución ejemplar (artículo 476 bis). Hasta la reforma del Código Civil llevada a cabo por Ley 8/2021, se venía entendiendo pacíficamente que la regulación que este contenía sobre dicha sustitución se aplicaba supletoriamente en Aragón. La indicada reforma suprimió la sustitución ejemplar, pero se trata de un instrumento que puede ser útil para que los ascendientes puedan organizar la sucesión de sus descendientes con discapacidad, si estos no han otorgado acto de disposición por causa de muerte, por lo que ha parecido oportuno introducir una regulación de esta sustitución en el Derecho aragonés.

En línea con los más modernos criterios doctrinales y jurisprudenciales, se amplían las causas de desheredación, añadiendo el maltrato psicológico junto al de obra y la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario por causa principalmente imputable al legitimario (artículo 510).

X

DERECHO TRANSITORIO

La modificación del Código del Derecho Foral de Aragón, en lo que atañe a la regulación del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, debe atender también a la situación de las personas con discapacidad que, antes de la entrada en vigor de esta nueva regulación, habían visto modificada su capacidad de obrar.

La regulación vigente debe tener un efecto inmediato, pero también un efecto retroactivo que reintegre la capacidad de todas las personas declaradas incapacitadas por sentencia judicial, al no existir ya el estado civil de incapacitado.

Este cambio legal requiere también de una sustitución legal y automática de las medidas representativas, a las que hubieran estado sujetas las personas declaradas incapacitadas, por unos apoyos acordes con la nueva legislación, pero sujetos, en su caso, a una revisión judicial, solo si así lo solicita la persona con discapacidad o quienes le presten el apoyo, y siempre a instancia del

Ministerio Fiscal, pudiendo, también, la autoridad judicial actuar de oficio en los casos de los que tenga conocimiento y lo considere oportuno. Igualmente se determina cómo afecta este cambio legislativo sobre poderes preventivos, autotutela, delación hecha por los titulares de la autoridad familiar, etc., que fueron otorgados antes de la entrada en vigor de esta normativa, pero que deben expandir su eficacia vigente a esta nueva regulación. Partiendo de la validez de estos instrumentos conforme al Derecho anterior, deberán serlo también al Derecho vigente, conforme al cual deben ser interpretados, atendiendo así a la realidad social y principios constitucionales en los que deben ser aplicados.

Todo lo anterior requiere, no solo de unas normas transitorias que indiquen por qué normativa deben regirse las diversas actuaciones que ahora desplieguen su eficacia, sino también de normas materiales de Derecho transitorio que determinen la situación jurídica de las personas, tanto de las constituidas en estado civil de incapacitados conforme al Derecho anterior como de sus tutores o curadores, así como también la afección que esta nueva regulación provoca sobre las resoluciones judiciales que las amparaban.

Con este régimen transitorio se da una solución a situaciones ya consolidadas conforme al Derecho anterior, pero que ahora deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social y los principios constitucionales y de orden público que representa esta nueva regulación, amparada en la dignidad de la persona y los derechos humanos, tal y como exige el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Artículo único.— *Modificación del Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas aprobado, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.*

Uno. Se modifica la rúbrica del Título I del Libro Primero, que queda con la siguiente redacción:

**«TÍTULO I
CAPACIDAD JURÍDICA Y ESTADO
DE LAS PERSONAS»**

Dos. Se añade un Capítulo preliminar al Título I del Libro Primero, con la siguiente rúbrica y contenido:

**«CAPÍTULO PRELIMINAR
CAPACIDAD JURÍDICA**

Artículo 3-1. *Igual dignidad, personalidad y capacidad jurídica.*

[...]

Artículo 3-2. *Capacidad jurídica.*

[...]

Tres. Se modifica la rúbrica del Capítulo Primero del Título I del Libro Primero, que queda redactada así:

**«CAPÍTULO I
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
POR RAZÓN DE LA EDAD»**

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado como sigue:

[...]

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, que queda redactado como sigue:

[...]

Seis. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue: «Artículo 6. *Derecho del menor a ser oído.*»

[...]

Siete. Se modifican el inciso inicial del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 7, que quedan redactados como sigue:

[...]

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado así:

[...]

Nueve. Se modifica la letra b) del artículo 17, que queda redactada como sigue:

[...]

Diez. Se añade un apartado 3 al artículo 18, con la siguiente redacción:

[...]

Once. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1, así como el apartado 2 del artículo 20, que quedan redactados como sigue:

[...]

Doce. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue:

[...]

Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 28, queda redactado así:

[...]

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado así:

[...]

Quince. Se modifica el párrafo inicial del apartado 1 del artículo 33, que queda redactado así:

[...]

Dieciséis. Se modifica el Capítulo II del Título I del Libro Primero, que queda con la siguiente rúbrica y contenido:

«CAPÍTULO II
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sección 1.^a
CAPACIDAD JURÍDICA Y MEDIDAS DE APOYO

Artículo 34. *Capacidad jurídica de las personas con discapacidad.*

[...]

Artículo 35. *Funciones de las medidas de apoyo.*

[...]

Artículo 36. *Principios generales de las medidas de apoyo.*

[...]

Artículo 37. *Voluntad y preferencias en la adopción y prestación del apoyo.*

[...]

Artículo 38. *El menor mayor de catorce años con discapacidad.*

[...]

Artículo 39. *Apoyos espontáneos e informales.*

[...]

Sección 2.^a

EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

Artículo 40. *Presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica.*

[...]

Artículo 41. *Validez de los actos jurídicos de la persona con discapacidad.*

[...]

Artículo 42. *Oposición de intereses.*

[...]

Artículo 43. *Intromisión en los derechos de la personalidad.*

[...]

Artículo 44. *Internamiento.*

[...]

Sección 3.^a

INVALIDEZ E INEFICACIA DE ACTOS Y CONTRATOS

Artículo 45. *Invalidez del acto de la persona sin aptitud para realizarlo.*

[...]

Artículo 45-1. *Invalidez por falta de intervención del curador o mandatario de apoyo*

[...]

Artículo 45-2. *Invalidez por defectos en la prestación del apoyo.*

[...]

Artículo 45-3. *Excepciones a la anulación.*

[...]

Artículo 45-4. *Régimen de la anulación.*

[...]

Artículo 45-5. *Excepción a la anulabilidad del pago.*

[...]

Artículo 45-6. *Rescisión por obtención de una ventaja injusta.*

[...]

Sección 4.^a

OTRAS NORMAS GENERALES

Artículo 45-7. *Patrimonio especial de las personas con discapacidad.*

[...]

Artículo 45-8. *Situaciones de necesidad urgente de apoyo y de riesgo o desamparo.*

[...]

Artículo 45-9. *Intervención judicial.*

[...]

Diecisiete. Se modifica el artículo 46, que queda redactado así: «Artículo 46. *Defensor del desaparecido.*

[...]

Dieciocho. Se modifica el artículo 49, que queda redactado así: «Artículo 49. *Representante del declarado ausente*

[...]

Diecinueve. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 50, que queda redactada así:

[...]

Veinte. Se modifica el artículo 51, que queda redactado así:

[...]

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 del artículo 54, que queda redactado así:

[...]

Veintidós. Se añade un apartado 4 al artículo 60 con la siguiente redacción:

[...]

Veintitrés. Se modifica el artículo 66, que queda con la siguiente redacción:

[...]

Veinticuatro. Se modifica el artículo 73, que queda con la siguiente redacción:

[...]

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 75 y se le añade un apartado 4, que quedan redactados así:

[...]

Veintiséis. Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del artículo 76, que quedan redactados así:

[...]

Veintisiete. Se modifican la letra d) del apartado 3 y el apartado 5 del artículo 77 y se le añade el apartado 7, que quedan redactados así:

[...]

Veintiocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 79, que queda redactado así:

[...]

Veintinueve. Se modifican la rúbrica y los apartados 1, 2 letras a y c, 3, 5 y 6 del artículo 80, que queda redactado como sigue:

«Artículo 80. *Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos.*

[...]

Treinta. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 81, que quedan redactados así:

[...]

Treinta y uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 82, que queda redactado así:

[...]

Treinta y dos. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 83, que queda redactada así:

[...]

Treinta y tres. Se modifica el artículo 84, que queda redactado así: «Artículo 84. *Medidas provisionales.*

[...]

Treinta y cuatro. En el apartado 1 del artículo 91 se suprime la letra c) y la letra d) pasa a ser la nueva letra c), el apartado 1 queda así:

[...]

Treinta y cinco. Se introduce un nuevo Título III en el Libro Primero con la siguiente rúbrica y contenido:

**«TÍTULO III
NORMAS COMUNES A LAS RELACIONES
TUTELARES Y MEDIDAS DE APOYO**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 100. *Instituciones tutelares de menores.*

[...]

Artículo 101. *Medidas de apoyo a personas con discapacidad.*

[...]

Artículo 102. *Caracteres.*

[...]

Artículo 103. *Modos de delación.*

[...]

Artículo 104. *Nombramiento.*

[...]

Artículo 105. *Vigilancia y control.*

[...]

Artículo 106. *Fianza.*

[...]

Artículo 107. *Inventario.*

[...]

Artículo 108. *Gastos, daños y perjuicios.*

[...]

Artículo 109. *Remuneración.*

[...]

Artículo 110. *Responsabilidad.*

[...]

Artículo 111. *Publicidad.*

[...]

Artículo 112. *Administración voluntaria.*

[...]

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES VOLUNTARIAS
SOBRE TUTELA O CURATELA

Artículo 113. *Designación hecha por uno mismo.*

[...]

Artículo 114. *Otras disposiciones voluntarias.*

[...]

Artículo 115. *Disposiciones de los titulares de la autoridad familiar sobre tutela.*

[...]

Artículo 116. *Disposiciones de los progenitores sobre la futura curatela de sus hijos.*

[...]

Artículo 117. *Pluralidad de designados.*

[...]

Artículo 118. *Disposiciones incompatibles.*

[...]

Artículo 119. *Vinculación de las disposiciones voluntarias.*

[...]

CAPÍTULO III

DELACIÓN DATIVA DE LA TUTELA O CURATELA

Artículo 120. *Supletoriedad.*

[...]

Artículo 121. *Designación.*

[...]

Artículo 122. *Tutela o curatela de varios hermanos.*

[...]

CAPÍTULO IV

CAPACIDAD, EXCUSA Y REMOCIÓN

Artículo 123. *Capacidad.*

[...]

Artículo 124. *Causas de inhabilidad.*

[...]

Artículo 125. *Excusa.*

[...]

Artículo 126. *Causas de remoción.*

[...]

Artículo 127. *Procedimiento de remoción.*

[...]

Artículo 128. *Efectos de la excusa o remoción.*

[...]

CAPÍTULO V **EL DEFENSOR JUDICIAL**

Artículo 129. *Supuestos.*

[...]

Artículo 129-1. *Nombramiento.*

[...]

Artículo 129-2. *Régimen.*

[...]

Treinta y seis. Se introduce un nuevo Título IV en el Libro Primero con la siguiente rúbrica y contenido:

«TÍTULO IV **RELACIONES TUTELARES DE MENORES**

CAPÍTULO I **LA TUTELA**

Sección 1.^a **DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 130. *Personas sujetas a tutela.*

[...]

Artículo 131. *Promoción de la tutela ordinaria.*

[...]

Artículo 132. *Tutela provisional.*

[...]

Artículo 133. *Constitución de la tutela ordinaria.*

[...]

Artículo 134. *Número de tutores.*

[...]

Artículo 135. *Tutela y administración.*

[...]

Sección 2.^a

CONTENIDO Y EJERCICIO DE LA TUTELA

Artículo 136. *Contenido personal de la tutela.*

[...]

Artículo 137. *Alimentos.*

[...]

Artículo 138. *Contenido económico.*

[...]

Artículo 139. *Ejercicio de la tutela plural.*

[...]

Artículo 140. *Contribución a las cargas.*

[...]

Sección 3.^a

EXTINCIÓN DE LA TUTELA Y RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

Artículo 141. *Extinción.*

[...]

Artículo 142. *Cuenta general de la gestión.*

[...]

Artículo 143. *Aprobación.*

[...]

Artículo 144. *Devengo de intereses.*

[...]

CAPÍTULO II
LA CURATELA DEL MENOR EMANCIPADO

Artículo 145. *Curatela de emancipados.*

[...]

CAPÍTULO III
LA GUARDA DE HECHO DEL MENOR

Artículo 146. *Definición.*

[...]

Artículo 147. *Obligación de notificar el hecho.*

[...]

Artículo 148. *Información, cautelas y acciones.*

[...]

Artículo 149. *Régimen jurídico.*

[...]

CAPÍTULO IV
PROTECCIÓN DE MENORES POR LA ADMINISTRACIÓN

Sección 1.^a
DESAMPARO Y TUTELA ADMINISTRATIVA

Artículo 150. *Desamparo.*

[...]

Artículo 151. *Asunción de funciones tutelares.*

[...]

Artículo 152. *Administración de bienes.*

[...]

Artículo 153. *Comunicaciones y notificaciones.*

[...]

Artículo 154. *Oposición.*

[...]

Artículo 155. *Promoción del régimen ordinario.*

[...]

Artículo 156. *Cese de la tutela automática.*

[...]

Sección 2.^a

LA GUARDA ADMINISTRATIVA

Artículo 157. *Guarda provisional.*

[...]

Artículo 158. *Asunción de la guarda por la entidad pública.*

[...]

Artículo 159. *Guarda a solicitud de los padres o tutores.*

[...]

Artículo 160. *Disposiciones comunes a la guarda y tutela.*

[...]

Artículo 161. *Modalidades de acogimiento.*

[...]

Artículo 162. *Vigilancia del Ministerio Fiscal.*

[...]

Sección 3.^a

EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Artículo 163. *Contenido y ejercicio.*

[...]

Artículo 164. *Formalización.*

[...]

Artículo 165. *Modalidades de acogimiento familiar.*

[...]

Artículo 166. *Guarda con fines de adopción.*

[...]

Artículo 167. *Cese del acogimiento familiar.*

[...]

Treinta y siete. Se introduce un nuevo Título V en el Libro Primero con la siguiente rúbrica y contenido:

[...]

**«TÍTULO V
MEDIDAS DE APOYO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD**

**CAPÍTULO I
MANDATOS DE APOYO
Y PODERES SIN MANDATO**

Artículo 168. *El mandato de apoyo.*

[...]

Artículo 169. *Contenido.*

[...]

Artículo 169-1. *Inicio de eficacia.*

[...]

Artículo 169-2. *Aptitud para ser mandatario.*

[...]

Artículo 169-3. *Obligatoriedad y responsabilidad.*

[...]

Artículo 169-4. *Condiciones de ejercicio.*

[...]

Artículo 169-5. *Medidas de control.*

[...]

Artículo 169-6. *Extinción.*

[...]

Artículo 169-7. *Preferencia del mandato de apoyo.*

[...]

Artículo 169-8. *Poderes preventivos sin mandato.*

[...]

CAPÍTULO II

LA GUARDA DE HECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 169-9. *Definición.*

[...]

Artículo 169-10. *Relación con otras medidas de apoyo*

[...]

Artículo 169-11. *Guarda de hecho plural.*

[...]

Artículo 169-12. *Régimen jurídico.*

[...]

Artículo 169-14. *Extinción.*

[...]

CAPÍTULO III

LA CURATELA

Sección 1.^a

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 169-15. *Concepto y legitimación.*

[...]

Artículo 169-16. *Relación con otras medidas de apoyo*

[...]

Artículo 169-17. *Deber de comunicación.*

[...]

Artículo 169-18. *Revisión.*

[...]

Sección 2.^a
MODALIDADES DE CURATELA

Artículo 169-19. *Modalidades de curatela y compatibilidad.*

[...]

Artículo 169-20. *Curatela de comunicación y acompañamiento.*

[...]

Artículo 169-21. *Curatela asistencial.*

[...]

Artículo 169-22. *Prestación de asistencia.*

[...]

Artículo 169-23. *Curatela con facultades de representación.*

[...]

Artículo 169-24. *Actos que requieren autorización o aprobación.*

[...]

Artículo 169-25. *Concesión de la autorización o aprobación.*

[...]

Sección 3.^a
EJERCICIO DE LA CURATELA

Artículo 169-26. *Ejercicio de la curatela plural.*

[...]

Artículo 169-27. *Impedimento transitorio.*

[...]

Artículo 169-28. *Curatela por progenitores.*

[...]

Artículo 169-29. *Extinción de la curatela.*

[...]

Artículo 169-30. *Cuenta general de la gestión*

[...]

Treinta y ocho. Se modifica la numeración y rúbrica del actual Título IV del Libro Primero en los siguientes términos:

«TÍTULO VI DE LA JUNTA DE PARIENTES»

Treinta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 170, que queda redactado así:

[...]

Cuarenta. Se modifica el apartado 1 del artículo 172, que queda con la siguiente redacción:

[...]

Cuarenta y uno. Se modifican las letras b y d) del artículo 173, que quedan con la siguiente redacción:

[...]

Cuarenta y dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 175, que quedan con la siguiente redacción:

[...]

Cuarenta y tres. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 199, que queda con la siguiente redacción:

[...]

Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 240, que queda redactado así:

[...]

Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 242, que queda redactado así:

[...]

Cuarenta y seis. Se modifica la letra d) del artículo 244, que queda redactada así:

[...]

Cuarenta y siete. Se modifican la letra a) y el párrafo segundo de la letra b) del artículo 245, que quedan redactados así:

[...]

Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 259, que queda redactado así:

[...]

Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 260, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta. Se modifica el apartado 2 del artículo 276, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta y uno. Se modifica el artículo 328, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 329, con la siguiente redacción:

[...]

Cincuenta y tres. Se modifica el artículo 346, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 366, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 367, que queda redactado así:

[...]

Cincuenta y seis. Se modifica el artículo 404, que queda redactado como sigue:

[...]

Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 408, que queda redactado como sigue:

[...]

Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 413, que queda redactado como sigue:

[...]

Cincuenta y nueve. Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 415, que quedan redactadas como sigue:

[...]

Sesenta. Se modifica el apartado 2 del artículo 423, que queda redactado como sigue:

[...]

Sesenta y uno. Se modifica el apartado del 2 artículo 435, que queda redactado como sigue:

[...]

Sesenta y dos. Se modifica el artículo 436, que queda redactado como sigue:

[...]

Sesenta y tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 440, que quedan redactados como sigue:

[...]

Sesenta y cuatro. Se modifica el artículo 454, que queda redactado como sigue:

[...]

Sesenta y cinco. Se modifica la letra c) del artículo 462, que queda redactada como sigue:

[...]

Sesenta y seis. Se añade un nuevo artículo 476 bis:

[...]

Sesenta y siete. Se modifica la letra c) del artículo 510 y se añade la letra e), con la siguiente redacción:

[...]

Sesenta y ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 531, que queda redactado como sigue:

[...]

Disposición adicional única.— *Derechos o situaciones ya reconocidos a personas incapacitadas.*

1. El cambio del régimen jurídico de las personas con discapacidad derivado de la entrada en vigor de esta ley afectará solo al ejercicio de los derechos vinculados a su capacidad jurídica, sin perjudicar aquellos derechos o situaciones favorables que el ordenamiento jurídico les hubiera reconocido de acuerdo con la ley anterior, salvo que se hubiera producido una mejoría en su situación. En particular, las modificaciones introducidas en esta ley no repercutirán en los derechos o situaciones reconocidas con anterioridad por la normativa en materia de seguridad social, servicios sociales o tributaria.
2. Aquellas personas que fueron declaradas judicialmente incapaces antes de la entrada en vigor de esta ley, se entenderá que cuentan con un grado de discapacidad acreditado igual o superior al 65 por ciento, a efectos legales, siempre y cuando no se produzca una mejora en la situación que dio lugar a dicha declaración. Esta previsión será de aplicación con independencia de las medidas de apoyo que sustituyan al régimen que tuviera establecido previamente la persona incapacitada.
3. La mejoría en la situación de la persona con discapacidad a la que hacen referencia los apartados anteriores deberá hacerse constar por los organismos competentes para evaluar el grado de discapacidad.

Disposición transitoria primera.— *Eficacia inmediata.*

Desde la entrada en vigor de esta ley nadie puede ser constituido en estado civil de incapacitado ni ver modificada su capacidad jurídica, y las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedan sin efecto.

Disposición transitoria segunda.— *Efecto retroactivo.*

Las personas constituidas por sentencia judicial en estado civil de incapacitado antes de la entrada en vigor de esta reforma recuperan su capacidad jurídica, que deberá ser ejercitada, en

su caso, con las medidas de apoyo que correspondan conforme a lo previsto en esta ley.

Disposición transitoria tercera.— *Situación de tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho. Situación de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada.*

1. Los tutores, curadores y defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior y quienes vinieran actuando como guardadores de hecho de personas con discapacidad ejercerán su cargo o actuarán conforme a las disposiciones y principios de esta ley a partir de su entrada en vigor.
2. A los tutores y curadores de las personas con discapacidad, en los actos y negocios para los que se hubiera establecido la necesidad de representación, se les aplicarán las normas establecidas en esta ley para los curadores con facultades de representación; y, en los actos no sujetos a representación, se les aplicarán las normas establecidas en esta ley para la curatela asistencial de las personas con discapacidad.
3. Los defensores judiciales de las personas con discapacidad nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su cargo conforme a lo dispuesto en esta ley.
4. Quienes al entrar en vigor esta ley vinieran actuando como guardadores de hecho de personas con discapacidad sujetarán su actuación a lo dispuesto en ella.
5. Quienes al entrar en vigor esta ley ostenten la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada tendrán la condición jurídica de curadores. Si la sentencia les otorgó facultades de representación, ejercerán la curatela representativa; de lo contrario, su curatela será asistencial.
6. Todas las actuaciones llevadas a cabo antes de la entrada en vigor de esta ley conforme al Derecho anterior por los tutores, curadores, defensores judiciales, guardadores de hecho y titulares de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, conservarán su validez.

Disposición transitoria cuarta.— *Disposiciones voluntarias sobre tutela, poderes y mandatos preventivos.*

1. Las disposiciones voluntarias hechas por uno mismo o por los progenitores de la persona con discapacidad, así como los poderes y mandatos preventivos otorgados conforme a la legislación anterior y que sean válidos conforme a la misma conservarán su validez en todo lo que no contradigan la regulación vigente.
2. La delación de la tutela hecha por uno mismo para después de la minoría de edad se entenderá referida a la delación de la curatela hecha por uno mismo y se regirá, a efectos de eficacia y validez, por lo dispuesto en esta ley.
3. Las disposiciones de los titulares de la autoridad familiar sobre tutela para cuando sus hijos lleguen a la mayoría de edad se regirán, a efectos de eficacia y validez, por lo dispuesto en esta ley para las disposiciones de los progenitores sobre la futura curatela de sus hijos.
4. Los poderes y mandatos preventivos otorgados conforme a la legislación anterior se regirán, a efectos de eficacia y validez, por lo dispuesto en esta ley.

Disposición transitoria quinta.— *Revisión de las medidas ya acordadas.*

1. Las personas con discapacidad que hubieran visto modificada judicialmente su capacidad jurídica, así como quienes les presten apoyo conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias anteriores, podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Dichas medidas, mientras no sean modificadas, deberán ser interpretadas conforme al Derecho vigente.
2. La autoridad judicial, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, podrá revisar aquellos casos en los que no haya mediado solicitud de modificación de medidas acordadas conforme al Derecho anterior, cuando considere necesaria una adaptación expresa de las medidas a la nueva legalidad vigente.

Disposición transitoria sexta.— *Cese de los acogimientos constituidos judicialmente.*

Los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán cesar por resolución de la entidad pública sin necesidad de resolución judicial.

Disposición transitoria séptima.— *Sustitución ejemplar.*

Las sustituciones ejemplares otorgadas antes de la entrada en vigor de esta ley son válidas y subsisten si cumplen los requisitos del nuevo artículo 476 bis del Código del Derecho Foral de Aragón.

Disposición derogatoria única.— *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final única.— *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

Zaragoza, 13 de junio de 2024.— El Presidente de Aragón,
Jorge Azcón Navarro.

**LEY 4/2005, DE 14 DE JUNIO,
SOBRE LA CASACIÓN FORAL
ARAGONESA**

(BOA núm. 75, de 24 de junio de 2005)

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.4.^a atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, así como del Derecho procesal civil derivado de las peculiaridades del Derecho sustantivo aragonés».

En ejercicio de esa competencia, las Cortes de Aragón han aprobado diversas leyes (Ley de sucesiones por causa de muerte, Ley de régimen económico matrimonial y viudedad) con el objetivo de renovar y actualizar nuestro Derecho civil.

La jurisprudencia tiene también extraordinaria importancia en la tarea de revitalizar nuestro Derecho. El recurso de casación debe permitir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón crear la jurisprudencia que complementa el ordenamiento civil aragonés mediante la interpretación y aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales en los que se inspira nuestro ordenamiento. Sin embargo, dadas las peculiaridades de nuestro Derecho, en la actualidad sólo un escaso número de asuntos están accediendo a la casación foral aragonesa, lo que hace aconsejable que el legislador aragonés fije, en ejercicio de sus competencias, los requisitos procesales de acceso a la casación para hacer posible la utilización de este recurso en un número mayor de litigios sobre Derecho civil aragonés.

Esta innovación procesal encuentra adecuada justificación constitucional y estatutaria en la competencia reconocida a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 1.— Competencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil aragonés.

Artículo 2.— Resoluciones recurribles en casación.

Serán recurribles las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales:

1. Cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil euros o sea imposible de calcular ni siquiera de modo relativo.
2. En los demás casos, cuando la resolución del recurso presente interés casacional. El interés casacional podrá invocarse aunque la determinación del procedimiento se hubiese hecho en razón de la cuantía.

Artículo 3.— *El interés casacional.*

Se considerará que un recurso presenta interés casacional en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, dictada en aplicación de normas del Derecho civil aragonés, o no exista dicha doctrina en relación con las normas aplicables.
2. Cuando la sentencia recurrida resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
3. Cuando la sentencia recurrida aplique normas del Derecho civil aragonés que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no exista doctrina jurisprudencial relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El régimen establecido en la presente Ley será de aplicación a los recursos que se interpongan contra las sentencias que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposición final.— *Entrada en vigor de la Ley.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

**LEY 9/2011, DE 24 DE MARZO,
DE MEDIACIÓN FAMILIAR
DE ARAGÓN**

(BOA núm. 70, de 7 de abril de 2011)

PREÁMBULO

La presente ley regula la mediación familiar como procedimiento de resolución extrajudicial de los conflictos que se plantean en el ámbito familiar.

La familia, como institución social básica y viva, es y ha sido continuamente el centro de muchas y diversas problemáticas que no siempre pueden resolverse dentro de su propio ámbito.

Para dar respuesta a esta problemática es por lo que se han instrumentado en los últimos tiempos mecanismos alternativos a la resolución de conflictos por la vía judicial, como el de la mediación, que se van imponiendo como métodos prioritarios para solucionarlos. El sistema tradicional de acudir a las instancias judiciales para resolver las controversias derivadas de problemas familiares ha demostrado que, en muchas ocasiones, resulta poco efectivo para apaciguarlos, buscándose otras vías de resolución más cercanas a la voluntariedad y al consenso de las partes, pasando de la imposición al acuerdo y a la aceptación.

La mediación familiar desarrolla las posibilidades de actuación de las personas favoreciendo el diálogo, el acercamiento y la comprensión, para llegar a soluciones pactadas por las partes que al final suponen un mayor beneficio para todos los miembros de la familia, sobre todo para los menores y las personas más vulnerables.

Tampoco debe olvidarse que los problemas tratados a través del proceso de mediación no suelen evolucionar a formas más controvertidas de resolución, evitando y previniendo en muchas ocasiones situaciones familiares de malos tratos.

Por todo esto, se pretende con esta ley establecer un marco normativo favorable al desarrollo de la función mediadora ya que se ha mostrado como una garantía de respuesta a la conflictividad familiar y, por tanto, una figura que debe ser objeto de una especial atención por parte de instituciones públicas y privadas.

Hay que tener en cuenta los antecedentes normativos que, desde las instituciones comunitarias, se han aprobado en esta materia. Cabe citar como más destacados la Recomendación número R (98) I, de 21 de enero de 1998, del Comité de

Ministros del Consejo de Europa, sobre la mediación familiar, desde la que se insta a los gobiernos de los Estados miembros a instituir y potenciarla; el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, elaborado por la Comisión de la Unión Europea, que invita a los Estados miembros a examinar la posibilidad de elaborar modelos de soluciones no judiciales de los conflictos; o la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que indica que debe tender a generalizarse la mediación como modelo de resolución de controversias.

A nivel estatal, la Constitución Española establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, cualquiera que sea su filiación. En este sentido, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, supuso un paso adelante en esta materia, concediendo a las partes la facultad de solicitar en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 71.34.^a del Estatuto de Autonomía de Aragón establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón la acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial. En este sentido, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, establece que los niños y adolescentes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Asimismo, indica que la aplicación de los principios del Estado de Derecho a la protección de los menores conlleva una responsabilidad compartida entre sus padres y los poderes públicos. Es fundamental destacar la

aprobación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho universal de acceso a los servicios sociales, como derecho de la ciudadanía, para promover el bienestar del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas.

Especial importancia en la figura de la mediación tiene la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, una norma aprobada por las Cortes de Aragón, pionera en aspectos fundamentales del Derecho de familia, que en su Preámbulo señala que la mediación familiar resulta un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura.

El artículo 4 de la mencionada ley establece que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales. Añade que, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y también podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. Asimismo, continúa el precepto señalando que, iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán, de común acuerdo, solicitar su suspensión al Juez en cualquier momento para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación.

En este sentido, y para regular temporalmente un sistema que facilitara a las partes la consecución de acuerdos en el ámbito de las rupturas familiares, la disposición transitoria segunda de la citada Ley 2/2010 establecía un régimen provisional de mediación familiar hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a la que se refiere la disposición final segunda, entendiendo por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito

del Derecho privado, derivados de la ruptura de la pareja, que afecten a menores de edad. Este ámbito de aplicación de la mediación familiar, de carácter temporal, tenía su fundamento en que el objeto de la Ley 2/2010 es regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, entendiéndose, por tanto, que la mediación familiar debía comprender únicamente los conflictos familiares referidos a rupturas de parejas con hijos menores de edad. La corriente internacional actual, al igual que están haciendo numerosas Comunidades Autónomas, apuesta por una extensión de la aplicación de la mediación familiar a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares, considerando el objeto de la mediación de forma amplia.

Hay que señalar que la disposición final segunda de la Ley 2/2010 establece un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que el Gobierno de Aragón remita a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de Mediación Familiar, en la que se regularán el funcionamiento, competencias y atribuciones de este instrumento alternativo a la vía judicial de resolución de los conflictos familiares.

Por otro lado, el artículo 7 del Decreto 252/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, atribuye a la Dirección General de Familia, entre otras competencias, la puesta en funcionamiento de un servicio de mediación, conciliación y orientación familiar.

El vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.59.^a atribuye competencia exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma en lo relativo a los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, se hizo efectiva la transferencia en Administración de Justicia desde la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, localizándose orgánicamente en el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.

Hay que tener en cuenta que la norma fundamental en la materia, esto es, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada en el 2003 y, últimamente, por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, coloca al lado de la

oficina judicial la unidad administrativa a la que corresponderá la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos, medios informáticos y demás medios materiales, atribuyéndose en el artículo 456.3 al Secretario judicial las conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que se remite la Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, en su artículo 770 y siguientes regula las demandas de separación y divorcio, disponiendo que se sustanciarán por los trámites de juicio verbal, pudiendo las partes, de común acuerdo, solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación.

Es preciso, por tanto, reconocer al lado de la mediación extrajudicial la mediación intrajudicial como instrumento de apoyo y colaboración a la labor jurisdiccional desarrollada por Juzgados y Tribunales. Cuando ya se ha iniciado un proceso judicial de nulidad, separación o divorcio, el Juez puede decretar la suspensión de actuaciones si advierte que existen posibilidades reales de que las partes puedan llegar a un acuerdo y, para valorarlas, es importante que cuente con un coordinador de mediación que explore e informe.

La ley se compone de un total de treinta y cuatro artículos, estructurados en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El Capítulo I recoge las disposiciones de carácter general, el objeto y el concepto de la mediación familiar, remarcando su carácter extrajudicial y consensuado, y los conflictos susceptibles de mediación familiar, haciéndola extensiva a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares. El ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a las mediaciones familiares que se efectúen por mediadores designados por el departamento del Gobierno de Aragón competente en mediación familiar. En el proceso de mediación destaca el interés superior de los menores de edad y la protección a las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia. Este Capítulo también establece los fundamentos de la mediación familiar y analiza los principios generales por los que se rige, refiriéndose a la voluntariedad de las partes, no solo para iniciar

y poner fin al procedimiento sino también para desistir de él en cualquier momento. La igualdad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, carácter personalísimo y buena fe se enumeran como fundamentos básicos de todos los procesos de mediación.

El Capítulo II está dedicado al mediador familiar, regulándose los requisitos de titulación, formación y experiencia que éste debe cumplir, así como sus derechos y deberes.

El Capítulo III hace referencia a las fases a lo largo de las cuales se desenvuelve el procedimiento de la mediación, desde la reunión inicial al acta final, así como las funciones que debe desempeñar el mediador familiar en el ejercicio de su actuación. Se estima adecuado y suficiente que el plazo de duración del proceso de mediación sea de sesenta días, susceptibles de prórroga si se producen determinadas circunstancias que lo aconsejen, sin perjuicio de las especialidades en plazos de la mediación iniciada por la Autoridad Judicial. También trata de la sesión informativa previa a la que los Jueces pueden derivar a las partes. Se establece, además, la prohibición de acudir a mediación familiar cuando se esté incurso en determinados procesos penales o cuando se advierta la existencia de indicios de violencia doméstica o de género. Finalmente, se regulan los casos en que los acuerdos alcanzados por las partes deben ser ratificados judicialmente.

El Capítulo IV establece la organización administrativa y las competencias y funciones en materia de mediación familiar, erigiendo como órgano administrativo responsable del servicio de mediación familiar al departamento del Gobierno de Aragón que tenga atribuidas las competencias en el área de mediación familiar. Se permite que los Colegios Profesionales puedan llegar a colaborar en diferentes momentos. Se crea también el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos establecidos en la ley. A su vez, se señalan los supuestos en los que el servicio de mediación tendrá carácter gratuito y cuándo será abonado por los interesados, de acuerdo a las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

Finalmente, el Capítulo V describe el régimen de infracciones y sanciones en que puede incurrir el mediador familiar.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— *Objeto.*

La presente ley tiene por objeto regular la mediación familiar en Aragón como un servicio social especializado que pretende facilitar la resolución de conflictos derivados tanto de rupturas matrimoniales o de pareja como de cualquier otra problemática de carácter familiar.

Artículo 2.— *Concepto de mediación familiar.*

Por mediación familiar se entenderá, a efectos de la presente ley, el servicio social consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado, en el que la persona mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, con el fin de promover la toma de decisiones consensuadas.

Artículo 3.— *Ámbito de aplicación.*

1. La presente ley será de aplicación a las mediaciones familiares que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón por mediadores familiares designados desde el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Para poder solicitar las actuaciones del servicio de mediación familiar, al menos una de las personas en situación de conflicto familiar debe tener residencia efectiva en Aragón.

Artículo 4.— *Servicios de mediación familiar.*

1. Existirá un servicio de mediación familiar, adscrito al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón, que tendrá como finalidad la prestación de este servicio social de mediación en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley, así como proporcionar asesoramiento, ayuda y formación a las personas y entidades relacionadas con la materia.

2. Cuando la mediación se realice por iniciativa propia de los colegios profesionales, corporaciones locales u otras entidades públicas o privadas, se estará a lo dispuesto en su normativa reguladora.
3. Las mediaciones realizadas por particulares no inscritos en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón se regularán por la legislación correspondiente al ejercicio de su actividad profesional.

Artículo 5.— *Conflictos susceptibles de mediación familiar.*

1. La mediación regulada en la presente ley podrá referirse a cualquier conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho privado.
2. Específicamente, la intervención del mediador familiar tendrá por objeto alguno de los siguientes aspectos:
 - a) Conflictos nacidos como consecuencia de una ruptura de pareja, existan o no menores afectados.
 - b) Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad familiar o, en su caso, patria potestad y del régimen de guarda y custodia de los hijos.
 - c) Diferencias en lo relativo al régimen de relación de los menores con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.
 - d) Situaciones derivadas de crisis de convivencia en el seno del matrimonio o de la pareja.
 - e) Desavenencias referentes a las relaciones entre personas mayores y sus descendientes.
 - f) Conflictos entre los miembros de la unidad familiar donde sea de aplicación la normativa de derecho internacional.
 - g) Los datos de las personas adoptadas relativos a sus orígenes biológicos, en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico, alcanzada la mayoría de edad, o durante su minoría de edad representadas por sus padres o quienes ejerzan su autoridad familiar.

Salvo en los supuestos debidamente justificados, en los que esté en peligro la vida o la integridad física o moral de

la persona adoptada, no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.

- h) Problemáticas referidas al Derecho civil patrimonial o a la empresa familiar.
- i) Cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa de muerte.

Artículo 6.— *Alcance de la mediación familiar.*

1. La intervención del mediador familiar podrá versar sobre cualquier materia de Derecho privado susceptible de ser planteada judicialmente.
2. El proceso de mediación velará sobre todo por el interés superior de los menores de edad y protegerá a las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia.

Artículo 7.— *Principios generales de la mediación familiar.*

Los principios generales que fundamentan la mediación son los siguientes:

- a) Voluntariedad: el principio básico de la mediación es la voluntariedad, de manera que las partes, de forma completamente autónoma, deciden compartir las cuestiones familiares contenciosas con un tercero, siendo libres para desistir, en cualquier momento, de la mediación requerida.
- b) Igualdad: ambas partes tienen los mismos derechos y obligaciones en el desarrollo del proceso de mediación.
- c) Confidencialidad: todas las actuaciones que se deriven del proceso de mediación serán secretas y confidenciales, respetando la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. Las partes no podrán solicitar la declaración en juicio del mediador familiar en calidad de perito o testigo, salvo que la Autoridad Judicial así lo disponga en función de la aplicación de la legislación específica correspondiente.
- d) Transparencia: la comunicación entre las partes y el mediador familiar ha de estar regida por la mutua confianza entre

ellos y la claridad y veracidad en el intercambio de información, a través de un procedimiento que facilite el diálogo y la participación.

- e) Imparcialidad: el interés que se pretende proteger es el equilibrio entre las partes y la igualdad de oportunidades entre ellas, fundamentado en una actuación del mediador familiar completamente equitativa.
- f) Neutralidad: las partes deben llegar a un acuerdo de manera independiente y consensuada, sin que el mediador familiar pueda imponer soluciones o medidas concretas, ni influir en las decisiones de las partes en conflicto.
- g) Flexibilidad: la mediación no está sujeta a formas concretas de procedimiento sino que, al contrario, impregna su espíritu la ausencia de formalismos, lo que facilitará la consecución de acuerdos, sin perjuicio del respeto a las normas mínimas exigidas en la presente ley.
- h) Carácter personalísimo: es obligado para las partes acudir personalmente a las sesiones, sin que puedan celebrarse a través de representantes o intermediarios.
- i) Buena fe: el principio de buena fe entre los participantes fundamenta por completo el proceso de mediación.

CAPÍTULO II

EL MEDIADOR FAMILIAR

Artículo 8.— *El mediador familiar.*

1. El mediador familiar deberá poseer una titulación universitaria y acreditar la formación específica en mediación, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. La homologación de entidades susceptibles de impartir la formación en mediación familiar a que se refiere el apartado anterior, así como la aprobación de los correspondientes programas docentes, corresponderán al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón.

3. Las personas que reúnan los requisitos de titulación y formación específica para prestar el servicio de mediación familiar se inscribirán en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

Artículo 9.— *Derechos del mediador familiar.*

El mediador familiar tiene los siguientes derechos:

- a) Rechazar las solicitudes de mediación cuando, por causas razonadas, se presuma que no van a alcanzarse los fines perseguidos por ésta.
- b) Dar por finalizada la mediación cuando existan motivos que demuestren la ineficacia del procedimiento.
- c) Actuar con independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones.
- d) Solicitar la asistencia de técnicos y colaboradores cuando su presencia sea indispensable para garantizar los objetivos de la mediación.
- e) Recibir de las partes los antecedentes administrativos y judiciales que se consideren necesarios para el buen desarrollo del procedimiento.
- f) Percibir los honorarios que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 10.— *Deberes del mediador familiar.*

El mediador familiar tiene los siguientes deberes:

- a) Intervenir en los procedimientos de mediación que le sean derivados desde el departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón en los términos que señala la presente ley.
- b) Facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos y compromisos entre las partes.
- c) Cumplir con las normas deontológicas que se establezcan por su colegio o asociación profesional.
- d) Garantizar una imparcialidad y neutralidad absolutas.

- e) Mantener la confidencialidad necesaria sobre la información obtenida durante el procedimiento de mediación, excepto si comporta amenaza para la vida o integridad física o psíquica de una persona.
- f) Salvaguardar sobre todo el interés superior de los menores de edad y atender a las especiales circunstancias de las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia.
- g) Abstenerse de intervenir cuando exista, con cualquiera de las partes, relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o se tenga o se haya tenido algún tipo de relación personal, afectiva o profesional que menoscabe el ejercicio de sus funciones.
- h) Informar a las partes sobre el coste o gratuidad, en su caso, del servicio de mediación.
- i) Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales los casos en que pueda apreciarse que, por alguna de las partes, se esté cometiendo cualquier actuación ilícita.
- j) Abstenerse de intervenir cuando tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de la mediación.
- k) Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones.

Artículo 11.— *Responsabilidad del mediador familiar.*

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley, siempre que comporte una actuación u omisión constitutiva de alguna de las infracciones administrativas previstas en su Capítulo V, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, previa tramitación del oportuno procedimiento.

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 12.— *Momento para plantear la mediación familiar.*

El proceso de la mediación podrá plantearse:

- a) Antes de iniciar cualquier actuación judicial.
- b) Durante el desarrollo de cualquier actuación judicial, momento en el cual el proceso judicial podrá quedar suspendido.
- c) Después de haber finalizado el proceso judicial.

Artículo 13.— *Inicio de la mediación familiar.*

1. La mediación podrá iniciarse:

- a) Por solicitud escrita de ambas partes.
- b) A iniciativa de una de las partes. En este supuesto, la otra parte deberá manifestar su aceptación dentro del plazo de quince días hábiles desde que se la haya citado a tal efecto.
- c) A instancia de la Autoridad Judicial.

2. No podrá llevarse a cabo una nueva mediación sobre el mismo objeto hasta que no transcurra el plazo de un año desde que la anterior fue intentada, salvo que hubiera concluido sin acuerdos o que la Autoridad Judicial determine que deba practicarse de nuevo por concurrir especiales circunstancias familiares que así lo aconsejen.

3. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar cuando se esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de la otra parte o de los hijos o hijas, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando por la Autoridad Judicial se advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Artículo 14.— *Especialidades de la iniciación de la mediación familiar por la Autoridad Judicial.*

1. En los procesos de nulidad, separación o divorcio y en los que versen sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil, la competencia para la organización y funcionamiento de la iniciación de las actuaciones de mediación intrajudiciales en Juzgados y Tribunales reguladas en este artículo corresponderá al departamento con competencia en la Administración de Justicia.
2. En el supuesto del apartado anterior, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre las partes, proponerles una solución de mediación. Asimismo, el Juez podrá acordar la asistencia de las partes a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.
3. La sesión consistirá en una reunión de las partes con un técnico especializado dependiente del departamento competente en materia de Justicia, que les informará sobre las ventajas que supone la figura de la mediación familiar, especialmente para los hijos menores de edad, así como del procedimiento y características del proceso de mediación.
4. Las partes podrán acudir a la sesión informativa previa asistidas por sus respectivos abogados.
5. Celebrada la sesión informativa, las partes podrán solicitar al Juez la suspensión del procedimiento, que será acordada por el Secretario Judicial con arreglo a la norma procesal civil, por el tiempo necesario para someterse a mediación familiar. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.
6. Si las partes acuerdan someterse a mediación familiar, ésta se realizará siguiendo el procedimiento establecido en los artículos siguientes para la mediación extrajudicial, realizándose las actuaciones procedentes en coordinación con el técnico especializado dependiente del departamento competente en materia de Justicia.

Artículo 15.— *Designación del mediador familiar.*

1. El mediador familiar será designado, en los términos que se determinen reglamentariamente, por el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón entre las personas que figuren inscritas en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.
2. El ejercicio de la intervención regulado en el artículo 5.2.g) de esta ley será realizado por el órgano competente en protección de menores.

Artículo 16.— *Reunión inicial.*

1. El mediador familiar convocará a las partes a una primera reunión en la que les explicará, de manera comprensible, el procedimiento, los principios y los efectos de la mediación familiar, así como el coste o gratuidad del servicio.
2. En la reunión inicial, el mediador familiar y las partes deberán acordar las cuestiones que tienen que examinarse y planificar el desarrollo de las sesiones que puedan ser necesarias.
3. De la reunión inicial se expedirá un acta, en la cual se expresará el lugar y la fecha de inicio, la identificación de las partes y del mediador familiar y los datos más relevantes relacionados con el proceso de mediación.
4. El acta será firmada por las partes y el mediador familiar, entregándose un ejemplar a cada una de ellas. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial, el mediador familiar le hará llegar a ésta una copia del acta inicial de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 17.— *Funciones del mediador familiar.*

Durante el proceso de mediación, el mediador familiar debe desempeñar las siguientes funciones:

- a) Restablecer la comunicación entre las partes en conflicto, posibilitando cualquier tipo de intercambio constructivo que conduzca a resoluciones consensuadas.
- b) Procurar un compromiso de acción posterior que permita llevar a la práctica los acuerdos alcanzados, con especial

significación de los que se refieran a su responsabilidad coparental.

- c) Facilitar los mecanismos adecuados que establezcan una función preventiva ante el conflicto en gestación, recordando en lo posible los daños emocionales producidos entre los miembros de la unidad familiar, con especial atención a los menores.

Artículo 18.— *Duración de la mediación familiar.*

1. La duración de la mediación estará en función de las características del proceso y de su evolución sin que, en principio, pueda exceder de sesenta días, a contar desde la reunión inicial. Mediante propuesta razonada del mediador familiar, se podrá acordar una prórroga de la misma por el tiempo necesario para conseguir los fines de este procedimiento.
2. El mediador familiar podrá interrumpir el procedimiento o dar por finalizada la mediación cuando se observen indicios que permitan concluir que el proceso de mediación no está consiguiendo los fines previstos en esta ley.
3. En el supuesto de iniciación por la Autoridad Judicial, la duración no podrá exceder del plazo de suspensión del procedimiento acordado judicialmente o previsto en la legislación procesal.

Artículo 19.— *Final de la mediación familiar.*

1. La finalización del procedimiento de mediación se producirá cuando las partes alcancen un acuerdo total o parcial, cuando cualquiera de ellas desista de la mediación o cuando así lo decida razonadamente la persona mediadora por concurrir alguno de los siguientes supuestos:
 - a) Falta de colaboración de alguna de las partes.
 - b) Incumplimiento por alguna de las partes de las condiciones establecidas.
 - c) Inasistencia no justificada de alguna de las partes.
 - d) Cuando considere que el procedimiento no conseguirá los objetivos de la mediación.

2. Las actuaciones finalizarán con un acta en la que se harán constar los siguientes extremos:
 - a) Lugar, fecha de comienzo y finalización de la mediación y número de sesiones.
 - b) Identificación de las partes, del mediador familiar y de aquellas otras que hayan podido intervenir en el procedimiento.
 - c) Síntesis del conflicto y acuerdos alcanzados.
 - d) Imposibilidad, en su caso, de alcanzar acuerdos.
 - e) Otras observaciones y circunstancias que se estimen convenientes.
3. Del acta final se entregará un ejemplar a cada una de las partes. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial, el mediador familiar le hará llegar a ésta una copia del acta final de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 20.— Ratificación judicial de los acuerdos.

1. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar, cuando se refieran a rupturas de la convivencia de los padres, deberán ser aprobados por el Juez, en los términos que, para el pacto de relaciones familiares, establece el artículo 3 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
2. Tratándose de acuerdos sobre materias distintas, las partes podrán elevarlos a escritura pública o solicitar la homologación judicial de los mismos por el tribunal que conociere del litigio al que se pretende poner fin.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 21.— *Órgano competente en materia de mediación familiar.*

1. El departamento del Gobierno de Aragón responsable del servicio de mediación familiar será aquel que tenga atribuidas las competencias en mediación familiar, sin perjuicio de las que correspondan al departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia.
2. Los colegios profesionales podrán colaborar en la consecución de los objetivos de esta ley en las condiciones que se determinen.

Artículo 22.— *Funciones del departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón.*

Corresponden al departamento competente en mediación familiar del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las que correspondan al departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia, las siguientes funciones:

- a) Regular y evaluar el procedimiento y las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la mediación familiar.
- b) Gestionar el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.
- c) Establecer las retribuciones de las personas mediadoras que presten sus servicios a través del Registro de Mediadores Familiares de Aragón.
- d) Adjudicar los casos de mediación a las personas inscritas en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.
- e) Homologar a las entidades autorizadas para impartir la formación necesaria para el desempeño de las funciones de mediador familiar.
- f) Promover y difundir la figura de la mediación en el ámbito familiar.
- g) Fomentar la colaboración con colegios profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales y

otras entidades públicas para facilitar el desarrollo de la mediación familiar.

- h) Elaborar conjuntamente con el departamento competente en materia de Administración de Justicia una memoria anual sobre los resultados de la aplicación de la mediación familiar en Aragón.

Artículo 23.— *Registro de Mediadores Familiares de Aragón.*

1. Se crea el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, adscrito al departamento competente en mediación familiar. Reglamentariamente se establecerá su sistema de organización y funcionamiento.
2. El servicio de mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se prestará por los profesionales inscritos en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.
3. El personal técnico en mediación familiar al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón atenderá los casos, situaciones y supuestos que se determinen.

Artículo 24.— *Coste de la mediación familiar.*

1. El servicio de mediación será gratuito en los siguientes casos:
 - a) En aquellos casos que, en atención a la concurrencia de especiales circunstancias económicas o sociales de los interesados, así lo determine el departamento competente en mediación familiar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - b) En el supuesto de iniciación de la mediación por la Autoridad Judicial, los solicitantes deberán tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita conforme a su normativa reguladora.
2. En cualquier otro supuesto, el servicio será abonado por los interesados según las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 25.— *Definición y tipos de infracciones.*

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la presente ley que sean imputables a la persona mediadora en el ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que pueda incurrir.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves.

Artículo 26.— *Infracciones leves.*

Constituyen infracciones leves:

- a) No comunicar al Registro de Mediadores Familiares de Aragón la información correspondiente en la forma que se determine reglamentariamente.
- b) No informar a las partes, con carácter previo al inicio del proceso, sobre el coste de la mediación en los supuestos de no gratuidad.
- c) No entregar a las partes una copia de las actas inicial y final.
- d) Incumplir cualquier deber de los señalados en el artículo 10 de la presente ley, cuando dicho incumplimiento no esté calificado como infracción grave o muy grave.

Artículo 27.— *Infracciones graves.*

Constituyen infracciones graves:

- a) Rechazar la iniciación o abandonar la función mediadora iniciada, cuando no concurra causa justificada.
- b) Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención.
- c) Incurrir en grave falta de respeto hacia las partes sometidas a mediación.

- d) Excederse, sin causa justificada, del plazo fijado en el artículo 18 de la presente ley para el desarrollo del proceso de mediación.
- e) Cometer la tercera falta leve en el término de un año.
- f) No dar respuesta a las quejas o reclamaciones debidamente presentadas.

Artículo 28.— *Infracciones muy graves.*

Constituyen infracciones muy graves:

- a) Cobrar compensaciones económicas u honorarios o gastos por la actividad mediadora en aquellos supuestos en que las partes tengan reconocida la gratuidad de la misma.
- b) Ejecutar actos que supongan una discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las partes sometidas a mediación.
- c) Abandonar la función mediadora sin causa justificada, si además comporta un grave perjuicio para las personas menores implicadas en el proceso y las personas dependientes.
- d) Incumplir el deber de confidencialidad y secreto profesional.
- e) Incumplir los deberes de neutralidad e imparcialidad regulados en esta ley.
- f) Adoptar acuerdos manifiestamente contrarios a Derecho que causen perjuicio grave a las partes sometidas a la mediación.
- g) Cometer una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor haya sido sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas graves en el término de un año.
- h) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello o ejercer la mediación familiar prevista en la presente ley sin estar inscrito en el Registro de Mediadores Familiares de Aragón.

- i) Comenzar o proseguir la mediación en aquellos supuestos expresamente excluidos en el artículo 13.3 de la presente ley.

Artículo 29.— Prescripción de las infracciones.

Las infracciones contempladas en la presente ley prescribirán a los seis meses si son leves, al año si son graves y a los dos años si son muy graves.

Artículo 30.— Sanciones.

1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:
 - a) Apercibimiento o amonestación por escrito.
 - b) Multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:
 - a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre tres meses y un año.
 - b) Multa desde 301 hasta 6.000 euros.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:
 - a) Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre un año y un día y tres años.
 - b) Multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.

Artículo 31.— Graduación.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

- a) La gravedad del perjuicio psíquico, moral o económico ocasionado a las partes del procedimiento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
- b) El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión.
- c) El beneficio económico obtenido por la persona infractora, de forma que la sanción que se le imponga no sea inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción.

- d) La trascendencia social de la infracción.
- e) La reincidencia o reiteración cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción. Se entenderá que existe reincidencia cuando se haya cometido, en el término de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, declarado así por resolución firme en vía administrativa.
- f) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por la Administración.
- g) La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el procedimiento.

Artículo 32.— *Órgano competente.*

La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponderá, en caso de faltas leves, al director general competente en mediación familiar y, en caso de faltas graves y muy graves, al consejero competente en dicha materia.

Artículo 33.— *Prescripción de las sanciones.*

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Artículo 34.— *Procedimiento sancionador.*

La tramitación de los expedientes sancionadores derivados de la comisión de infracciones previstas en la presente ley se ajustará al procedimiento general establecido para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional primera.— *Difusión de información sobre el servicio de mediación familiar.*

Por parte de los departamentos competentes en materia de mediación familiar y de Administración de Justicia se realizarán las actuaciones oportunas para difundir la información sobre el servicio de mediación familiar por todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional segunda.— *Términos genéricos.*

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley se entenderán referidas también a sus correspondientes en femenino.

Disposición adicional única.— *Designación de mediadores familiares.*

Mientras no esté en funcionamiento el Registro de Mediadores Familiares de Aragón, las mediaciones de carácter gratuito a que se hace referencia en la presente ley se efectuarán por el servicio de mediación que gestiona la Dirección General de Familia.

Disposición final primera.— *Desarrollo reglamentario.*

Se autoriza al departamento competente en mediación familiar a aprobar las órdenes de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para su correcta aplicación.

Disposición final segunda.— *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial de Aragón*.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Abandono

- Familia, art. 245
- Hijos, art. 301
- V. «desamparo»

Abolorio

- Bienes de, 591
- Bienes troncales de, 526, 527
- Derecho de, 588 a 598

Abuelos

- Autoridad familiar, 63, 86, 88, 89
- Bienes de abolorio, 589
- Bienes troncales de abolorio, 527
- Deber de crianza y educación, 63, 88
- Designación de tutela o curatela, 121
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Preferencias, 86
- Relación con los, 60, 75, 77, 79
- Sucesión a favor de otros ascendientes, 530
- Tutores, 134

Abuso (s)

- Disposición abusiva de capital común, 226
- Medidas para impedir los, 45-9
- Salvaguardias para impedir los, 36

Accesiones

- Bienes privativos, 211
- Deber de restitución del indigno, 331

Acción

- De anulabilidad de los actos de disposición sobre la vivienda familiar, 190
- De anulabilidad del testamento, 427
- De anulabilidad por falta de asistencia del curador, 45-1, 145
- De anulabilidad, 19, 22, 29, 45 a 45-6

- De los acreedores y legitimarios, 214
- De petición de herencia, 55
- De privación de la autoridad familiar o del cargo tutelar, 155
- De regreso entre coherederos, 372
- De rendición de cuentas por el tutor, 142
- De rendición de cuentas por los padres, 99
- De responsabilidad del cargo tutelar, 110
- De responsabilidad paterna, 96
- De restitución de la cosa vendida, 235
- Declarativa de la incapacidad relativa, 475
- Declarativa de la indignidad, 333
- Del administrador en la fiducia, 452
- Del comprador, 235
- Derecho de abolorio, 594, 595
- Derecho transitorio, DT15^a
- Nulidad del testamento, 426
- Por infracción de la legítima, 493
- Venta de cosa común por un cónyuge, 235

Acciones en sociedades

- V. «sociedades»

Aceptación

- De atribuciones gratuitas, 14
- De la excusa, 128
- De las funciones tutelares y las medidas de apoyo, 102
- Del cargo de administrador en sociedades, 33

Aceptación de la herencia

- Adquisición de la herencia, 322
- Capacidad, 346
- Caracteres, 343
- Diversidad de llamamientos, 344, 345

- En la sucesión paccionada, 342, 385, 396
- Expresa, 349
- Formas, 349
- Interpelación, 348
- Libertad para la, 342
- Nula (a plazo o condicionalmente), 343
- Parcial, 345
- Por las personas jurídicas, 347
- Por los acreedores, 353
- Tácita, 349, 350
- Transmisión del derecho, 354
- Sucesión a favor de otros ascendientes, 530

Acreedores

- Aceptación de la herencia, 353
- Carga de la prueba, 281
- Derechos antes de la partición, 369, 370
- Derechos después de la partición, 371
- Disuelto el consorcio conyugal, 252
- Embargo de bienes del heredero, 358
- Formas de pago, 361
- Institución de presente, 391
- Legatarios, 477
- Pago de deudas y legados, 360
- Preferencia sobre los privativos, 224
- Preferencias, 359
- Privativos, 224
- Reconocimiento de privatividad, 214
- Repudiación en perjuicio de, 353
- V. «concurso de acreedores»

Acogimiento

- Disolución, 202
- Familiar, 163 a 167, 328
- Institución familiar consuetudinaria, 201
- Modalidades de, 161
- Residencial, 160, 161
- Temporal, 148

Acogimiento familiar

- Cese, 167
- Contenido y ejercicio, 163
- De urgencia, 165
- En hogar funcional, 163, 164
- Formalización, 164
- Modalidades de, 165
- Modificación, 160
- Permanente, 165
- Preferencias, 161
- Simple, 165

Acrecer

- V. «derecho de acrecer», «acrecimiento».

Acrecimiento

- Consorcio foral y viudedad, 278
- Consorcio foral, 374
- Derecho de transmisión, 354
- Disposición a favor del alma o pobres, 473
- Ineficacia del llamamiento legal, 520
- Sucesión a favor de los padres, 529

Acta

- Acuerdos Junta de Parientes, 175
- Declaración de notoriedad, 169-13
- Mandato de apoyo a la persona con discapacidad, 169-1

Acta de notoriedad

- Acreditación de pareja estable no casada, 305
- Acreditación de la guarda de hecho, 169-13
- Ejercicio de profesión o negocio, 231, 280

Activo

- Consorcio conyugal, 210 a 217
- Inventario, 261, 262
- Liquidación concursal, 264
- Liquidación ordinaria, 265
- V. «bienes comunes», «bienes privativos»

Actos de administración

V. «Administración de bienes»

Actos de conservación

- Cargas hereditarias, 356
- En la fiducia, 451
- Herencia yacente, 324
- No suponen aceptación tácita, 350
- Usufructo, 294

Actos de disposición

V. «disposición de bienes»

Actos del representante legal que necesitan autorización o aprobación

- Actos de disposición, 15
- Autorización en caso de tutela o curatela, 16, 169-24
- Concesión de la autorización o aprobación, 18, 169-25
- División de patrimonio o cosa común, 17
- Emancipación por concesión, 30
- Falta de autorización o aprobación, 19, 45-1
- Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad, 20
- Prestación personal, 21

Actos irrevocables

- Aceptación y repudiación de la herencia, 343
- Ejecución de la fiducia, 458
- Emancipación por concesión, 30
- Reconciliación o perdón al indigno o desheredado, 322, 511

Actos jurídicos

- Aceptación tácita de la herencia, 349, 350
- Adquisición de bienes por la Comunidad Autónoma, 598 bis
- Alera foral, 582
- Apoyo urgente para el ejercicio de su capacidad jurídica, 45-8

- De administración, 9, 12, 26, 33, 39, 49, 50, 92, 94 a 99, 104, 105, 112, 135, 138, 149, 191, 205, 207, 208, 209, 229, 243, 246, 253, 254, 292, 324, 347, 350, 452
- De conservación, 294, 324, 350
- De defensa, judicial o extrajudicial, 230
- De disposición, 9, 12 a 19, 23, 92, 94, 118, 138, 190, 205, 214, 219, 226, 230, 236, 238, 242, 243, 246, 254, 255, 280, 282, 299, 300, 347, 368, 374, 454, 458
- De ejecución de la fiducia, 347, 368, 374, 454, 458
- De la persona con discapacidad, 169-20
- De la vida civil, 4
- De mera tolerancia, 537, 538
- De modificación inmobiliaria, 230
- De partición o división, 211, 225, 228, 258, 260, 267, 268, 270, 280, 368
- De previsión, 212
- De última voluntad, 368
- De vigilancia, 324, 350
- Derecho transitorio, DT9^a
- En las relaciones de vecindad, 537
- Entre vivos, 284, 368, 456, 458
- Irrevocables, 30, 332, 343, 458
- Llamamiento a la Junta de Parientes, 170, 182
- Medidas de la entidad pública, 45-8
- Necesarios en la guarda de hecho, 149
- Peligrosos para la economía familiar, 241
- Personalísimo, 407
- Por causa de muerte, DT14^a
- Que exceden la administración ordinaria, 246
- Que no implican aceptación, 324
- Relativos a derechos de la personalidad, 7, 12, 20, 24, 40, 43, 45

- Renuncia expresa, 280, 301
- Revocable, 406
- Separados, 368
- Solemne, 407
- Unilaterales, 343, 406
- Validez de los actos jurídicos de la persona con discapacidad, 41

Actos y contratos

- Capacidad, 7, 20, 23, 24, 33, 34
- De la persona con discapacidad, 42, 169-22, 169-24 a 169-26
- Del menor mayor de catorce años, 23
- Del menor mayor de catorce años con discapacidad, 39
- Del menor que no necesitan representación o asistencia, 7
- Derecho transitorio, DT9^a
- En capítulos matrimoniales, 199
- Invalidez e ineficacia, 22, 29, 45 a 45-6
- Propios de la vida corriente del menor, 7

Acuerdo

- Crianza y autoridad familiar de los padres, 71, 75, 77
- De división, 496
- De indivisión, 365
- De los vecinos, 537
- De separación de hecho, 531
- Determinación del domicilio familiar, 184
- Disolución del consorcio foral, 376
- Entre colindantes, 540
- Extinción pareja estable no casada, 309
- Fiducia colectiva, 443, 460
- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
- Junta de Parientes, 174 a 179
- Liquidación y división del consorcio, 259
- Mediación familiar, 75, 78, DT7^a
- Pacto de relaciones familiares, 77

- Para llamar a la Junta de Parientes, 170
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Sobre el contenido de las servidumbres, 556, 565

Adempros

- Comunidades en mano común, 585
- Comunidades *pro diviso*, 586
- Derechos reales de aprovechamiento parcial: 584
- Pastos, leñas y demás aprovechamientos tradicionales, 584 a 587

Adjudicación de bienes

- En la liquidación del consorcio conyugal, 238, 267
- En la partición o división, 211
- En proindiviso, 259
- Exceso de, 211, 280
- Proindiviso a los coherederos, 366
- Responsabilidad tras la división del consorcio, 268
- Vivienda y ajuar familiar, 81

Administración de bienes

- Actuación conjunta, 233
- Actuación frente a terceros, 232
- Aprobación de cuentas, 99, 142 a 144
- Autorización judicial, 234
- Comunes, 229 a 242
- Con mandato, 191, 207, 208, 243
- Contra la voluntad del otro, 208
- De la persona con discapacidad, 169-12, 169-21, 169-22
- Del ausente, 49, 50
- Del mayor de edad sin aptitud, 45-5
- Del menor, 152
- Del menor emancipado, 33
- Del menor no emancipado, 9, 12, 13, 26, 92, 94 a 99
- Del pupilo, 105, 135, 138
- Deudas de, 219
- Disolución del consorcio por muerte, 253

- Disolución del consorcio por otras causas, 254
- Ejercicio de profesión o negocio, 231
- Extraordinaria, 233
- Fiducia sucesoria, 449, 452
- Hereditarios, 326, 350, 388, 442, 448, 449, 452
- Herencia yacente, 324
- Medidas provisionales, 246
- Ordinaria, 230, 246
- Patrimonio especial de las personas con discapacidad, 45-7
- Persona jurídica, 347
- Por el guardador de hecho, 149
- Por el usufructuario, 292
- Privativos, 243
- Régimen de separación, 205
- Voluntaria, 112

Administración ordinaria

- De bienes del patrimonio común, 230
- Desempeño corriente de la profesión, 219
- Deudas de, 219
- Exceso: medidas provisionales, 246
- Explotación regular de los negocios, 219
- Extraordinaria, 233

Administrador judicial

- Administración y disposición, 9
- Tutela provisional, 132

Administrador voluntario

- Administración y disposición, 9
- Contribución a las cargas de la tutela, 140
- Ejercicio de la tutela plural, 139
- Oposición de intereses, 28
- Preferencia para ser tutor o curador, 121
- Régimen de la gestión, 112
- Tutela y administración, 135

Adopción

- Equiparación de los hijos adoptivos, 56
- Equiparación de parientes adoptivos, 472
- Extinción de la autoridad familiar, 93
- Extinción de la tutela, 141
- Filiación adoptiva, 56
- Guarda con fines de, 166
- Parejas estables no casadas, 312
- Propuesta de a. de la entidad pública, 154

Adquisición a título gratuito (o lucrativo)

- Acrecimiento consorcial, 278
- Administración voluntaria, 112
- Bienes comunes, 210
- Bienes privativos, 211
- Bienes troncales simples, 528
- Consorcio foral, 373
- Herencia, 322, 397
- Legado, 477
- Patrimonio del menor, 8
- Por ambos cónyuges, 211
- Por causa de muerte, 211
- Por derecho de transmisión, 278
- Por el hijo menor, 94
- Por el menor, 8, 14, 26
- Por el pupilo, 118, 135
- Prohibiciones de adquirir por causa de muerte, 475
- Régimen de separación, 205
- Sucesión a favor del cónyuge, 395, 419, 438, 531

Adquisición a título oneroso

- Acciones o participaciones en sociedades, 210, 267
- Bienes comunes, 210
- Bienes privativos, 211
- Con el trabajo o industria del menor, 26
- Créditos de terceros contra el tutelado, 16

- De bienes del tutelado, 16
- De bienes del tutor, 16
- De bienes inmuebles por el menor, 15
- Patrimonio del menor, 8
- Por uno solo de los cónyuges, 239
- Presunción de comunidad, 217
- Régimen de separación, 205
- Responsabilidad del bien adquirido, 222
- Subrogación, 15, 290
- Vivienda familiar, 190

Adveración

- Testamento mancomunado ológrafo, 411

Afección de bienes

- Al usufructo viudal, 283, 290, 297
- Derecho de viudedad, 449
- Gastos de los bienes del caudal relicto, 451
- Reconocimiento de privatividad, 215

Afianzar

- El representante del menor obligaciones ajenas, 15
- V. «fianza»

Afinidad

- Incapacidad para ser testigo, 415
- Prohibiciones de adquirir m. c., 475

Agermanamiento

- Institución familiar consuetudinaria, 201

Aguas pluviales

- Paso natural, 541

Ajuar familiar

- Aventajas, 266
- Derecho del conviviente supérstite, 311
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Retirada de bienes privativos, 81
- Ruptura de la convivencia, 81

Albacea

- Carácter dispositivo, 484
- Disposición a favor del alma, 473
- Disposición a favor de los pobres, 473
- Testamento mancomunado, 485

Alera foral

- Servidumbre de pastos, 582

Alícuota

V. «cuota»

Alimentos

- A la madre del hijo, 62
- A los hijos mayores o emancipados, 69
- A los hijos menores, 58, 61, 65, 69, 82, 451
- Al menor de edad, 10, 160
- Al pupilo, 124
- Deuda común, 218
- Disolución del consorcio c. por muerte, 253
- Entre convivientes no casados, 313
- Entre padres e hijos, 58
- Gastos de asistencia a los hijos, 77, 82
- Gastos no computables en la legítima, 489
- Legado de, 480
- Legales entre parientes, 218
- Legítima, 515
- Negación de, 510
- Obligación del viudo usufructuario, 298
- Pupilos, 137

Allanamiento

- Acto del representante del menor que precisa autorización, 15

Allegado (s)

- Llamamiento de no parientes, 182
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Preferencia para el acogimiento familiar, 161

- Relación personal del hijo con, 58, 75, 77, 79

Anulabilidad

- Acción de (testamentos), 19, 29, 427, 428
- Acto de la persona sin aptitud para realizarlo, 45
- Actos del representante legal sin la debida autorización, 19
- Actos del sometido a curatela sin la debida asistencia, 45-1
- Actos no necesarios ni útiles del guardador de hecho, 149
- Actos y contratos del menor mayor de catorce años sin la debida asistencia, 29
- Confirmación, 19, 29, 45 a 45-6
- Defectos en la prestación del apoyo, 45-2
- Derecho transitorio, DT2ª
- Engaño, violencia o intimidación grave y ventaja injusta, 45-6, 423, 424
- Error en la persona o en el objeto, 424, 425
- Error en los motivos, 424
- Excepciones a la anulación, 45-3, 45-5
- Falta de capacidad natural, 423
- Falta de intervención del curador o mandatario de apoyo, 45-1
- Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar por causa de, 429
- Legitimación activa, 19, 29, 45 a 45-2, 145
- Pago, 45-5
- Plazo, 19, 29, 145
- Prescripción, 19, 29, 145
- Régimen de la anulación, 45-4
- Testamento o sus disposiciones, 423 a 425
- Vivienda familiar, 190

Apellidos

- Alteración del orden, 57

- Efecto de la filiación, 57
- Eficacia limitada de la filiación, 61

Apertura de la sucesión

- A la que estuviera llamado un ausente, 55
- Capacidad sucesoria, 325, 327
- Comoriencia, 320
- Herencia yacente, 324
- Ley aplicable, DT13ª
- Lugar, 320
- Momento, 320
- Muerte o declaración de fallecimiento del ausente, 54
- Supervivencia de descendientes, 396
- Testamento mancomunado, 418
- Tiempo de indivisión, 365

Aplicación supletoria

- De las limitaciones, formalidades y responsabilidades del tutor al administrador judicial o voluntario, 9
- De las normas de los cargos tutelares a los miembros de la Junta, 171
- De las normas de los cargos tutelares a los representantes del ausente, 50
- De las reglas del poder sin mandato, 169-8

Aprobación judicial

(o de la Junta de Parientes)

- Anulabilidad por falta de, 19, 45-2
- Concesión de la, 18, 169-25
- De la rendición final de cuentas de la tutela, 143
- División de patrimonio o cosa común, 17
- Judicial cuando interviene la Junta de Parientes, 13, 17, 169-24
- Mediación familiar, 78
- No necesidad cuando el padre o tutor tiene autorización previa, 13, 17
- Pacto de relaciones familiares, 77

Arbitrio judicial

V. «Juez»

Árbol frutal

– Inmisión de raíces y ramas, 539

Árboles y plantaciones

- Árboles que amenazan caerse, 541
- Inmisión de raíces y ramas, 539
- Plantaciones, 540

Arbustos

– Plantaciones, 540

Arrendamiento

– De inmuebles, empresas o explotaciones del menor, 15

Ascendientes

- Alimentos, 298
- Bienes troncales, 527, 528
- Causas de desheredación, 510
- Causas de indignidad, 328
- Consorcio foral, 373, 374
- Derecho de abolorio, 590
- Fiducia colectiva, 459
- Instar constitución de la curatela, 169-15
- Junta de Parientes, 172
- Nombramiento del sustituto, 476 bis
- Prohibiciones de adquirir, 475
- Recobro de liberalidades, 524, 525
- Relaciones con los descendientes, 56 a 99
- Sucesión legal no troncal, 517, 529, 530
- Sucesión troncal, 526
- Viudedad del cónyuge de su descendiente, 277

Aseguramiento

- Cancelación de garantías, 452
- De las deudas pendientes, 265
- De los bienes sujetos a usufructo, 287, 297

- Derechos de los acreedores en la partición, 370
- Intervención judicial, 10

Asignación compensatoria

- Cuantía y naturaleza temporal, 77, 83
- Forma, 77, 83
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Requisitos, 83
- Revisión y extinción, 83

Asistencia

- A la persona con discapacidad, 42, 45-1, 45-2, 169-2, 169-12, 169-21, 169-22
- A la reunión de la Junta de Parientes, 176
- Actos que no precisan, 7, 23, 26, 57
- Administración de bienes por el menor, 26
- Administración voluntaria, 112
- Al cónyuge ausente o con discapacidad, 245
- Al declarado pródigo, 199, 245
- Al menor, 150
- Al menor emancipado, 33, 145, 199
- Al menor mayor de catorce años, 5, 23, 24, 25, 27, 38, 61, 99, 199, 346, 367
- Al que no haya cumplido dieciocho años, 99
- Al sometido a curatela, 145, 245, 346, 367
- Anulabilidad por el propio menor, 19, 22
- Anulabilidad por falta de asistencia, 29, 45 a 45-2
- Atención y asistencia psicológica, 72
- Deberes de padres e hijos, 58
- Expresa o tácita, 27
- Imposibilidad de prestar la, 23
- Medidas de la entidad pública, 45-8

- No puede ser genérica, 27
- Oposición de intereses, 28, 42
- Para el ejercicio de la autoridad familiar, 73
- Para una pluralidad de actos, 27, 169-22
- Petición de rendición de cuentas a los padres, 99
- Prestación de la, 27
- Previa o simultánea, 27
- Rendición de cuentas del curador, 169-30

Atribuciones gratuitas a favor del menor

- Autorización previa para aceptar donaciones modales u onerosas, 14
- Autorización previa para rechazar, 14
- Repudiación por el emancipado, 33

Ausencia

- Causa de disolución del consorcio c., 245
- De quien le viene prestando apoyo, 43
- Del fiduciario, 462
- Del menor, 156
- Derechos de terceros, 52
- Desaparición de cónyuge, 47
- Extinción del derecho expectante, 280
- Facultades y derechos del representante, 51
- Gestión del consorcio por el otro cónyuge, 242
- Legitimación activa, 48
- Legitimación del representante, 245
- Llamamiento sucesorio a favor del ausente, 55
- Obligaciones del representante, 50
- Representación del conviviente ausente, 46

- Representación del declarado ausente, 49
- Sustitución legal del llamado ausente, 336, 337, 338, 517
- Y economía del matrimonio, 53
- Y usufructo viudal, 54, 283

Autonomía privada

- Artículos, 3, 7, 9, 23, 37, 71, 77, 94, 113 a 119, 185, 187, 193, 195 a 203, 215, 221, 226, 229, 248, 258, 267, 272, 276, 283, 291, 301, 318, 368, 377, 405, 439, 462, 486

V. «pacto», «*standum est chartae*»

Autoridad competente

- Árboles que amenazan caerse, 541

Autoridad familiar

- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13
- Aceptación o repudiación de herencia, 346
- Asistencia, 23, 28
- Audiencia previa a la adopción, 166
- Caracteres, 64
- Contenido, 65
- Contribución del hijo, 66 a 68, 70
- De los padres, 63, 71 a 89, DT5ª
- De otras personas, 45-7, 63, 85 a 89
- De un menor mayor de catorce años, 38
- Desamparo del menor, 150
- Disposiciones voluntarias de la tutela o curatela, 115, 118
- Emancipación por concesión, 30
- Extinción, 93
- Gastos, daños y perjuicios, 160
- Inhabilitación para el ejercicio, 328
- Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad del menor, 20, 24
- Minoría de edad, 5

- Nombramiento de un defensor judicial, 129
- Notificación medidas de guarda de la entidad pública, 160, 161
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Privación, 90, 92, 328, 155, 510
- Prorrogada o rehabilitada, 346, 366
- Recuperación, 90
- Representación legal del menor de catorce años, 12, 12, 17, 346, 366
- Revocación declaración de desamparo, 155
- Solicitud de guarda administrativa, 158
- Suspensión, 91, 92, 151
- Titularidad, 63

Autoridad familiar de los padres

- Administración bienes del menor, 9, 26, 88, 94 a 99
- Autorización conjunta, 20, 21, 366
- Convivencia con hijos mayores de edad, 70
- Custodia individual y visitas, 80
- Derechos y obligaciones, 76
- Disposición de bienes del menor, 9, 15, 94
- Divergencias entre los padres, 74, 78, 80
- Ejercicio por ambos padres, 71, 76 a 84
- Ejercicio por uno de los padres, 72
- En caso de ruptura de la convivencia, 75 a 84
- Exclusión, 61
- Gastos de asistencia a los hijos, 82
- Gastos de los hijos mayores o emancipados, 69
- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 79, 80
- Progenitor menor no emancipado o con discapacidad, 73
- Principio de igualdad, 75, 76, 77

Autoridad familiar de otras personas

- Contribución, 68
- De los abuelos, 86
- De los hermanos mayores, 87
- Del padrastro o la madrastra, 85
- Divergencias, 89
- No se extiende a la administración y disposición, 88, 92
- Por resolución judicial, 92
- Régimen, 88

Autoridad judicial

V. «Juez»

Autorización de la Junta de Parientes

- Autorización al representante del ausente, 51
- Autorización en caso de patrimonio especial de persona con discapacidad, 45-7
- Autorización en caso de tutela, 16
- Autorización para disponer de bienes del menor de catorce años, 15, 18, 19
- Autorización para disponer de bienes del menor o persona con discapacidad, 112
- Autorización para disponer de inmuebles o establecimiento mercantiles, 242
- Autorización para disponer en la fiducia si los legitimarios son menores o sin aptitud plena, 454
- Autorización para la liquidación y división, 259
- Autorización para rechazar atribuciones gratuitas, 14
- Autorización para repudiar herencias de menores de catorce años, 346
- Exclusión de la autorización por el donante o causante, 112

Autorización judicial

- Aceptación de la herencia por los acreedores, 353
 - Actos de disposición de bienes del menor de catorce años, 15
 - Al curador, 169-24, 169-25
 - Al representante del declarado ausente, 51
 - Anulabilidad por falta de, 19
 - Aprobación cuentas de administración, 99
 - Atribuciones gratuitas, 14
 - Concesión de la, 18
 - En caso de tutela, 16
 - En la concreción automática de facultades de gestión, 242
 - En la partición, 365
 - Exclusión por el donante o causante, 112
 - Gestión de bienes consorciales, 234
 - Internamiento, 44
 - Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad, 20, 24, 43
 - Liquidación del consorcio por el viudo-fiduciario, 259
 - Nombramiento de un defensor judicial, 129
 - Oposición de intereses entre el menor y el único padre o tutor, 13
 - Para disponer en la fiducia, 454
 - Para repudiar herencias de menores de catorce años o con discapacidad, 346
 - Partición por el tutor, 366
 - Rechazo de atribución gratuita a favor del menor de catorce años, 14, 346
 - Solo judicial, 13, 20, 24, 44
 - Vivienda familiar, 190
- V. «Juez»

Autotutela/autocuratela

- Designación hecha por uno mismo, 113

- Vinculación, 119
- V. «delación de la institución tutelar»

Aval (ar)

- Bancario, 595
- El representante del menor obligaciones ajenas, 15

Aventajas

- Derechos del conviviente supérstite, 311
- Liquidación del consorcio, 266, 267

B

Balcones

- Régimen normal de luces y vistas, 545
- Servidumbre de luces y vistas, 576
- Voladizos, 548

Bienes

- Afectos al usufructo viudal, 192, 271, 274, 277, 278, 279
 - Atenciones de los, 218
 - Aventajas, 266
 - Casamiento a sobre bienes, 201
 - Comunes y privativos de los cónyuges, 210 a 217, 250
 - Del ausente, 50
 - Del desaparecido, 48
 - Del menor, 152
 - Del tutelado, 100, 108, 135, 138
 - Derecho expectante, 279 a 282
 - Distribución equitativa, 279
 - División y adjudicación, 267
 - Gestión de los, 229 a 243, 253, 254
 - Inventario, 262
 - Régimen de separación de, 203 a 209, 228, 248, 249
 - Responsabilidad de los, 219, 220, 222, 224, 225, 251, 252, 268
 - Satisfacción de las necesidades familiares, 187
 - Usufructo viudal, 283 a 302
- V. «Derecho de bienes»

Bienes comunes (o consorciales)

- Ampliación o restricción, 215
- Aventajas, 266
- Descripción, 210, 250
- Disolución por muerte, 253
- División y adjudicación, 267
- Ejecución sobre, 225
- Gestión, 229 a 242, 246, 254, 255
- Inventario, 262
- Presunción de comunidad, 217
- Reembolsos, 226
- Rendimientos de bienes de carácter personal, 212
- Responsabilidad, 219, 222, 224, 251, 252, 268
- Seguro de supervivencia, 212
- Tras la disolución del consorcio, 250

Bienes de abolorio

- Derecho de abolorio o de la saca, 589
- Sucesión troncal, 526, 527

Bienes del menor

- Aceptación o repudiación de herencia, 346
- Administración y disposición, 9, 26
- Aprobación cuentas de administración, 99
- Atribuciones gratuitas, 14
- Confiados para que los administre, 8, 26
- Contribución económica, 67, 68, 70
- Disposición, 15, 23
- Enajenación, 18
- Frutos y productos de los que se le hubieren confiado, 8
- Gestión paterna, 94 a 99
- Liquidación y división del consorcio, 260
- Partición de herencia, 366, 367
- Patrimonio del menor, 8
- Que administra el menor, sin asistencia, 26

- Que adquiera con su trabajo o industria, 26
- Representación legal, 12
- V. «gestión de los bienes de los hijos»

Bienes de origen familiar

- Adjudicación preferente, 267
- Bienes comunes, 216
- V. «bienes de abolorio»

Bienes de uso personal o profesional

- Aventajas, 266
- Derecho de adjudicación preferente, 267
- Titularidad en el régimen de separación, 206

Bienes habidos y por haber

- En pactos sucesorios, 383

Bienes inmuebles

- Adquisición por la Comunidad Autónoma, 598 bis
- Arrendamiento, 15
- Concreción automática de facultades, 242
- Consorcio foral, 373
- De abolorio, 589
- De la persona menor de catorce años, 15
- Derecho expectante, 280, 281
- Fiducia, 454
- Por naturaleza, 15, 280
- Relaciones de vecindad, 537 a 550
- Uso adecuado, 538
- Vivienda familiar, 190

Bienes muebles

- Acciones del menor, 15
- Actuación frente a terceros, 232
- Adquisición por la Comunidad Autónoma, 598 bis
- Del menor de valor extraordinario, 15
- Derecho expectante, 282
- Derechos de crédito del menor, 15

- Derechos de suscripción preferente del menor, 15
- Mobiliario ordinario de la vivienda, 190
- Objetos de arte o preciosos del menor, 15
- Presunción de titularidad individual, 206
- V. «derechos de crédito», «dinero», «valores mobiliarios».

Bienes patrimoniales de carácter personal

- Bienes privativos, 212

Bienes privativos de los cónyuges

- Adquiridos a plazo, 210
- Adquisiciones por uno solo de los cónyuges, 239
- Ajuar familiar, 81
- Atenciones de los, 218
- Contribución, 221
- De carácter personal, 212
- Deber de información recíproca, 188, 227
- Derecho expectante, 280, 281, 282
- Descripción, 211
- Disolución del consorcio por muerte, 253
- Empresas y explotaciones económicas, 210
- Fondos de inversión, 210
- Gestión, 227, 243
- Presunción de comunidad, 217
- Presunción de privatividad, 213
- Recobro de liberalidades, 524
- Reconocimiento de privatividad, 214
- Reintegros, 226
- Responsabilidad, 219, 220, 224, 268
- Restricción de la comunidad, 215

Bienes raíces

- V. «bienes inmuebles»

Bienes relictos

- Cumplimiento de la legítima, 497
- Gravámenes, 498
- Inventario, 358
- V. «caudal relicto»

Bienes sitios

- V. «bienes inmuebles»

Bienes troncales

- De abolorio, 527
- Declaración de herederos legales, 518
- Delación legal, 517, 526
- Derecho de abolorio, 589
- Simples, 528

Bínubo

- «Casamiento en casa», 201
- Autoridad familiar del padrastro o la madrastra, 85
- Extinción del usufructo viudal, 301
- Inexistencia de reserva legal, 464
- Limitaciones en la viudedad, 283
- Liquidación de varias comunidades, 269
- Pérdida de la condición de fiduciario, salvo pacto, 462

Buena fe

- Contrayente de, 4
- Cónyuge de, 249
- Mediación familiar, DT7^a
- Terceros de, 71, 189, 190, 198, 219, 232, 235
- Uso adecuado de los inmuebles, 538
- Usucapción de las servidumbres, 568, 569

C

Caducidad

- Acción de incapacidad relativa, 475
- Acción de indignidad, 333
- Acción por disposición de bienes del testamento mancomunado, 422

- Derecho de los acreedores para aceptar la herencia, 353
- Plazos de ejercicio de la fiducia, 444
- Plazos del Derecho de abolorio, 594
- Rescisión del contrato, 45-6
- Para renunciar a la legítima, 492
- Para ser fiduciario, 440
- Para ser testigo, 413, 414
- Para ser titular de funciones tutelares, 123, 124
- Para suceder, 325 a 327, 329
- Para testar, 408
- Por razón de edad, 4 a 33

Capacidad

- Del legitimario autorizante, 259, 454
- Del menor, 7
- Del pródigo, DT3ª
- Desheredación con causa legal, 511
- Ejercicio de la capacidad jurídica, 40 a 44
- Específica, 22, 45
- Exclusión absoluta de la herencia, 513
- Incapacidades relativas, 475
- Indignidad para suceder, 328, 330, 331, 332, 333
- Jurídica, 3-1, 3-2, 168, 169-1, 169-8 a 169-10, 169-15 a 169-16, 169-25
- Jurídica y medidas de apoyo, 34 a 39, 40, 41
- Mayoría de edad, 4
- Minoría de edad, 5, 7
- Natural, 7
- Para aceptar o repudiar la herencia, 346, 347
- Para la designación voluntaria de la tutela, 113
- Para la liquidación y división del consorcio c., 260
- Para la partición de la herencia, 366, 367
- Para nombrar fiduciario, 439
- Para otorgar capitulaciones, 199
- Para otorgar otros actos y contratos, 199
- Para otorgar pactos sucesorios, 378
- Para otorgar testamento mancomunado, 417

Capacidad para ser cargo tutelar

- De las personas físicas, 123
- De las personas jurídicas, 123
- Causas de inhabilidad, 124

Capacidad del menor

- Emancipado, 33
- Ejercer los derechos de la personalidad, 7
- Emancipado, 33
- Llevar a cabo actos que necesitan representación o asistencia, 7
- Mayor de catorce años, 7, 23, 40, 346, 367, 408, 439
- Mayor de catorce años con discapacidad, 38
- Menor de catorce años, 7, 12 a 22, 415
- Minoría de edad, 5
- Otorgar actos y contratos propios de la vida corriente, 7

Capacidad para suceder

- De las personas físicas, 325
- De las personas jurídicas, 327
- De personas no nacidas, 325
- Fecundación asistida *post mortem*, 325
- Momento para calificarla, 329

Capitulaciones

V. «capítulos matrimoniales»

Capítulos matrimoniales

- Capacidad, 199
- Contenido y forma, 195
- De la pareja estable que se casa, 308

ÍNDICE ANALÍTICO

- Disolución del consorcio conyugal, 244
- Idioma, 196
- Inoponibilidad a terceros, 198
- Instituciones familiares consuetudinarias, 201, 381
- Libertad de regulación, 185, 193
- Modificación de estipulaciones, 200
- Otras situaciones de comunidad, 202
- Pactos sobre el derecho de viudedad, 272
- Pactos sobre gestión, 229
- Pactos sucesorios en consideración a la casa, 381
- Prohibición de dividir, 258
- Tiempo y eficacia, 197

Cargas

- De la finca sirviente, 559
- Gravamen de la legítima, 498
- Impuestos en el testamento, 416
- Necesidades familiares, 187, 189
- Pactos sucesorios, 381, 391, 394, 401
- Pareja estable no casada, 307
- Por razón de sucesiones y donaciones, 223
- Servidumbres, 551 a 587
- Tutela, 140

V. «deudas comunes»

Cargas hereditarias

- Contenido de los pactos sucesorios, 381
- Distribución de toda la herencia en legados, 469
- En la fiducia, 450 a 453
- Enumeración, 356
- Formas de pago, 361
- Gastos de conservación y defensa de la herencia, 356
- Gastos de la última enfermedad, 356
- Gastos del funeral, entierro o incineración, 356

- Heredero «ex re certa», 467
- Incumplimiento grave, 401
- Legado de parte alícuota, 468
- Responsabilidad antes de la partición, 369
- Responsabilidad del heredero, 322, 355

Carta

- «*Standum est chartae*», 3, 185, 195, 318

Carta de gracia

- Retracto convencional, 211

Casa

- «Señorío mayor», 388
- Ajuar de, 266
- Alimentos a los que continúen en, 253
- Bienes troncales de abolorio, 527
- Casamiento en, 201
- Convivencia o no en la, 401
- Heredamiento de c. aragonesa, 388
- Instituciones familiares consuetudinarias, 201
- Juntar dos casas, 201
- Pactos en consideración a381
- Sucesión de la casa, 461

«Casamiento al más viviente»

- Institución familiar consuetudinaria, 201

«Casamiento a sobre bienes o acogimiento»

- Institución familiar consuetudinaria, 201

«Casamiento en casa»

- Institución familiar consuetudinaria, 201

Caudal relicto o hereditario

- Atribución al heredero, 466
- Caudal computable, 489
- Disposición parcial, 432

- Diversidad de llamamientos universales, 518
 - En la fiducia, 451 a 453
 - Legado de cosa cierta existente en el, 477, 479, 580
 - Limitación de la responsabilidad del heredero, 355
 - Limitación del usufructo viudal, 283
 - Pago con el c., 361
 - Preferencias, 359
 - Preterición no intencional, 508
 - Recobro de liberalidades, 529
 - Separación de patrimonios, 357
- V. «bienes relictos»

Causa justa

- Disposición abusiva de capital común, 226
- En la inmisión de raíces y ramas, 539
- Para autorizar la partición, 365
- Para gravar la legítima, 501, 502
- Para prorrogar o reducir el plazo, 286
- Para prorrogar plazo fiducia, 446
- Para prorrogar plazo inventario, 450
- Para prorrogar plazo rendición cuentas, 99, 142
- Para vivir independiente de los titulares de la potestad de guarda, 32
- Relaciones entre patrimonios conyugales, 226

Causas

- Cese de la tutela automática, 156
- Desheredación, 275, 510
- Disolución de otras situaciones de comunidad, 202
- Disolución del consorcio conyugal, 244, 245
- Disolución por otras causas, 254
- Extinción del derecho de viudedad, 276
- Extinción del mandato, 169-6
- Extinción del usufructo, 284, 301

- Incapacidad relativa, 475
- Indignidad, 276, 328
- Invalidez de la disposición testamentaria, 424
- Invalidez del testamento, 423
- Legales de desheredación, 510
- Para el mandato de apoyo, 169-1
- Para la concesión de la autorización o aprobación, 18
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Revocación unilateral, 401, 421
- Separación de bienes, 248
- Sustitución legal, 336, 337, 338, 339

Causas de extinción (o disolución)

- De la asignación compensatoria, 83
- De la condición de fiduciario, 462
- De la fiducia, 463
- De las servidumbres, 571
- De otras situaciones de comunidad, 202
- Del consorcio conyugal, 244, 245
- Del derecho de viudedad, 276
- Del pacto de relaciones familiares, 77
- Del usufructo viudal, 284, 291, 301

Causas de indignidad

- Causas de desheredación, 510
- Enumeración, 328
- Extinción del derecho de viudedad, 276
- Revocación pacto sucesorio, 401
- Revocación testamento mancomunado, 421

Causas de inhabilidad

- De los miembros de la Junta de Parientes, 171
- Dispensa en la designación voluntaria, 113
- Para ser representante del ausente, 50

- Para ser titular de funciones tutelares, 124

Causas legales de desheredación

- Enumeración, 510
- Privación del derecho de viudedad, 275
- Revocación pacto sucesorio, 401
- Revocación testamento mancomunado, 421

Cautelas

- De opción compensatoria, 500
 - Información, c. y acciones, 148
- V. «medidas cautelares»

Centro residencial

- Disposición a favor del alma o de los pobres, 473
- Internamiento, 44

Cheque

- Conformado, 595

Circunstancias familiares

- Acto de previsión acorde con las, 212
- Alteración sustancial, 77, 79, 83
- Liberalidades usuales según las, 237
- Límites o cautelas judiciales en la gestión concedida a uno solo de los cónyuges, 240
- Otras situaciones de comunidad, 202
- Relación personal del hijo menor, 60

Coheredero

- Acrecimiento, 520, 530
- Colación, 364
- Pago de deudas, 369 a 372
- Partición, 365 a 368

Colación

- Liberalidades no colacionables, 363
- Práctica, 364
- Voluntariedad, 362

Colaterales

- Derecho de abolorio o de la saca, 590
- Orden de sucesión, 517
- Sucesión troncal, 526
- Sucesión de los, 532 a 534

Colindantes

- De un seto vivo medianero, 540

Compensación

- Adjudicación de bienes comunes, 267
- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Liquidación ordinaria del consorcio c., 265
- Reducción de liberalidades de incómoda división, 496

Compilación del Derecho civil

- Comunidad conyugal continuada, DT10^a
- Sustitución legal, DT16^a
- Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes, DT11^a

Comunidad Autónoma

- Adquisición de bienes por ministerio de la ley, 598 bis
 - Lenguas o modalidades lingüísticas, 196, 382, 412
 - Sucesión legal, 517, 535
 - Traslado del menor a otra, 156
- V. «Diputación General de Aragón»

Comunidad conyugal continuada

- Derecho transitorio, DT10^a

Comunidad hereditaria

- Colación, 362 a 364
- Consorcio conyugal disuelto, 257
- Consorcio foral, 373 a 376
- Liquidación y división del consorcio c., 270
- Pago de las deudas hereditarias por los coherederos, 369 a 372
- Partición, 365 a 368

Comunidad que continúa tras el consorcio

- Bienes comunes, 250
- Deudas comunes, 251
- Disolución por muerte, 253
- Disolución por otras causas, 254
- Disposición por causa de muerte, 255
- Preferencia del derecho de viudedad, 256
- Régimen supletorio, 257
- Responsabilidad de los bienes comunes, 252

Comunidades de pastos y adempros

- División por pacto unánime, 585, 586
- En mancomún, 585
- Mancomunidades, 585
- *Pro diviso*, 586
- Régimen común, 587
- Retracto de comuneros, 586

Comunidades familiares

- Comunidad conyugal continuada, DT10^a
- Instituciones familiares consuetudinarias, 201, 202
- Liquidación de varias comunidades, 269
- Pactos sucesorios, 381

Concordia

- Alera foral, 582

Concurso de acreedores

- Causa de inhabilidad, 124
- Disolución del consorcio conyugal, 245

Condición (es)

- Aceptación o repudiación de la herencia, 319
- «Captatorias», 476
- De contraer o no matrimonio, 476

- Disposiciones recíprocamente condicionadas, 403, 420
- En los pactos de renuncia, 399
- Estipulaciones capitulares, 198
- Gravamen sobre la legítima, 498
- Igualdad de c. de la persona con discapacidad, 34
- Incumplimiento, 437
- Mandato entre cónyuges, 207
- Momento de la delación, 321
- Servidumbres, 553
- Suspensivas, 321, 326, 437
- Validez, 476

Confesión

- Reconocimiento de privatividad, 214

Confesión religiosa

- Disposición a favor del alma, 473
- Iglesia, 473

Confirmación

- Acto de la persona sin aptitud para realizarlo, 45
- Actos de la persona menor de catorce años, 22
- Actos del menor mayor de catorce años, 29

Confusión de patrimonios

- No tiene lugar, 357
- V. «responsabilidad del heredero»

Consentimiento

- A la adopción, 166
- Actuación conjunta de los cónyuges, 233
- Autorización judicial, 234
- Beneplácito para la emancipación por vida independiente, 32
- Constitución de servidumbres, 561 a 567
- De la persona con discapacidad, 34, 169-12, 169-21
- Del menor de catorce años, 20, 21
- Estipulaciones capitulares, 199, 200

- Gestión de bienes privativos, 243
- Para constituir servidumbres, 561 a 565
- Para el acogimiento familiar, 164
- Para la atención y asistencia psicológica, 72
- Para la intromisión en los derechos de la personalidad, 20
- Prestación personal del menor, 21
- Sin el del otro cónyuge, 222, 235
- Vivienda familiar, 190

Consignación

- Del régimen económico matrimonial, 193
- En el derecho de abolorio, 595

Conсорcial

- Acrecimiento en el consorcio foral, 278, 374
- Bien común de los cónyuges, 210, 250

V. «patrimonio común», «bienes comunes».

Conсорcio

- Conyugal, 210 a 270
- Foral, 373 a 376

Conсорcio conyugal

- Adjudicación de bienes por el fiduciario, 457
- Ampliación o restricción, 215
- Aplicación subsidiaria, 193, 204
- Aventajas, 266
- Bienes comunes, 210
- Bienes de origen familiar, 216
- Bienes patrimoniales de carácter personal, 212
- Bienes privativos, 211, 212
- Contribución a las cargas, 221
- Derecho transitorio, DT9^a
- Desacuerdos sobre la gestión, 228
- Deudas anteriores al matrimonio, 223
- Deudas comunes, 218
- Deudas por razón de sucesiones y donaciones, 223

- Deudas privativas, 223
- Disolución del consorcio, 244 a 249
- Disolución por muerte, 253, 449
- División y adjudicación, 267
- Ejecución sobre bienes comunes, 225
- Gestión de la economía familiar, 227
- Gestión de los bienes comunes, 229 a 242
- Gestión de los bienes privativos, 243
- La comunidad que continúa, 250 a 257
- Liquidación a solicitud del fiduciario, 455
- Liquidación y división, 258 a 270
- Presunción de comunidad, 217
- Presunción de privatividad, 213
- Recobro de bienes comunes, 524
- Reconocimiento de privatividad, 214
- Régimen transitorio, DT8^a, DT9^a
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Responsabilidad de los bienes comunes, 219
- Responsabilidad de los bienes privativos, 220
- Responsabilidad del bien adquirido, 222
- Responsabilidad subsidiaria, 224

V. «gestión de los bienes comunes», «disolución del consorcio», «liquidación y división», «comunidad que continúa».

Conсорcio foral

- Concepto, 373
- Derecho de viudedad, 278
- Disolución, 376
- Efectos, 374
- Separación de un consorte, 375

«Conсорcio entre matrimonios»

- Otras situaciones de comunidad, 202

«Consortorio universal o juntar dos casas»

- Institución familiar consuetudinaria, 201

Constitución de las servidumbre

- Formas de, 561
- Forzosas, 561, 565
- Legitimación, 562
- Negativas, 567
- Por signo aparente, 566
- Sobre finca indivisa, 563
- Sobre finca propia, 564

Construcciones

- Derecho a edificar o construir, 550
- En pared medianera, 547
- Paso por razón de obras, 542
- Uso de pared medianera, 543
- Usufructo de viudedad, 297
- Voladizos, 548

Contador partidor

- Modalidades de liquidación y división, 259

Contratos

- Arrendamiento, 210
- De los menores mayores de catorce años, 23, 29
- De seguros, 212, 297
- Del sujeto a tutela, 39
- En capitulaciones, 200
- Entre cónyuges, 185
- Fuerza de obligar de un, 178
- Interpretación de disposiciones correspectivas, 416
- Invalidez e ineficacia de actos y, 45 a 45-6
- Normas supletorias de los pactos sucesorios, 384
- Propios de la vida corriente del menor, 7
- Que impliquen alguna prestación personal, 21
- Sobre ganadería, 599
- Sucesión paccionada, 377 a 404

- Venta de cosa común, 235

Convenio regulador

- Pacto de relaciones familiares, DA2ª
- Revisión, DT6ª
- Solicitud de custodia compartida, DT6ª

Conversión

- Del testamento mancomunado, 430
- Del testamento nulo, 430

Convivencia familiar

- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13
 - Alimentos, 253
 - Con hijos mayores de edad, 70
 - Custodia compartida, 80
 - De la pareja estable no casada, 303, 305, 307, 309
 - De los cónyuges, 183
 - De los hermanos con el causante, 479
 - De los hijos comunes, 187
 - De los hijos de un cónyuge, 218
 - Del hijo de uno de los cónyuge, 85
 - Domicilio familiar, 184
 - Establecida en pacto sucesorio, 401
 - Pacto de relaciones familiares, 77
 - Ruptura de la, 75 a 84
- V. «vida familiar»

Cónyuge (s)

- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13
- Administrador de la fiducia, 449
- Ausencia de, 53, 54
- Capítulos matrimoniales, 195 a 202
- Causas de desheredación, 510
- Causas de indignidad, 328
- Comunidad de vida, 183
- Consortorio conyugal, 210 a 270
- Curatela por progenitores, 169-28
- Deber de información recíproca, 188

ÍNDICE ANALÍTICO

- Deberes conyugales, 183
 - Del transmitente (viudedad), 354
 - Del único titular de la autoridad familiar, 85
 - Derecho de viudedad, 192, 271 a 302
 - Desaparición de, 47
 - Designación de curatela, 121
 - Dirección de la vida familiar, 186
 - Disposición a favor de parientes, 474
 - Domicilio familiar, 184
 - Fiduciario, 440, 444, 456, 457, 459
 - Incapacidad para formar pareja estable no casada, 306
 - Incapacidad para ser testigo, 415
 - Ineficacia atribuciones sucesorias, 404, 438
 - Instar constitución de la curatela, 169-15
 - Mandatos entre cónyuges, 191
 - Principio de igualdad, 183
 - Principio de libertad de regulación, 185
 - Prohibición de adquirir m. c., 475
 - Reducción de liberalidades, 496, 497
 - Régimen de separación de bienes, 203 a 209
 - Régimen económico matrimonial, 193
 - Responsabilidad frente a terceros, 189
 - Satisfacción de las necesidades familiares, 187
 - Sucesión legal, 517, 531
 - Vivienda familiar, 190
- Cónyuge sobreviviente (viudo)**
- Administrador de la fiducia, 449
 - Autoridad familiar sobre los hijos del premuerto, 85
 - Aventajas, 266
 - Comunidad que continúa, 250 a 257
 - Disolución del consorcio por muerte, 253
 - Fiduciario, 259, 440, 444, 450, 456, 457, 459, 461, 462, 463
 - Liquidación y división del consorcio, 258 a 270
 - No hay reserva legal de bienes, 464
 - Usufructo de viudedad, 192, 283 a 302
- Correspectividad**
- En el testamento mancomunado, 406, 420 a 422
 - En los pactos sucesorios, 384, 393, 403
 - No se presume, 420
- Corromper a los hijos**
- Causa de indignidad y desheredación, 328, 510
 - Extinción del usufructo viudal, 301
- Costumbre**
- Ademprios, 584
 - Alera foral, 582
 - Aventajas, 266
 - Buenas costumbres, 424, 476
 - Comarcal, 582
 - Comunidades de pastos y ademprios, 587
 - Contratos sobre ganadería (usos), 599
 - Fuente de Derecho, 1, 2
 - General, 587
 - Inmisión de raíces y ramas, 539
 - Instituciones familiares, 201
 - Interpretación de las instituciones familiares, 201
 - Interpretación de los pactos sucesorios, 384
 - Llamamiento para la intervención de la Junta de Parientes, 170
 - Local, 266, 540, 582, 587
 - Otras situaciones de comunidad, 202
 - Plantaciones, 540
 - V. «usos»

Créditos

- Activo del inventario, 262
- Administración de la fiducia, 452
- Adquisición onerosa por el tutor de los cs. contra el tutelado, 16
- Cesión a terceros por el tutor, 16
- Contra la herencia, 358
- De los acreedores aceptantes de la herencia, 353
- Del heredero, 357, 360, 371
- Hereditarios no vencidos, 355
- Liquidación concursal, 264
- Liquidación ordinaria, 265
- Prelación de, 264

V. «derechos de crédito», «acreedores»

Crianza y educación de los hijos

- Contenido personal de la tutela, 136
- Contenido, 65
- Contribución económica del hijo, 67, 68, 70
- Contribución personal del hijo, 66
- Deber de, 63
- Deudas comunes, 218
- Gastos de asistencia a los hijos, 82
- Guarda y custodia o régimen de convivencia, 80
- Hijos mayores o emancipados, 69, 70
- Incumplimiento, 510
- Participación igualitaria de los padres, 75, 76
- Por el padrastro o madrastra, 85, 88
- Por los abuelos, 86, 88
- Por los hermanos mayores, 87, 88
- Titularidad del deber, 63

Cuenta

V. «rendición de cuentas»

Culpa

- Daños a terceros, 218, 219
- Grave descuido de los intereses familiares, 218

- Grave en la gestión paterna, 96
- Pérdida de la prestación de la persona con discapacidad, 45-4
- Responsabilidad del cargo tutelar, 110

V. «negligencia», «dolo», «mala fe»

Cuota

- Consorcio foral, 374
- Contribución proporcional, 82, 251
- De bien de abolorio, 592
- De la herencia, 345, 466, 467
- Del renunciante, 350
- Derecho a la división de la comunidad, 365
- Distribución de toda la herencia en legados, 469
- Doble, 533
- En la sucesión legal, 494
- Legado de parte alicuota, 468
- Llamamiento a título universal, 319
- Privativa, 211

V. «participación»

Curador

- Aceptación y repudiación de herencia, 346
- Aprobación cuenta tutela anterior, 143
- Asistencia al emancipado, 33
- Cónyuge pródigo o con discapacidad, 245
- Curatela plural, 169-26
- De la persona con discapacidad, 169-15 a 169-30
- Deber de comunicación, 169-17
- División de un patrimonio o cosa común, 169-24
- Fianza, 106, 114
- Funciones de representación, 169-24
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Integración en la vida familiar del, 120
- Inventario de los bienes del sujeto a curatela, 107
- Partición, 367

ÍNDICE ANALÍTICO

- Prohibiciones de adquirir m. c., 475
- Remuneración, 109, 114
- Rendición de cuentas, 169-30
- Solicitud de anulación, 45-1

Curatela

- Aceptación y repudiación de herencia, 346
- Anulabilidad por falta de asistencia, 29, 45-1, 145
- Asistencial, 169-19, 169-21
- Con facultades de representación, 169-19, 169-23
- Cónyuge pródigo o incapaz sometido a, 246
- Cuenta general de la gestión, 169-30
- De comunicación y acompañamiento, 169-19, 169-20
- De la persona con discapacidad, 101
- De menores emancipados, 33, 100, 145
- De varios hermanos, 122
- Disposiciones de los progenitores sobre la futura c. de sus hijos, 116
- Disposiciones generales, 169-15 a 169-18
- Ejercicio de la curatela, 169-26 a 169-30
- Extinción de la curatela, 169-29
- Impedimento transitorio, 169-27
- Institución tutelar, 100
- Medidas de apoyo a personas con discapacidad, 101
- Minoría de edad, 5
- Modalidades de, 169-19 a 169-25
- Modos de delación, 103
- Nombramiento de un defensor judicial, 129
- Otras disposiciones voluntarias, 114
- Orden de delación dativa, 121
- Partición de la herencia, 367
- Personas sujetas, 130, 145
- Petición de extinción de mandato, 119

- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Plural, 169-26
- Por progenitores, 169-28
- Prohibiciones de adquirir, 475
- Promoción de la, 131
- Relación con otras medidas de apoyo, 169-16
- Revisión, 169-18

Custodia o convivencia compartida

- Criterio preferente, 80
- Factores a tener en cuenta, 80
- Insuficiencia de la oposición de un padre, 80
- Plan de relaciones familiares, 80
- Revisión de convenios reguladores, DT6ª
- Revisión de medidas judiciales, DT6ª
- Vivienda y ajuar familiar, 81

D

Dación en pago

- De bienes de abolorio, 591
- Liquidación ordinaria del consorcio c., 265

«Dación personal»

- Institución familiar consuetudinaria, 201

Daños y perjuicios

- A bienes privativos, 211
- A la persona de un cónyuge, 212
- A terceros, 218, 219
- Al mandante, 169-3
- Al patrimonio común, 226
- Al patrimonio hereditario, 447
- De árboles medianeros, 540
- De la confusión de patrimonios, 357
- Del uso razonable de la finca, 538
- En ejercicio de la gestión paterna, 97

- En ejercicio de una función tutelar o medida de apoyo, 108
- En la administración de bienes del otro, 208, 243
- Paso por razón de obras, 542
- Por faltar a la reunión de la Junta de Parientes, 176
- Por la caída de árboles, 541
- Por no promover la tutela, 131
- Que sufra el acogido, 164
- Servidumbre forzosa de paso, 578
- Uso de inmuebles, 538
- Uso de pared medianera, 543

Deber de crianza y educación

- V. «crianza y educación»

Deber de contribución

- De los cónyuges, 187
- De los hijos, 58, 66 a 68, 70, 187
- De los padres, 58, 61, 65, 69, 77, 82
- Del padre a los gastos de maternidad, 62
- En defecto de bienes comunes, 221
- Gastos de asistencia a los hijos, 72

Deber de información

- De quienes intervengan en el expediente matrimonial, 193
- Del guardador de hecho, 147
- Del tutor, 142
- Recíproca entre padres, 59, 76
- Recíproca entre cónyuges, 188, 227, 228

Deberes de los cónyuges

- Actuar en interés de la familia, 183
- Comunidad de vida, 183
- Respetarse y ayudarse mutuamente, 183
- Vivir juntos, guardarse fidelidad, 183

Deberes de padres e hijos

- Alimentos, 58

- Contribución a las necesidades familiares, 58
- Respeto, ayuda y asistencia mutua, 58

Deberes-derechos de padres con hijos menores

- Derecho a la igualdad, 76
- Efecto de la filiación, 59
- En caso de ruptura de la convivencia, 76

Declaración de fallecimiento

- Del ausente, 54, 55
- Extinción pareja estable no casada, 309
- Suspensión de la autoridad familiar, 91

Declaración de herederos legales

- A favor de la Comunidad Autónoma, 535
- A favor de la Diputación Provincial de Zaragoza, 536
- A favor del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 536
- Expresión de la diversidad de llamamientos universales, 518

Defensor judicial

- Asistencia o representación de personas con discapacidad, 42
- Del desaparecido, 46
- De la persona con discapacidad, 101
- División de un patrimonio o cosa común, 169-24
- Durante la tramitación de la excusa o remoción del cargo tutelar, 128
- En caso de oposición de intereses, 13, 17, 28, 181
- En la rendición final de cuentas de la tutela, 143
- Impedimento transitorio para desempeñar la curatela, 169-27
- Institución tutelar, 100

ÍNDICE ANALÍTICO

- Nombramiento, 129-1
- Para varios hermanos, 122
- Partición de la herencia, 366, 367
- Progenitor menor no emancipado o con discapacidad, 73
- Régimen, 129-2
- Supuestos para su nombramiento, 129
- Vigilancia y control de las funciones tutelares, 114

Delación

- Adquisición de la herencia, 322
- Dativa de la tutela o curatela, 120 a 122
- De la institución tutelar, 13, 28, 103, 109
- De la sucesión legal troncal, 526
- Disposición de bienes comunes, 238
- Diversidad de llamamientos a una misma herencia, 344, 345
- Diversidad de llamamientos universales legales, 518
- En la fiducia, 448
- En los pactos sucesorios, 385, 389, 392, 397
- Ineficacia del llamamiento legal, 520
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323
- Interpelación, 348
- Libertad para aceptar o repudiar, 342
- Modos de, 317
- Momento de la, 321
- Orden de sucesión legal, 517
- Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 536
- Sucesión bajo condición suspensiva, 321
- Sucesión de la Comunidad Autónoma, 535
- Sucesión de los ascendientes, 529, 530

- Sucesión de los colaterales, 532 a 534
- Sucesión de los descendientes, 521 a 523
- Sucesión del cónyuge, 531

Delación de la institución tutelar

- Designación en la delación dativa, 121
- Dispensa de causas de inhabilidad, 124
- Institución tutelar para varios hermanos, 122
- Modos de delación, 103
- Disposición voluntaria por los titulares de la autoridad familiar, 134, 135
- Disposición voluntaria por uno mismo, 134, 135
- Oposición de intereses, 13, 28
- Promoción de la tutela ordinaria, 131
- Remuneración, 109
- Supletoriedad de la delación dativa, 120

Demanda (judicial o arbitral)

- En nombre de los sujetos a tutela, 16
- Ejercicio del derecho de abolorio, 595
- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
- Mediación familiar, 78
- Plan de relaciones familiares, DA2^a, DA3^a

Derecho a edificar o construir

- Luces y vistas, 550

Derecho a la propia imagen

- Bienes patrimoniales de carácter personal, 212

Derecho civil

- Aragonés, 2, 3
- De Aragón, 1
- General del Estado, 1, 599

Derecho de abolorio

- Abono de precio y gastos, 596
- Adquisición del inmueble, 596
- Bienes de abolorio, 588, 589
- Bienes de origen familiar, 216
- Caducidad, 594
- Concepto, 588
- Concurrencia de titulares, 590
- Concurso de derechos, 598
- Cuota indivisa, 592
- Efectos, 596
- Enajenaciones, 591
- Pago o consignación del precio, 595
- Plazos de ejercicio, 594
- Pluralidad de bienes, 593
- Principio de prueba documental, 595
- Prohibición de enajenar, 596
- Renuncia, 597
- Requisitos del ejercicio, 595
- Titulares del derecho, 590

Derecho de acrecer

- Acrecimiento por grupos, 482
- Casos en que procede, 481
- Efectos del, 483
- En el derecho de transmisión, 354
- Heredero «ex re certa», 467
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323, 437
- Liberalidades a ambos cónyuges, 211

Derecho de autor

- Bienes patrimoniales de carácter personal, 212

Derecho de bienes

- Aguas pluviales, 544
- Árboles y plantaciones, 539 a 541
- Construcciones, 542, 543
- Derechos de pastos y adempios, 582 a 587
- Luces y vistas, 545 a 550
- Relaciones de vecindad, 537 a 550

- Servidumbres, 551 a 587
- Usufructo de viudedad, 283 a 302

Derecho de familia

- Capítulos matrimoniales, 195 a 202
- Consorcio conyugal, 210 a 270
- Parejas estables no casadas, 303 a 315
- Régimen de separación de bienes, 203 a 209
- Régimen económico matrimonial primario, 183 a 194
- Ruptura de convivencia de los padres, 75 a 84
- Viudedad, 271 a 302

Derecho de la persona

- Capacidad jurídica y estado de las personas, 3-1 a 55
- Con discapacidad, 169-25
- Junta de Parientes, 170 a 182
- Medidas de apoyo, 36, 45-8
- Relaciones entre ascendientes y descendientes, 56 a 99
- Relaciones tutelares, 100 a 167

Derecho de la saca

V. «derecho de abolorio».

Derecho de obligaciones

- Contratos sobre ganadería, 599
- V. «contratos»

Derecho de opción

- Bienes privativos, 211

Derecho de propiedad

- Adquisición por la Comunidad Autónoma, 598 bis

Derecho de reembolso (o de reintegro)

- Activo del inventario, 262
- Adquisiciones por un cónyuge, 239
- Ampliación o restricción de la comunidad, 215
- Fondos de inversión, 210, 300
- Gastos de la gestión paterna, 97

- Gastos en ejercicio de la función tutelar o medida de apoyo, 108
- Liquidación concursal, 264
- Liquidación de varias comunidades, 269
- Liquidación ordinaria, 265
- Pasivo del inventario, 263
- Por incrementos y accesiones, 250
- Por pago de deudas privativas, 224
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Reparaciones extraordinarias, 295
- Seguros sobre la vida, 212

Derecho de relación personal del hijo menor

- Con ambos padres, 76
- Con padres, abuelos, parientes y allegados, 60, 75, 76, 77, 79
- Con sus hermanos, 75, 77, 79
- Custodia individual, 80
- Régimen de visitas, 60, 77, 80, 166

Derecho de retención

- Gastos necesarios y útiles, 294
- Reparaciones extraordinarias, 295

Derecho de sucesiones por causa de muerte

- Aceptación y repudiación de la herencia, 342 a 354
- Albacea, 484 a 485
- Capacidad e indignidad para suceder, 325 a 333
- Colación y partición, 362 a 372
- Consorcio foral, 373 a 376
- Derecho de acrecer, 481 a 483
- Designación de sucesor, 464 a 476 bis
- Disposiciones generales, 316 a 324
- Disposición de bienes comunes, 238, 255
- Fiducia sucesoria, 439 a 463
- Legados, 477 a 480
- Legítima, 486 a 515

- Responsabilidad del heredero, 355 a 361
- Sucesión legal, 516 a 536
- Sucesión paccionada, 377 a 404
- Sucesión testamentaria, 405 a 438
- Sustitución legal, 334 a 341

Derecho de transmisión

- Del derecho a aceptar o repudiar la herencia, 354
- En la sucesión paccionada, 387, 481
- En los legados, 478
- Usufructo de viudedad, 278

Derecho de viudedad

- Derecho de transmisión y consorcio foral, 278
- Derecho expectante de viudedad, 279 a 282
- Disolución del consorcio por muerte, 253, 256
- Disposiciones generales, 271 a 278
- Durante el matrimonio, 279 a 282
- Efecto del matrimonio, 192
- Extinción, 276
- Inalienabilidad, 273
- Limitaciones, 277
- Origen, 271
- Pactos, 272
- Privación, 275
- Recobro de liberalidades, 524
- Régimen de separación de bienes, 205
- Renuncia, 274
- Usufructo viudal, 283 a 302

Derecho expectante de viudedad

- Bienes adquiridos por derecho de transmisión, 278
- Bienes adquiridos por el acrecimiento consorcial, 278
- Del ausente y su cónyuge, 53
- Derecho transitorio, DT9^a
- Disposición de bienes inmuebles, 280
- Disposición de bienes muebles, 282

- Enajenación judicial de bienes inmuebles, 281
- Extinción, 276
- Limitaciones, 277
- Manifestación de la viudedad, 279
- Origen, 271
- Pactos, 272
- Privación, 275
- Renuncia, 274, 280
- Vivienda familiar, 190
- Régimen provisional de mediación familiar, DT7^a
- Revisión de convenios reguladores, DT6^a
- Revisión de medidas judiciales, DT6^a
- Sucesión paccionada, DT19^a
- Sustitución legal, DT16^a
- Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes, DT11^a

Derecho general del Estado

- Derecho supletorio, 1
- Normas supletorias, 599

Derecho personalísimo

- Aventajas, 266

Derecho real

- De aprovechamiento parcial, 555
- De servidumbre, 551
- Posesorio, 538, 562, 571

Derecho transitorio

- Acciones, derechos y deberes no ejercitados o cumplidos, DT2^a, DT15^a
- Aceptación, repudiación y partición, DT17^a
- Actos m. c. anteriores a la Ley, DT14^a
- Aplicación inmediata, DT1^a, DT8^a, DT23^a
- Autoridad familiar por personas distintas de los padres, DT5^a
- Comunidad conyugal continuada, DT10^a
- Consorcio foral, DT18^a
- Derecho de abolorio, DT24^a
- Fiducia sucesoria, DT21^a
- Gastos de maternidad, DT4^a
- Hechos, actos y negocios, DT9^a
- Ley aplicable a la sucesión, DT13^a
- Modificación o revocación, DT20^a
- Preterición, DT22^a
- Prodigalidad, DT3^a

Derechos adquiridos

- Capitulaciones retroactivas, 197
- Disolución retroactiva del consorcio, 247

Derechos de adquisición preferente

V. «derechos preferentes»

Derechos de autor

- Bienes patrimoniales de carácter personal, 212

Derechos de crédito

- Actuación frente a terceros, 232
 - Del menor, 15
- V. «créditos», «bienes muebles»

Derechos de la personalidad

- Ejercicio por el menor con suficiente madurez, 7
- Intromisión de terceros, 20, 24, 43
- Se exceptúan de la representación legal, 12

Derechos (y principios) de las relaciones familiares

- Audiencia al menor, 6, 76
- Contacto directo con los padres, 76
- Igualdad entre los padres, 76
- Información recíproca, 76, 188
- Interés superior del menor, 5, 76
- Lealtad en beneficio del menor, 76, 183
- Libertad de pacto, 76, 185

- Los de la autoridad familiar, 58, 59, 63 y ss., 76
- Participación de ambos padres, 63, 76

Derechos de pastos y adempios

- Adempios, 584
- Alera foral, 582
- Comunidad en mancomún, 585
- Comunidad *pro diviso*, 586
- Comunidades, 585 a 587
- Servidumbres de pastos, 583
- Servidumbres, 582 a 584

Derechos inalienables

- El usufructo viudal, 290
- La viudedad, 273

Derechos inembargables

- El usufructo viudal, 290
- La viudedad, 273

Derechos intransmisibles

- Aventajas, 266
- Bienes privativos, 212

Derechos preferentes

- Carta de gracia, 211
- Concurso de derechos de adquisición preferente, 598
- De acceso a la propiedad, 211
- De adjudicación, 267
- De adquisición, 211, 588
- De los acreedores por deudas comunes, 224
- El de abolorio o de la saca, 588 a 598
- El de opción, 211
- El de retracto, 211, 586, 588 a 598
- El de suscripción preferente, 211
- El de tanteo, 588 a 598
- El de viudedad, 256
- Prioridad del derecho de abolorio, 598

Desacuerdo

- Contribución a las cargas de la tutela, 140

- Divergencias entre titulares de la autoridad familiar, 74, 78, 79, 89
- Domicilio conyugal, 184
- Entre el progenitor menor no emancipado o con discapacidad y quienes le prestan la asistencia, 73
- Entre padres, 78, 79
- Gestión de la economía familiar, 228
- Junta de Parientes, 181
- Mediación familiar, 75, 78, DT2^a

Desamparo

- Comunicaciones y notificaciones, 153
- Delación automática de la tutela, 103
- Distinción de la mera situación de riesgo, 5
- Guarda con fines de adopción, 166
- Guarda de hecho, 146
- Guarda provisional, 157
- Medidas de la entidad pública, 5, 45-8
- Menor de edad, 150, 153
- Oposición, 154
- Persona con discapacidad, 169-10
- Revocación de la declaración de, 155
- Tutela de la administración, 130, 150 a 156

Desaparecido

- Defensor del, 46
- Desaparición de cónyuge, 47
- Menor en paradero desconocido, 156

Descendientes

- Adquirentes de empresas o explotaciones, 284
- Alimentos, 82, 298, 451, 515
- Concurrencia de designados, 472
- Consorcio foral, 374
- Curatela por progenitores, 169-28
- De hermanos, 526, 532, 533

- Derecho de abolorio, 592
- Derecho de transmisión, 387
- En la fiducia, 457, 459, 461
- Indignidad, 328, 462
- Instar constitución de la curatela, 169-15
- Institución recíproca y supervivencia de, 395, 396
- Legítima, 486 a 515
- No comunes, 218, 283, 298, DT11^a
- Prohibiciones de disponer, 475
- Recobro de liberalidades habiendo, 525
- Relaciones con los ascendientes, 56 a 99
- Reparaciones extraordinarias, 295
- Sucesión legal, 517, 520 a 523
- Sustitución ejemplar, 476 bis
- Sustitución legal, 334 a 340
- Tributos, 296
- Viudedad del cónyuge de los, 277
- Disposición a favor de los pobres, 473
- Disposición a favor de parientes, 474
- Disposición a favor del alma, 473
- Distribución de toda la herencia en legados, 469
- Heredero «ex re certa», 467
- Legado de parte alícuota, 468
- Motivación de la disposición, 471
- No exigencia de institución de heredero, 465
- Nombramiento de heredero, 466
- Prohibiciones de adquirir por causa de muerte, 475
- Sucesión voluntaria, 464
- Sustitución ejemplar, 476 bis

Deterioro

- Bienes heredados, 355
- Bienes adjudicados, 268
- Mejoras, 294

Desheredación con causa legal

- Causas legales, 510
- Efectos, 511
- Error en la causa, 514
- Extinción de la legítima, 511
- Imputación de liberalidades, 490
- Pérdida condición de fiduciario, 462
- Pretendida, 513
- Privación del derecho de viudedad, 275
- Reconciliación o perdón, 511
- Requisitos, 509
- Revocación unilateral pacto sucesorio, 401
- Sustitución legal, 338, 339, 488

Deudas comunes

- Contribución subsidiaria, 221
- De cargo del patrimonio común, 218
- De responsabilidad de los bienes comunes, 219
- Extinción del derecho expectante, 281
- Liquidación ordinaria, 265
- Pasivo del inventario, 263
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Responsabilidad de los bienes privativos, 220
- Responsabilidad por, 222
- Tras la disolución del consorcio, 251, 252
- Tras la división, 268

Designación de sucesor

- Certeza, 470
- Concurrencia de designados, 472
- Condiciones válidas, 476
- Disposición a favor de herederos, 474

Deudas hereditarias

- Adquisición de la herencia, 322
- Cargas hereditarias, 356
- Embargo de bienes del heredero, 358
- Pago, 360, 361, 369 a 372

- Participación de los herederos troncales, 355
 - Preferencias, 359
 - Responsabilidad del heredero, 355
 - Separación de patrimonios, 357
- V. «cargas hereditarias»

Deudas privativas

- Anteriores al matrimonio, 223
- Concepto, 223
- De sucesiones y donaciones, 223
- Derecho expectante, 281
- Ejecución sobre bienes comunes, 225
- Opción por la disolución, 225, 245
- Régimen de separación de bienes, 209
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Responsabilidad, 224

Diligencia

- Debida en la gestión, 227
- Gestión de los bienes de los hijos, 95
- Propia de un diligente usufructuario, 218

Dinero

- Actuación frente a terceros, 232
- Adquisiciones a plazo, 210
- Adquisición por la Comunidad Autónoma, 598 bis
- Dar y tomar a préstamo o crédito, 15
- Del menor, 15
- Pago de la porción del preterido, 508
- Pago de la reducción de liberalidades, 496
- Pago del legado de parte alícuota, 468
- Presunción de privatividad, 213
- Privativo, 211
- Reconocimiento de privatividad, 214
- Usufructo de, 297, 299, 300

Diputación General de Aragón

- Disposiciones a favor del alma o de los pobres, 473
- Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 536

Dirección de la vida familiar

- Corresponde a ambos cónyuges, 186
- Corresponde a los padres, 70
- En caso de ruptura de la convivencia, 75 a 84
- Principio de igualdad de los padres, 75, 76, 80

Discapacidad

- Aceptar o repudiar una herencia, 346
- Apoyos espontáneos e informales, 39
- Capacidad jurídica y medidas de apoyo, 34 a 39
- Curatela, 169-15 a 169-30
- De los titulares de la autoridad familiar, tutores o guardadores, 150
- Ejercicio de la capacidad jurídica, 40 a 44
- El menor mayor de catorce años, 38
- Funciones de las medidas de apoyo, 35
- Guarda administrativa del menor, 158
- Guarda de hecho, 169-9 a 169-14
- Intromisión en los derechos de la personalidad, 43
- Invalidez e ineficacia de actos y contratos, 45 a 45-6
- Mandatos de apoyo y poderes sin mandato, 168 a 169-8
- Medidas de apoyo, 35, 101, 168 a 169-30
- Medidas del Juez para evitar perjuicios o impedir abusos, 45-9
- Oposición de intereses, 42
- Patrimonio especial de las personas con d., 45-7

- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, 40
- Principios generales de las medidas de apoyo, 36
- Relaciones familiares, 75
- Situaciones de necesidad urgente de apoyo y de riesgo o desamparo, 45-8
- Validez de los actos jurídicos, 41
- Voluntad y preferencias en la adopción y prestación del apoyo, 37
- Del sujeto a tutela, 39, 118, 138
- Derecho de abolorio, 591
- Derecho expectante, 280, 281, 282
- Derecho transitorio, DT9^a
- Derechos de pastos y adempios, 582 a 587
- Deudas de, 219
- Disolución del consorcio conyugal, 254
- Ejercicio de profesión o negocio, 231
- Entre vivos, 422

Disolución

- Consorcio conyugal, 244 a 249
- Consorcio entre matrimonios u otras situaciones de comunidad, 202
- Consorcio foral, 376

Disolución del consorcio conyugal

- De pleno derecho, 244
- Medidas provisionales, 246
- Momento de eficacia, 247
- Por decisión judicial, 245
- Por nulidad del matrimonio, 249
- Régimen subsiguiente, 248
- Fiducia, 453, 454
- Heredados, 355
- Inmuebles y establecimientos mercantiles, 242
- Legítima, 501, 502
- Medidas provisionales, 246
- Muebles frente a terceros, 232
- Pactos sucesorios, 390, 393, 398
- Para atender las necesidades familiares, 230
- Persona jurídica, 347
- Por causa de muerte, 238, 255
- Por la Diputación General de Aragón, 473, 535

Dispensa

- Obligación de colacionar impuesta, 362

Disposición de bienes

- Abusiva, 226
- Actuación conjunta, 233
- Adquiridos por derecho de abolorio, 596
- Autorización judicial, 234
- Caudal relicto, 355
- Consorcio foral, 374
- De la persona con discapacidad, 169-12, 169-25
- Del menor de catorce años, 9, 12, 19, 92, 94
- Del menor mayor de catorce años, 23

- Privativos, 243
- Reconocidos como privativos, 214
- Régimen de separación, 205
- Rescisión por fraude, 236
- Sin consentimiento del otro, 235
- Usufructo de dinero, 299
- Usufructo de fondos de inversión, 300
- Vivienda familiar, 190

Disposición «mortis causa»

- De bienes consorciales, 238, 255
- V. «sucesión»

Disposiciones

- A favor de los pobres, 473
- A favor del alma, 473
- Contradictorias, 434

ÍNDICE ANALÍTICO

- Correspectivas, 403, 406, 416, 420, 421, 424, 438
- De la ley, 317, 319, 344
- Del causante, 327, 332, 371, 441, 499
- Del fiduciario, 371
- Entre vivos, 374
- Interpretación, 416
- Judiciales de protección del menor, 10
- No correspectivas, 421
- Paccionadas, 380, 381, 384, 400, 401, 403, 465
- Por causa de muerte, 238, 368, 374, DT20^a
- Recíprocas, 403, 419
- Testamentarias, 384, 405 a 438, 465
- Unilaterales, 309
- Voluntarias, 344

Disposiciones correspectivas

V. «correspectividad»

Disposiciones voluntarias

- Constitución de la tutela ordinaria, 133
- De las funciones tutelares, 113 a 119
- De los titulares de la autoridad familiar, 115
- Designación hecha por uno mismo, 113
- Disposiciones incompatibles, 118
- Disposiciones testamentarias, 115
- Pluralidad de designados, 117
- Vinculación de las disposiciones voluntarias, 119

Distancias

- Derecho a edificar o construir, 550
- En las plantaciones, 540
- Régimen normal de luces y vistas, 545
- Servidumbre de luces y vistas, 576
- Toma de medidas, 546, 576

Divergencias

- Entre los curadores, 169-26

- Entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, 74, 78
 - Entre otras personas con autoridad familiar, 89
 - Mediación familiar, 75, 78, DT7^a
- V. «desacuerdo»

División

- Aventajas, 266
 - Bienes privativos, 211
 - Capacidad, 260
 - Comunidades familiares consuetudinarias, 201
 - Consorcio conyugal, 267
 - Consorcio foral, 373, 376
 - De incómoda división, 496
 - De la finca sirviente o dominante, 554, 566, 572
 - De patrimonio o cosa común del menor, 17
 - Derecho a la, 258, 365
 - Disolución y división del consorcio c., 226, 244
 - Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas, 225
 - En partes iguales, 522
 - Liquidación de varias comunidades, 269
 - Mancomunidades de pastos y ademprios, 585
 - Modalidades, 259
 - Pacto de indivisión, 365
 - Por cabezas, 530
 - Prohibición de, 365
 - Régimen supletorio, 270
 - Responsabilidad tras la, 268
- V. «partición de la herencia»

Divorcio

- Disolución por muerte, 253
- Especialidades procesales, DA2^a
- Extinción del derecho de viudedad, 276
- Ineficacia de disposiciones sucesorias entre cónyuges, 404, 438
- Ineficacia del nombramiento de fiduciario, 440

- Medidas provisionales, 84, 246
- Momento de eficacia de la disolución, 247
- Relaciones familiares, 75 a 84, DT6ª, DA2ª
- Revisión de convenios reguladores, DT6ª
- Revisión de medidas judiciales, DT6ª
- Sucesión legal, 531

Documento público

- Acreditación de la pareja estable no casada, 305, 308
 - De la guarda de hecho, 169-13
 - Designación voluntaria de la institución tutelar, 113
 - Exclusión de parientes de la Junta, 173
 - Idioma de los capítulos, 196
 - Junta de Parientes bajo fe notarial, 174
 - Junta de Parientes como órgano permanente, 175
 - Llamamiento a la Junta de Parientes por acto jurídico, 170
 - Pacto sobre el ejercicio de la autoridad familiar, 71
 - Reconocimiento de privatividad, 214
 - Sobre instituciones tutelares de menores, 111
- V. «escritura pública», «instrumento público»

Dolo

- Daños a terceros, 218, 219
- Daños y perjuicios al patrimonio común, 226
- Intención de perjudicar al consorcio, 218
- En la gestión paterna, 96
- Pérdida de la prestación de la persona con discapacidad, 45-4

Domicilio

- De la persona o familia de cuya Junta se trate, 175
- Del desaparecido, 46
- Del difunto, 473
- Del disponente, 473
- Del otro otorgante del testamento, 421
- Del testador, 435
- El hijo no puede abandonar el, 65
- Familiar, 65, 184
- Ultimo del causante, 320, 535

Donación (es)

- «Mortis causa», 383
- Cálculo de la legítima, 489
- Consorcio foral, 373
- De bienes comprendidos en disposiciones correspectivas, 422
- De la herencia o bienes que la componen, 350
- Deudas por razón de, 233, 281
- Imputables en la legítima, 490, 497, 498
- Modal u onerosa, 14
- No computables para calcular la legítima, 489
- No imputables en la legítima, 491
- No prohibición de viudedad, 277
- Nulidad, 237
- Por el viudo a los hijos comunes, 253
- Práctica de la colación, 364
- Recobro de liberalidades, 524, 525
- Reducción de las inoficiosas, 495, 496
- Universal, 383
- Valor de las, 489

Dote

- Institución familiar consuetudinaria, 201

E

Economía del matrimonio

- Derecho expectante de viudedad del ausente y su cónyuge, 53
- Patrimonio consorcial del ausente, 53

Economía familiar

- Actos peligrosos para la, 241
- Deber de información recíproca, 188, 227
- Desacuerdos sobre la gestión de la, 228
- Dirección de la, 70
- Dirección de la vida familiar, 186, 227
- Gestión de la, 227, 228

Edad

- Capacidad para capitular, 199
- Cómputo, 11
- El menor emancipado, 30 a 33
- El menor mayor de catorce años, 7, 23 a 29, 199, 346, 367
- El menor mayor de catorce años con discapacidad, 38
- La persona menor de catorce años, 12 a 22
- Mayoría de, 4
- Minoría de, 5 a 10
- No discriminación, 521
- Para poder testar, 395, 408, 423
- Relaciones entre ascendientes y descendientes menores, 56 a 99
- Tutela de menores, 5, 130
- V. «mayoría de edad», «menor de edad», «menor de catorce años», «menor mayor de catorce años»

Edificación

- Bienes de abolorio, 589
- Derecho a edificar o construir, 550
- En pared medianera, 547

Educación

- V. «crianza y educación de los menores»

Educación religiosa

- Deciden los padres hasta los catorce años, 64

Efecto retroactivo

- Aceptación y repudiación de la herencia, 343
- Adquisición de la herencia, 322
- Capitulaciones, 197
- Disolución por nulidad del matrimonio, 249
- Incapacidad relativa, 475
- Indignidad, 330
- V. «derecho transitorio»

Ejecución

- Conjunta de usufructo y nudo propiedad, 290
- En bienes gananciales, 225, 281
- Enajenación judicial de bienes inmuebles, 281
- Enajenación judicial de frutos y rentas, 290
- Incumplimiento de medidas judiciales, 79
- Sobre bienes comunes por deudas privativas, 225, 245

Emancipación

- Aceptación o repudiación de la herencia, 346
- Actos que necesitan asistencia, 33
- Cese del acogimiento familiar, 167
- Comparecencia en juicio, 33
- Curatela, 116, 145
- Efectos, 33
- Extinción de la autoridad familiar, 93
- Extinción de la tutela, 141
- Gastos de los hijos emancipados, 69, 77, 82
- Inscripción, 31
- Medidas de apoyo al menor con discapacidad, 38
- Otorgamiento de estipulaciones capitulares, 199

- Petición de rendición de cuentas, 99
- Por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar, 30
- Por concesión judicial, 30
- Por vida independiente, 32
- Restitución de bienes por los padres, 99
- Ejercicio gratuito de las funciones tutelares, 109
- Excluida legalmente de la designación voluntaria, 113
- Extinción de la condición de guardador de hecho, 169-14
- Fianza, 106

Embargo

- De bienes del heredero, 358
- Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas, 225
- Enajenación judicial de bienes inmuebles y derecho expectante, 281
- Inembargabilidad de la viudedad, 273
- Inembargabilidad del usufructo viudal, 290

Empresa

V. «explotación económica»

Enajenación de bienes

V. «disposición de bienes»

Enajenación judicial

V. «ejecución»

Enriquecimiento injusto

- Compensación económica, 310
- Desigualdad patrimonial entre convivientes, 310
- Relaciones entre patrimonios conyugales, 226

Entidad pública

- Acogimiento familiar, 160 a 162, 163 a 167
- Administración de bienes del menor, 152
- Asunción de funciones tutelares, 151
- Cese de la tutela automática, 156
- Curatela por delación dativa, 121
- Delación dativa de la tutela o curatela, 121

- Guarda con fines de adopción, 166
- Guarda del menor, 158
- Guarda del menor con discapacidad, 158
- Guarda provisional, 157
- Medidas de protección de menores, 5, 154, 160, 161
- Medidas en situaciones de necesidad urgente de apoyo y de riesgo o desamparo, 45-8
- No obligación de rendir cuenta general de la gestión, 142
- Privación de la autoridad familiar o del cargo tutelar, 155
- Revocación declaración de desamparo, 155
- Situaciones de riesgo o desamparo de menores, 5, 150 a 156
- Tutela automática, 91, 130
- Tutela por delación dativa, 121

Entidades

V. «establecimientos»

Entierro

V. «Gastos», «Cargas hereditarias».

Equidad

- Contribución de los hijos, 187
- Disolución de otras situaciones de comunidad familiar, 202
- Liquidación de varias comunidades, 269

Error

- De hecho o de derecho, 424
- Determinante, 424, 471
- En la causa, 514

- En la persona o en el objeto, 424, 425
- En los motivos, 424, 471, 514

Escritura pública

- Ampliación o restricción del consorcio, 215
 - Atribución de privatividad, 211
 - Autotutela, 113
 - Capitulaciones, 195, 200
 - Colación, 362
 - Designación de fiduciarios, 442
 - Disposiciones voluntarias de la tutela o curatela, 114, 115, 116
 - Emancipación por concesión, 30
 - Fiducia sucesoria, 443, 450, 456, 460
 - Inscripción del legado, 479
 - Inventario extrajudicial, 286
 - Limitaciones a la viudedad, 283
 - Mandato de apoyo, 168
 - Pactos sobre la viudedad, 272
 - Pactos sucesorios, 377, 387, 401
 - Parejas estables no casadas, 305, 307, 308, 309
 - Perdón al indigno, 332
 - Poder sin mandato, 169-8
 - Presunción de privatividad, 213
 - Preterición, 504
 - Reconocimiento de servidumbre negativa, 567
 - Renuncia a la viudedad, 274, 280, 301
 - Repudiación de la herencia, 352
 - Reserva de bienes, 464
 - Revocación del mandante, 169-6
 - Separación de un consorte, 375
- V. «documento público», «instrumento público»

Establecimientos

- Asistenciales, 473, 535, 536
- Centro residencial que comporte privación de libertad, 44

- De educación o formación especial que comporte privación de libertad, 30, 44
- De salud mental, 30, 44
- Mercantiles, 242

Estipulaciones

- Capitulares, 195, 197 a 201
- V. «disposiciones»

Estirpe de descendientes

- Concurrencia de designados, 472
- Del excluido absolutamente, 513
- Legitimarios de grado preferente, 488
- Sucesión legal, 533
- Sucesión troncal, 526
- Sustitución legal, 340, 520

Exclusión de legitimarios

- Absoluta, 513
- Error en el motivo, 514
- Simple, 512
- Sustitución legal, 338, 339, 513

Excusa del cargo tutelar

- Efectos, 128
- Excusa inicial, 125
- Excusa sobrevenida, 125
- Personas jurídicas privadas, 125

Expediente matrimonial

- Régimen económico matrimonial, 193

Explotación económica

- Adjudicación preferente, 267
- Arrendamiento, 15
- Asistencia para una pluralidad de actos referentes a la misma, 27
- Autorización para una pluralidad de actos referentes a la misma, 18
- Bienes comunes, 210
- Derecho expectante, 280
- Disposición de la del menor, 15
- Disposición habiendo legitimarios, 454

- Negocios del causante, 451
- Regular de los negocios, 219
- Sustitución del usufructo viudal, 284

Expropiación

- Extinción del derecho expectante, 280

Extinción

- Asignación compensatoria, 83
- Autoridad familiar, 93
- Curatela, 475, 169-29
- De la condición de guardador de hecho, 169-14
- De las servidumbres, 571 a 573
- Deber de crianza y educación de los hijos mayores, 69
- Del mandato, 169-6
- Del poder sin mandato, 169-8
- Derecho de viudedad, 276
- Derecho expectante, 190, 280, 281, 282
- Derechos del ausente o causahabientes, 55
- Disolución del consorcio conyugal, 244, 245
- Disolución del consorcio foral, 376
- Fiducia, 448, 463
- Legítima, 511
- Liquidación de varias comunidades, 269
- Llamamiento anterior, 321
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Pareja estable no casada, 309 a 311
- Relaciones jurídicas del fallecido, 466
- Renta vitalicia, 284
- Separación de patrimonios, 357
- Tutela, 141, 475
- Usufructo viudal, 291, 293, 301

Extraño

- Adquirente de cuota de un consorte, 374

- Instituido heredero habiendo legitimarios, 487
- Que ha recibido bienes relictos en exceso, 497

F

Facultativos

- Incapacidad para ser testigo, 415
- Prohibición de adquirir, 475

Familia

- Abandono de, 245
- Atenciones legítimas, 218
- Bienes de la, 216, 267, 527, 589
- Convivencia, 401, 459
- De procedencia, 216
- Imposibilidad de retorno a la, 154
- Interés de la, 183, 227
- Ruptura de la convivencia, 75 a 84
- Suspensión régimen de visitas y relaciones, 166

V. «Derecho de familia»

Familiar (es)

- Asuntos, 170, 182
- Bienes de origen, 216, 267
- Circunstancias, 77, 79, 83, 212, 327
- Dirección de la vida, 75, 76, 186
- Domicilio, 184
- Economía, 82, 83, 188, 227, 228, 241
- Instituciones fs. consuetudinarias, 201, 202
- Intereses, 218, 280
- Necesidades, 82, 187, 189
- Régimen económico, 195, 200
- Relaciones familiares, 75 a 80, 185
- Vivienda, 81, 190

Fianza

- Acto de disposición, 15
- Cancelación, 452
- De los padres, 95, 98
- Del sujeto a tutela, 39
- Del tutor o curador, 106, 114
- Del viudo usufructuario, 285, 287

- Explotaciones económicas, 284
 - Gastos de, 108
 - Pago gastos de los hijos, 77, 79
- V. «aseguramiento», «garantías»

Fideicomiso foral

V. «consorcio foral»

Fiducia sucesoria

- A favor de parientes, 171
- Administrador y representante, 449, 452
- Comitente, 439
- Contenida en pacto sucesorio, 381
- Delación, 448
- Disposición habiendo legitimarios, 454
- Disposiciones generales, 439 a 448
- Ejecución de la, 456 a 458
- Extinción de la, 463
- Facultades de disposición, 453
- Facultades de liquidación, 455
- Fiducia colectiva, 459, 460
- Fiduciarios, 440
- Forma del nombramiento, 442
- Inventario, 450
- Liquidación y división del consorcio c., 258, 259
- Obligaciones y cargas, 451
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Plazo y cómputo, 444, 445
- Prórroga o reducción del plazo, 446, 447
- Reiteración del llamamiento, 444, 445, 458
- Revocación del nombramiento, 443
- Subsidiariedad, 441
- Sucesión de la casa, 461
- Sucesivas, 445

Fiduciario

- Capacidad, 440
- Carácter personalísimo, 440

- Cargo voluntario y gratuito, 440
- Cónyuge viudo, 440, 444, 450, 456, 457, 459, 461, 462, 463
- Derecho de transmisión, 387
- Fiducia, 439 a 463
- Indignidad, 328, 332
- Liquidación consorcio conyugal, 258, 259, 455
- Modo de actuar, 457
- Ordenación voluntaria de la sucesión, 318, 407
- Renuncia, 462

Filiación

- Apellidos del hijo, 57
- Deberes de padres e hijos, 58
- Determinada contra su oposición, 61
- Efectos de la, 56 a 62
- Eficacia limitada, 61
- Extinción de la tutela, 141
- Gastos de maternidad, 62
- No discriminación, 521
- Padres con hijos menores, 59
- Principio de igualdad, 56
- Relación personal del hijo menor, 60
- Reproducción asistida, 325

Finca (s)

- Ajena, 541, 545, 555, 565, 574
- Cerramiento, 583
- Colindante, 576, 580
- Dominante, 551 y ss.
- Enclavada, 577
- Indivisa, 563
- Paso natural del agua pluvial, 544
- Plantaciones, 540
- Sin conexión a red general, 581
- Sirviente, 551 y ss.
- Uso razonable de la, 538
- Usufructuada, 562
- Vecina, 539, 548, 549, 550, 577

Firma de dote

- Institución familiar consuetudinaria, 201
- V. «dote»

Fondos de inversión acumulativos

- Plusvalía (bien común), 210
- Usufructo, 300

Forma (s)

- Aceptación y repudiación de la herencia, 349 a 351
- Acogimiento familiar, 164
- Capitulaciones, 195
- De división y adjudicación, 267
- De la entrega, 235
- De liquidación y división, 259
- De pago, 361
- Del inventario, 286
- Fiducia sucesoria, 442, 443, 456, 458
- Renuncia a la legítima, 492
- Sucesión paccionada, 377
- Testamentos, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 423, 430

V. «escritura pública»

Formalidades

- Aplicables al administrador judicial o voluntario, 9
- Aplicables al tutor, 9

Formalización

- De inventario, 95
- De la tutela, guarda y acogimiento, 162
- Del acogimiento familiar, 164, 165

Fraude (en)

- De los derechos del otro cónyuge, 236
- Del derecho de viudedad, 282

Frutos

- Administración, 26
- Alimentos, 253
- Bienes comunes, 210, 250
- Contribución económica del hijo, 67, 68, 70
- De los bienes confiados al menor, 8
- De los bienes de los menores, 8, 67

- Deber de restitución del indigno, 331
- Del patrimonio del ausente, 51
- Derechos del representante del ausente, 51
- En los mandatos entre cónyuges, 208, 243
- Inmisión de raíces y ramas, 539
- Liquidación de, 293
- Naturales, industriales y civiles, 293
- Patrimonio del menor, 8
- Usufructo de viudedad, 290

Fuentes

- De la disolución por otras causas, 254
- Del Derecho civil de Aragón, 1 a 3
- Del régimen de separación de bienes, 203
- Del régimen económico matrimonial, 193
- Régimen supletorio, 257, 270

Fuerza mayor

- Caída de árboles, 541

Función (es)

- Administración y disposición de bienes del menor, 9
- Autoridad familiar de otras personas, 88
- Autoridad familiar, 64, 74
- Curatela plural, 169-26
- De los guardadores legales, 5, 92
- Gestión de los bienes del hijo, 94
- Guardador de hecho, 149
- Tuitivas, 61
- Tutelares, 102 a 113, 123 a 126, 128, 136, 142, 149, 151, 155

Fundo

V. «finca»

Funeral

V. «gastos», «cargas hereditarias».

G

Ganadería

- Contratos sobre, 599
- Servidumbres y comunidades de pastos, 582, 583, 585 a 587

Garantía (s)

- Cancelación en la fiducia, 452
- De los acreedores hereditarios, 370
- Del pago de los gastos de los hijos, 77
- Del pago o consignación del precio, 595
- Del representante del ausente, 50
- Deudas pendientes, 265
- Inventario y fianza, 285
- Medidas provisionales, 246
- Otras medidas cautelares, 287
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Seguro, 297

V. «fianza», «aseguramiento»

Garantizar con derecho real

- El representante del menor obligaciones ajenas, 15

Gastos

- A cargo del caudal relicto, 451
- A cargo del usufructuario, 294
- Alimentos, 298
- Cargas hereditarias, 356
- Comunes de la pareja estable no casada, 307
- De adquisición de bienes comunes, 222, 239
- De asistencia a los hijos, 77, 82
- De conservación y defensa de los bienes hereditarios, 356
- De crianza y educación de los hijos, 65, 67 a 69, 77, 82
- De educación y colocación de los hijos, 490
- De embarazo y parto, 62
- De establecimiento, uso y conservación de la servidumbre, 558

- De la gestión del patrimonio común, 251
- De la gestión paterna, 97
- De la rendición de cuentas, 142
- De la reunión de la Junta de Padres, 176
- De la última enfermedad, 356
- De los hijos mayores o emancipados, 69, 77
- De maternidad, 62, DT4ª
- De producción, 293
- De puro lujo o mero recreo, 294
- De restitución de los bienes, 99
- Del ejercicio de la función tutelar o medida de apoyo, 108
- Del funeral, entierro o incineración, 356
- Deudas comunes, 218
- En el acogimiento familiar, 160, 164
- En el derecho de abolorio, 596
- Extraordinarios, 16, 77, 82
- Mejoras, 294
- Necesarios y útiles, 294
- Necesidades familiares, 58, 67, 70, 187, 189
- No colacionables, 363
- No computables para calcular la legítima, 432
- Ordinarios, 77, 82
- Primas de seguros, 297
- Reparaciones extraordinarias, 295
- Tributos, 296

Gastos de asistencia a los hijos

- Contribución de los padres, 77, 82
- Extraordinarios, 77, 82
- Medidas judiciales, 79
- Medidas provisionales, 84
- Ordinarios, 77, 82
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Realización compartida o separada, 82

Gestión

- Con mandato expreso, 207

- Contra la voluntad del otro, 208, 243
 - De la economía familiar, 227, 228
 - De la herencia pendiente de asignación, 449 a 455
 - De los bienes dados al menor o persona con discapacidad, 112
 - De los bienes del hijo, 94 a 99
 - De los bienes del pupilo, 138
 - De los bienes privativos, 243
 - Deber de información recíproca, 188
 - Del consorcio conyugal, 227 y ss.
 - Del patrimonio consorcial del ausente, 53
 - Desaparición de cónyuge, 46
 - Deudas comunes, 218, 219, 251
 - Disolución por muerte, 253
 - Disolución por otras causas, 254
 - Rendición de cuentas, 132, 142, 169-30
 - Sin mandato expreso, 208
- V. «administración», «disposición»

Gestión de los bienes comunes

- Actos «inter vivos» a título oneroso, 237
- Actuación conjunta, 233
- Actuación frente a terceros, 232
- Actuación indistinta, 230
- Adquisiciones por uno solo de los cónyuges, 239
- Atribución de la gestión a uno solo, 240
- Autorización judicial, 234
- Concreción automática de facultades, 242
- Del ausente, 53
- Desaparición de cónyuge, 47
- Disposiciones por causa de muerte, 238
- Ejercicio de profesión o negocio, 231
- Falta de consentimiento, 235
- Pactos sobre gestión, 229

- Privación de la gestión, 241
- Rescisión por fraude, 236

Gestión de los bienes de los hijos

- Bienes exceptuados de la gestión paterna, 94
- Deber de restitución, 99
- Derechos de los padres, 97
- Diligencia, 95
- Ejercicio de la gestión paterna, 94
- Inscripción en el Registro de la Propiedad, 95
- Obligaciones al finalizar la administración, 99
- Obligaciones de los padres, 95
- Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
- Rendición de cuentas, 99
- Responsabilidad de los padres, 96

Gobierno de la familia

- Deber de información recíproca, 76, 188, 228
- Decisiones sobre la economía familiar, 77, 78, 79, 186, 188, 227
- Dirección de la vida familiar, 75, 77, 186

Gravámenes sobre la legítima

- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Concepto, 498
- Efectos de la infracción, 499
- En beneficio de otros descendientes, 501
- Establecidos con justa causa, 501, 502
- Exclusión de los legados en titularidad plena, 498
- Facultad limitada del causante, 498
- Para el caso de fallecer todos los legitimarios sin descendencia, 501
- Permitidos, 501
- Prohibición, 498

Guarda administrativa

- A solicitud de padres o tutores, 159
- Asunción de funciones tutelares, 151
- Del menor, 158
- Del menor con discapacidad, 158
- Obligada reserva de las actuaciones, 160
- Provisional, 157
- Vigilancia del Ministerio Fiscal, 162

Guarda administrativa automática

- Asunción de solo la guarda por la entidad pública, 130
- Desamparo debido a fuerza mayor de carácter transitorio, 130

Guarda de hecho

- Acreditación, 169-13
- Anulabilidad de los actos no necesarios ni útiles, 149
- De las personas con discapacidad, 101, 169-9 a 169-14
- Definición, 146
- Designación de curatela, 121
- Información, cautelas y acciones, 148
- Justificación de la necesidad del acto y la condición de guardador, 149
- Obligación de notificar el hecho, 147
- Plural, 169-11
- Régimen jurídico, 149
- Relación con otras medidas de apoyo, 169-10, 169-16

Guarda y custodia de los hijos

- Autoridad familiar de los padres, 71 a 84
- Autoridad familiar de otras personas, 85
- Compartida, 79, 81
- Supuestos de improcedencia, 80, DA4ª

- Individual, 79, 80
- Informes de especialistas, 80
- Instituciones tutelares de menores, 100
- Medidas judiciales, 79
- No separación de hermanos, 80
- Régimen de comunicación, estancias o visitas, 80
- Procesos sobre, 75 a 84
- Principio de igualdad, 75, 76
- Vivienda y ajuar familiar, 81

Guardador

- Acreditación de la condición de g. de hecho, 169-13
- Cambio de titular, 10
- Con fines de adopción, 166
- Definición, 169-9
- Desamparo del menor, 150
- Ejercicio de sus funciones, 5, 169-11
- Extinción de la condición de g. de hecho, 169-14
- Funciones del, 169-12
- Incumplimiento de la obligación de alimentos, 10
- Nombramiento como curador, 169-10
- Notificación de resolución de desamparo, 153
- Obligaciones del menor, 5
- Relación personal del hijo menor, 60

H

Heredamiento

- De casa aragonesa, 388
- Otras situaciones de comunidad familiar, 202

Hereditario

- Aceptación de la herencia, 349, 350
- Adquisición de la herencia, 322
- Anulación del acto del testador, 45 a 45-2, 45-6
- Coherederos, 369 a 372, 520, 530

- Colación, 364
- Condiciones válidas, 476
- Contractual, 46, 377 a 404
- De herencia a favor del ausente, 55
- Declaración de, 518, 535, 536
- Del desaparecido o ausente, 46, 49
- Del legatario, 478
- Derecho de transmisión, 354
- Disposición a favor de, 474
- Disposición de bienes entre vivos, 422
- Diversidad de llamamientos, 344, 345
- División y adjudicación, 267
- Efectos del derecho de acrecer, 483
- En la sucesión a favor del ausente, 55
- Error en la persona del, 425
- *Ex re certa*, 467
- Habiendo legitimarios, 487
- Herencia yacente, 319
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Incapacidad relativa, 475
- Indignidad, 328
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323
- Institución contractual de, 383, 385, 396
- Institución recíproca, 419
- Interpretación del testamento a favor del, 416
- Legal, 46, 49, 465, 469, 516 a 536
- Momento de la delación, 321
- Nombramiento de, 466
- Pago del legado de parte alicuota, 468
- Partición, 366
- Posesión de los bienes, 302
- Preterición no intencional, 508
- Privación del derecho de viudedad, 275
- Prueba de la desheredación, 509
- Responsabilidad de los bienes comunes, 252
- Responsabilidad del, 355 a 361

- Sucesión de la casa, 461
- Sucesor por causa de muerte, 319
- Testamentario, 405 a 438
- Troncal, 355
- Venta de bien común, 235
- Vivienda familiar, 190

Herencia

- Aceptación y repudiación, 342 a 354
 - Adquisición, 322
 - Cargas y deudas, 355 a 361, 369 a 372
 - Composición, 316
 - Derechos del ausente, 55
 - Disposición de bien común, 238
 - Disposiciones generales, 316 a 324
 - Gastos de conservación, 356
 - Gastos de defensa, 356
 - Herencia yacente, 324
 - Partición, 365 a 368
 - Porción hereditaria, 46, 49
- V. «sucesión»

Herencia pendiente de asignación

- Administrador y representante, 449
- Contenido de la administración y representación, 452
- Disposición habiendo legitimarios, 454
- Facultades de disposición, 453
- Facultades de liquidación, 455
- Inventario, 450
- Obligaciones y cargas, 451

Herencia yacente

- Hasta la ejecución de la fiducia, 448
- Régimen, 324

Hermanidad llana

- Institución familiar consuetudinaria, 201

Hermanos

- Autoridad familiar, 87, 88
- Concurrencia de designados, 472

ÍNDICE ANALÍTICO

- Consorcio foral, 373
- Curatela por progenitores, 169-28
- De doble vínculo, 122, 160
- Designación de tutela o curatela, 121
- Fiducia colectiva, 459
- Guarda de hecho plural de la persona con discapacidad, 169-11
- Ineficacia del llamamiento, 520
- Instar constitución de la curatela, 169-15
- Institución tutelar para hs. de doble vínculo, 122
- Mayores, 87, 122
- Medio hermanos, 533
- No separación de los, 80, 160
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Prohibición de adquirir, 475
- Recobro de liberalidades, 524, 525
- Relación con los, 75, 77, 79
- Sucesión legal no troncal, 532, 533
- Sucesión troncal, 526
- Sustitución legal, 335, 336, 338

Hijo (s)

- A cargo, 75 a 84
- Adoptivos, 56, 472
- Alimentos, 451
- Apellidos, 57
- Atenciones, 187
- Aún no concebidos, 325
- Bienes de los, 94 a 99
- Comunes, 253, 396
- Con discapacidad, 169-28
- Concurrencia de designados, 472
- Crianza y educación, 75, 218
- De hermanos, 338, 373, 524, 526, 532, 533
- De uno solo de los cónyuges, 218, 396, DT11^a
- Deber de contribución, 82, 187
- Deberes de padres e, 58, 82
- Del ausente, 51
- Designación de curatela, 121
- Donación análoga, 253

- Fecundación asistida *post mortem*, 325
- Gastos de asistencia a los, 82
- Gastos de educación y colocación, 82, 489
- Guarda de hecho plural de la persona con discapacidad, 169-11
- Guarda y custodia o régimen de convivencia, 80
- Legitimarios, 488
- Menores, 59 a 93
- Representación, 346
- Sucesión de la casa, 461
- Sucesión legal, 521, 522

Hogar

- Atención directa al, 187

Hospital de Nuestra Señora de Gracia

- Sucesión intestada, 517, 536

Huecos

- En pared medianera, 547
- Luces y vistas, 545, 546, 550
- Protecciones, 549
- Voladizos, 548

I

Idioma

- Capítulos, 196
- Nombre propio, 25
- Pactos sucesorios, 382
- Testamento, 413

Imposibilidad

- De ejercer la autoridad familiar, 91
- De prestar la asistencia, 23, 73
- Para ser titular de funciones tutelares, 124

Imposibilidad de cumplimiento

- De las condiciones, 476
- De las normas para el nombramiento de heredero, 462
- De lo pactado, 3

Imprescriptible

- Acción de las relaciones de vecindad, 537
- Acción de supresión de voladizos, 548
- Acción para la colocación de protecciones, 549

Impuestos

V. «tributos»

Imputación

- En la legítima, 490
- En la participación del cónyuge deudor, 224
- Liberalidades no imputables, 491
- Liquidación ordinaria, 265

Inalienabilidad

- Consorcio foral, 374
- De los inmuebles adquiridos por derecho de abolorio, 596
- Del derecho de viudedad, 273
- Del usufructo viudal, 290

Incineración

V. «gastos», «cargas hereditarias».

Incrementos

- De los bienes comunes, 250
- De los bienes propios, 211

Incumplimiento

- Acciones de, 235
- De cargas y prestaciones impuestas al instituido, 401
- De la finalidad de la asignación c., 83
- De la función tutelar, 126
- De los deberes propios de los parientes de la Junta, 175
- De medidas judiciales, 79
- De obligaciones inherentes a la viudedad, 301
- Del deber de atribuir la legítima en bienes relictos, 497
- Del deber de crianza y educación, 85, 88, 90, 510

- Del deber de prestar alimentos, 10
- Del gravamen, 502
- Del pacto de relaciones familiares, 77

Indemnizaciones

- Constitución forzosa de servidumbres, 565, 577 a 581
- De perjuicios causados a la persona, 212
- Paso por razón de obras, 542
- Por daños a terceros, 218, 219
- Por despido o cese de actividad profesional, 210
- Por siniestro de bienes asegurados, 297
- Uso de pared medianera, 543

Indignidad para suceder

- Caducidad de la acción, 333
- Causa de desheredación, 510
- Causa de revocación de pactos sucesorios, 401
- Causas, 328
- Deber de restitución, 331
- Efectos, 330
- Extinción del derecho de viudedad, 276
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Rehabilitación del indigno, 332
- Sustitución legal, 336 a 339

Indivisibilidad

- De las comunidades de pastos y ademprios, 585, 586
- De las servidumbres, 554

Indiviso (a)

- Adjudicación proindiviso, 259
- Comunidad que continúa tras la disolución, 250 a 257
- Indivisión pactada o dispuesta en testamento mancomunado, 258
- Mitad i. del bien legado, 238
- Presunción de titularidad por mitades, 206

Ineficacia

- Capítulos matrimoniales, 197, 198
- De las disposiciones correspectivas, 403, 420 a 422
- Del llamamiento legal, 520
- Del llamamiento voluntario, 323
- Disposición de bienes comunes, 235
- Institución contractual, 387
- Pactos sucesorios, 403, 404
- Sobrevvenida, 420
- Testamentos, 424, 431 a 437

Informe

- De la entidad pública al Ministerio Fiscal, 162
 - De los servicios de atención al menor, 165
 - Del ejercicio de la guarda administrativa, 159
 - Del guardador de hecho, 148
 - Del tutor, curador, mandatario de apoyo y guardador de hecho, 105
- V. «notificación»

Inmuebles

V. «bienes inmuebles»

Inoponibilidad

- Estipulaciones capitulares, 198
- Venta de cosa común, 235

Inscripción

- De bienes de los hijos, 95
- De bienes inmuebles de la herencia a favor del ausente, 55
- De la emancipación, 31

Instituto Aragonés de Servicios Sociales

- Disposiciones a favor del alma o de los pobres, 473
- Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 536

Institución

- A favor de contratante, 385 a 394
- Contractual, 383, 401

- De presente, 386, 389 a 391, 402, DT19ª
- En cosa cierta y determinada, 467, 477, 479, 480
- En el derecho de usufructo, 467
- Familiar consuetudinaria, 201
- Para después de los días, 386, 392 a 394
- Recíproca, 380, 395, 396, 419
- Tutelar, 100 a 167

Instituciones tutelares

- Capacidad, excusa y remoción, 123 a 128
- Caracteres, 102
- Curatela, 145
- Designación, 113 a 122
- Enumeración, 100
- Gastos, daños y perjuicios, 108
- Guarda administrativa, 157 a 162
- Guarda de hecho, 146 a 149
- Modos de delación, 103
- Nombramiento, 104
- Remuneración, 109
- Publicidad, 111
- Responsabilidad, 110
- Tutela, 130 a 144
- Vigilancia y control, 105

Instrumento público

- Designación voluntaria de la institución tutelar, 103, 113
 - Establecimiento de la obligación de inventario o fianza, 285
 - Orden de la autoridad familiar de otras personas, 88
 - Testamento en un mismo, 406
- V. «documento público», «escritura pública»

Instrumentos de trabajo

V. «bienes de uso personal o profesional»

Intangibilidad de la legítima

- Cualitativa, 497 a 502
- Cuantitativa, 494 a 496

Intangibilidad cualitativa

- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Cumplimiento en bienes relictos, 497
- Efectos de la infracción, 499
- Gravámenes permitidos, 501
- Justa causa de gravamen, 502
- Prohibición de gravámenes, 498

Intangibilidad cuantitativa

- Forma de practicar la reducción, 496
- Lesión de la legítima, 494
- Prelación en la reducción de liberalidades, 495
- Reducción de liberalidades, 494

Integración

- Disposiciones correspectivas, 416
- Normas de los contratos, 416
- Pactos sucesorios, 384

Interés (es)

- Conflictos de, 36, 124
- De la cuenta general de la tutela, 144
- De la familia, 183, 218, 227, 280
- De la persona con discapacidad, 43, 169-22
- De las obligaciones de cada cónyuge, 218
- Del mandante, 169-6
- Del menor, 5, 18, 20, 24, 60, 64, 74, 76, 77, 80, 89, 90, 102, 121, 161, 165 a 168
- Del otro cónyuge, 208
- Devengo de, 144
- Legal, 144, 295
- Oposición de, 13, 28, 42, 366, 367
- Personal directo, 173
- Usufructo de dinero, 299

Internamiento no voluntario

- De persona con discapacidad, 44
- De persona menor de catorce años, 20

Interpretación

- Instituciones familiares consuetudinarias, 201
- Pactos sucesorios, 384
- Testamento, 416
- Viudedad, 272

Interpretación del testamento

- Cláusulas ambiguas y oscuras, 416
- Disposiciones correspectivas, 425
- Disposiciones ininteligibles, 416
- Disposiciones que impongan cargas, 416
- En favor del heredero, 416
- Error en la persona o bienes, 425

Intérprete

- Idioma de los capítulos, 196
- Idioma de los pactos sucesorios, 382
- Idioma del testamento, 412
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Prohibición de adquirir m. c., 475

Intervención de los poderes públicos

- A solicitud de los titulares de la autoridad familiar, 65

Intervención judicial

- Para proteger a la persona con discapacidad, 45-9
- Para proteger al menor, 10

Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad

- De la persona mayor de edad con discapacidad, 43
- De la persona menor de catorce años, 20
- Del menor mayor de catorce años, 24

Inutilización

- Del testamento cerrado, 435
- Del testamento ológrafo, 436

ÍNDICE ANALÍTICO

Invalidez

- Anulabilidad de los actos del representante legal sin la necesaria autorización, 19
- Anulabilidad por falta de asistencia, 29, 145
- Anulabilidad testamentaria, 427
- Conversión del testamento nulo, 430
- De la disposición testamentaria, 424
- De las decisiones de la Junta de Parientes, 178 a 180
- De los actos del menor de catorce años, 22
- Del acto de la persona sin aptitud para realizarlo, 45
- Del pago, 45-5
- Del testamento, 423
- Nulidad de donación de bien común, 237
- Nulidad del matrimonio, 4, 244, 246, 247, 249, 253, 276
- Nulidad testamentaria, 426
- Por falta de intervención del curador o mandatario de apoyo, 45-1
- Por obtención de una ventaja injusta, 45-6
- Régimen de la anulación, 45-4
- Vivienda familiar, 190

Inventario

- Activo del, 262
- Bienes afectos a la viudedad del cónyuge ausente, 54
- Bienes del ausente, 50
- Bienes del hijo menor, 95
- Bienes del menor, 152
- Bienes del sujeto a tutela o curatela, 107
- Bienes heredados del cónyuge del ausente, 54
- Bienes relictos, 358
- Fiducia sucesoria, 450
- Gastos de, 108
- Herencia a favor del ausente, 55

- Liquidación del consorcio c., 261 a 263, 268
- Medidas provisionales, 246
- Pasivo del, 263
- Responsabilidad del heredero, 355
- Usufructo viudal, 285 a 288, 301

Irrevocabilidad

- Aceptación y repudiación de la herencia, 343
- Actos otorgados entre vivos por el fiduciario, 458
- Disposiciones correspectivas, 421
- Pactos sucesorios, 401

J

Juez

- Actos que requieren autorización o aprobación, 169-24, 169-25, 169-28
- Asistencia, 23
- Asunción de la guarda por la entidad pública, 158
- Atribución de la gestión a uno solo, 240
- Autorización previa, 169-24
- Capacidad para capitular, 199
- Concreción automática de facultades de gestión, 242
- Constitución de la tutela, 133
- Constitución forzosa de servidumbres, 565
- Contenido de las servidumbres, 556
- Curatela plural, 169-26
- Deber de comunicación entre curador y persona necesitada de apoyo, 169-17
- Delación dativa de la tutela o curatela, 120 a 122
- Desacuerdos sobre la gestión, 228
- Disolución del consorcio, 245
- Disolución por otras causas, 254
- Disposición voluntaria, 134, 135
- Disposiciones incompatibles, 118

- Divergencias entre titulares de la autoridad familiar, 74, 89
 - División de comunidades de ademprios, 586
 - Domicilio familiar, 184
 - Emancipación, 30
 - Enajenación judicial de bienes inmuebles, 281
 - Extinción de la condición de guardador de hecho, 169-14
 - Extinción de la curatela, 169-29
 - Extinción del mandato, 169-6
 - Extinción derecho expectante, 280
 - Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
 - Facultad de representación, 38
 - Fianza, 106
 - Imposibilidad de prestar consentimiento, 234
 - Ineficacia atribuciones sucesorias, 404
 - Ineficacia del nombramiento de fiduciario, 440
 - Intervención de los nudo propietarios, 292
 - Intervención en interés del menor, 10
 - Intromisión en los derechos de la personalidad, 20, 24, 43
 - Inventario y fianza, 285, 286
 - Liquidación por viudo-fiduciario, 259
 - Mandato de apoyo, 169-7
 - Mediación familiar, 78
 - Medidas cautelares, 287
 - Medidas sobre relaciones familiares, 79
 - Medidas provisionales, 84, 246
 - Modalidad de curatela, 169-19
 - Modificación curatela por progenitores, 169-28
 - Negativa injustificada del consentimiento, 234
 - Nombramiento de administrador judicial, 132
 - Nombramiento de defensor, 46
 - Nombramiento de representante, 49
 - Nombramiento de tutor real, 94, 98
 - Nombramiento del tutor y curador, 104
 - Nombramiento, vigilancia y control del tutor, 113
 - Notificación de resolución de desamparo, 153
 - Pacto de relaciones familiares, 77
 - Poder sin mandato, 169-8
 - Privación de la gestión, 241
 - Promoción de la tutela ordinaria, 131
 - Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
 - Relación personal del hijo menor, 60
 - Remoción del tutor, 127, 128
 - Remuneración del tutor, 109
 - Rendición de cuentas del curador, 169-30
 - Rendición final de cuentas de la tutela, 142 a 144
 - Representación personas con discapacidad, 42, 169-12
 - Retroacción de los efectos de la disolución, 247
 - Revisión de la curatela, 169-18
 - Separación conyugal, 244
 - Sucesión a favor del cónyuge viudo, 531
 - Vigilancia y control de las funciones tutelares, 105, 114
 - Vivienda familiar, 190
 - Voluntad y preferencias en la adopción y prestación de apoyo, 37
- V. «Autorización judicial»
- Juicio**
- V. «procedimiento»
- Junta de Parientes**
- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13

ÍNDICE ANALÍTICO

- Actos que requieren autorización o aprobación, 169-24, 169-25, 169-27, 169-28
 - Aprobación de la partición, 15, 366
 - Asistencia a la reunión, 176
 - Asistencia a los menores mayores de catorce años, 23, 28, 73, 128, 346, 367
 - Asistencia a personas con discapacidad mayores de edad o emancipadas, 367
 - Asistencia al menor emancipado, 33
 - Asistencia al que no ha cumplido dieciocho años, 99
 - Asistencia al sometido a curatela, 367
 - Asistencia o representación personas con discapacidad, 42
 - Autorización previa, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 45-7, 51, 112, 242, 259, 346, 454, 169-24
 - Causas de inidoneidad, 173
 - Composición, 172
 - Constitución judicial y funcionamiento, 175
 - Constitución y funcionamiento bajo fe notarial, 174
 - Desacuerdos sobre el domicilio familiar, 184
 - Determinación de la contribución a las cargas de la tutela, 140
 - Disposiciones tutelares incompatibles, 118, 119
 - Divergencias entre los titulares de la autoridad familiar, 74, 89
 - División de un patrimonio o cosa común, 169-24, 169-25
 - Eficacia de las decisiones, 178
 - Falta de acuerdo, 181
 - Fianza, 106
 - Guarda de hecho, 149
 - Impedimento transitorio para desempeñar la curatela, 169-27
 - Invalidez de las decisiones, 179, 180
 - Inventario de los bienes del sujeto a tutela o curatela, 107
 - Llamamiento de no parientes, 182
 - Llamamiento, 170, DT1^a
 - Medidas de control del mandato de apoyo, 169-5
 - Para justificar la necesidad del acto, 230
 - Reglas aplicables, 171
 - Remuneración del cargo tutelar, 109
 - Representación en caso de oposición de intereses, 13, 17
 - Representación personas con discapacidad, 169-12, 169-27
 - Toma de decisiones, 177
 - Vacantes, 175
 - Vigilancia y control de las funciones tutelares, 114
- Juntar dos casas**
- Institución familiar consuetudinaria, 201
- Jurisdicción voluntaria**
- Constitución de la Junta judicial, 175
 - Nombramiento de un defensor judicial, 129
- Justa causa**
- V. «causa justa».
- Justo título**
- Usucapción de servidumbres, 568, 569
- L**
- Legados**
- Aceptación del legado contractual, 385
 - Adquisición, 477
 - Consorcio foral, 373
 - De alimentos, 480
 - De bien consorcial, 238
 - De carácter personalísimo, 478

- De cosa cierta y determinada, 477, 479, 480
- De educación, 480
- De parte alicuota, 468
- De renta o pensión vitalicia, 478
- De usufructo, 467, 478
- Derecho de acrecer, 481
- Derecho de transmisión, 478
- Distribución de toda la herencia en, 469
- En pactos sucesorios, 381
- Indignidad, 330, 331, 333
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323, 437
- Inscripción, 479
- No gravan la legítima, 498
- Pactados en favor de tercero, 397
- Pago, 360
- Posesión del, 479
- Prelación entre legatarios, 480
- Propiedad, 477
- Remuneratorios, 480
- Responsabilidad del heredero, 355

Legatarios

- Adquisición del legado, 477
- Clases, 319
- Condiciones válidas, 476
- De bien consorcial, 238
- De cosa específica del caudal, 477, 479, 480
- De parte alicuota, 468
- Derecho de acrecer, 483
- Derecho de transmisión, 478
- Distribución de toda la herencia entre, 469
- En pactos sucesorios, 385, 386, 395
- Error en la persona, 425
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Incapacidad relativa, 475
- Ineficacia del nombramiento, 437
- Institución recíproca, 419
- Nombramiento, 466
- Preferencias, 359
- Prelegatarios, 345

Legislación especial

- Plantaciones forestales, 540

Legislación general

- Alimentos entre parientes, 515
- Expediente matrimonial, 193

Legítima

- Alimentos, 515
- Cálculo, 489
- Caudal computable, 489
- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Colectiva, 486
- Cuantía, 486
- Cumplimiento en bienes relictos, 497
- Desheredación, 509 a 511, 514
- Exclusión voluntaria de descendientes, 512 a 514
- Facultad de distribución, 486
- Forma de practicar la reducción de liberalidades, 496
- Gravámenes permitidos, 501
- Imputación, 490
- Intangibilidad cualitativa, 497 a 502
- Intangibilidad cuantitativa, 494 a 496
- Justa causa de gravamen, 502
- Legitimarios de grado preferente, 488
- Lesión de la, 494
- Liberalidades no imputables, 491
- Mención suficiente, 504
- Prelación en la reducción de liberalidades, 495
- Prescripción de acciones, 493
- Preterición, 503 a 508
- Prohibición de gravámenes, 498, 499
- Reducción de liberalidades, 496
- Renuncia a la, 492
- Títulos de atribución, 487

Legitimación

- De cada cónyuge frente a terceros, 232
- Del administrador de la fiducia, 452

- Del menor de catorce años, 493
- En ejercicio de profesión o negocio, 231
- Indistinta de cualquiera de los cónyuges, 230
- Para instar la anulación, 190
- Para instar medidas judiciales, 79
- Para pedir la división del patrimonio consorcial, 258
- Para pedir medidas provisionales, 84

Legitimarios

- Descendientes del causante, 486
- De grado preferente, 488, 494, 503, 508, 512, 515
- Liquidación y división del consorcio, 259
- Reconocimiento de privatividad, 214

Legitimarios de grado preferente

- Derecho a alimentos, 515
- Desheredación con causa legal, 509 a 511, 514
- Exclusión voluntaria, 512 a 514
- Legitimación por lesión cuantitativa, 494
- Los hijos, 488
- Por sustitución legal, 339, 340, 488, 513
- Preterición, 503 a 508

Lenguas

V. «idioma»

Leñas

- Comunidad *pro diviso*, 588
- Derecho real de aprovechamiento parcial, 584
- Mancomunidades, 585

Lesión

- De la legítima colectiva, 494

Letrado (s) de la Administración de Justicia

- Facultades y derechos del representante del declarado ausente, 51

- Ineficacia atribuciones sucesorias, 404
- Ineficacia del nombramiento de fiduciario, 440
- Inventario de los bienes del sujeto a tutela o curatela, 107
- Junta de Parientes, 172, 175
- Nombramiento del tutor y curador, 104
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Sucesión a favor del cónyuge viudo, 531

Ley (leyes)

- Condiciones contrarias, 476
- De enjuiciamiento civil, 225, 259, 281
- De sucesiones, 200, 258, 260, 275, 276
- Deberes de protección, 150
- Formalidades del testamento, 407, 409, 423
- Fuente jurídica, 316
- Gravámenes impuestos, 490, 496
- Llamados por, 344, 474, 523
- Modo de delación, 317
- Motivo contrario, 424
- Oposición a resoluciones administrativas, 154
- Personal, 417
- Procesal, 324
- Que exigen una capacidad específica, 22, 45
- Que permiten realizar actos sin representación o asistencia, 7, 23
- Que señalan prohibiciones, 22
- Sobre apellidos, 57
- Sobre filiación, 56
- Sobre intromisiones en los derechos de la personalidad, 20, 24, 43
- Sobre posesión y administración de bienes del ausente, 50

Liberalidades

- Computables para calcular la legítima, 489

- Consorcio foral, 373
- De escaso valor, 393
- Donación, 223, 237, 254, 277, 281
- Entre cónyuges (ineficacia), 404, 438
- Imputación a la legítima, 490
- Mutuas, 406
- No colacionables, 363
- No computables para la legítima, 489
- No imputables en la legítima, 491
- Práctica de la colación, 364
- Recobro, 374, 524, 525
- Reducción por lesión cualitativa, 497
- Reducción por lesión cuantitativa, 494 a 496
- Usuales, 15, 237, 393, 489
- Valoración, 490
- Voluntariedad de la colación, 362

Limitaciones

- A la capacidad de obrar del menor, 7
- Acciones, participaciones o partes de sociedades, 267
- Al derecho de viudedad, 277, DT11^a
- Del poder de disposición del instituido, 390
- Diversidad de llamamientos a una misma herencia, 344
- Facultad de disposición m. c., 464
- Gravámenes sobre la legítima, 498
- Impuestas al tutor, 9
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323

Liquidación

- Concursal, 264
- De varias comunidades, 269
- Del consorcio conyugal, 258 a 270
- Del régimen económico matrimonial, 77
- Facultades de liquidación del fiduciario, 455, 457
- Ordinaria, 265
- Sin necesidad de, 238

Liquidación y división del consorcio

- Activo del inventario, 262
- Aventajas, 266
- Capacidad, 260
- Derecho a la división, 258
- División y adjudicación, 267
- Inventario, 261
- Las deudas comunes tras la división, 268
- Liquidación concursal, 264
- Liquidación de varias comunidades, 269
- Liquidación ordinaria, 265
- Modalidades de liquidación y división, 259
- Pasivo del inventario, 263
- Régimen supletorio, 270

Llamamiento (s)

- A favor de herederos, 474
- A favor de los pobres, 473
- A favor de no nacidos, 326
- A favor de parientes, 474
- A favor del alma, 473
- A favor del ausente, 55
- A título de heredero, 322, 323
- A título particular, 319, 322, 323, 466
- A título universal, 319, 466
- Aceptación y repudiación, 342 a 354
- Conjunto, 472, 481
- Derecho de acrecer, 481 a 483
- Designación de sucesor, 464 a 476 bis
- Distribución de toda la herencia en legados, 469
- Diversidad de llamamientos a una misma herencia, 344, 345
- Diversidad de llamamientos universales, 518
- Heredero «ex re certa», 467
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323, 404, 437, 438
- Junta de Parientes, 170, 182

- Legado de parte alícuota, 468
- Modos de delación, 317
- Nombramiento de heredero, 466
- Orden de sucesión legal, 517
- Ordenación voluntaria, 318
- Pluralidad, 342
- Por distintos modos de delación, 345
- Simultáneo, 345, 472
- Sucesión voluntaria, 319
- Sucesivos, 321, 472
- Sucesores por causa de muerte, 319
- Sustitución legal, 334 a 340
- Transmisión del, 354, 387

Luces y vistas

- Derecho a edificar o construir, 550
- Huecos en pared medianera, 547
- Protecciones, 549
- Régimen normal, 545
- Servidumbres de, 574 a 576
- Toma de medidas, 546
- Voladizos, 548

Lucro sin causa

- Relaciones entre patrimonios, 226
- V. «enriquecimiento injusto»

M

Mala fe (malicia)

- Nulidad del matrimonio, 249
- Incumplimiento del usufructuario, 301
- V. «negligencia», «culpa», «dolo»

Mancomunado

- V. «testamento mancomunado»

Mancomunidades

- De pastos, leñas y demás adem-
prios, 585

Mandatario

- Aptitud para ser, 169-2
- Comparecencia, 169-1
- Condiciones de ejercicio, 169-4

- Contenido del mandato, 169
- Extinción del mandato, 169-6
- Obligatoriedad y responsabilidad,
169-3

Mandato

- De apoyo, 45-1, 101, 168, 169,
169-3, 169-7, 169-10
- Entre cónyuges, 191
- Extinción del, 169-6
- Gestión con mandato expreso,
207, 243
- Gestión sin mandato expreso, 208,
243
- Límites, 169-4
- Medidas de control, 169-5
- Relación con otras medidas de
apoyo, 169-16

Matrimonio

- Ausencia y economía del, 53
 - Causa de extinción de la pareja es-
table, 309
 - Comunidad de vida, 183
 - Condición de contraer o no, 476
 - Derecho de viudedad, 192, 404 a
435
 - Derechos y deberes, 183
 - Domicilio familiar, 184
 - Mandatos entre cónyuges, 191
 - Mayoría de edad, 4
 - Necesidades familiares, 187, 189
 - Nulidad, 4
 - Nulidad, separación o divorcio, 75
a 84, 244, 249, 253, 276, 404,
438, 440, 441, DA2ª, DT6ª
 - Principio de libertad de regulación,
185
 - Régimen económico, 193, 194,
195 a 270
 - Vivienda familiar, 190
- Mayor de dieciocho años**
- Aprobación cuentas de admi-
nistración, 99
 - Capacidad jurídica, 3-2
 - Mayoría de edad, 4

Mayoría de edad

- A los dieciocho años, 4
- Capacidad, 4
- Capítulos matrimoniales, 199
- Cese del acogimiento familiar, 167
- Extinción de la autoridad familiar, 93
- Extinción de la tutela, 142
- Gastos de los hijos mayores, 69, 77, 82
- Nulidad del matrimonio, 4
- Pactos sucesorios, 378
- Para ser fiduciario, 440
- Parejas estables no casadas, 303
- Plazo de la fiducia, 445
- Por matrimonio, 4
- Testamento ológrafo, 408

Mediación familiar

- A instancia del Juez, 78
- Definición, DT7^a
- Entidades colaboradoras, DT7^a
- Por acuerdo de los padres, 78
- Principios, DT7^a
- Régimen de los acuerdos obtenidos, 78
- Régimen provisional, DT7^a
- Ruptura de la convivencia de los padres, 75, 78, DT7^a
- Servicios del Gobierno de Aragón, DT7^a
- Supuestos en que no procede, 78
- Suspensión del procedimiento judicial, 78

Medianería

- Árboles medianeros, 540
- Huecos en pared medianera, 547
- Seto vivo medianero, 540
- Uso de pared medianera, 543

Medidas

- Administrativas de protección de menores, 5, 6, 151, 160 a 162, 165
- Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges, 240

- Cautelares en el usufructo de viudedad, 287
- Capacidad jurídica y m. de apoyo, 34 a 39
- De apoyo, 34 a 36, 38, 40, 41, 45, 45-8, 45-9, 77, 79, 101, 102, 105, 108, 123, 124, 169-1, 169-6, 169-10, 169-16, 170, 199, 240, 242, 328, 346, 367, 473, 476 bis, 536
- De control del mandato, 169-5
- De protección del menor, 158
- De vigilancia y control del cargo tutelar, 105, 108
- En caso de divergencias entre los padres, 74
- En caso de puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
- Judiciales de protección de menores o personas con discapacidad, 10
- Para hacer efectiva la relación personal del hijo, 60
- Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98

Medidas judiciales a falta de pacto de relaciones familiares

- Aseguramiento, 79
- Criterios, 79
- Especialidades procesales, DA2^a, DA3^a
- Incumplimiento, 79
- Legitimación, 79
- Medidas de apoyo, 79
- Modificación, 79, DT6^a
- Solicitud de custodia compartida, DT6^a

Medidas provisionales

- Disolución del consorcio c., 246
- Especialidades procesales, DA2^a, DA3^a
- Ruptura de la convivencia de padres con hijos a cargo, 84

Mejoras

- Usufructo viudal, 294

Menor con discapacidad

- Guarda administrativa, 158

Menor con suficiente madurez

- Audiencia previa a la adopción, 166
- Capacidad, 7
- Consentimiento del acogimiento familiar, 164
- Derecho a ser oído, 6
- Ejercicio de la autoridad familiar, 73
- Intromisión de terceros en derechos de la persona menor de catorce años, 20
- Notificación de resolución de desamparo, 153
- Prestación personal del menor de catorce años, 21

Menor de edad

- Acogimiento familiar, 160 a 167
- Acogimiento residencial, 160 a 162
- Administración voluntaria, 112
- Administración y disposición, 9, 12, 23, 26
- Asunción de la guarda por la entidad pública, 158, 160
- Capacidad para otorgar capítulos, 199
- Capacidad, 7
- Capacidad jurídica, 3-2
- Cese de la tutela automática, 156
- Cómputo de la edad, 11
- Curatela de emancipados, 145
- Deber de crianza y autoridad familiar, 63 a 93
- Deber de protección, 150
- Derecho a ser oído, 6, 76, 80, 89
- Derecho a un contacto directo con sus padres, 76
- Desamparo, 103, 150
- Disposiciones de los titulares de la autoridad familiar sobre tutela, 115

- Emancipado, 30 a 33
- Fiducia sucesoria, 445, 454
- Gastos de asistencia, 82
- Gestión paterna de sus bienes, 94 a 99
- Guarda administrativa, 157 a 162
- Guarda de hecho, 146
- Guarda provisional, 157
- Guarda y custodia o régimen de convivencia, 80
- Instituciones de guarda, 5
- Intervención judicial, 10, 79
- Junta de Parientes del, 173
- La persona menor de catorce años, 12 a 22
- Legitimarios, 259
- Liquidación y división del consorcio c., 260
- Mayor de catorce años, 23 a 29
- Medidas judiciales, 79
- Minoría de edad, 5
- Supuestos para su nombramiento, 129
- Nombramiento de un defensor judicial, 129
- Oposición de intereses, 13 a 28
- Patrimonio, 8
- Progenitor, 73
- Protección por la Administración, 150 a 167
- Reintegración a su autoridad familiar o tutela, 155
- Relación personal, 60, 75 a 85
- Responsabilidad, 110
- Tutela de menores, 100, 103, 130, 131, 136, 138, 140

Menor emancipado

V. «emancipación»

Menor mayor de catorce años

- Aceptación y repudiación de la herencia, 346
- Administración de bienes, 26
- Anulabilidad por falta de asistencia, 29

- Aprobación de cuentas de la administración, 99
- Capacidad para capitular, 199
- Capacidad para nombrar fiduciario, 439
- Capacidad para ser testigo, 414, 415
- Capacidad para testar, 408
- Capacidad, 7, 23, 27
- Con discapacidad, 38
- Designación hecha por uno mismo, 113
- Intromisiones de tercero en los derechos de la personalidad, 24
- Mandato de apoyo, 168
- Nombre propio, 25
- Oposición de intereses, 28
- Otras disposiciones voluntarias, 114
- Partición de la herencia, 367
- Inventario en la fiducia, 450
- Inventario y fianza del cónyuge viudo, 285
- Llamamiento sucesorio a favor del ausente, 55
- Medidas judiciales, 79
- Medidas provisionales, 84
- Modificación curatela por progenitores, 169-28
- Nombramiento de defensor o representante, 46, 49
- Notificación de resolución de desamparo, 153
- Notificación medidas de guarda de la entidad pública, 160
- Oposición a la resolución de desamparo, 154
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Plazo de cumplimiento de la fiducia, 446, 447
- Privación de la autoridad familiar o del cargo tutelar, 155
- Procedimiento de remoción, 127
- Promoción de la tutela ordinaria, 131
- Proteger a la persona con discapacidad, 45-9
- Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
- Rendición de cuentas del apoderado, 169-8
- Revocación declaración de desamparo, 155
- Tutela provisional, 132
- Vigilancia y control de las funciones tutelares, 105, 114
- Vinculación de las disposiciones voluntarias, 119

Metálico

V. «dinero»

Ministerio Fiscal

- Autorización o aprobación judicial, 169-25
- Autorización o aprobación judicial a menores, 18
- Cese del acogimiento familiar, 167
- Curatela, 169-16
- Declaración de ausencia, 48
- Extinción de la condición de guardador de hecho, 169-14
- Fiducia colectiva, 459
- Guarda administrativa, 159, 162
- Guarda de hecho, 147
- Guarda provisional, 157
- Impedimento transitorio para desempeñar la curatela, 169-27
- Informe de la entidad pública, 45-8, 154
- Instar constitución de la curatela, 169-15
- Intervención en interés del menor o con discapacidad, 10, 77, 84
- Invalidez de acuerdos de la Junta de Parientes, 180
- Administración y disposición de los bienes del menor, 9
- Capacidad del menor, 7
- Cómputo de la edad, 11
- Criterios para el ejercicio de las funciones de guarda, 5

ÍNDICE ANALÍTICO

- Deber de obediencia, 5
- Derecho a ser oído, 6, 76, 80, 89
- Derecho al desarrollo y formación, 5
- El menor emancipado, 30 a 33
- El menor mayor de catorce años, 23 a 29
- Intervención judicial, 10
- La persona menor de catorce años, 12 a 22
- Patrimonio del menor, 8
- Representación y asistencia, 5
- Situaciones de riesgo o desamparo, 5
- Sujeción a instituciones de guarda, 5
- De la relación personal del hijo menor, 60
- De la remuneración del cargo tutelar, 109
- De las servidumbres, 560, 572
- De medidas judiciales, 79
- Del acogimiento familiar, 160
- Del pacto de relaciones familiares, 77
- Del pacto sucesorio, 400
- Del régimen económico matrimonial, 194
- Del testamento mancomunado, 421
- Del usufructo viudal, 291
- De servidumbres, 560, 572
- Inmobiliaria de fincas consorciales, 230
- Sustancial, 422
- Unilateral, 421

Mobiliario ordinario

- Vivienda familiar, 190

Modalidades

- De acogimiento familiar, 164, 165
- De asignación compensatoria, 77, 83
- De curatela, 169-19
- De gastos de asistencia a los hijos, 77, 82
- De liquidación y división, 259
- Disposición de bienes en testamento mancomunado, 422
- Diversidad de llamamientos a una misma herencia, 344
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323
- Lingüísticas, 196, 382, 413
- Pactos de renuncia, 399
- Pactos sucesorios, 380

Modificación

- Convencional, 400
- De actos m. c., DT20^a
- De disposiciones correspectivas, 421
- De estipulaciones capitulares, 200
- De la asignación compensatoria, 83
- De la finca dominante o sirviente, 572

Momento

V. «Tiempo»

Motivo (s)

- Contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, 424
- De mal trato o incumplimiento de la autoridad familiar, 88
- Error en los, 424, 514
- Falsos, 471
- Fundados para exigir inventario y fianza, 95
- Grave, 46, 49
- Ilícitos, 471

Muebles

V. «bienes muebles»

Muerte

- Cese del acogimiento familiar, 167
- Conmoriencia, 320
- Del ausente, 54
- Del hijo, 99
- Del mandante o mandatario, 169-6
- Del perceptor de la asignación c., 83

- Disolución del consorcio conyugal, 244, 253
- Extinción de la autoridad familiar, 93
- Extinción de la curatela, 169-29
- Extinción pareja estable no casada, 209
- Irrevocabilidad de las disposiciones correspectivas, 421
- Momento de la delación, 321
- Momento y lugar de apertura de la sucesión, 320
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462
- Sucesión por causa de, 316

N

Necesidades familiares

- Actos de disposición necesarios para satisfacer las, 230
- Contribución de padres no convivientes, 77
- Deber de contribución de los cónyuges, 187
- Deber de contribución de los hijos, 66 a 69, 187
- Deber de contribución de padres e hijos, 58
- Deber de contribución del padre excluido, 61
- Deber de información recíproca, 188, 227, 228
- Determinación de la contribución conyugal, 187
- Deudas comunes, 218 a 221
- Extinción del derecho expectante, 280
- Gastos de asistencia a los hijos, 77, 82
- Medios para satisfacerlas, 187
- Responsabilidad frente a terceros, 189

Negligencia

- En la formalización del inventario, 288
- Extinción del usufructo vital, 301

- Pérdida o deterioro de bienes heredados, 355
 - Responsabilidad de los cargos tutelares, 110
- V. «culpa», «dolo», «malicia»

Negocios

- Actos incluidos en el tráfico habitual, 231, 280
- Contenidos en capítulos, 200
- Deber de información, 227
- De la persona con discapacidad, 169-21, 169-24, 169-25
- Del causante, 451, 452
- Del desaparecido, 46
- Del hijo, 99
- Derecho transitorio, DT9^a
- Explotación regular, 219
- Familiares, 66
- Medidas de apoyo, 36
- Del sujeto a tutela, 39

Nietos

- Autoridad familiar de los abuelos, 86
- De hermanos, 335, 336, 338, 524, 526, 532, 533
- Relación con los abuelos, 60, 75, 76, 77, 79
- Sucesión legal, 523

Nombre propio

- Sustitución por el equivalente, 25

Normas

- Aplicación inmediata, DT8^a
- Comunes a las sucesiones voluntarias, 464 a 476 bis
- Curatela por progenitores, 169-28
- De remisión, 199, 210, 264, 270
- En el Derecho civil de Aragón, 1 a 3
- Fuentes jurídicas, 1
- Generales sobre contratos, 384
- Imperativas, 77, 185
- Interpretativas, 384, 416
- Orden de prelación de, 1 a 3
- Supletorias, 1, 193, 204, 384, 555, 582, 599

Notario

- Aseveración de notoriedad, 231, 280
- Composición de la Junta de Parientes, 172
- Idioma del pacto o testamento, 196, 348, 382, 412
- Junta de Parientes, 172, 174
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Mandato de apoyo a la persona con discapacidad, 169-1
- Modificación de capítulos, 200
- Presunción de privatividad, 213
- Prohibición de adquirir por causa de muerte, 475
- Renuncia del mandatario, 169-6
- Revocación del pacto sucesorio, 401
- Revocación del t. mancomunado, 421
- Testamento cerrado, 410
- Testigos en el testamento notarial, 413 a 415

Notificación

- Al fiduciario para que acepte o renuncie, 462
- De la enajenación con requerimiento, 280
- De la resolución judicial, 286
- De la revocación de la pareja estable, 309
- De las medidas de guarda de la entidad pública, 160, 161
- De resolución de desamparo, 153
- Del embargo del bien común o privativo, 281
- Del hecho de la guarda, 147
- Modificación de capítulos, 200
- Notarial de la revocación unilateral del pacto sucesorio, 401
- Notarial del otorgamiento de nuevo t. m., 421
- Para el ejercicio del derecho de abolorio, 594

Nudo propietarios

- Citación para practicar el inventario, 286
- Enajenación de bienes, 290
- Intervención de los nudo propietarios, 292
- Petición de inventario y fianza, 285
- Petición de otras medidas cautelares, 287
- Petición de prórroga o reducción del plazo, 286
- Reparaciones extraordinarias, 295
- Sanción por la falta de inventario, 288
- Seguro de los bienes, 297
- Transformación del usufructo, 291
- Tributos, 296
- Usufructo de fondos de inversión, 300

Nuevo matrimonio

- Extinción del usufructo viudal (salvo pacto), 301
- Extinción asignación compensatoria, 83
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462

Nulidad

- Acto de la persona sin aptitud para realizarlo, 45
- Actos «inter vivos» a título lucrativo, 237
- Actos del menor de catorce años, 22
- Acuerdos de la Junta de Parientes, 179
- Conversión del testamento, 430
- De disposición correspectiva, 220
- De disposición paccionada, 403
- De disposición testamentaria, 424
- De la aceptación y la repudiación de herencia, 343, 345
- Del matrimonio, 4, 244, 246, 247, 249, 253, 276
- Del testamento, 423 a 429

- Derecho transitorio, DT2^a
- Excepciones a la anulación, 45-3, 45-5
- Por falta de intervención del curador o mandatario de apoyo, 45-1
- Por obtención de una ventaja injusta, 45-6
- Prohibiciones de adquirir por causa de muerte, 475
- Régimen de la anulación, 45-4

Nulidad del matrimonio

- Causa de disolución del consorcio, 244
- Causa de extinción del derecho de viudedad, 276
- Demanda de nulidad, 246
- Eficacia de la disolución del consorcio, 247
- Especialidades procesales, DA2^a
- Ineficacia de las liberalidades entre cónyuges, 404, 438
- Ineficacia del llamamiento legal, 531
- Ineficacia del nombramiento de fiduciario, 440
- No invalida la mayoría de edad, 4
- Opción en la liquidación del consorcio, 249
- Procedimiento en trámite, 253
- Relaciones familiares, 75 a 84
- Revisión de convenios reguladores, DT6^a
- Revisión de medidas judiciales, DT6^a
- De colacionar, 362
- De contribuir, 187, 221, 251
- De dar aviso, 295
- De inventario y fianza, 285
- De la autoridad familiar, 76
- De la comunidad familiar, 381
- De la finca sirviente, 556, 558, 559
- De pagar deudas hereditarias, 361
- De rendir cuentas, 191, 208, 243
- De reservar, 55
- De restituir, 361, 364
- De un mandatario, 208, 243
- Del causante, 322, 355
- Del heredero «ex re certa», 467
- Del mandatario, 169-3
- Del representante del ausente, 50
- Del sustituto del ausente, 336, 520
- Del usufructuario, 289
- De la relación paterno filial, 75, 76, 80
- Derecho de transmisión, 387
- En la fiducia, 450 a 453
- Entre el patrimonio consorcial y los privativos, 226
- Gravamen sobre la legítima, 498, 502
- Impedimento transitorio para desempañar la curatela, 169-27
- Impuestos por el disponente, 323, 344
- Legado de parte alícuota, 468
- Pactos sucesorios, 381, 387
- Preferentes (viudedad), 256
- Principio de igualdad entre cónyuges, 183
- Responsabilidad frente a terceros, 189
- Separación de bienes, 209
- Venta de cosa común, 235

O

Objetos preciosos

- Del menor de catorce años, 15
- Disposición habiendo legitimarios, 454
- O de arte, 15

Obligación (es)

- Capacidad jurídica, 3-2
- De alimentos, 298, 489, 515
- De cada cónyuge, 218

V. «Derecho de obligaciones»

Obra (s)

- Aguas pluviales, 544
- Asistenciales, 473
- Declaración de o. nueva, 230
- En las fincas dominante o sirviente, 558, 559

- Paso por razón de, 542
- Pías, 473
- Propia, 212
- Reparaciones extraordinarias, 295

Observancias del lugar

- Interpretación de los pactos sucesorios, 384

Ofrecimiento de venta

- Derecho de abolorio, 594

Opción

- Del usufructuario, 294
- Derecho de adquisición preferente, 211
- Disolución por nulidad del matrimonio, 249
- Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas, 225, 245
- Por el reembolso en metálico, 265

Oposición de intereses

- Entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia, 28
- Entre el menor de catorce años y quienes le representen, 366
- Entre el menor y quienes le representen, 13, 17
- Entre el sometido a curatela y el curador, 367
- Entre la persona con discapacidad y quienes hayan de prestarle apoyo, 42, 45-2
- Entre varios menores, 13, 28

Ordenamiento jurídico aragonés

- Normas supletorias, 599
- Fuentes jurídicas, 1

Ordenanzas del lugar

- Plantaciones, 540

P

Pacto

- Alera foral, 582

- Ampliación o restricción del consorcio c., 215
- Capitulaciones, 193, 195 a 202, 229, 248, 272, 308
- Contribución a las necesidades familiares, 187, 221
- De indivisión del consorcio, 258
- De no extinción de la viudedad, 276, 301
- De relaciones familiares, 77
- División y adjudicación de bienes, 267
- Entre convivientes, 307, 308
- Entre los padres, 71, 77
- Instituciones familiares consuetudinarias, 201
- Libertad de, 3, 76, 185, 195, 307, 318
- Reembolsos, 226
- Régimen de separación, 203
- Relaciones de vecindad, 537
- Sobre acuerdos prematrimoniales, 3, 185, 195
- Sobre el derecho de viudedad, 272, 276, 283
- Sobre gestión del consorcio c., 229
- Sobre la eficacia de las decisiones de la Junta de Parientes, 178
- Sucesorio, 200, 318, 371 a 404
- Transformación del usufructo, 291

Pacto al más viviente

- Pacto sucesorio, 395, 396
- Testamento mancomunado, 419

Pacto de relaciones familiares

- Aprobación judicial, 77
- Audiencia a hermanos, abuelos, parientes y allegados, 77
- Contenido mínimo, 77
- Entre padres que no conviven, 77
- Modificación o extinción, 77
- Relaciones con los hijos, 77

Pactos sucesorios

V. «sucesión paccionada»

Padre (s)

- Asistencia al menor mayor de catorce años, 23, 27, 199, 346, 367
- Bienes confiados a los hijos, 8
- Con hijos menores, 59, 75 a 84
- Convivencia con hijos mayores de edad, 70
- Convivencia con los, 65, 66, 75 a 84, 187
- Curatela, 121, 169-28
- Custodia compartida, 79, 80
- Deber de crianza y autoridad familiar, 63 a 74, 75 a 84
- Deberes de padres e hijos, 58, 76
- Designación de curatela, 121
- Disposiciones sobre la futura curatela de sus hijos, 116
- Eficacia limitada de la filiación, 61
- Gastos de maternidad, 62
- Gestión de los bienes del hijo, 9, 12, 26, 94 a 99
- Guarda de hecho plural de la persona con discapacidad, 169-11
- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 79, 80
- Indignidad, 328
- Notificación de resolución de desamparo, 153
- Oposición de intereses con el hijo, 13, 17, 28
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Patrimonio especial de las personas con discapacidad, 45-7
- Principio de igualdad entre los, 75, 76, 77
- Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar, 90 a 93
- Relación personal con el hijo, 60, 75 a 84
- Representación legal de un menor mayor de catorce años con discapacidad, 38

- Representación legal del menor de catorce años, 12, 346, 366
- Ruptura de la convivencia, 75 a 84
- Solicitud de la guarda administrativa, 159
- Sucesión no troncal, 521, 528, 529
- Sucesión troncal, 526
- Sustitución del administrador voluntario, 112
- Tutela, 134

Pago

- A acreedores y legatarios, 360, 361
- Acción de regreso entre coherederos, 372
- Con bienes comunes, 219
- Con dinero privativo, 213
- De cantidad mayor, 268
- De créditos hereditarios no vencidos, 355
- De deudas comunes, 226, 251, 252
- De deudas hereditarias, 369, 371
- De deudas privativas, 224, 226
- De deudas vencidas, 265
- De impuestos sucesorios, 350
- De los gastos de asistencia a los hijos, 77
- De los legados, 480
- Del sujeto a tutela, 39
- De obligaciones entre patrimonios, 226
- De primas de seguros, 297
- Del precio aplazado, 222
- Excepciones a la anulabilidad del, 45-5
- En dinero o metálico, 468, 496, 508
- Facultades de disposición del fiduciario, 453
- Mediante dación de bienes, 265

Pared

- Medianera, 543, 545, 548, 549
- Propia, 546 a 549

ÍNDICE ANALÍTICO

Parejas estables no casadas

- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13
- Adopción, 312
- Capitulaciones matrimoniales, 308
- Causas de extinción, 309
- Causas de indignidad, 328
- Curatela por progenitores, 169-28
- Defensor judicial, 46
- Derecho de alimentos, 313
- Derechos en caso de fallecimiento, 311
- Designación de curatela, 121
- Efectos de la extinción en vida, 310
- Especialidades procesales, DA3^a
- Existencia, 305
- Fiducia, 439
- Inexistencia de parentesco, 314
- Instar constitución de la curatela, 169-15
- Normativa aragonesa de Derecho público, 315
- Pactos sucesorios, 377
- Régimen de convivencia, 307
- Registro administrativo, 304
- Representación del ausente, 46, 49
- Requisitos de capacidad, 306
- Revisión de convenios y medidas judiciales, DT6^a
- Ruptura de la convivencia, 75 a 84
- Testamento mancomunado, 417

Pariente (s)

- Acreditación de la condición de guardador de hecho, 169-13
- Alimentos, 218, 490, 515
- Ascendientes, 517, 524, 529, 530
- Bienes troncales, 527, 528
- Colaterales, 517, 524, 526, 532 a 534
- Concurrencia de designados, 472
- De la generación de los abuelos, 589
- De la madre, 62
- Del ausente, 48

- Del desaparecido, 46
- Del disponente premuerto, 395, 419, 531
- Del hijo, 60, 98, 75, 77, 79
- Del menor, 10, 75, 77, 79
- Del pupilo, 137
- Descendientes, 517, 521 a 523
- Designación de curatela, 121
- Disposición a favor de, 474
- Fiducia colectiva, 171, 459
- Incapacidad para formar pareja estable no casada, 306
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Inexistencia de parentesco, 314
- Llamamiento, 170
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Preferencia para el acogimiento familiar, 161
- Prohibiciones de adquirir, 475
- Proximidad de grado, 519
- Requisito del derecho de abolorio, 595
- Sucesión de la casa, 461
- Sucesión legal, 517, 520, 534
- Titulares del derecho de abolorio, 588, 590
- Troncales, 517, 526
- V. «Junta de Parientes»

Partición de la herencia

- Acción de regreso, 372
- Adjudicación proindiviso, 366
- Bienes privativos, 211
- Con mayores de catorce años o personas con discapacidad, 367
- Con menores de catorce años, 366
- Derecho a la división, 365
- Derecho transitorio, DT17^a
- Extinción del derecho expectante, 280
- Intervención de los acreedores de los partícipes, 370
- Legado de parte alícuota, 468
- Oposición de los acreedores hereditarios, 370
- Pacto de indivisión, 365

- Por el disponente, 368
- Práctica de la colación, 364
- Prohibición de división, 365
- Régimen supletorio del consorcio c, 270
- Responsabilidad antes de la, 369
- Responsabilidad después de la, 371

Participación (es)

- Disposición por causa de muerte, 238
 - En el patrimonio común, 238
 - En fondos de inversión, 300
 - Imputación en la del cónyuge deudor, 224, 265
- V. «cuota»

Participaciones en sociedades

V. «sociedades»

Pasivo del consorcio conyugal

- Contribución en defecto de bienes comunes, 221
- Deudas comunes, 218
- Deudas privativas, 223
- Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas, 225
- Relaciones entre patrimonios, 226
- Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros, 219
- Responsabilidad de los bienes privativos, 220
- Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes, 222
- Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes, 224

V. «Junta de Parientes»

Paso

- Por razón de obras, 542

Pastos

- Alera foral, 585
- Comunidad *pro diviso*, 586
- Derecho real de aprovechamiento parcial, 584

- Mancomunidad de, 585
- Servidumbres de pastos, 583

Patrimonio (s)

- A deferir a un solo heredero, 461
- Común (o consorcial), 53, 210 a 212, 215, 216, 218, 223, 225 a 229, 235 a 240, 242, 250 a 253, 258, 259, 261, 266 a 268, 282
- Confusión de, 357
- Contribución con el, 187
- De la persona con discapacidad, 169-12, 169-21, 169-24, 169-25
- Del ausente, 50, 51, 53
- Del fallecido, 319
- Del heredero, 285, 355, 358, 359, 361
- Del hijo, 96 a 99
- Del instituido, 387
- Del menor, 8, 152
- Del menor o de la persona con discapacidad, 108, 109, 111, 168, 169
- Del tutelado, 135, 137
- División de, 17
- Especial de las personas con discapacidad, 45-7
- Información de la gestión del, 188
- Pendiente de asignación, 449
- Privativo (de los cónyuges), 210, 212, 215, 220, 226, 227, 262 a 265, 282, 524
- Separación de, 357

Patrimonio consorcial (o común)

V. «bienes comunes (o consorciales)»

Patrimonio especial de las personas con discapacidad

- Autorización de la Junta de Parientes o del Juez, 45-7
- Constituido por sus progenitores y otras personas con autoridad familiar, 45-7
- Regulación de aplicación preferente, 45-7

Patrimonio hereditario,

- Artículos 285, 319, 353, 447, 449, 450, 452

V. «caudal relicto»

Pendencia

- Del pago de deudas, 222, 264, 265

V. «herencia pendiente de asignación»

Pensiones

- Asignación compensatoria, 77, 83
- Cantidades devengadas por, 210
- De seguros de vida, 212
- Gastos de asistencia a los hijos, 77, 79, 82
- Resarcimiento de daños y perjuicios, 212
- Titularidades de, 212

Pérdida

- Autoridad familiar, 90, 510
 - Bienes adjudicados, 268
 - Bienes heredados, 355
 - Condición de fiduciario, 462
 - Cosa objeto de usufructo, 301
 - De prestación recibida, 45-4
 - Finca dominante o sirviente, 571
- V. «indignidad», «desheredación», «exclusión», «extinción»

Persona (s)

- Aptitud para ser mandatario, 169-2
- Ascendientes y descendientes, 56 a 99, 75
- Bienes y derechos inherentes a la, 212
- Capacidad para ejercer funciones tutelares, 123
- Capacidad por razón de edad, 4 a 33
- Capacidad y estado, 3-1 a 55
- Causas de inhabilidad para ejercer funciones tutelares y medidas de apoyo, 124

- Causas de inidoneidad para ser miembro de la Junta de Parientes, 173

- Con preferencia para ser titular de la tutela o curatela, 121

- Convivientes con el matrimonio, 253

- Derechos de la personalidad, 7, 12, 20, 24

- Derechos e intereses de la p. afectada, 37

- Desaparecida o ausente, 46 a 55

- Guardador de hecho, 169-9

- Instar constitución de la curatela, 169-15

- Intromisión en los derechos de la personalidad, 42

- Menor de catorce años, 12 a 22

- Menor emancipada, 30 a 33

- Menor mayor de catorce años, 29

- Modificación de estipulaciones capitulares, 200

- Perjuicios causados a la, 212

- Presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, 40

- Representante del ausente o con discapacidad, 245

- Sujetas a curatela, 145

- Sujetas a tutela, 130

V. «parientes», «allegados»

Persona (s) con discapacidad

- Aceptación y repudiación de la herencia, 346

- Actos que requieren autorización o aprobación, 169-24, 169-25

- Administración voluntaria, 112

- Apoyos espontáneos e informales, 39

- Capacidad jurídica de las, 34 a 45-9

- Capacidad jurídica y medidas de apoyo, 34 a 39

- Curatela, 169-15 a 169-30, 346, 367

- Delación dativa de la tutela o curatela, 121

- Derechos de la personalidad, 43

- Designación hecha por uno mismo, 113
 - Disposiciones de la institución tutelar de distintas personas, 118, 119
 - Disposiciones de los progenitores sobre la futura curatela de sus hijos, 116
 - Ejercicio de la capacidad jurídica, 40 a 44
 - Invalidez e ineficacia de actos y contratos, 45 a 45-6
 - Inventario, 107
 - Junta de Parientes, 173
 - La guarda de hecho de las, 169-9 a 169-14
 - Llamamiento Junta de Parientes, 170
 - Mandatos de apoyo y poderes sin mandato, 168 a 169-8
 - Mayor de edad con discapacidad que esté en condiciones de decidir por sí misma, 40, 43
 - Medidas de apoyo, 35, 101, 168 a 169-30
 - Medidas del Juez para evitar perjuicios o impedir abusos, 45-9
 - Menor de edad, 158
 - Nombramiento de un defensor judicial, 129
 - Oposición de intereses, 42
 - Otras disposiciones voluntarias, 114
 - Patrimonio especial, 45-7
 - Pérdida de prestación, 45-4
 - Prestación de asistencia, 169-22
 - Presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica, 40
 - Problemas de comunicación, 169-20
 - Progenitor, 73
 - Publicidad, 111
 - Relaciones familiares, 75
 - Remoción, 127
 - Responsabilidad, 110
 - Representación, 35, 169-23
 - Situaciones de necesidad urgente de apoyo y de riesgo o desamparo, 45-8
 - Validez de los actos jurídicos, 41
 - Voluntad y preferencias en la adopción y prestación del apoyo, 37
- Persona jurídica**
- Aceptación y repudiación de herencia, 347
 - Aptitud para ser mandatario, 169-2
 - Capacidad para ser titular de funciones tutelares, 123
 - Capacidad sucesoria, 327
 - Excusa de las privadas, 125
 - Guarda de hecho, 146
 - Guardador de hecho, 169-9
 - Instar constitución de la curatela, 169-15
 - Preferencia para ser cargo tutelar, 121
 - Remoción del cargo de tutor o curador, 126
- V. «entidad pública»
- Persona menor de catorce años**
- Aceptación y repudiación de la herencia del, 346
 - Actos de disposición, 15
 - Administración y disposición, 9, 12, 15, 18, 19
 - Atribuciones gratuitas, 14
 - Autorización en caso de tutela, 16
 - Capacidad del que tenga suficiente madurez, 7
 - Cómputo de la edad, 11
 - Concesión de la autorización o aprobación, 18
 - Derecho a ser oído, 6
 - División de patrimonio o cosa común, 17
 - Falta de autorización o aprobación, 19
 - Incapacidad para ser testigo, 415
 - Intervención judicial, 10

- Intromisiones de terceros en los derechos de la personalidad, 20
- Invalidez de los actos, 22
- Minoría de edad, 5
- Oposición de intereses, 13
- Partición de la herencia, 366
- Prescripción acciones legítima, 493
- Prestación personal, 21
- Representación legal, 12, 13, 17

Plan de relaciones familiares

- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
- Requisito de demanda y reconvencción, DA2^a, DA3^a

Plantaciones

- Distancia mínima, 540
- En un seto vivo medianero, 540
- Forestales, 540

Plazo

- Acción declarativa de la indignidad, 333
- Acciones de la legítima, 493
- Aceptación herencia por acreedores, 353
- Acreditación de la guarda de hecho, 169-13
- Anulabilidad testamentaria, 427
- Anulabilidad, 190, 45-4
- Arrendamiento, 15
- Cese de la tutela automática, 156
- Cese del acogimiento familiar, 167
- Comunicación del curador con la persona necesitada de apoyo, 169-17
- Disposición de bienes entre vivos, 422
- Ejecución de la fiducia, 444 a 447
- Ejercicio derecho de abolorio, 594
- Enajenación judicial de bienes inmuebles, 281
- Extinción de servidumbres, 571
- Formalización del inventario, 286, 288

- Indivisión comunidad hereditaria, 365
- Informe de la entidad pública, 45-8
- Inscripción de la revocación del pacto sucesorio, 401
- Interpelación, 348
- Inventario en la fiducia, 450
- Medidas de apoyo, 36
- Notificación de resolución de desamparo, 153, 154
- Nulidad testamentaria, 426
- Oposición a resoluciones administrativas, 154
- Para alegar causa de excusa, 125
- Parejas estables no casadas, 305, 307 a 311
- Presunción de concepción, 325
- Presunción de privatividad, 213
- Propuesta de nuevo pacto de relaciones familiares, 77
- Rendición de cuentas, 99, 142
- Renuncia del fiduciario, 462
- Rescisión del contrato, 45-6
- Revisión de la curatela, 169-18
- Revocación pacto sucesorio, 401
- Revocación testamento mancomunado, 421
- Servidumbres, 553
- Uso vivienda familiar, 81
- Usucapción de servidumbre, 568 a 570

Plusvalía

- Bien común, 210
- Usufructo de fondos de inversión, 300
- V. «productos financieros»

Pobres

- Disposición a favor de los, 473
- Titulares de la autoridad familiar, tutores o guardadores, 150

Poder de disposición

- V. «disposición de bienes»

Poder sin mandato

- Reglas, 169-8

Poseción

- Al extinguirse la viudedad, 302
- De la herencia, 324, 331, 333, 350
- De los bienes afectos al usufructo, 283
- De los bienes heredados del cónyuge del ausente, 54
- Del cargo tutelar, 104
- Del legado, 479
- En las servidumbres, 556
- Temporal del patrimonio del ausente, 51, 52
- Uso y disfrute de inmuebles, 538

Por ministerio de la ley

- Adquisición de bienes, 598 bis
- Asunción de la guarda o tutela por la entidad pública, 151, 158
- Privación de derechos respecto del hijo, 61
- Transmisión del derecho a aceptar o repudiar, 354

Poseción inmemorial

- Adempios, 584
- Mancomunidades de pastos y adempios, 585
- Usucapión de servidumbres no aparentes, 569

Potestad de guarda

- Cambio de titular, 10
- Prórroga o rehabilitación, 130, 145

Precio aplazado

- Bienes comprados antes de iniciarse el consorcio, 211
- Bienes comunes, 210
- Responsabilidad del bien adquirido, 222

Predio

V. «finca»

Preferencia (s)

- De la persona con discapacidad, 169-22

- De los acreedores del instituyente, 391
- De los parientes hasta el 4.º grado, 461
- Del derecho de viudedad, 256
- Del hermano mayor, 459
- Del mandato de apoyo, 169-7
- Derecho de adjudicación con, 267
- Derecho de adquisición, 211
- Derecho de suscripción, 211
- Derechos de los acreedores comunes, 224
- En la adopción y prestación de apoyo, 37
- Entre abuelos, 86
- Entre créditos conocidos, 360
- Entre entidades asistenciales, 473, 535
- Entre hermanos, 87
- Entre legados, 480
- Entre legitimarios, 488
- Entre los parientes llamados por la ley, 517, 532, 534
- Para acrecer, 354, 482
- Para ejercer el acogimiento familiar, 161
- Para designar titular de funciones tutelares, 121
- Para prestar alimentos a la madre, 62
- Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 536
- Sobre el caudal relicto, 359

Premoriencia

- Del descendiente o hermano donatario, 524, 525
- Del favorecido en pacto sucesorio, 387
- Del legitimario, 488
- Del llamado descendiente o hermano del causante, 334 a 341
- Sustitución legal, 336 a 339
- Viudedad, 271 y ss.

Prescripción extintiva

- Acción de anulabilidad por falta de asistencia del curador, 145
 - Acción de anulabilidad, 19, 22, 29, 45-4, 45-6
 - Acción de rendición de cuentas de la gestión del tutor, 142
 - Acción de rendición de cuentas de la gestión paterna, 99
 - Acción de responsabilidad del cargo tutelar, 110
 - Acción de responsabilidad paterna, 96
 - Acciones derivadas de la legítima, 493
 - Anulabilidad testamentaria, 427
 - Del contenido de la servidumbre, 560
 - De servidumbres, 571 a 573
 - Derecho transitorio, DT2^a, DT15^a
 - Derechos del ausente o causahabiente, 55
 - Nulidad testamentaria, 426
- V. «usucapión»

Presunción

- De actuación correcta de cada padre, 71
- De buena fe, 198
- De comoriencia, 320
- De comunidad, 217
- De concepción a la apertura de la sucesión, 325
- De consunción en beneficio común, 253
- De cotitularidad, 206
- De domicilio familiar, 184
- De duración de los adempios, 584
- De medianería, 540
- De no correspectividad, 420
- De preterición intencional, 505
- De privatividad, 213
- De revocación del t. cerrado, 435
- De revocación del t. ológrafo, 436
- De ser acto de mera tolerancia, 537

- De subsistencia del testamento anterior, 432
- De validez de las decisiones de la Junta, 178
- Declaración de herederos legales, 518
- Del consentimiento del otro, 235
- En el legado de bien consorcial, 238

Prestación personal

- Del menor de catorce años, 21

Preterición

- Consecuencias de la p. intencional, 507
- Consecuencias de la p. no intencional, 508
- Derecho transitorio, DT22^a
- Intencional, 505
- Mención suficiente para evitar la, 504
- No intencional, 506
- Supuestos de, 503

Principio (s)

- De buena fe, 538
- De igualdad entre cónyuges, 183
- De igualdad entre hijos, 56
- De igualdad entre padres, 63, 75, 76, 80
- De información recíproca, 76, 188
- De interés superior del menor, 5, 76
- De la mediación familiar, DT7^a
- De lealtad en beneficio del menor, 76
- De libertad de regulación, 76, 124
- De prueba, 595
- Generales, 1, 599
- «*Standum est chartae*», 3, 185, 195, 318, 537

Privación

- De bienes propios, 212
 - De la autoridad familiar, 90
 - De la gestión, 241
 - Del derecho de viudedad, 275
- V. «pérdida»

Privilegios

- Del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 536

Procedimiento (s)

- Administrativo, 280
- Correspondiente, 254
- De apremio, 374
- De ejecución en bienes usufructuados, 290
- De ejecución judicial, 79
- De la Ley de sucesiones, DT15^a
- De menores, 75 a 84, DA2^a
- De toma de posesión de bienes, 302
- Matrimoniales, 75 a 84, 253, 404, 438, 440, 531, DA2^a
- Mediación familiar, 78, DT7^a
- Medidas judiciales, 79, 84, DA2^a, DA3^a
- Para la ejecución en bienes gananciales, 225, 281
- Tercería de dominio, 358

Prodigalidad

- Nadie puede ser declarado pródigo, DT3^a
- Reintegración de la capacidad, DT3^a

Productos

V. «frutos»

Producto financiero

- Plusvalía, 210
 - Usufructo, 300
- V. «fondos de inversión acumulados»

Profesión (al)

- Actos incluidos en el tráfico habitual de su, 231, 281
- Bienes destinados al desarrollo de la, 206, 266, 267
- Cese de actividad, 210
- Desempeño corriente de su, 219
- Información sobre los resultados económicos de la, 227

- Intervención en el expediente matrimonial, 193
- Local donde se ejerce la, 267

Progenitor (es)

V. «padre (es)»

Prohibición (es)

- De adquirir por causa de muerte, 475
- De división, 258, 365
- De enajenar bienes de abolorio, 596
- De gravámenes sobre la legítima, 498 a 502
- De impugnar el testamento, 429
- De ser testigo, 415
- De viudedad, 277
- Legales para el menor, 22

Promoción de la tutela ordinaria

- Personas obligadas, 131
- Responsabilidad, 131

Propiedad

- Adquisición por usucapación, 240
 - Constitución del régimen de p. horizontal, 230
 - De árboles, 540, 541
 - De inmuebles, 538
 - De la finca dominante o sirviente, 551 a 587
 - Del legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, 477
 - Derecho de acceso a la, 211
 - Ejecución sobre bienes usufructuados, 290
 - Enajenación de la plena p. de bienes usufructuados, 290
 - Intelectual, 212
 - Legado de bien común en favor del otro, 238
 - Pared medianera, 543
 - Plantaciones, 540
 - Venta de cosa común, 235
- V. «Registro de la Propiedad»

Prórroga

- De la indivisión, 365
- De la potestad de guarda, 346, 366
- Del plazo de ejecución de la fiducia, 446
- Del plazo del arrendamiento, 15
- Del plazo para hacer inventario en la fiducia, 450
- Del plazo para hacer inventario, 286
- Del plazo para rendir cuentas, 99, 142

Protecciones

- Colocación, 549
- En pared medianera, 549
- Reja y red, 545

Prueba

- Contraria a la presunción de privatividad, 213
- De la causa de desheredación, 275, 509
- De la costumbre, 2
- De que el bien existía al cesar el consorcio, 262
- De que la deuda extingue el expectante, 281
- De que un acto está incluido en el giro habitual, 231, 280

R

Raíces y ramas

- Inmisión de, 539

Recobro de liberalidades

- Consorcio foral, 374
- De bienes de la comunidad conyugal, 524
- En favor de ascendientes o hermanos donantes, 524
- Habiendo descendientes, 525
- Sustitución legal, 524
- Viudedad del cónyuge del donatario, 524

Recobros

- Consorcio foral, 374
- De liberalidades, 524, 525
- En virtud de carta de gracia, 211

Reconciliación

- De los cónyuges, 248

Reconocimiento

- De hijos no matrimoniales, 431
- De privatividad, 214
- De servidumbre negativa, 567

Reconvencción

- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
- Mediación familiar, 78
- Plan de relaciones familiares, DA2^a, DA3^a

Redención

- De servidumbres, 571

Réditos

- De las obligaciones de cada cónyuge, 218

Reducción de liberalidades

- De incómoda división, 496
- Forma de practicarla, 496
- Hechas al cónyuge viudo, 496, 497
- Legitimación, 494
- Por atribución de legítima en bienes no relictos, 497
- Por lesión cuantitativa de la legítima, 494
- Prelación, 495

Reducción del plazo

- Formalización del inventario, 286

Reembolsos

- V. «derecho de reembolso»

Régimen de separación de bienes

- Aplicación del régimen, 203
- Contenido, 205

- Disolución del consorcio conyugal, 228, 248
- Disolución del consorcio por nulidad del matrimonio, 249
- Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas, 225
- Gestión con mandato expreso, 207
- Gestión sin mandato expreso, 208
- Régimen jurídico, 204
- Responsabilidad por deudas, 209
- Titularidad de los bienes, 206

Régimen económico matrimonial

- Capítulos matrimoniales, 195 a 202
- Clases, 193
- Consorcio conyugal, 210 a 270
- De separación de bienes, 203 a 209
- Disposiciones generales, 183 a 194
- Liquidación, 77

Régimen económico matrimonial legal

V. «consorcio conyugal»

Régimen económico matrimonial paccionado

V. «capítulos matrimoniales»

Régimen económico matrimonial «primario»

- Clases de regímenes, 193
- Comunidad de vida, 183
- Deber de información recíproca, 188
- Derecho de viudedad, 192
- Derechos de terceros, 194
- Dirección de la vida familiar, 186
- Domicilio conyugal, 184
- Mandato entre cónyuges, 191
- Principio de libertad de regulación, 185
- Responsabilidad frente a terceros, 189
- Satisfacción de las necesidades familiares, 187
- Vivienda familiar, 190

Régimen jurídico

- De la comunidad hereditaria, 257
- Guarda de hecho de la persona con discapacidad, 169-12
- Guarda de hecho del menor, 149

Régimen patrimonial de la pareja estable no casada

- Compensación económica, 310
- Contribución y responsabilidad, 307
- Derecho al ajuar de la vivienda habitual, 311
- Derecho del supérstite a residir un año en la vivienda habitual, 311
- Gastos comunes, 307
- Libertad de pacto, 307

Registro de Actos de Última Voluntad

- Disposiciones sobre delación voluntaria de la tutela, 133

Registro Civil

- Autoridad familiar de otras personas, 87
- Designación del régimen económico matrimonial, 193
- Constancia de los capítulos matrimoniales, 198
- Inscripción de la emancipación, 31
- Mandato de apoyo, 169-7
- Poder sin mandato, 169-8
- Resoluciones sobre instituciones tutelares de menores, 111

Registro de la Propiedad

- Derecho de abolorio, 594
- Inmuebles de herencia a favor del ausente, 55
- Inmuebles de los hijos menores, 95
- Legado de cosa cierta, 479
- Reconocimiento de privatividad, 214
- Revocación de pacto sucesorio, 401
- Voluntad de conservar el derecho expectante, 280

Registro de parejas estables no casadas

- Medidas administrativas, 304, 315
- Registro administrativo, 304

Reintegros

- V. «derecho de reembolso (o de reintegro)»

Reja y red

- Protecciones, 549
- Régimen normal de luces y vistas, 545

Relaciones

- Con el ente social, 210
- De vecindad, 537 a 550
- Entre ascendientes y descendientes, 56 a 99
- Entre patrimonios conyugales, 226
- Familiares, 75 a 79, 183, 185, 510
- Jurídicas, 316
- Patrimoniales y personales, 466
- Tutelares, 100 a 167

Relaciones de vecindad

- Aguas pluviales, 544
- Árboles y plantaciones, 539 a 541
- Construcciones, 542, 543
- Del uso adecuado de los inmuebles, 538
- Disposiciones generales, 537
- Luces y vistas, 545 a 550

Relaciones familiares

- Asignación compensatoria, 83
- Causas legales de desheredación, 510
- Derechos y principios, 76
- Especialidades procesales, DA2^a, DA3^a
- Gastos de asistencia a los hijos, 82
- Guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos, 80
- Libertad de regulación, 77, 185
- Matrimonio, 183
- Medición familiar, 75, 78, DT7^a

- Medidas judiciales, 79
- Medidas provisionales, 84
- Pacto de, 77
- Plan de, 80
- Principio de igualdad entre los padres, 76
- Revisión de convenios y medidas judiciales, DT6^a
- Ruptura de las, 75 a 84
- Vivienda y ajuar familiar, 81

Relaciones tutelares

- Acogimiento familiar, 163 a 167
- Capacidad, excusa y remoción, 123 a 128
- Curatela, 145
- Designación, 113 a 122
- Gastos, daños y perjuicios, 108
- Guarda administrativa, 157 a 162
- Guarda de hecho, 146 a 149
- Tutela, 130 a 144

Relaciones tutelares y medidas de apoyo

- Administración voluntaria, 112
- Caracteres, 102
- Disposiciones generales, 100 a 112
- Instituciones tutelares de menores, 100
- Modos de delación, 103
- Nombramiento, 104
- Remuneración, 109
- Responsabilidad, 110
- Vigilancia y control, 105

Remoción del cargo tutelar

- Causas, 126
- Efectos, 128
- Procedimiento de remoción, 127

Remuneración

- Del cargo tutelar, 102, 109
- Los padres no tienen derecho, 97

Rendición de cuentas

- Aprobación por el que no haya cumplido dieciocho años, 99

- De las enajenaciones realizadas por el fiduciario no administrador, 453
- De las personas con discapacidad, 45-7
- Mandatos entre cónyuges, 191, 208, 243
- Por el cónyuge viudo administrador, 253
- Por el tutor, 142 a 144
- Por los padres, 99, 45-7

Renta mensual

- Explotaciones económicas, 284
- Sustitución del usufructo viudal, 284
- Transformación del usufructo, 291

Renuncia

- A derechos de crédito del menor, 15
- A la acción de invalidez del testamento, 428
- A la facultad de revocar, 431
- A la herencia (repudiación), 342 a 354
- A la servidumbre, 558, 571
- Al derecho de abolorio, 597
- Al derecho de viudedad, 205, 274
- Al derecho expectante, 274, 280
- Al legado, 385
- Al usufructo de viudedad, 301
- Atribución gratuitas en favor de menores de catorce años, 14
- Del fiduciario, 462
- En la legítima, 490, 492, 494, 497
- No es supuesto de sustitución legal, 341, 488, 523, DT16^a
- Pactos de renuncia, 380, 399
- Repudiación de la herencia, 342 a 354, 385

Reparaciones

- Extraordinarias, 295
- Ordinarias, 294

Representación

- Aceptación y repudiación de la herencia, 346
- Administración de bienes, 26
- Anulación del acto del representado, 22, 45 a 45-2
- Aprobación posterior, 17
- Autorización previa, 14 a 16, 18, 20 a 22
- Carácter personalísimo de los pactos sucesorios, 379
- Carácter personalísimo del cargo de fiduciario, 440
- Carácter personalísimo del testamento, 407
- De la herencia pendiente de asignación, 448, 449, 452
- De la persona con discapacidad, 35, 42, 45-1, 45-2, 169-12, 169-23 a 169-25
- De los menores de catorce años, 5, 7, 12, 13, 17, 61, 99, 142, 144
- De los nudo propietarios, 286
- Del ausente, 49 a 52, 55
- Guarda de hecho, 149
- Oposición de intereses, 42
- Rendición de cuentas del curador, 169-30
- Solicitud y práctica de la partición de herencia, 366
- Tutela provisional, 132

Repudiación de la herencia

- Capacidad para la, 346, 347
- Caracteres, 343
- Del legado, 322, 385
- Disposición transitoria, DT16^a
- Diversidad de llamamientos, 344, 345
- Efectos, 352
- En la institución a favor de contratante, 385
- En perjuicio de terceros, 353
- Expresa, 349
- Interpelación, 348
- Libertad para la, 342

- No tiene lugar la sustitución legal, 341, 523
- Por las personas jurídicas, 347
- Transmisión del derecho a repudiar, 354

Requerimiento

- Sobre conservación o renuncia del expectante, 280
- Sobre formalización del inventario, 286, 288

Requisitos

- Aceptación o repudiación por las personas jurídicas, 347
- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Del ejercicio del derecho de abolorio, 595
- Desheredación con causa legal, 509
- Filiación derivada de fecundación asistida, 325
- Forma del testamento, 409
- Otorgamiento y modificación de estipulaciones capitulares, 195, 200
- Renuncia a la legítima, 492
- Renuncia al derecho expectante, 280
- Renuncia al usufructo viudal, 301
- Revocación unilateral de pactos sucesorios, 200, 487

Rescisión

- Por fraude, 236
- Por obtención de una ventaja injusta, 45-6

Reserva (s)

- Del derecho expectante, 280
- En los pactos sucesorios, 381, 389
- Herencia a favor del ausente, 55
- «Señorío mayor», 388
- Voluntariedad, 464

Residencia

- Acogimiento residencial, 160, 161
- Del desaparecido, 46

Responsabilidad

- Civil del menor, 160
- De la entidad pública protectora de menores, 162
- De los bienes comunes frente a terceros, 219, 252
- De los bienes privativos, 220, 268
- De los cargos tutelares, 110
- De los coherederos, 369 a 372
- De los padres en la gestión de los bienes del hijo, 96, 99
- De los parientes de la Junta, 176
- De un mandatario, 208, 243
- Del administrador de la fiducia, 450
- Del heredero, 355 a 361
- Del mandatario, 169-3
- Del Notario, 200, 401, 421
- Del que intervenga en funciones tutelares o de apoyo, 110
- Distribución de toda la herencia en legados, 469
- En el régimen de separación, 209
- Fiducia colectiva, 460
- Pareja estable no casada, 307
- Por deudas comunes, 251, 268
- Por deudas de adquisición de bienes comunes, 222
- Sobre el menor entregado en guarda, 159
- Sociedades que no limiten la, 15
- Solidaria frente a terceros, 189
- Solidaria, 96
- Subsidiaria de los bienes comunes, 224

Responsabilidad del heredero (o coheredero)

- Acción de regreso entre coherederos, 372
- Antes de la partición, 369
- Cargas hereditarias, 356
- Con su propio patrimonio, 355
- Derechos de los acreedores, 370
- Después de la partición, 371
- Distribución de toda la herencia en legados, 469

- Embargo de bienes del heredero, 358
- En los pactos sucesorios, 391, 394, DT19^a
- Formas de pago, 361
- Heredero «ex re certa», 467
- Limitación de la, 355
- Pago de deudas y legados, 360
- Preferencias sobre los bienes del caudal relicto, 359
- Separación de patrimonios, 357
- Troncal, 355
- Nombramiento de fiduciario, 443
- Pacto sucesorio, 200, 400 a 404, DT19^a
- Pareja estable no casada, 309
- Testamento mancomunado, 406, 421, 422, 424
- Testamento o alguna de sus disposiciones, 406, 424, 431 a 437

Revocación del pacto sucesorio

- Convencional, 400
- Efectos de la revocación en la institución de presente, 402
- Efectos en las estipulaciones recíprocamente condicionadas, 403
- Unilateral, 200, 401

Revocación del testamento

- Facultad de revocación, 431
- Inutilización del testamento cerrado, 435
- Inutilización del testamento ológrafo, 436
- Otorgamientos en el mismo día, 434
- R. del pacto o testamento revocatorio, 433
- Régimen, 432

Ruptura de la convivencia de los padres

- Asignación compensatoria, 83
- Autoridad familiar, 76
- Con hijos a cargo, 75 a 84
- Gastos de asistencia a los hijos, 82
- Guarda y custodia, 75, 80
- Mediación familiar, 75, 78, DT7^a
- Medidas judiciales, 79
- Medidas provisionales, 84
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Relaciones familiares, 75 a 84
- Vivienda y ajuar familiar, 81

S

Saca

- V. «derecho de abolorio»

Retracto

- A favor de entes públicos, 598
- Carta de gracia, 211
- De comuneros, 586, 598
- Derecho de, 211
- Derecho de abolorio o de la saca, 588 a 598

Retracto de abolorio

- V. «derecho de abolorio»

Retroactividad

- Capitulaciones, 197
- Del régimen de separación de bienes, 249
- V. «efecto retroactivo», «derecho transitorio»

Reversión

- De los bienes transmitidos de presente, 387

Revocación

- Actos de ejecución de la fiducia en forma testamentaria, 458
- Actos y disposiciones por causa de muerte, DT20^a
- De actos y negocios contenidos en capítulos, 200
- De poderes otorgados por convivientes, 309
- Del beneplácito para la vida independiente, 32
- Mandatos entre cónyuges, 207

Segregación

- Finca sirviente o dominante, 554, 566, 572

Segundas nupcias

V. «bínubo»

Seguro

- De los bienes sujetos a usufructo, 297
- De supervivencia, 212
- Sobre la vida, 212
- Titularidades (bien privativo), 212

«Señorío mayor»

- Sucesión paccionada, 388

Separación

- De bienes, 203 a 209, 225, 228, 248, 249
- De hecho, 245, 309
- Del matrimonio, 75 a 84, DT6^a, DA2^a
- De la pareja estable no casada, 75 a 84, 309, DA3^a
- De patrimonios, 357
- De un consorte, 375
- Judicial de los cónyuges, 190, 244, 246 a 248, 253, 276, 404, 438, 440, 531

V. «divorcio», «vida separada»

Separación de bienes

V. «régimen de separación de bienes»

Servidumbre (s)

- Alera foral, 582
- Aparente o no aparente, 552, 568 a 570, 577
- Concepto, clases y caracteres, 551 a 555
- Constitución, 561 a 567
- Contenido, 556 a 560
- Continua o discontinua, 552
- De adempios, 584
- De luces y vistas, 574 a 576
- De pastos, 583

- De pastos y adempios, 582 a 584
- Ejercicio *civilliter*, 557
- Extinción y modificación, 571 a 573
- Forzosa de acceso a red general, 581
- Forzosa de paso, 577 a 580
- Modificación de, 560
- Positiva o negativa, 552
- Recíprocas, 553
- Sobre finca indivisa, 563
- Sobre finca propia, 564
- Usucapión de, 568 a 570

Servidumbres de luces y vistas

- Efectos, 576
- Imposibilidad de usucapir las no aparentes, 575
- Signos aparentes, 574

Servidumbres de pastos y adempios

- Alera foral, 582
- Derecho de abrevar, 583
- Derechos reales de aprovechamiento parcial, 584
- Servidumbres de adempios, 584
- Servidumbres de pastos, 583

Servidumbre forzosa de paso

- Constitución por partición o enajenación, 579
- Derecho a exigir la constitución forzosa, 577
- Desaparición de la necesidad de paso, 580
- Indemnizaciones, 578
- Lugar y características del paso, 577

Signos aparentes

- Constitución de servidumbre por, 566
- De servidumbre, 552, 556, 561
- De servidumbre de luces y vistas, 574
- Voladizos, 574

Sobrinos (y sobrinos nietos)

- Sucesión troncal, 526
- Sucesión no troncal, 532, 533

Sociedades (acciones o participaciones en)

- Acciones del menor, 15
- Adjudicación preferente, 267
- Asistencia para una pluralidad de actos referentes a la misma, 27
- Autorización para una pluralidad de actos de la misma, 18
- Bienes comunes, 210
- Derechos de suscripción preferente, 15
- Que no limiten la responsabilidad del socio, 15

Solidaridad

- Actuación de los cargos tutelares, 117
- Deudas comunes tras la división, 268
- Responsabilidad de los bienes privativos, 220
- Responsabilidad de los padres, 96
- Responsabilidad frente a terceros, 189
- Responsabilidad por gastos comunes de la pareja estable no casada, 307
- Responsabilidad por no haber promovido la tutela, 131

Standum est chartae

- Autotutela, 113
- Capítulos matrimoniales, 195
- Mediación familiar, 75, 78, DT7ª
- Ordenación voluntaria de la sucesión, 319
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Pactos entre convivientes, 307, DA1ª
- Principio general, 3
- Regulación de las relaciones familiares, 185
- Relaciones de vecindad, 537

V. «pacto»

Subrogación real

- Bienes comunes por, 210, 250
- Bienes de origen familiar, 216
- Bienes privativos por, 211
- Del heredero en las obligaciones del causante, 322
- En bienes de la fiducia, 453
- En bienes transmitidos de presente, 402
- En el dinero a préstamo o crédito, 15
- En la enajenación de bienes usufructuados, 290
- Presunción de privatividad, 213
- Seguro de bienes usufructuados, 297

Sucesión contractual

V. «sucesión paccionada»

Sucesión de la casa

- Fiducia sucesoria, 461

Sucesión legal

- A favor de la Comunidad Autónoma, 535
- De los ascendientes, 529 a 530
- De los colaterales, 532 a 534
- De los descendientes, 521 a 523
- Declaración de herederos legales, 518
- Del cónyuge, 531
- Diversidad de llamamientos a una misma herencia, 344, 345
- Diversidad de llamamientos universales, 518
- Ineficacia del llamamiento, 520
- Orden de sucesión, 517
- Partición, 368
- Principio de proximidad de grado, 519
- Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza, 536
- Procedencia, 465, 516
- Recobro de liberalidades, 524, 525
- Sucesión troncal, 526 a 528
- Sustitución legal, 338

Sucesión paccionada

- Aceptación o renuncia, 342, 385, 397, 399
- Capacidad, 378
- Carácter de las donaciones, 383
- Carácter personalísimo, 379
- Colación, 362
- Contenido, 381
- Disposiciones generales, 377 a 384
- Entre convivientes no casados, 377, 378
- Forma, 377
- Idioma, 382
- Institución a favor de contratante, 385 a 394
- Institución recíproca, 395, 396
- Interpretación, 384
- Modalidades, 380
- Normas supletorias, 384
- Pacto en favor de tercero, 397
- Pactos de renuncia, 399
- Pactos sobre la propia sucesión, 377
- Revocación, modificación e ineficacia, 400 a 404
- Sustitución legal, 337
- Validez, 377, 465

Sucesión por causa de muerte

- Aceptación y repudiación, 342 a 354
- Adquisición de la herencia, 322
- Capacidad e indignidad, 325 a 333
- Colación y partición, 362 a 372
- Concepto, 316
- Consorcio foral, 373 a 376
- Disposiciones de bienes consorciales, 238, 255
- Disposiciones generales, 316 a 324
- Fiducia sucesoria, 439 a 463
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323
- La herencia yacente, 324
- La legítima, 486 a 515
- Modos de delación, 317
- Momento de la delación, 321

- Momento y lugar de apertura de la sucesión, 320
- Normas comunes a las sucesiones voluntarias, 464 a 485
- Ordenación voluntaria, 318
- Responsabilidad del heredero, 355 a 361
- Sucesión legal, 516 a 536
- Sucesión paccionada, 377 a 404
- Sucesión testamentaria, 405 a 438
- Sucesores por causa de muerte, 319
- Sustitución ejemplar, 476 bis
- Sustitución legal, 334 a 341

Sucesión testamentaria

- Capacidad para testar, 408
- Caracteres comunes, 407
- Colación, 362
- Derecho transitorio, DT14^a
- Expresión de los motivos, 471
- Forma de los testamentos, 409
- Idioma del testamento, 412
- Incapacidad para ser testigo, 415
- Interpretación del testamento, 416
- Invalidez e ineficacia de los testamentos, 423 a 438
- No exigencia de institución de heredero, 465
- Número y capacidad de los testigos, 414
- Otorgamiento en el mismo día, 434
- Revocación, 431 a 433
- Testigos en el testamento notarial, 413
- Tipos de testamento, 406
- Validez, 465
- Voluntad testamentaria, 405
- V. «testamentos», «testamento mancomunado»

Sucesión troncal

- Bienes de origen familiar, 216
- Bienes excluidos de la condición de troncales simples, 528
- Bienes troncales de abolorio, 527

- Bienes troncales simples, 528
- Delación, 526
- Diversidad de llamamientos universales, 518
- Orden de sucesión legal, 517
- Responsabilidad, 355
- Sustitución legal, 526

Sucesiones voluntarias

- Albacea, 484, 485
- Derecho de acrecer, 481 a 483
- Designación de sucesor, 464 a 476 bis
- Legados, 477 a 480
- Normas comunes, 464 a 485
- Sustitución legal, 336

Sufragios

- Disposición a favor del alma, 473

Supérstite

V. «cónyuge sobreviviente»

Suspensión

- De la autoridad familiar, 72, 91, 92

Sustitución

- Contenida en pacto sucesorio, 381
- Del otorgante supérstite, 395
- Del testador supérstite, 419
- Del viudo heredero legal, 531
- Del usufructo vidual, 284
- Ejemplar del cargo tutelar, 117, 476 bis
- Fideicomisaria, 501
- Legal, 334 a 341
- Limitaciones al derecho de viudedad, 277
- Mandatos entre cónyuges, 191
- Seguro de bienes usufructuados, 297
- Voluntaria, 321, 323, 437, 481

Sustitución fideicomisaria

- Derecho expectante, 277
- Gravamen sobre la legítima, 501

Sustitución legal

- Altera el principio de proximidad de grado, 519
- Ámbito, 335
- Concepto, 334
- Concurrencia de designados, 472
- Derecho transitorio, DT16^a
- Efectos, 340
- En la legítima, 339
- En la sucesión legal, 338
- En la sucesión paccionada, 337
- En las sucesiones voluntarias, 336
- Exclusión absoluta, 513
- Excluye el derecho de acrecer, 481
- Ineficacia del llamamiento legal, 520
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323, 437
- Inexistencia en caso de renuncia, 341
- Legitimarios de grado preferente, 488, 503
- Recobro de liberalidades, 524
- Sucesión a favor de hermanos y sobrinos, 532, 533
- Sucesión legal a favor de otros descendientes, 523
- Sucesión troncal, 526

Sustitución del tutor

- Disposiciones voluntarias sobre tutela o curatela, 113, 117
- Defensor judicial, 128

Sustituto voluntario

- Derecho de acrecer, 481
- Ineficacia del llamamiento voluntario, 323
- Momento de la delación, 321

T

Tanteo

V. «derecho de abolitorio»

Tenor de vida

- Aventajas, 266

Tercería de dominio

- Embargo de bienes del heredero, 358

Terceros

- Actuación frente a, 169-12, 232
- Créditos contra, 262
- Daños a, 218, 219
- De buena fe, 189, 198, 219, 232, 235
- Derechos adquiridos por, 197, 247
- Derechos de, 194
- Efectos contra, 31
- Inoponibilidad a, 198
- Interpelación, 348
- Liquidación y división por, 259
- Llamamiento en favor de, 395, 419
- Pacto en favor de, 380, 397, 398
- Pago a, 265
- Parientes de, 474
- Perjuicios a, 37
- Reglas de protección de, 235
- Responsabilidad de los bienes comunes frente a, 219
- Responsabilidad frente a, 189

Terceros de buena fe

- Actuación de un cónyuge frente a, 232
- Actuación del guardador de hecho respecto a, 169-11
- Excepción a la anulación, 45-3
- Inoponibilidad de los capítulos, 198
- Presunción de que cada padre actúa en correcto ejercicio de sus facultades, 71
- Responsabilidad de los bienes comunes frente a, 219
- Responsabilidad de los cónyuges frente a, 189
- Venta de bien consorcial sin consentimiento del otro, 235
- Vivienda familiar, 190

Término

- V. «plazo»

Términos genéricos

- Disposición Adicional 1ª

Testador

- Aragónés, 417
- Dificultad o imposibilidad para leer, 413
- Dificultad para oír la lectura, 413
- Falto de capacidad, 408
- Incurso en circunstancias especiales, 409, 413
- Muerte del primer, 418
- Que no puede o no sabe firmar, 413

Testamentos

- Abierto, 464
- Cerrado, 410, 412, 435, 475
- Especiales, 475
- Ológrafo, 408, 411, 412, 436
- Unipersonales, 406
- V. «sucesión testamentaria», «testamento mancomunado»

Testamento mancomunado

- Albacea, 485
- Apertura de la sucesión, 418
- Capacidad, 408
- Cerrado, 410
- Disposiciones correspectivas, 420
- Disposición de bienes entre vivos, 422
- Entre convivientes no casados, 417
- Forma, 409
- Institución recíproca entre otorgantes, 419
- Interpretación, 416
- Ológrafo, 411
- Revocación de pactos sucesorios, 400
- Revocación, 421, 431
- Testadores, 417

Testigo (s)

- En el testamento notarial, 413
- Incapacidad para ser, 415

- Número y capacidad de los, 414
- Prohibiciones de adquirir, 475

Tíos

- Sucesión a favor de otros colaterales, 534
- Sucesión troncal, 526

Tiempo

- Capitulaciones, 197
- Comoriencia, 320
- De adquisición, 215
- De apertura de la sucesión, 320
- De eficacia de la disolución, 247
- De la delación, 321
- De la indivisión, 365
- Modo de actuar en la fiducia, 457
- Pago de las obligaciones entre patrimonios, 226
- Para calificar la capacidad sucesoria, 329
- Transformación del usufructo, 284, 300
- Usucapión de servidumbres, 568 a 570

Título

- Anterior al consorcio, 211
- De adquisición, 205, 206, 211, 216
- De atribución, 487, 495
- De disposición, 395, 419, 531
- De heredero, 322, 350
- De la alera foral, 582
- De la liberalidad, 362
- De la servidumbre, 556, 558, 561 a 564, 567, 576, 583, 584
- De las comunidades de pastos y adempios, 585, 587
- Escrito, 584
- Justo, 568, 569
- Lucrativo o gratuito, 15, 26, 112, 135, 210, 237, 277, 393, 398, 399, 422, 525
- Oneroso, 16, 54, 190, 210, 217, 232, 234 a 236, 350, 393, 398, 399, 422, 453

- Singular o particular, 319, 332, 334, 381
- Sucesorio, 94, 344, 471, 498, 501, 511, 514
- Universal, 319, 334, 381

Títulos valores

V. «valores mobiliarios»

Tráfico

- Habitual de la profesión o negocio, 231, 280
- Para probar en el, 231, 280

Transacción

- Acto del representante del menor que precisa autorización, 15

Transformación

- Usufructo viudal, 284, 291

Transmisión

- Conmoriencia, 320
 - De bienes entre tutor y tutelado, 16
 - De la herencia o bienes que la componen, 350
 - Del derecho a aceptar o repudiar, 354
 - Derecho de t. en la sucesión paccionada, 387, 481
 - Derecho de t. en los legados, 478
 - Derecho de t. y viudedad, 278
 - Institución de presente, 386
 - Institución para después de los días, 386
 - Por ministerio de la ley, 354
- V. «derecho de transmisión»

Tribunales

- Acordar la recuperación de la autoridad familiar, 90
- Prueba de la costumbre, 2
- V. «Juez»

Tributos

- En las sucesiones, 350, 451
- Usufructo de viudedad, 296

Troncal

V. «bienes troncales», «sucesión troncal», «derecho de abolorio»

Tutela

- Aceptación y repudiación de la herencia, 346
- Administración, 135, 151, 155
- Alimentos, 137
- Automática, 91
- Autorización previa, 14 a 16, 18 a 19
- Autotutela, 113, 119
- Causas de indignidad, 328
- Constitución, 133
- Contenido económico, 138
- Contenido personal, 136
- Contenido y ejercicio, 136 a 140
- Contribución a las cargas, 140
- Cónyuge con discapacidad, 242, 245, 260
- De un menor mayor de catorce años, 38
- Desamparo y t. administrativa, 150 a 156
- Designación, 113 a 122
- Disposiciones generales, 130 a 135
- Ejercicio de la tutela plural, 139
- Emancipación, 30 a 33
- Extinción y rendición final de cuentas, 141 a 144
- Extinción de la, 141
- Minoría de edad, 5
- Modos de delación, 103
- Nombramiento de un defensor judicial, 129
- Número de tutores, 134
- Oposición de intereses, 13, 28
- Orden de delación dativa, 121
- Otras disposiciones voluntarias, 114
- Partición de la herencia, 366
- Personas sujeta a, 130
- Prohibiciones de adquirir por causa de muerte, 475
- Promoción de la, 131, 155
- Registro de bienes y derechos, 111

- Relación personal del hijo menor, 60
- Rendición final de cuentas, 142 a 144
- Suspensión, 151

Tutela automática

- Acogimiento familiar, 163 a 167
- Cese de la, 156
- Ejercicio gratuito, 109
- Imposibilidad de excusa, 125
- Menores sujetos a, 130
- No obligación de rendir cuenta general, 142
- Personas sujetas a, 130
- Suspensión de la autoridad familiar, 91
- Vigilancia del Ministerio Fiscal, 162

Tutela de los bienes

- Administración y disposición, 9
- Autoridad familiar de otras personas, 88, 130
- Contribución a las cargas, 140
- Ejercicio de la tutela plural, 139
- En sustitución del administrador voluntario, 112
- Oposición de intereses, 13
- Pluralidad de tutores, 117
- Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
- Representación legal, 12
- Separación de la t. de la persona, 100, 134, 135
- Tutor real, 9, 13, 98, 112

Tutela provisional

- Administra y defiende el Ministerio Fiscal, 132

Tutor

- Actos que requieren aprobación, 17
- Actos que requieren autorización, 14 a 16
- Administración y disposición, 9, 94
- Asistencia al menor mayor de catorce años, 23, 28, 73, 199, 346
- Audiencia previa a la adopción, 166

- Capacidad, excusa y remoción, 123 a 128
- Consentimiento para el acogimiento familiar, 164
- De la persona, 100, 134, 135, 139, 140
- Del menor, 136
- Desamparo del menor, 150
- Fianza, 106, 114
- Funciones no conferidas al administrador voluntario, 112
- Gastos, daños y perjuicios, 108, 160
- Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad del pupilo, 20, 24
- Inventario de los bienes del sujeto a tutela, 107
- Liquidación y división con personas con discapacidad o menores de edad, 260
- Nombramiento, vigilancia y control, 93
- Notificación de resolución de desamparo, 153
- Notificación medidas de guarda de la entidad pública, 160, 161
- Partición con mayores de catorce años o personas con discapacidad, 367
- Partición con menores de catorce años, 17, 366
- Petición de disolución del consorcio c., 245
- Pluralidad de designados, 117
- Prestación personal del pupilo, 21
- Prohibición de adquirir m. c., 475
- Real, 9, 13, 98, 112, 130, 134, 135, 139, 140
- Remuneración, 109, 114
- Representación legal de un menor mayor de catorce años con discapacidad, 38
- Representación legal del menor de catorce años, 12, 13

- Responsabilidad, 110
- Solicitud de guarda administrativa, 158, 159
- Tutela, 130 a 144

Tutor real

- Administración y disposición, 9
- Autoridad familiar de otras personas, 130
- Cese del administrador voluntario, 112
- Oposición de intereses, 13
- Puesta en peligro del patrimonio del hijo, 98
- Separación de tutela de la persona y de los bienes, 117, 134, 135, 139, 140

U

Ulteriores nupcias

V. «bínubo»

Ultima enfermedad

V. «gastos», «cargas hereditarias»

Uso común (o familiar)

- Pared medianera, 543
- Vivienda familiar y mobiliario, 190

Usos

- Familiares, 71
 - Locales, 201, 384, 538, 599
 - Sociales, 7, 71
- V. «costumbre»

Usucapión

- Bienes privativos, 211
- De las servidumbres aparentes, 568, 570
- De las servidumbres no aparentes, 569, 570
- De servidumbres, 556, 561, 568 a 570, 583
- Del contenido de la servidumbre, 560
- Posesión inmemorial, 569
- Venta de bien consorcial, 235

Usufructo

- De herencia, 467
- Institución en el derecho de, 467
- Legados de, 478
- Pacto al más viviente, 396
- «Señorío mayor», 388
- Servidumbres sobre finca en, 562
- Sobre la legítima, 498
- Vidual, 192, 283 a 302

Usufructo vidual

- Alimentos, 298
- Bienes adquiridos por acrecimiento en el consorcio foral, 278
- Bienes adquiridos por derecho de transmisión, 278, 354
- Comienzo y extensión, 283
- Derechos y obligaciones, 289
- Disolución del consorcio por muerte, 253
- En caso de ausencia, 54
- Explotaciones económicas, 284
- Extinción del, 301
- Formalización del inventario, 286
- Gastos y mejoras, 294
- Inalienabilidad e inembargabilidad, 290
- Indivisión de la herencia, 365
- Intervención de los nudo propietarios, 292
- Inventario y fianza, 285
- Liquidación de frutos, 293
- Origen, 271
- Otras medidas cautelares, 287
- Pactos, 272
- Posesión de los propietarios, 302
- Recobro de liberalidades, 524
- Reparaciones extraordinarias, 295
- Sanción de la falta de inventario, 288
- Seguro de los bienes sujetos a, 297
- Transformación del usufructo, 291
- Tributos, 296
- Usufructo de dinero, 299
- Usufructo de fondos de inversión, 300

Usufructuario

- Atenciones propias de un, 218
- V. «usufructo vidual»

V

Validez

- Acto de enajenación, 280, 283
- Actos del guardador de hecho declarados necesarios por la Junta, 149
- Actos del menor con autorización del representante, 22
- Actos jurídicos de la persona con discapacidad, 41
- Actos *mortis causa*, DT14^a
- Capítulos matrimoniales, 195
- Cautelas de opción compensatoria, 500
- Conversión testamento nulo, 430
- De las condiciones, 476
- Disposiciones no patrimoniales, 405
- Gravámenes sobre la legítima, 501, 502
- Mayoría de edad por matrimonio nulo, 4
- Pactos de renuncia, 399
- Pactos sobre gestión, 229
- Pactos sucesorios, 377
- Pago de obligaciones entre patrimonios, 226
- Presunción de v. de las decisiones de la Junta, 178
- Renuncia expresa a la viudedad, 274, 280, 301
- Sin institución de heredero, 465
- Testamento cerrado, 435
- Venta de cosa común, 235

Valor

- Actualizado, 212, 224, 239, 299, 300, 364, 422, 489
- Aumento de v. de la cosa, 294, 295
- Bienes que no sean de extraordinario, 206

- De la pérdida, 355
 - De las liberalidades por causa de muerte, 490
 - De las primas del seguro, 212
 - De lo adjudicado, 268
 - De lo heredado, 355, 359, 361, 467
 - De lo legado, 468
 - De los bienes comunes, 224
 - De los bienes donados, 364, 489
 - De los bienes objeto de disposiciones correspectivas, 422
 - De los bienes relictos, 498
 - De los productos financieros, 210, 300
 - De un cónyuge en el patrimonio conyugal, 224, 225
 - Del bien consorcial legado, 238
 - Del bien de incómoda división, 496
 - Del dinero dispuesto, 299
 - Del precio y demás gastos de adquisición, 239
 - Fondos de inversión acumulativos, 210
 - Irrelevante, 504
 - Liberalidades de escaso, 393
 - Lucrado sin causa, 226
 - No desproporcionado (aventajas), 226
 - Que no exceda de la mitad del caudal hereditario, 283
 - Reclamado, 496
- V. «valores mobiliarios»

Valoración

- Del caudal relicto, 489
- De las donaciones, 489
- De las liberalidades imputables a la legítima, 490
- De las donaciones colacionables, 364

Valores mobiliarios

- Adquisición por la Comunidad Autónoma, 598 bis
- Del menor de catorce años, 15
- Disposición a título oneroso, 232

- Disposición habiendo legitimarios, 454
- V. «bienes muebles»

Vecindad

- V. «relaciones de vecindad»

Vecindad civil

- Derecho de abolorio, 590
- Ley personal, 417

Vecino

- V. «relaciones de vecindad»

Venta

- De bienes de abolorio, 591
- De cosa común por uno solo de los cónyuges, 235
- V. «disposición de bienes»

Vida familiar

- Acogimiento familiar, 160, 161, 163
- Autoridad familiar del padrastro o madrastra, 85
- Comunidad de vida, 183
- Con hijos mayores de edad o emancipados, 70
- Contribución del hijo, 66, 67, 68
- Del tutor, 121
- Dirección de la, 70, 75, 76, 186
- Domicilio familiar, 184
- Espacios utilizados para la, 550
- Hijos de uno que convivan con el matrimonio, 218
- Hijos que convivan con sus padres, 187
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Personas que convivían y mientras continúen viviendo en casa, 253
- Ruptura de la, 75 a 84
- Tenor de, 266

Vida independiente

- Emancipación por, 32

Vida marital estable

- De la pareja estable no casada, 303, 305, 307

- Emancipación por concesión judicial, 30
- Extinción de la asignación compensatoria, 83
- Extinción del usufructo de viudedad, 301
- Pérdida de la condición de fiduciario, 462

Vida separada

- De los abuelos, 86
- De los padres, 59, 60, 62, 75 a 84
- De los titulares de la autoridad familiar, 30
- De padres e hijos, 59, 80

Vigilancia

- De las instituciones tutelares, guarda o acogimiento por el Juez, 105, 114, 162
- De las instituciones tutelares, guarda o acogimiento por el Ministerio Fiscal, 105, 114, 162
- Del defensor judicial, 129
- Medidas de v. en las instituciones tutelares, 105, 108

Visitas

- V. «derecho de relación personal del hijo menor»

Vistas

- De costado u oblicuas, 545
- Obstaculizar o limitar las, 550
- Rectas, 545, 576
- Toma de medidas, 546
- V. «luces y vistas»

Viudedad

- Derecho de transmisión y, 354
- Derecho de, 192, 205, 271 a 278
- Derecho expectante, 190, 279 a 282
- Fiducia, 449
- Preferencia del derecho de, 256
- Recobro de liberalidades, 524
- Separación de bienes, 205
- Usufructo de, 253, 283 a 302
- V. «derecho de viudedad», «derecho expectante», «usufructo viudal».

Viudo (a)

- V. «cónyuge sobreviviente»

Vivienda familiar

- Actos de disposición voluntaria, 190
- Adjudicación preferente, 267
- Custodia o convivencia compartida, 81
- Custodia individual, 81
- De la pareja estable no casada, 307, 311
- Pacto de relaciones familiares, 77
- Venta acordada por el Juez, 81

Voladizos

- Concepto, 548
- No lo son, 548
- Régimen normal de luces y vistas, 545
- Signo aparente de servidumbre, 574
- Supresión de, 548
- Toma de medidas, 546

